
TEJIENDO RUTAS
PERSPECTIVAS PARA UN CHILE CON EQUIDAD DE GÉNERO

BÁRBARA FLORES ARENAS,
CATHERINE REYES-HOUSHOLDER ,
GLORIA JIMÉNEZ-MOYA,
HÉCTOR CARVACHO GARCÍA,
PAOLA JIRÓN MARTÍNEZ
EDITORES

Tejiendo rutas

PERSPECTIVAS PARA UN CHILE
CON EQUIDAD DE GÉNERO



Primera edición, FCE Chile, 2023

Héctor Carvacho, Bárbara Flores, Gloria Jiménez-Moya,

Paola Jirón y Catherine Reyes-Housholder (editores)

Tejiendo rutas. Perspectivas para un Chile con equidad de género / ed. e introd. de Héctor Carvacho...[et al.]; pról. de Paula Escobar. --

Santiago de Chile : FCE, COES, 2023

243 p. ; 23 x 17 cm – (Colec. Tezontle)

ISBN: 978-956-289-308-4

1. Mujeres – Chile – Condiciones sociales – Siglo XXI 2. Mujeres - Chile – Condiciones laborales – Siglo XXI 3. Mujeres – Educación – Chile – Siglo XXI 4. Mujeres en la política – Chile – Siglo XXI 5. Mujeres – Condición jurídica, leyes, etc. – Chile – Siglo XXI 6. Migración interna – Mujeres – Chile I. Carvacho, Héctor, ed. II. Escobar, Paula, pról. III. Ser.

LC HQ1527

Dewey 305.4 T754

Este proyecto fue posible gracias al apoyo brindado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), proyecto FONDAF N° 15130009 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

Distribución mundial para lengua española

© Bárbara Flores Arenas

© Catherine Reyes-Housholder

© Gloria Jiménez-Moya

© Héctor Carvacho García

© Paola Jirón Martínez

D.R. © 2023, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.

Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

www.fondodeculturaeconomica.cl

Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

www.fondodeculturaeconomica.com

Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.

Diagramación: Gloria Barrios A.

Edición: Ángeles Quinteros

Imagen de portada: Ales Villegas.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

ISBN 978-956-289-308-4

Impreso en Chile • *Printed in Chile*

ÍNDICE

Prólogo	
UNA CARTOGRAFÍA IMPRESCINDIBLE	11
<i>Paula Escobar</i>	
Introducción	
DESAÍOS ACTUALES PARA LA EQUITAD DE GÉNERO EN CHILE.	15
<i>Héctor Carvacho, Bárbara Flores, Gloria Jiménez-Moya, Paola Jirón, Flores Olivas y Catherine Reyes-Housholder</i>	

SECCIÓN 1 INTERACCIONES INTERPERSONALES Y GRUPALES *Editor: Héctor Carvacho*

Capítulo 1	
LAS RAÍCES DEL SEXISMO: UNA MIRADA MULTINIVEL A LA FORMACIÓN Y MANTENCIÓN DE LAS JERARQUÍAS DE GÉNERO	31
<i>Héctor Carvacho, María Angélica Mora, Gloria Jiménez-Moya, Valentina Paredes y Francisco Pino</i>	
Capítulo 2	
LAS PARADOJAS DE LA INTIMIDAD DURANTE LA PANDEMIA. LA EXPERIENCIA DEL TIEMPO COTIDIANO COMO PRISMA DE LAS TRANSFORMACIONES DE GÉNERO EN EL CHILE ACTUAL	42
<i>Dariela Sharim</i>	
Capítulo 3	
CONFRONTANDO EL SEXISMO: ¿QUÉ SABEMOS Y QUÉ PODEMOS HACER? . . .	49
<i>Michelle Bernardino</i>	

SECCIÓN 2 EDUCACIÓN

Editora: Gloria Jiménez-Moya

Capítulo 4

SEXISMO EN LAS AULAS: NORMAS SOCIALES Y MECANISMOS QUE
REPRODUCEN LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO . 59
Gloria Jiménez-Moya, Sarah Paz, Marais del Río y Camila Contreras

Capítulo 5

SESGOS DE GÉNERO EN LA AUTOEFICACIA Y PARTICIPACIÓN CÍVICA ESCOLAR 73
Javiera Bruna

Capítulo 6

EDUCACIÓN NO SEXISTA (ENS): UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN
PARA LAS ESCUELAS 84
Fundación Niñas Valientes

SECCIÓN 3 TRABAJO

Editora: Bárbara Flores

Capítulo 7

¿CÓMO AFECTA LA LLEGADA DEL PRIMER HIJO/A LAS TRAYECTORIAS
LABORALES DE PADRES Y MADRES? UN ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL
USANDO EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO 101
Juan Pedro Eberhard

Capítulo 8

CUIDADOS Y PARTICIPACIÓN LABORAL: UN ANÁLISIS DIFERENCIADO
POR GÉNERO 111
Bárbara Flores y Francisca Ortiz

Capítulo 9

UNA CAÑERÍA ROTA: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA CARRERA
DE MUJERES ECONOMISTAS EN LA ACADEMIA CHILENA 124
Roxana Chiappa

Capítulo 10

DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS PARA LAS MUJERES
EN EL MERCADO LABORAL EN CHILE 139
Gabriel Cruz, Pablo Egaña y Luis Valenzuela

SECCIÓN 4
POLÍTICA

Editora: Catherine Reyes-Housholder

Capítulo 11	
DEMOCRACIA Y GÉNERO EN CHILE	155
<i>Catherine Reyes-Housholder</i>	
Capítulo 12	
BRECHAS DE GÉNERO EN INTERÉS POLÍTICO	167
<i>Isabel Castillo, Rodolfo Disi y Felipe Sánchez</i>	
Capítulo 13	
PARIDAD: ¿UNA CONSTITUCIÓN POR Y PARA MUJERES?	179
<i>Anabel Yanes-Rojas y Michelle Hafemann</i>	

SECCIÓN 5
TERRITORIO

Editora: Paola Jirón

Capítulo 14	
ZURCIR DESDE LOS CUIDADOS. PRÁCTICAS ESPACIALES QUE RECONOCEN, RESISTEN Y REPARAN VIDAS Y TERRITORIOS	193
<i>Paola Jirón</i>	
Capítulo 15	
HABITAR LA EXCLUSIÓN Y EL RACISMO. MUJERES INMIGRANTES RESIDENTES EN EL NORTE DEL PAÍS DURANTE LA PANDEMIA	207
<i>Yasna Contreras y Carolina Stefoni</i>	
Capítulo 16	
ESPACIOS PÚBLICOS MÁS INCLUSIVOS PARA LAS MUJERES: ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE ACCESO Y USO EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA SU MEJORA	223
<i>Paz Concha</i>	
BIOGRAFÍAS	237

PRÓLOGO

UNA CARTOGRAFÍA IMPRESCINDIBLE

*Paula Escobar Chavarría**

ES CIERTO: en cuanto a los derechos de las mujeres, los avances son notables, pero queda mucho camino por recorrer. Esto también es cierto. En el debate público actual, a veces prima la idea de que son tantos los logros, que lo que queda se irá solucionando solo, como si su avance constituyera un cambio social imparable. Así lo expresan las voces contrarias a la acción afirmativa, lo cual, siendo una postura legítima, a veces se enarbola desde la descalificación, como asumiendo que la búsqueda de la igualdad de derechos esconde el interés de un grupo por aumentar su poder de maneras contrarias a la meritocracia.

La realidad es que lo que falta es mucho, y existen retrocesos y amenazas nuevas. No se puede caer en la trampa de dar por solucionadas las brechas que persisten ni de pensar que se irán resolviendo solas. En primer lugar, porque los pendientes que existían se han agudizado producto de la pandemia, que golpeó mucho más fuertemente a las mujeres: al cálculo del World Economic Forum de que tomaría 100 años llegar a la igualdad, se le agregaron 36 años. ¡136 años si no se hace nada! ¿Cuántas generaciones de niñas tendrán que vivir en un mundo donde la violencia de género campea, donde los salarios y acceso a cargos de toma de decisiones son más reducidos en razón del género, o donde las labores de cuidado están masivamente sobre las espaldas de mujeres y niñas?

Por otro lado, el auge de los radicalismos de ultraderecha ha traído un *backlash* político contra el feminismo, pues han hecho de la lucha por la igualdad de género un blanco político. Así, hemos visto que tanto Trump como Bolsonaro, por citar dos liderazgos de este sector, han enarbolado banderas antifeministas y antigualdad de género. Esto amenaza a algunos consensos transversales obtenidos con mucho esfuerzo, y cambios culturales mayores pueden sufrir una regresión.

Paula Escobar Chavarría es periodista y columnista en La Tercera y CNN, Profesora Titular UDP y Directora de la Cátedra Mujeres y Medios.

Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género, realizado por investigadores e investigadoras del COES, justamente acierta en poner a disposición de lectores y lectoras importantes estudios, reflexiones y evidencia de aquello que falta aún para vivir en una sociedad donde no haya discriminación de género y que, por lo tanto, responda en plenitud a los ideales democráticos. Es una cartografía imprescindible de las prioridades y urgencias, un modo de visibilizar y describir la desigualdad de género en diferentes ámbitos de nuestra cotidianidad.

El libro, organizado en cinco dimensiones (interacciones sociales, contexto educativo, ámbito laboral, esfera política y dimensión territorial) explica la persistencia de esta desigualdad sin quedarse solo en el diagnóstico, sino que también ofrece recomendaciones para enfrentar este problema —desde buenas prácticas a políticas públicas propiamente tales— y avanzar. Así, una pluralidad de voces y disciplinas va configurando distintas miradas y posibles soluciones en pos del avance en materia de igualdad de género. Particularmente lúcidos son aquellos capítulos en los que se enfrenta la importancia de partir desde la infancia con una educación no sexista y sin estereotipos de género. En el capítulo 6, por ejemplo, la Fundación Niñas Valientes presenta un modelo de Educación No Sexista (ENS) que busca generar contextos educativos igualitarios, libres de estereotipos y sesgos de género.

Muy interesante, y relacionado con lo anterior, es la descripción de conceptos que no están suficientemente claros en el debate público e, incluso, en el privado, pero que son responsables de perpetuar estereotipos y sesgos de género, como es el pensar que hay ciertas actitudes y conductas propias de las mujeres y, otras, de los hombres. Me refiero al llamado sexismo benevolente, es decir, “actitudes que podrían ser consideradas positivas, pero encasillan a la mujer en un estereotipo y en ciertos roles”. Tal como se explica en el libro, cuando en 2021 se preguntó la opinión respecto a la afirmación “las mujeres tienden a ser más refinadas y a tener un mejor gusto que los hombres”, más de la mitad de los hombres (64%) y mujeres (56%) respondió que estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo. Destaca el alto porcentaje de mujeres de acuerdo (47%) y totalmente de acuerdo (36%) con la afirmación “las mujeres deberían ser queridas y protegidas por los hombres”, con porcentajes similares a los hombres, alcanzando el 53% y 39%, respectivamente.

El sexismo benevolente es menos evidente que el hostil, pero causa un daño profundo, pues perpetúa ideas que en la práctica esencializan las características de cada género. Y, tal como dicen las autoras, las estadísticas “sugieren una percepción generalizada de la mujer como un sexo más débil que el hombre”. Esto sigue manteniendo viva la perniciosa idea de que el poder es un dominio masculino, pues deja a las mujeres recluidas al ámbito de lo privado, como intrusas o arrendatarias en el mundo de lo público, como dice la periodista española Pepa Bueno.

Esto tiene como correlato los estereotipos que vemos en la cobertura mediática de las mujeres en el poder, tan a menudo descalificadas en razón de su familia, afectos o apariencia. Y es que, como se analiza en el primer capítulo, las mujeres siguen asociadas a “una baja competencia (p. ej., se perciben como poco eficaces e inteligentes) y una alta sociabilidad (p. ej., se perciben como cuidadoras y afectuosas), generan emociones como la pena y la negligencia, esto es, falta de cuidado y despreocupación hacia ellas. En cambio, los hombres, que son considerados un grupo con altos niveles de competencia, son admirados”. Como dicen sus autoras y autores, estos estereotipos “permiten que los grupos considerados de alto estatus mantengan el poder, lo que puede influir en que surjan conductas de daño pasivo hacia las mujeres, las que implican una desatención y vulneración de sus demandas, necesidades y derechos”.

Los hombres, al poder; las mujeres, a la casa. O a los cuidados no remunerados (ni visibilizados, ni pagados). De aquello también se hace cargo este volumen, pues hay allí una necesidad imperiosa de valoración y también de compartir entre los géneros el cuidado de quienes no pueden hacerlo por sí solos: niños y niñas, personas mayores, con enfermedades o discapacidad, en gran medida, cuidadas por mujeres que a menudo deben dejar sus trabajos remunerados para hacerlo. El capítulo 2, que se basa en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2015), señala que las mujeres en promedio dedican alrededor de 5,9 horas diarias a trabajos no remunerados, mientras que los hombres solo cerca de 2,7 horas. “De aquí que el tiempo parezca estar entonces ‘generizado’: una experiencia masculina más lineal, y una femenina en la que se traslapan actividades del mundo del trabajo y del ámbito privado”. Si estas labores fueran remuneradas, equivaldrían al 25% del PIB, y a pesar de que durante la pandemia quedó en evidencia que sin el trabajo de quienes cuidan, nada funciona, el patrón ha vuelto a ser el mismo en términos de no ser valorado ni pagado, y con poco avance en cuanto a corresponsabilidad.

Por último, este libro también se hace cargo de nuevas realidades que debemos enfrentar como país, como es el caso de las discriminaciones que reciben las mujeres migrantes. “La falta de recursos y redes sociales hacen que sus situaciones sean particularmente vulnerables”, dicen las autoras, quienes describen las realidades de estas mujeres que viven en carpas cerca del mar o en campamentos de zonas periféricas.

Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género aborda, en definitiva, las temáticas permanentes en cuanto a igualdad de género, pero también las nuevas, a la vez que aporta visiones interdisciplinarias, brinda diagnósticos y también soluciones posibles, convirtiéndose en un libro urgente para el debate nacional. Porque, convengamos: 136 años para alcanzar la igualdad es una vergüenza que no podemos aceptar.

INTRODUCCIÓN

DESAFÍOS ACTUALES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN CHILE¹

*Héctor Carvacho, Bárbara Flores, Gloria Jiménez-Moya, Paola Jirón,
Flores Olivas y Catherine Reyes-Housholder*

EL GÉNERO, entendido como la construcción social que establece cómo las personas deben comportarse y relacionarse en función de su sexo, continúa siendo en la actualidad una barrera para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Los mandatos y roles de género dictan cómo deben ser hombres y mujeres, sus gustos, ocupaciones, conductas, las carreras que deben estudiar y los trabajos a los que pueden optar, entre innumerables aspectos. Estos mandatos y roles, lejos de responder a diferencias innatas o naturales, son fruto de procesos sociales que las construyen desde la primera infancia. Niños y niñas viven procesos disímiles de socialización que moldean sus motivaciones y aspiraciones, y son entrenados muchas veces de forma implícita y sutil para asumir distintos roles en la sociedad. Estas diferencias tempranas generan desigualdad y discriminación, produciendo brechas que se mantienen y perpetúan en la adolescencia y en la vida adulta.

A pesar de los numerosos progresos en igualdad de género a lo largo del último siglo, y de la demanda persistente e intensa por mayor celeridad en estos avances de parte de la ciudadanía, de distintas instituciones y de algunas autoridades, lo cierto es que la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres sigue siendo un hecho persistente en Chile y alrededor del mundo. Los mandatos y roles tradicionales de género están anclados en procesos automáticos y muy arraigados en la sociedad, por lo que, aunque existe una creciente intención de eliminarlos, el cambio social es un proceso complejo y lento, que necesita múltiples herramientas para poder hacerse efectivo. Cambios que promuevan efectivamente la igualdad de género requieren de acciones en diversos niveles, desde intervenciones que apunten a modificar creencias individuales, hasta el diseño de políticas públicas que aborden las causas estructurales de la desigualdad.

Por ello, es necesario que desde la academia se visibilice, describa y explique la desigualdad de género que tiene lugar en diferentes ámbitos y dimensiones

¹ Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), proyecto ANID/FONDAP/15130009.

de nuestra cotidianidad. Este libro es una de estas herramientas que puede contribuir a esta tarea, presentando una radiografía de la desigualdad y las brechas de género en Chile. Con una perspectiva interdisciplinaria, discute cómo la desigualdad sigue estando presente en cinco dimensiones críticas del desarrollo de las personas —interacciones sociales, contexto educativo, ámbito laboral, esfera política y dimensión territorial— a través de 16 capítulos que abordan no solo literatura científica y casos de estudio, sino también ofrecen recomendaciones para actuar en pos de la igualdad entre hombres y mujeres.

En un contexto social complejo y cambiante, la ciencia y la academia deben responder a las demandas de la ciudadanía generando aportes útiles para comprender los orígenes y mecanismos que perpetúan la desigualdad de género, así como recomendaciones y soluciones para construir sociedades más igualitarias, en las que hombres y mujeres puedan desarrollarse integral y libremente, sin el peso del género y sus mandatos.

Este libro se estructura en cinco secciones, enfocadas en comprender la emergencia y continuidad de las desigualdades, y en describir los efectos concretos que estas tienen en las vidas y trayectorias de las mujeres. En particular, aborda los desafíos actuales en equidad de género en Chile a través de (i) una descripción de las desigualdades de género existentes en diversas dimensiones, (ii) una explicación de los mecanismos que subyacen a la formación y persistencia de estas, y (iii) la identificación de buenas prácticas y políticas públicas que pudieran contribuir a reducir las disparidades de género.

En la primera sección, el foco está en describir dinámicas de sexismo que ocurren en las interacciones interpersonales y grupales, los procesos que subyacen a estas, las condiciones que facilitan esos procesos, y los efectos sobre hombres y mujeres. Adicionalmente, esta sección propone estrategias efectivas para intervenir en este tipo de interacciones y reducir las dinámicas sexistas. El capítulo 1, de Héctor Carvacho, María Angélica Mora, Gloria Jiménez-Moya, Valentina Paredes y Francisco Pino, contiene una revisión de los antecedentes del sexismo que distingue mecanismos que operan a diferentes niveles de análisis: individual, interpersonal, intergrupar, institucional y cultural. Asimismo, presenta algunas intervenciones, basadas en evidencia, que permiten reducir la discriminación hacia las mujeres.

En el capítulo 2, Dariela Sharim revela los resultados de una investigación que explora la vivencia del tiempo, la intimidad y el trabajo en el contexto de la pandemia. Sus resultados muestran cómo la pandemia intensificó la experiencia del tiempo en las personas, agudizando inequidades y generando respuestas emocionales diferenciadas por género: los hombres lo viven con agobio y las mujeres con culpa.

Michelle Bernardino, en el capítulo 3, se enfoca en el rol de la confrontación del sexismo. Discute cómo esta puede tener efectos importantes en la reducción de las conductas sexistas, principalmente en hombres, pero esto depende

de una serie de factores psicológicos que facilitan que la confrontación sea efectiva. Además, problematiza los costos que deben pagar las personas que lo hacen, y enfatiza la relevancia de que hombres y mujeres se involucren en estas acciones.

La segunda sección se focaliza en estudiar la desigualdad entre hombres y mujeres y visibilizar los sesgos sexistas en el contexto educativo, proponiendo modelos igualitarios. A pesar de que las instituciones escolares y universitarias constituyen uno de los mejores espacios para formar jóvenes en igualdad —ya que en este ambiente, los y las estudiantes aprenden e interiorizan valores sociales y normas de convivencia—, el ámbito educativo sigue perpetuando la desigualdad de género a través de numerosos mecanismos.

En el capítulo 4, Gloria Jiménez-Moya, Sarah Paz, Marais del Río y Camila Contreras describen prácticas sexistas que suelen ser automáticas e inconscientes, y, por ende, pasan desapercibidas. Estos mecanismos contribuyen a que se perciba a niños y niñas de forma diferenciada, y se esperen de ambos grupos diversos resultados y rendimientos académicos, de acuerdo a estereotipos tradicionales y creencias biologicistas que establecen distinciones innatas entre hombres y mujeres.

En línea con ello, en el capítulo 5, Javiera Bruna describe cómo los sesgos de género presentes en el contexto escolar trascienden lo académico, afectando la socialización política de género y la participación cívica. Esto, porque la participación política de hombres y mujeres empieza a fraguarse desde la adolescencia, y el contexto escolar puede generar condiciones diferenciadas que repercuten en la participación política futura. Los estudiantes hombres muestran más intención de participación, aunque, paradójicamente, son las estudiantes mujeres quienes presentan un mayor conocimiento político.

Finalmente, en el capítulo 6, la Fundación Niñas Valientes presenta un modelo de Educación No Sexista (ENS) que busca generar contextos educativos igualitarios, libres de estereotipos y sesgos de género, subsanando las brechas identificadas a lo largo de la sección. Así, se vuelve necesaria una intervención tanto institucional, curricular, como relacional en las instituciones educativas para frenar prácticas sexistas, considerando aspectos como los reglamentos internos y los manuales de convivencia, así como el uso de espacios, juegos y materiales, entre otros ámbitos.

En la tercera sección, se abordan las brechas y desafíos existentes en el mercado del trabajo, ahondando en aspectos culturales, barreras y potenciadores para trayectorias femeninas exitosas, y algunas proyecciones para avanzar con equidad. En el capítulo 7, Juan Pedro Eberhard expone los efectos de la llegada del primer hijo/a en el mercado laboral. Utilizando datos de la Encuesta de Protección Social de Chile, compara la realidad de padres y madres primerizos/as, encontrando un efecto de maternidad diferenciado según el nivel educativo: para mujeres de baja escolaridad, se observa un aumento

en la privación de la calidad, efecto que no se observa en mujeres de mayor educación o en hombres.

Bárbara Flores y Francisca Ortiz, en el capítulo 8, analizan los determinantes de la participación de hombres y mujeres cuidadores en el mercado laboral. Bajo la óptica de la ética de los cuidados y con datos del Estudio Longitudinal Social de Chile, las autoras encuentran que las mujeres cuidadoras presentan una menor probabilidad de participar en el mercado laboral respecto a una mujer sin personas a su cargo, pero que es comparable en otras características; esto no sucede para el caso de los hombres, para quienes cuidar no determina su participación laboral.

En el capítulo 9, Roxana Chiappa analiza las trayectorias laborales de 10 mujeres economistas, ahondando en un campo tradicionalmente masculinizado. A través de entrevistas semi-estructuradas, identifica códigos y prácticas existentes relacionadas a estereotipos de género que podrían estar impidiendo la entrada de mujeres en la academia y su promoción, al favorecer un *habitus* masculino en la disciplina; mientras que, como un gran facilitador y potenciador, se identifica a la red académica que puede construir una mujer en su carrera.

Cerrando la sección, en el capítulo 10, Gabriel Cruz, Pablo Egaña y Luis Valenzuela presentan los desafíos presentes y futuros para las mujeres en el mercado laboral: los tradicionales, como la participación laboral y la división sexual del trabajo, y los emergentes, que provienen del surgimiento de la economía digital o *gig economy*, el teletrabajo, la automatización y la rápida calibración de la demanda por nuevas habilidades. Finalmente, proponen políticas públicas integrales, novedosas y pro equidad de género para preparar a las y los trabajadores para los desafíos del futuro.

La cuarta sección se enfoca en las desigualdades históricas de poder político entre hombres y mujeres. En el capítulo 11, Catherine Reyes-Housholder argumenta la necesidad de incorporar la variable de género al abordar el concepto de democracia. Con una incorporación tardía al voto entre las décadas de los treinta y cincuenta, y con brechas persistentes en cuanto a representación en diversos espacios de la política —el Congreso, los gabinetes y los municipios—, la historia política de la democracia en Chile se ha visto marcada por la ausencia de mujeres y voces femeninas. Si bien se han logrado avances significativos en la última década, específicamente con las presidencias de Michelle Bachelet, el resurgimiento del movimiento feminista en 2018 y la paridad en la Convención Constituyente de 2021-22, este progreso nunca está garantizado.

En el capítulo 12, considerando la participación política como pilar fundamental para la democracia, Isabel Castillo, Rodolfo Disi y Felipe Sánchez, indagan en los efectos de género sobre interés en la política para explicar diferencias en cuanto a participación efectiva. Sus hallazgos indican que las diferencias sobre interés político por variables como nivel educacional, son más significativas que las diferencias de género. Esto sugiere que la subrepresentación de las

mujeres en la política chilena no se debe a que ellas no estén interesadas en esta, sino que podría responder a factores institucionales o de acceso a recursos necesarios para involucrarse en ella.

Asimismo, en el capítulo 13, Anabel Yanes-Rojas y Michelle Hafemann abordan la dimensión de representación, otra piedra fundamental de la democracia, a través de uno de los mayores hitos a favor de la igualdad en Chile: la instalación de la paridad en la Convención Constituyente de 2021-22. A partir de ello, las autoras analizan la relación entre la representación descriptiva (la presencia de las mujeres) y la sustantiva (artículos pro mujer) a lo largo del proceso constituyente, y encuentran que esta paridad sí llevó a artículos explícitamente pro mujer y/o feministas en el texto que fue rechazado el 4 de septiembre de 2022 por un amplio margen. Se verá si en el futuro, el proceso constituyente se caracterizará también por la democracia paritaria y sus posibles efectos.

La quinta sección aborda, por medio de tres escritos, las formas en que el territorio y el espacio se imbrican en las diferencias de género con relación a los migrantes, el espacio público y en las prácticas de cuidado. En el capítulo 14, Paola Jirón exhibe la importancia de reconocer las actividades de cuidado y, en particular, la relevancia que juegan los territorios en estas, especialmente, en la ciudad de Santiago.

En el capítulo 15, Yasna Contreras y Carolina Stefoni presentan las dificultades que han tenido que vivir mujeres migrantes durante la pandemia en nuestro país. La falta de recursos y redes sociales hacen que sus situaciones sean particularmente vulnerables. Se describen tres situaciones: una en la ciudad de Iquique, donde hay mujeres que habitan en carpas en el borde costero; áreas centrales o pericentrales en campamentos de Alto Hospicio; y campamentos en zonas periféricas de Alto Hospicio. En los tres casos, se especifica la situación particular de las mujeres y cómo las desigualdades de género se profundizan en los escenarios de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, en cuanto al espacio público, en el capítulo 16 Paz Concha plantea las dificultades que las mujeres viven al acceder a este, principalmente, en términos de seguridad y vulnerabilidad en ellos. A partir de esto, se sugieren formas de mejorarlos para disminuir la desigualdad que viven las mujeres en su acceso.

Las secciones que componen este libro representan dimensiones que, empíricamente, se han constatado como relevantes para el estudio de género. Efectivamente, el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), ha permitido realizar un diagnóstico de las brechas de género en Chile. A través de diversas estadísticas descriptivas, es posible evidenciar importantes diferencias entre hombres y mujeres, y su evolución entre los años 2016 y 2021 para los cinco ejes temáticos del libro: interacciones sociales, educación, trabajo, política y territorio.

ELSOC es una encuesta longitudinal y representativa de la población adulta residente en zonas urbanas de Chile. Desde 2016 ha encuestado y seguido en el tiempo a casi 3.000 personas, lo que permite analizar la estabilidad o los cambios en sus características socioeconómicas, percepciones, actitudes y conductas a lo largo de los años. Esta particularidad y las temáticas tratadas, hacen que ELSOC sea un estudio único en Chile y en América Latina.

Los módulos de ELSOC abordan un conjunto de temas referidos al conflicto y la cohesión social en Chile; específicamente, se indaga sobre el barrio y la comunidad, participación ciudadana, actividad política y democracia, redes e interacciones sociales, situación ocupacional, actitudes hacia los roles de género y sexismo, salud y bienestar, entre otros. Así, ELSOC constituye un instrumento singular que permite elaborar modelos comprensivos de la realidad chilena, incorporando información contextual geoespacial y social. Adicionalmente, la encuesta faculta la realización de análisis estadísticos diferenciados entre hombres y mujeres.

INTERACCIONES INTERPERSONALES Y GRUPALES

La pandemia por Covid-19 ha traído consigo consecuencias que han afectado mayormente a las mujeres, en especial en cuanto a su participación en actividades sociales presenciales. Por ejemplo, previo a la pandemia, más mujeres que hombres asistían a una reunión de interés público y lo hacían con mayor frecuencia. Sin embargo, esto se revierte hacia el año 2021. En particular, en 2016 el 22% de las mujeres asistió más de dos veces a una reunión de interés público, pero en 2021 solo el 9% de ellas lo hizo. En comparación, el año 2016, el 15% de los hombres fue más de dos veces a este tipo de reuniones, y su participación solo se redujo a 12% en 2021.

La movilidad también se vio limitada producto de las restricciones sanitarias impuestas por la autoridad, y esto se tradujo en menos visitas a la casa. No obstante, los hombres redujeron menos sus visitas que las mujeres después de la pandemia. Mientras que el porcentaje que recibía amigos más de dos veces al año en 2016 era de un 56% para los hombres, este era de un 60% para las mujeres; esto se redujo solo a 42% en el caso de los hombres, y a 26% en el de las mujeres en 2021. Esta evidencia sugiere que estas últimas han sufrido mayores limitaciones en sus interacciones sociales presenciales producto de la pandemia por Covid-19.

Adicionalmente, se pueden extraer diferencias en las visiones que tienen hombres y mujeres respecto a sus oportunidades, responsabilidades y roles de género. Por ejemplo, cuando se pregunta la opinión respecto a la afirmación: “Una sociedad ideal requiere que algunos grupos estén en una posición superior y otros en una posición inferior”, se observan diferencias por sexo.

Entre los años 2016 y 2019, el porcentaje de hombres que estaba de acuerdo disminuyó de 27% a 24%, y para las mujeres, la disminución fue de 20% a 17%. Es decir, los hombres estarían más orientados a la dominancia social que las mujeres. No obstante, no se observan diferencias por sexo cuando se pregunta la opinión respecto a las afirmaciones: “Debiéramos trabajar para dar a todos los grupos la misma oportunidad de tener éxito”, o “deberíamos hacer todo lo posible por igualar las condiciones de diferentes grupos”. El año 2019, un tercio de hombres y mujeres señaló estar totalmente de acuerdo, y casi dos tercios afirmó estar de acuerdo con dichas afirmaciones.

También se pueden analizar indicadores sobre sexismo benevolente o actitudes que podrían ser consideradas positivas, pero encasillan a la mujer en un estereotipo y en ciertos roles. Por ejemplo, cuando el año 2021 se preguntó la opinión respecto a la afirmación: “Las mujeres tienden a ser más refinadas y a tener un mejor gusto que los hombres”, más de la mitad de los hombres (64%) y mujeres (56%) respondió que estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo. Destaca el alto porcentaje de mujeres de acuerdo (47%) y totalmente de acuerdo (36%) con la afirmación “las mujeres deberían ser queridas y protegidas por los hombres”, con porcentajes similares a los hombres, alcanzando el 53% y 39%, respectivamente. Estas estadísticas sugieren una percepción generalizada de la mujer como un sexo más débil que el hombre, manteniendo una estructura masculina del poder.

En el caso de los indicadores de sexismo hostil o actitudes de discriminación en contra de la mujer, también se observa una amplia aceptación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el porcentaje acumulado de quienes el año 2021 estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con la frase: “En nombre de la igualdad, muchas mujeres intentan conseguir ciertos privilegios” es de un 71% de los hombres y 67% de las mujeres. De manera similar, la afirmación “generalmente, cuando una mujer es derrotada limpiamente, se queja de haber sufrido discriminación” es ampliamente aceptada entre hombres (61%) y mujeres (56%). Estos resultados indicarían que la sociedad, como un todo, presenta conductas discriminatorias contra las mujeres, sin detenerse a considerar otras características con las que podrían destacar en la esfera pública.

EDUCACIÓN

Chile cuenta con altos niveles de escolaridad respecto a otros países de América Latina, y además ha cerrado la brecha en cobertura en matrículas de educación primaria, secundaria y superior. En general, análisis previos han indicado desafíos en resultados y trayectorias educativas que han perpetuado una división sexual del trabajo y mantenido una baja proporción de mujeres

en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (más conocidas como STEM por sus siglas en inglés).

Cuando se analizan los años de escolaridad reportados por las personas en ELSOC, se observa que, en promedio, los hombres cuentan con medio año más de educación que las mujeres. En 2016, las mujeres mostraban 11,5 años de escolaridad promedio, mientras que los hombres aproximadamente 12 años. Para ambos grupos, esta variable aumentó a lo largo del tiempo, pero la diferencia de medio año de escolaridad se ha mantenido. Es así como en 2021 las mujeres presentaban 12 años de escolaridad promedio, indicador que para los hombres alcanzó 12,5 años.

En cuanto a los análisis sobre movilidad intergeneracional en educación, los resultados indican que, efectivamente, la escolaridad del padre y de la madre está altamente correlacionada y de manera positiva con la escolaridad alcanzada por los hijos y/o hijas. Esto indicaría una baja movilidad social por educación en Chile. No obstante, no existen diferencias según sexo, lo que indica que la educación de la generación anterior influiría de igual manera a hombres y mujeres. Naturalmente, análisis cuantitativos más sofisticados son necesarios para poder identificar efectos causales, pero estos resultados preliminares invitan a las y los investigadores a plantear nuevas hipótesis y a desarrollar estudios que permitan reflexionar sobre este tema.

También se analizaron algunos indicadores de sexismo, tales como sentir un mayor compromiso con las personas del mismo sexo, opinar que la familia y amigos esperan éxito laboral o que los hijos/as sean prioridad, y que la familia sufre cuando la mujer tiene un trabajo a tiempo completo. Los análisis muestran que, de hecho, la escolaridad estaría correlacionada de manera negativa, pero en una magnitud similar para hombres y mujeres. Por ejemplo, un año más de educación estaría relacionado con una disminución de tres puntos porcentuales en la probabilidad de sentir un mayor compromiso con las personas del mismo sexo. También, para hombres y mujeres, ocurre que un año más de educación estaría asociado a una disminución de dos puntos porcentuales en la probabilidad de estar de acuerdo con que la familia y amigos esperan que los hijos/as sean prioridad. Nuevamente, se invita a los investigadores a profundizar los análisis aquí expuestos. De todas maneras, la evidencia presentada da ciertas luces positivas acerca de la educación como instrumento para avanzar hacia la equidad de género.

TRABAJO

Históricamente, los hombres han tenido una mayor presencia en el mercado del trabajo remunerado y las mujeres han predominado en la esfera privada, realizando trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Desde los años

sesenta se observa una entrada masiva de las mujeres al mercado laboral, explicada, principalmente, por los mayores niveles de escolaridad, el acceso a anticonceptivos orales que permitieron posponer o evitar la maternidad, y el desarrollo de tecnologías para el hogar que liberaron horas de trabajo doméstico para destinarlas a otras actividades.

Durante las últimas décadas, en Chile se ha avanzado en el cierre de brechas de género en términos de acceso y cobertura en educación, pero es en el mercado laboral donde siguen persistiendo importantes diferencias entre hombres y mujeres, particularmente, en cuanto a participación y condiciones de trabajo. Los datos de ELSOC así lo demuestran. Sistemáticamente, la proporción de mujeres que trabajan o buscan trabajo es menor que la de los hombres. El año 2016, el 84% de los hombres participaba en el mercado laboral, y solo el 53% de las mujeres lo hacía. Mientras la participación de los hombres se mantuvo estable en torno al 85% hasta el año 2021, las mujeres han mostrado mayores fluctuaciones, principalmente debido a la pandemia por Covid-19. No obstante, existe una tendencia creciente en su participación laboral, alcanzando un 57% en 2021.

También existen diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito de la empleabilidad. Del total de mujeres que participaba en el mercado laboral el año 2016, el 92% se encontraba trabajando, porcentaje que ha disminuido en el tiempo, ya que durante 2021, solo el 85% estaba empleada. En el caso de los hombres, la variación fue positiva, pasando de un 89% de empleados en 2016 a un 91% en 2021.

Al analizar la evolución del ingreso promedio por hora según sexo, ajustado por inflación para hacerlo comparable entre años, se observa una brecha sistemática a favor de los hombres. Desde 2016 hasta 2021, los hombres que trabajan obtienen un salario promedio de 4.000 pesos por hora, y las mujeres han mostrado un leve incremento desde 3.400 a 3.700 pesos por hora en promedio, lo que sugiere una brecha salarial por sexo cercana al 20% en beneficio de los trabajadores hombres.

Las horas semanales de trabajo no son la excepción al momento de presentar diferencias por sexo. En promedio, en los hombres estas han aumentado desde 40 a 42 horas entre 2016 y 2021. En contraste, las mujeres han visto disminuido su tiempo en el trabajo desde 35 a 30 horas a la semana en promedio. Estos datos evidencian cómo las mujeres han debido ajustar el uso de su tiempo para dar respuesta a diversas contingencias, particularmente, la mayor demanda por trabajo doméstico y de cuidados que surgió debido a la pandemia por Covid-19 y que aún no se supera completamente. Lo anterior es consistente con el porcentaje de trabajadores de jornada completa, alcanzando el 75% de los hombres y el 55% de las mujeres en 2021.

Muchas veces, la rigidez del trabajo formal no permite conciliar los requerimientos del trabajo remunerado y las necesidades del hogar. Una consecuencia

negativa de esto, es que las mujeres prefieren optar por trabajos informales, que son más precarios y sin seguridad social. Esto se observa a través del porcentaje de trabajadores que tiene contrato formal, el cual ha disminuido para hombres y mujeres, pero en mayor medida para ellas. En efecto, en 2016, el 73% de trabajadores hombres y el 63% de trabajadoras mujeres contaba con contrato formal. Luego, en 2021, se puede observar que estas cifras bajaron a un 68% en el caso de los hombres y a un 54% en el de las mujeres. Sin duda, esta evidencia presenta grandes desafíos para el diseño de políticas que puedan resguardar la seguridad social de los trabajadores, especialmente, para las mujeres que, en tiempos de crisis, se vuelven más vulnerables.

POLÍTICA

La equidad de género en participación política es beneficiosa en cuanto permite a las mujeres expresar sus opiniones, visiones y necesidades que, históricamente, habían estado invisibilizadas por tratarse de un ámbito dominado por los hombres. En este marco, resulta relevante analizar diferencias entre hombres y mujeres y los cambios ocurridos a través del tiempo en distintas formas de participación en política, tales como manifestaciones sociales, inscripción en partidos políticos o ejercicio del derecho a voto.

Cuando se pregunta si se ha asistido a una marcha o manifestación política, se encuentran diferencias entre hombres y mujeres, pero se ha ido cerrando la brecha a través del tiempo. Efectivamente, hacia el año 2016, mientras que el 14% de los hombres había asistido a marchas o manifestaciones pacíficas, solo el 9% de las mujeres lo hacía, con una diferencia de cinco puntos porcentuales, que es estadísticamente significativa. En 2018, con el llamado “mayo feminista”, no se vio un aumento de participación en marchas o manifestaciones pacíficas: 7% de los hombres y 8.5% de las mujeres lo hizo, con una diferencia que no es estadísticamente significativa. Luego, hacia el año 2021 —post estallido social de 2019 y pandemia por Covid-19 de 2020— se observó que solo un 7% de los hombres y 5.8% de las mujeres participó en una marcha o manifestación pacífica, y esta diferencia de 1,2 puntos porcentuales tampoco es estadísticamente significativa. La expresión a través de cacerolazos es mayor para hombres y mujeres. En 2019, año del estallido social, el 29% de los hombres y el 31% de las mujeres señaló haber caceroleado, es decir, un tercio de la población, independiente del sexo, manifestó su malestar golpeando las ollas. Hacia 2021, el 20% de los hombres y el 23% de las mujeres volvió a cacerolear.

En cuanto a la opinión respecto al derecho a voto, las mujeres manifiestan con mayor intensidad estar de acuerdo con la afirmación: “Votar es mi deber como ciudadano”. De hecho, en 2016, el 81% de las mujeres adultas de Chile señaló estar de acuerdo, frente al 72% de los hombres. No obstante,

el año 2019, con el estallido social, se observa un aumento significativo en la percepción de deber ejercer el derecho a voto, ya que el 88% de los hombres y el 92% de las mujeres señaló que votar era su deber como ciudadano o ciudadana. Es interesante analizar también las percepciones respecto a la influencia del voto. En 2016 se preguntó a las y los encuestados si estaban de acuerdo con la afirmación “mi voto influye en el resultado”, con lo que el 72% de los hombres y el 75% de las mujeres señaló concordar. Estos porcentajes aumentaron en 2019, alcanzando un 82% para los hombres y un 90% para las mujeres. En 2021, se aprecia un mayor optimismo para los hombres, ya que el 85% de ellos continúa señalando que su voto influye en los resultados, pero el porcentaje disminuyó para las mujeres a 82%.

Por otro lado, la participación política activa, entendida como la pertenencia y militancia a un partido político, también presenta diferencias por sexo. Esta variable se observa en el año 2016, en el que el 10% de los hombres y solo el 5% de las mujeres señaló pertenecer a un partido político. Hacia 2018, disminuyeron levemente estos porcentajes, alcanzando un 8% para los hombres y un 4% para las mujeres. ELSOC no contiene esta variable para años posteriores, limitando los análisis después del estallido social. No obstante, las personas han ido incrementando su interés en la política a través del tiempo. Cuando se pregunta si se tiene interés en la política, el 28% de los hombres y el 21% de las mujeres contestaba afirmativamente el año 2016. Hacia 2021, existe un aumento significativo para las mujeres: el 36% de ellas se mostró interesada en política, mientras que el 33% de los hombres respondió de manera similar.

Finalmente, la correlación entre el sexo y variables de percepción y participación políticas resulta ser estadísticamente significativa en modelos que controlan por educación, edad, ingreso del hogar, situación ocupacional y composición del hogar. A iguales condiciones, las mujeres tienen 15 puntos porcentuales más que los hombres en la probabilidad de señalar que votar es su deber, y 16 puntos porcentuales más que los hombres en la probabilidad de indicar que su voto influye en el resultado. En contraste, las mujeres tienen 26 puntos porcentuales menos que los hombres en la probabilidad de participar en un partido político. Algo que se destaca, es que no existen diferencias entre hombres y mujeres en la intención de voto en las elecciones presidenciales y en la participación en el plebiscito de entrada para una nueva Constitución en 2020. Las próximas rondas de ELSOC permitirán seguir analizando el interés, participación y percepciones en política.

TERRITORIO

El contexto territorial también tiene un rol sobre las diferencias entre hombres y mujeres en aspectos como el uso de los espacios públicos, acceso a bienes y

servicios, y movilización en la ciudad y entre países. El módulo sobre territorio en ELSOC permite analizar esta temática. Por ejemplo, se pregunta sobre los niveles de satisfacción con la seguridad del barrio de residencia, así como también con la conectividad, áreas verdes y de recreación disponibles, limpieza y belleza. También se indaga sobre la satisfacción respecto a la proximidad del barrio al lugar de la actividad principal, colegios de buena calidad, comercio y familiares y/o amigos. Estas preguntas son fundamentales para países como Chile, donde existe una importante segregación socioeconómica que puede afectar de manera diferenciada a las mujeres.

En cuanto a seguridad en el barrio, hacia el año 2016 existían pequeñas diferencias por sexo. El 49% de los hombres y el 45% de las mujeres señalaba sentirse seguro en su barrio de residencia. En 2019, este indicador mejoró y ya no se observaban brechas por sexo: el 62% de hombres y mujeres afirmó estar satisfecho con el nivel de seguridad del barrio.

Por otro lado, los niveles de satisfacción con la conectividad que tiene el barrio son altos para hombres y mujeres, pero mientras han aumentado para los primeros, estos han disminuido para las segundas. El año 2016, 75% de los hombres y 71% de las mujeres estaban satisfechos con este aspecto. Sin embargo, hacia 2021, el 81% de los hombres declara tener buena conectividad, frente a un 69% de las mujeres.

Al mirar la satisfacción de hombres y mujeres con las áreas verdes y de recreación disponibles en el barrio, se observa que el 55% de ellos y el 53% de ellas se sentían satisfechos el año 2016; hacia 2019, las mujeres se mantienen en 53% y los hombres disminuyen levemente a 51%. Porcentajes similares se encuentran en los niveles de satisfacción con la limpieza y belleza del barrio a través del tiempo. Preocupa que casi la mitad de las personas no estén satisfechas con las áreas verdes y de recreación del barrio o con la limpieza y belleza, dado que se ha demostrado que son factores protectores de la salud física y mental, especialmente en tiempos de crisis, como la pandemia por Covid-19.

El acceso a bienes y servicios se puede analizar a través de la satisfacción de las personas con la proximidad de su barrio de residencia a diversos puntos de interés. Por ejemplo, hacia el año 2019, el 62% de los hombres y el 66% de las mujeres señalaron estar satisfechos con la proximidad de su barrio al lugar de la actividad principal que realizaban. Estos cuatro puntos porcentuales de diferencia no resultan ser estadísticamente significativos. Tampoco se observan diferencias por sexo en la satisfacción con la proximidad a colegios de buena calidad, pues el 70% de hombres y mujeres señaló estar satisfecho. Sí se encuentra una diferencia significativa de seis puntos porcentuales en el porcentaje entre hombres (76%) y mujeres (70%) que declara estar satisfecho con la proximidad del barrio a áreas de comercio, resultado que podría estar relacionado con el sexo de quien realiza las compras para el hogar y que valdría la pena profundizar en estudios futuros.

También se estudió la correlación entre el sexo y las variables de satisfacción con el barrio controlando por otros factores, tales como educación, edad, ingreso del hogar, situación ocupacional y composición del hogar. A iguales condiciones, las mujeres tienen cinco puntos porcentuales más que los hombres en la probabilidad de tener alta satisfacción con las áreas verdes del barrio. Asimismo, tienen 13 puntos porcentuales más que los hombres en la probabilidad de utilizar transporte público, pero ocho puntos porcentuales menos que ellos en la probabilidad de tener una alta satisfacción con la conectividad del barrio. Así, nuevos análisis se proponen para analizar con mayor profundidad el uso de los espacios públicos, considerando las necesidades que tienen hombres y mujeres, y así poder proponer políticas que permitan ir avanzando en equidad territorial con enfoque de género.

SECCIÓN 1
INTERACCIONES
INTERPERSONALES Y GRUPALES

Editor: Héctor Carvacho

CAPÍTULO 1

LAS RAÍCES DEL SEXISMO: UNA MIRADA MULTINIVEL A LA FORMACIÓN Y MANTENCIÓN DE LAS JERARQUÍAS DE GÉNERO¹

*Héctor Carvacho, María Angélica Mora,
Gloria Jiménez-Moya, Valentina Paredes y Francisco Pino*

HOY EN DÍA no resulta difícil encontrar artículos de prensa, libros u otras fuentes describiendo de forma muy ilustrativa la persistente distancia que existe entre hombres y mujeres en múltiples ámbitos de la vida. La brecha salarial, la victimización en violencia sexual o las expectativas laborales para niñas y niños son solo algunos de los aspectos en los que las mujeres se enfrentan a condiciones desventajosas o, derechamente, a acciones que atentan contra su desarrollo pleno y su bienestar. Este fenómeno se ha llamado sexismo. Sin embargo, a pesar de lo extendido que está el uso de este concepto y la documentación de sus consecuencias, análisis sistemáticos que integren sus causas y los mecanismos que lo perpetúan, son mucho menos frecuentes. En este capítulo nos proponemos exponer cuáles son las raíces del sexismo y por qué es tan difícil erradicarlo. Esta tarea permitirá mirar a los posibles cursos de acción con una perspectiva informada que se haga cargo de la complejidad de este fenómeno.

El sexismo se puede definir como un sistema de actitudes, creencias y conductas hostiles hacia las mujeres o que impliquen situarlas en un estado de inferioridad respecto a los hombres; en otras palabras, el sexismo es prejuicio hacia las mujeres. Este puede manifestarse de manera directa, por ejemplo, en comportamientos como la discriminación o la violencia de género, o de modos más sutiles y encubiertos, tales como actitudes paternalistas hacia las mujeres en contextos académicos o laborales. Tanto las formas hostiles como las sutiles del sexismo tienen profundas consecuencias negativas en las mujeres. En concreto, se ha demostrado que ser víctima de comportamientos y actitudes sexistas produce estrés, baja autoestima, sensación de inseguridad y ansiedad, afectando el bienestar psicológico, además de ser una fuente importante de rabia (p.ej., Glick & Fiske, 1997; Rapp et al., 2022; Zucker & Landry, 2007).

¹ Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

Intervenir para atenuar la discriminación y los prejuicios hacia las mujeres presenta numerosos desafíos. Uno de ellos es la particular complejidad en la que se ancla el sexismo, dado que tiene múltiples causas y mecanismos que permiten su mantención. Más aún, estas causas y mecanismos están anclados en diversos niveles. En este capítulo, distinguiremos entre los siguientes niveles: individual, interpersonal, intergrupar, institucional y cultural. Una consecuencia de esta complejidad es que, al intentar disminuir el sexismo interviniendo un mecanismo dentro de un nivel (por ejemplo, los estereotipos de docentes a la hora de interactuar con estudiantes), los demás mecanismos seguirán operando (por ejemplo, el sexismo en los medios de comunicación). Por ello, al generar intervenciones o políticas públicas para disminuir las brechas entre hombres y mujeres, es importante asimilar el impacto de los distintos mecanismos, anclados a distintos niveles mediante los que opera el sexismo.

A lo largo de este capítulo, exploraremos causas y mecanismos en cada uno de los niveles mencionados, para así facilitar el diseño de intervenciones que puedan hacerse cargo de la complejidad del sexismo, aumentando sus posibilidades de éxito.

NIVEL INDIVIDUAL

A nivel individual es posible identificar la adhesión a estereotipos tradicionales de género, la gran resistencia que estos tienen y cómo se pueden internalizar y transformar en los denominados autoestereotipos. Asimismo, se puede observar la presencia de prejuicio hacia las mujeres, o sexismo, en sus distintas formas. Y también podemos identificar diferencias individuales que se relacionan con los estereotipos de género y el sexismo, por ejemplo, la llamada orientación a la dominancia social (o SDO, por su sigla en inglés) o preferencia por las jerarquías sociales.

Los estereotipos de género corresponden a etiquetas, expectativas y creencias sobre rasgos y comportamientos que debieran tener las personas por el hecho de pertenecer a un sexo u otro (Kite et al., 2007), e influyen fuertemente en las creencias sexistas y sus manifestaciones (Ellemers, 2018). A su vez, los estereotipos influyen en las expectativas que se generan sobre cada persona, afectando directamente las competencias y roles que se esperan y promueven respecto a hombres y mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les asocia con aspectos relacionados al afecto, como la confianza y la amabilidad, mientras que a los hombres se les ve como personas competentes, capaces y asertivas (Fiske, 2018; Jiménez-Moya et al., 2022; Kite et al., 2007). Al mismo tiempo, esto se relaciona con el rol que las personas ocupan (o se espera que ocupen) en la sociedad. Por ejemplo, se suele asociar más a los hombres con roles de liderazgo y a las mujeres con roles de cuidado. Lo anterior pone en una

situación de desventaja a las mujeres, ya que los roles que se espera que desempeñen tienen asociado menor estatus social que aquellos que se esperan de los hombres. Esto influye desde tempranamente en la vida de las personas, ya que niños y niñas aprenden e interiorizan los roles y competencias que deberían tener hombres y mujeres a través de la observación, así como también al recibir recompensas por comportarse de acuerdo a los estereotipos de género (Kite et al., 2007).

Estas creencias estereotípicas no siempre se manifiestan de manera explícita, sino que, en ocasiones, las personas aseguran no estar de acuerdo con ellas, pero aun así consideran, por ejemplo, que las mujeres son sensibles y necesitan ser protegidas por los hombres. Esto se conoce como sexismo benevolente y, a diferencia del sexismo hostil, puede pasar desapercibido al no considerarse como algo particularmente dañino. Este tipo de sexismo puede ser visto como algo normal e, incluso, positivo, ya que se muestra a través de actitudes paternalistas que, aparentemente, denotan una buena evaluación de las mujeres (Glick & Fiske, 1996). A pesar de esto, lo que se encuentra en la base del sexismo benevolente es la creencia de que las mujeres son inferiores y débiles (Ellemers, 2018). Además de esto, el sexismo benevolente resulta peligroso porque, al estar ampliamente difundido y aceptado en la sociedad, produce que las personas internalicen y se identifiquen con las creencias sexistas (Rudman et al., 2001).

Junto con todo lo anterior, otra razón que influye en el mantenimiento del sexismo en el nivel individual es la resistencia de los estereotipos femeninos a la información contra-estereotípica, lo que es una forma habitualmente usada para contrarrestar los estereotipos; es decir, información contraria a lo que establece el estereotipo de género tradicional. Al presentar este tipo de información a las personas (p. ej., una mujer doctora), estas pueden llegar a modificar sus creencias explícitas, pero las creencias implícitas —aquellas que no son accesibles a las personas y de las cuales no acostumbran ser conscientes— suelen ser más rígidas, por lo que no serán capaces de integrar la nueva información contra-estereotípica presentada. Esta resistencia a la información contra-estereotípica es más fuerte con los estereotipos femeninos que masculinos (Cao & Banaji, 2016; Guerra et al., 2021), por lo que resulta más fácil integrar la idea de un hombre que se dedica a tareas de cuidado, que la de una mujer exitosa en el ámbito político.

Otro elemento a nivel individual que perpetúa el sexismo es la relación que existe entre este y los estereotipos con ciertas diferencias individuales, como la orientación a la dominancia social. Las personas que presentan altos niveles de SDO se caracterizan por legitimar las diferencias entre grupos, entre ellas, las jerarquías de género o estar a favor de que algunos grupos dominen por sobre otros, y se oponen a la idea de disminuir las inequidades. Esta variable contribuye a explicar por qué hay personas que se resisten más que otras a

asumir las consecuencias negativas del sexismo, especialmente los hombres, quienes han demostrado poseer mayores niveles de SDO en muestras de distintas edades y países (Pratto et al., 1997).

NIVEL INTERPERSONAL

Los estereotipos de género y las creencias y comportamientos sexistas producen que, en las interacciones interpersonales, las mujeres sean percibidas como personas débiles y los hombres como personas con poder. Como consecuencia, esto no solo afecta a las mujeres a nivel individual, sino que también contribuyen a generar amenazas para ellas a nivel interpersonal, como la violencia, el acoso sexual y encontrarse insertas en entornos hostiles, entre otros.

Por ello, en casos de violencia de género y acoso sexual, es mucho más probable que las mujeres sean las víctimas y los hombres los perpetradores. Este tipo de violencia o acoso se da en múltiples contextos (lugar de estudio y/o trabajo, en el ámbito familiar o de pareja, etc.), por lo que las mujeres se encuentran en situaciones de inseguridad en muchos de los espacios en los que se desenvuelven cotidianamente (Dartnall & Jewkes, 2013).

Además, las mujeres se enfrentan a situaciones sexistas en promedio una vez por semana, incluyendo circunstancias como recibir comentarios estereotipados o sobre sus roles en la sociedad, juicios y conductas denigrantes y despectivas, o cosificación sexual (Swim et al., 2001). El hecho de que las mujeres estén altamente expuestas a situaciones de este tipo, produce que ellas mismas cosifiquen sus cuerpos, lo que afecta de forma negativa su bienestar psicológico (Swim et al., 2001). Si bien los hombres también pueden experimentar este tipo de amenazas, es en este aspecto donde se encuentra la mayor diferencia entre la vivencia del sexismo para hombres y mujeres, ya que los primeros reportan escasas experiencias de cosificación sexual (Swim et al., 2001).

NIVEL INTERGRUPAL

A nivel intergrupal es posible identificar el sexismo operando en diferentes aspectos. Por ejemplo, existen características como el estatus y la competencia, las que se atribuyen a un grupo o a otro para otorgarle poder; lo que, a su vez, produce que se generen distintas emociones a cada grupo según las características que se les otorgan.

Estatus y competencia corresponden a dos dimensiones importantes en las relaciones intergrupales que se conectan directamente con los estereotipos de género e influyen en la forma en la que los grupos se vinculan entre sí (Fiske et al., 2002). De acuerdo a estos estereotipos, las mujeres, como grupo, son

percibidas como menos competentes y con un menor estatus en comparación al grupo de los hombres. Esto repercute de manera negativa en su desarrollo y en el rol que tienen en la sociedad.

A su vez, el estatus y la competencia están asociados a ciertas emociones intergrupales, esto es, emociones que se generan y dirigen hacia un grupo en general (Fiske et al., 2002). Por un lado, las mujeres, al ser asociadas a una baja competencia (p. ej., se perciben como poco eficaces e inteligentes) y una alta sociabilidad (p. ej., se perciben como cuidadoras y afectuosas), generan emociones como la pena y la negligencia, esto es, falta de cuidado y despreocupación hacia ellas. En cambio, los hombres, que son considerados un grupo con altos niveles de competencia, son admirados (Fiske et al., 2002). Estos estereotipos permiten que los grupos considerados de alto estatus mantengan el poder, lo que puede influir en que surjan conductas de daño pasivo hacia las mujeres, las que implican una desatención y vulneración de sus demandas, necesidades y derechos.

NIVEL INSTITUCIONAL

A nivel institucional, el sexismo también opera a través de diversos mecanismos y en diferentes ámbitos. Uno de los ejemplos más claros en este nivel es el caso de las instituciones laborales. En estas, las mujeres no son solo discriminadas por sus capacidades percibidas y los roles que ocupan, sino que también por el simple hecho de ser mujeres.

En el ámbito laboral, las mujeres se ven enfrentadas a discriminación en los procesos de selección, donde entre trayectorias laborales y currículums idénticos, aquellos que pertenecen a un hombre son evaluados más positivamente que los que pertenecen a una mujer. Estos sesgos no están presentes solo al momento de seleccionar a las personas, sino que también al evaluar el desempeño laboral de los y las trabajadoras, al determinar su potencial, y al asignar recompensas y promociones a cargos más altos (Ellemers, 2018). Una forma de reducir estos sesgos al tomar decisiones en las instituciones laborales, es aplicando un método conocido como selección ciega, en la que los datos demográficos de los postulantes se ocultan y así se evita caer en sesgos, como la discriminación por sexo (Chang & Milkman, 2020; Martin & Phillips, 2018).

Estas diferencias entre hombres y mujeres son aún mayores si la persona involucrada tiene hijos/as. La probabilidad de que las mujeres que son madres sean elegidas para un trabajo o para una promoción es mucho menor que la de las mujeres sin hijos/as, a pesar de presentar las mismas capacidades. Esto ocurre porque las mujeres, al convertirse en madres, son percibidas como menos competentes. Además, esto es algo que no ocurre con los hombres que tienen hijos/as (Ellemers, 2018).

Por otro lado, hombres y mujeres se comportan de maneras diferentes en sus lugares de trabajo. En el caso de las mujeres, ellas prefieren mantenerse al margen de ciertas situaciones, como manifestar sus molestias frente a los tratos injustos o a la distribución desigual del trabajo. Esto produce que estas no alcancen todo su potencial, al tener que optar entre su desarrollo laboral y su bienestar emocional (Heilman, 2012). Además, otro elemento que influye en el menor desarrollo laboral de las mujeres, es el tipo de tareas que se les asignan a ellas a diferencia de los hombres. Por ejemplo, las mujeres están más dispuestas a aceptar, o se les pide más a ellas que realicen tareas que no influyen en su posibilidad de ser promovidas, como, por ejemplo, ser parte de un comité, lo que al final les quita tiempo para participar en tareas realmente importantes que influyan en su desarrollo profesional (Babcock et al., 2017). Sumado a esto, las mujeres están menos dispuestas que los hombres a negociar un sueldo más alto, no porque no crean merecerlo o no encuentren el momento adecuado para solicitarlo, sino porque al hacerlo son mal vistas e, incluso, penalizadas socialmente, en especial si el evaluador es hombre (Bowles et al., 2007).

A pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en sus lugares de trabajo, algunas de ellas logran alcanzar puestos altos en organizaciones masculinizadas. Sin embargo, al obtener estos logros, paradójicamente, se distancian de las mujeres en cargos inferiores, legitimando así la inequidad de género. En concreto, este fenómeno, conocido como el efecto *queen bee* (abeja reina), se da cuando mujeres que presentan bajos niveles de identificación con otras mujeres, y que además perciben que se las discrimina por el hecho de ser mujer, alcanzan puestos de poder. En contexto, el distanciarse del grupo desaventajado y de menor estatus, que además es causa de discriminación, puede generar la percepción de que se ocupa un estatus más alto. Esto, más que ser una causa de las diferencias de género, es probablemente uno de los mecanismos de mantención de estas, donde las mujeres han tenido que internalizar los patrones discriminatorios para poder ascender a cargos más altos (Derks et al., 2016).

Además del ámbito laboral, el sexismo también está presente en otras instituciones, como, por ejemplo, las educativas o políticas, que son discutidas en otros capítulos de este libro. Por ello, es necesario visibilizar y analizar cómo las distintas instituciones perpetúan el sexismo. Estos análisis contribuirán a entender el rol de estas en la desigualdad de género, así como a generar soluciones estructurales que la reduzcan.

NIVEL CULTURAL

Todos los niveles anteriores interactúan entre ellos, generando que el sexismo y los estereotipos de género estén fuertemente arraigados en la cultura y se manifiesten de múltiples formas, por ejemplo, a través de la socialización recibida por niños y niñas, las diferentes posiciones sociales que ocupan hombres y mujeres, y las distintas expresiones del sexismo que existen, entre otras.

Estas diferencias entre hombres y mujeres provienen de diversas fuentes (familia, medios de comunicación, escuelas, interacciones con pares, etc.), por lo que son aprendidas e interiorizadas desde la primera infancia. Niños y niñas aprenden desde edades muy tempranas a categorizar los objetos en femenino y masculino, donde incluso ya a los 18 meses de edad eligen juguetes estereotipados, siendo capaces de relacionar los juguetes con cada uno de los sexos, por ejemplo, muñecas para las niñas y autos para los niños (Kite et al., 2007). Esto puede verse en el clásico experimento de dibujar un científico. Este estudio buscaba conocer a qué edad niños y niñas internalizan la imagen estereotípica de un científico, por lo que se les pidió que dibujaran a uno y luego se analizó la apariencia de los dibujos realizados. Alrededor de 5.000 niños y niñas de entre cinco y 11 años participaron del estudio, y solo 28 niñas y 0 niños dibujaron a una científica. Esto demuestra que los estereotipos se instalan en las y los niños a temprana edad, lo que también se relaciona con las actitudes y creencias que desarrollan en torno a diversas temáticas, en este caso, la ciencia y tecnología (Chambers, 1983).

A nivel cultural también puede notarse la escasez de mujeres en posiciones de poder y/o liderazgo. Esto se da porque, hasta el día de hoy, ellas tienen un menor acceso que los hombres a estos aspectos de la sociedad. Si bien esta brecha se ha reducido en las últimas décadas, es una diferencia que se mantiene vigente y afecta las oportunidades de desarrollo de las mujeres. Así, los roles de las mujeres han ido cambiando, pero siguen siendo los hombres quienes tienen un mayor y mejor acceso al poder político, económico y jurídico, entre otros. Aunque también hay mujeres que ocupan estas posiciones, sigue siendo un número reducido y son consideradas una excepción (Rudman & Glick, 2021).

En la cultura es posible encontrar diferentes expresiones del sexismo. Por ejemplo, el marianismo, que sostiene la idea de que la Virgen María representa un ejemplo a seguir por las mujeres, principalmente por su obediencia y el hecho de ser madre. O el machismo, que corresponde a la idea de que los hombres son fuertes, valientes y superiores a las mujeres (Jiménez-Moya et al., 2022). También en esta línea, el androcentrismo es la tendencia a organizar la sociedad en torno a los hombres y considerar que ellos son el estándar, dejando a las mujeres en la periferia. Un ejemplo de esto es el uso del lenguaje en masculino y usar la palabra “hombres” para referirse a las

personas en general. Esto afecta a las mujeres no solo porque las trata como si no existieran, sino que también produce una subrepresentación de ellas en diversas áreas (Bailey et al., 2019).

CÓMO PENSAR LAS INTERVENCIONES

A la hora de diseñar intervenciones, es importante que estas aborden los diferentes mecanismos que operan en múltiples niveles, ya que al enfocarse solo en uno es difícil que se logren cambios relevantes, pues los otros mecanismos seguirán operando. Además, es importante que las intervenciones sean adecuadamente diseñadas e implementadas, basadas en evidencia, para que resulten efectivas y no tengan efectos indeseados.

Dentro de las intervenciones que han mostrado efectividad, se encuentran las orientadas a reducir los efectos de la amenaza de los estereotipos enfrentada por las mujeres, que son procedimientos que buscan disminuir o incluso eliminar sus consecuencias negativas al momento de rendir en contextos exigentes. Esto se refiere a evitar que las mujeres se vean expuestas a situaciones en las que un estereotipo negativo pueda ser confirmado (por ejemplo, una mujer que debe participar en una prueba de matemáticas se va a sentir amenazada por que el estereotipo “las mujeres son malas en matemáticas” se vea confirmado). Algunos tipos de estas intervenciones incluyen cambiar las propias creencias sobre los estereotipos negativos del grupo al que se pertenece, lo que se puede lograr, por ejemplo, entregando material que describa a una persona del grupo que haya tenido éxito en una tarea o campo estereotipado negativamente. Esto permitirá a las personas cambiar sus creencias sobre su grupo al darse cuenta de que hay individuos que contradicen los estereotipos negativos que las amenazan, además de entregarles otros beneficios, como aumentar su confianza y autoeficacia (Liu et al., 2021). Estas intervenciones pueden aplicarse, dentro de otros, a nivel de instituciones, por ejemplo, académicas, promoviendo una mayor representación de las mujeres en carreras y cargos típicamente masculinizados.

Otro tipo de intervenciones que han demostrado ser útiles, son las que se basan en la idea de que los hombres tienden a sobrestimar las creencias sexistas de sus pares. En este sentido, como los hombres creen que los demás apoyan en mayor medida el sexismo de lo que realmente lo hacen, se crea una atmósfera sexista y hostil para las mujeres. Este tipo de intervención busca mostrar a los hombres que sus pares no son tan sexistas como ellos creen, lo que produce que estén más dispuestos a enfrentarlos y así generar ambientes más seguros. Por lo tanto, la intervención consiste en hacer una breve presentación sobre las creencias sexistas del grupo de hombres, para que se den cuenta de que dichas ideologías no están tan difundidas como lo pensaban (Kilmartin et al., 2008).

Como se mencionó anteriormente, las creencias estereotipadas se instalan tempranamente en niños y niñas, por lo que resulta importante intervenir en ese nivel. Un ejemplo de este tipo de intervención consiste en enseñarles desde edades tempranas a confrontar a sus pares cuando dicen comentarios sexistas. Para llevar a cabo estas intervenciones, es fundamental enseñarles de manera activa estrategias para enfrentar dichas situaciones. Algunas de estas técnicas consisten en frases que pueden decir para confrontar a sus pares que excluyen a las niñas de ciertos juegos por ser “para niños”, o a quienes limitan a las niñas en cuanto a los roles que pueden tomar en los juegos (por ejemplo, ser la enfermera y no la doctora), comentarios y comparaciones estereotipadas (por ejemplo, que los niños son mejores en matemáticas que las niñas), entre otros. Este tipo de intervención, que ha demostrado ser efectiva y mantener sus efectos positivos en el tiempo, permite que niños y niñas se vuelvan conscientes a temprana edad de los estereotipos de género y de lo limitantes que estos son, así como también que aprendan técnicas eficaces para enfrentarlos (Lamb et al., 2009).

CONCLUSIONES

El sexismo se manifiesta en múltiples niveles con diversos mecanismos que operan de manera independiente y, a la vez, interactúan entre ellos, conformando una amenaza para el bienestar de las personas, principalmente para las mujeres. Intervenir para reducir las creencias y comportamientos sexistas es especialmente difícil y, por lo mismo, hay que diseñar acciones basadas en evidencia que apunten a múltiples niveles simultáneamente. Los contextos institucionales son instancias particularmente relevantes para llevar a cabo estas intervenciones, pues constituyen espacios donde se pueden garantizar estas condiciones de forma más segura y con una perspectiva de largo plazo.

La reducción del sexismo ha sido una tarea de muy largo aliento y, a pesar de los significativos logros, no debe olvidarse que sus raíces son profundas y siguen existiendo.

REFERENCIAS

- Bailey, A. H., LaFrance, M., & Dovidio, J. F. (2019). Is man the measure of all things? A social cognitive account of androcentrism. *Personality and Social Psychology Review*, 23(4), 307-331. <https://doi.org/10.1177/1088868318782848>
- Cao, J., & Banaji, M. R. (2016). The base rate principle and the fairness principle in social judgment. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(27), 7475-7480. <https://doi.org/10.1073/pnas.1524268113>

- Chang, E. H., & Milkman, K. L. (2020). Improving decisions that affect gender equality in the workplace. *Organizational Dynamics*, 49(1), 100709. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2019.03.002>
- Dartnall, E., & Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: the scope of the problem. *Best Practice & Research Clinical obstetrics & Gynaecology*, 27(1), 3-13. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002>
- Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: why women leaders distance themselves from junior women. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 456-469. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.12.007>
- Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. *Annual Review of Psychology*, 69(1), 275-298. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719>
- Fiske, S. T. (2018). Stereotype content: warmth and competence endure. *Current Directions in Psychological Science*, 27(2), 67-73. <https://doi.org/10.1177/0963721417738825>
- Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(6), 878-902. <http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000163>
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: differentiating hostile and benevolent sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 491-512. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491>
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1997). Hostile and benevolent sexism: measuring ambivalent sexist attitudes toward women. *Psychology of Women Quarterly*, 21(1), 119-135. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00104.x>
- Guerra, E., Bernotat, J., Carvacho, H., & Böhner, G. (2021). Ladies first: gender stereotypes drive anticipatory eye-movements during incremental sentence interpretation. *Frontiers In Psychology*, 12:589429. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.589429>
- Heilman, M. E. (2012). Gender stereotypes and workplace bias. *Research in Organizational Behavior*, 32, 113-135. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2012.11.003>
- Jiménez-Moya, G., Carvacho, H., Álvarez, B., Contreras, C., & González, R. (2022). Is support for feminism enough for change? How sexism and gender stereotypes might hinder gender justice. *Frontiers in Psychology*, 13:912941. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912941>
- Kilmartin, C., Smith, T., Green, A., Heinzen, H., Kuchler, M., & Kolar, D. (2008). A real time social norms intervention to reduce male sexism. *Sex Roles*, 59(3), 264-273. <http://dx.doi.org/10.1007/s11199-008-9446-y>
- Kite, M. E., Deaux, K., & Haines, E. L. (2008). Gender stereotypes. En Denmark, F., & Paludi, M. A. (Eds.). *Psychology of women: a handbook of issues and theories* (p. 205-236). Westport, Conn.: Praeger.
- Lamb, L. M., Bigler, R. S., Liben, L. S., & Green, V. A. (2009). Teaching children to confront peers' sexist remarks: implications for theories of gender

- development and educational practice. *Sex Roles*, 61(5), 361-382. <http://dx.doi.org/10.1007/s11199-009-9634-4>
- Liu, S., Liu, P., Wang, M., & Zhang, B. (2021). Effectiveness of stereotype threat interventions: a meta-analytic review. *Journal of Applied Psychology*, 106(6), 921-949. <https://doi.org/10.1037/apl0000770>
- Mahalingam, R., Balan, S., & Haritatos, J. (2008). Engendering immigrant psychology: an intersectionality perspective. *Sex Roles*, 59(5), 326-336. <http://dx.doi.org/10.1007/s11199-008-9495-2>
- Martin, A., & Phillips, K. (2017). What “blindness” to gender differences helps women see and do: implications for confidence, agency and action in male-dominated environments. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 142, 28-44. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2017.07.004>
- Pratto, F., Stallworth, L. M., Sidanius, J., & Siers, B. (1997). The gender gap in occupational role attainment: a social dominance approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(1), 37-53. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.1.37>
- Rapp, K. S., Volpe, V. V., Hale, T. L., & Quartararo, D. F. (2021). State-level sexism and gender disparities in health care access and quality in the United States. *Journal of Health and Social Behavior*, 63(1), 2-18. <https://doi.org/10.1177/00221465211058153>
- Rudman, L. A., & Glick, P. (2021). *The social psychology of gender: how power and intimacy shape gender relations*. Nueva York: Guilford Publications.
- Rudman, L. A., Greenwald, A. G., & McGhee, D. E. (2001). Implicit self-concept and evaluative implicit gender stereotypes: self and ingroup share desirable traits. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(9), 1164-1178.
- Sugarman, D. B., Nation, M., Yuan, N. P., Kuperminc, G. P., Hassoun Ayoub, L., & Hamby, S. (2018). Hate and violence: addressing discrimination based on race, ethnicity, religion, sexual orientation, and gender identity. *Psychology of Violence*, 8(6), 649-656. <https://doi.org/10.1037/vio0000222>
- Swim, J. K., Hyers, L. L., Cohen, L. L., & Ferguson, M. J. (2001). Everyday sexism: evidence for its incidence, nature, and psychological impact from three daily diary studies. *Journal of Social Issues*, 57(1), 31-53. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00200>
- Zucker, A. N., & Landry, L. J. (2007). Embodied discrimination: the relation of sexism and distress to women’s drinking and smoking behaviors. *Sex Roles*, 56(3-4), 193-203. <https://doi.org/10.1007/s11199-006-9163-3>

CAPÍTULO 2

LAS PARADOJAS DE LA INTIMIDAD DURANTE LA PANDEMIA. LA EXPERIENCIA DEL TIEMPO COTIDIANO COMO PRISMA DE LAS TRANSFORMACIONES DE GÉNERO EN EL CHILE ACTUAL²

Dariela Sharim

LOS AÑOS recientes de pandemia y confinamiento amenazaban inicialmente, dado el trabajo y la comunicación *online* que implicaron, con un empobrecimiento del contacto y las relaciones humanas.

Paradójicamente, el teletrabajo nos ha impulsado a un quiebre de la separación tan nítida a la que acostumbrábamos entre el mundo de lo privado y lo público. La posibilidad de observar y exponernos diariamente a este entrecruzamiento de mundos, ha permitido identificar con mayor claridad algunos aspectos de la vida cotidiana expresivos de nuevas configuraciones subjetivas y, especialmente, de aquellas de género que ya se venían manifestando los años anteriores.

A partir del análisis de las vivencias personales, basándonos en relatos de vida de hombres y mujeres adultos de la ciudad de Santiago, abordaremos aquí su experiencia subjetiva del tiempo cotidiano³.

USO DEL TIEMPO COTIDIANO Y GÉNERO

La reflexión actual en Chile sobre el tiempo como indicador de desigualdad, se basa tanto en estudios de su dimensión objetiva —encuestas, inventarios de actividades diarias, su duración y ubicación espacial (ENUT, 2015; Basaure, 2021)— como en aquellos centrados en la dimensión subjetiva —percepción y significados del uso del tiempo (Araujo & Martuccelli, 2012; PNUD, 2009; Sharim & Silva, 1998)—.

² Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

³ Proyecto Mini COES: “El conflicto social desde la óptica del uso y la experiencia subjetiva del tiempo cotidiano”. 2016-2018. Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

Dentro de los primeros, tenemos la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2015). En esta, el resultado más llamativo es el que muestra que las mujeres en promedio dedican alrededor de 5,9 horas diarias a trabajos no remunerados, mientras que los hombres solo alrededor de 2,7 horas.

La ENUT muestra así una persistente diferencia de género. Si bien casi toda la población chilena participa en trabajos no remunerados, lo que marca la diferencia es la cantidad de tiempo dedicado. Desde los 24 años, se observa que esta dedicación es siempre casi el doble en las mujeres respecto de los hombres. De aquí que el tiempo parezca estar entonces “generizado”: una experiencia masculina más lineal, y una femenina en la que se traslapan actividades del mundo del trabajo y del ámbito privado (Basaure, 2018).

Estos datos se amplían con aquellos producidos en investigaciones cualitativas sobre la experiencia del tiempo. Ya en 2009, el Informe de Desarrollo Humano señalaba que “para muchas mujeres el tiempo cotidiano se estructura a partir de las necesidades de los otros” (PNUD, 2009, p. 80). Posteriormente, estableciendo el tiempo libre como un criterio de bienestar subjetivo, en tanto se asocia a la realización de actividades autónomamente elegidas, el mismo informe plantea que este es parte de la división sexual de los roles. “Para las mujeres con trabajo remunerado o una mayor carga de responsabilidad económica, disponer de un tiempo libre de calidad se hace más difícil que para los hombres en igual situación” (PNUD, 2012, p.79).

Las inequidades de género son complejas y los indicadores objetivos, como el aumento de la inserción laboral, no alcanzan a dar cuenta de esta y arriesgan invisibilizar, una vez más, el problema. Los estudios que apuntan a recoger las experiencias y sentidos cotidianos, por lo tanto, se hacen necesarios para explorar la dinámica de reproducción de estas inequidades.

Quizá es la experiencia de autonomía respecto del tiempo la que puede constituir un indicador que aporte a ponderar dichas inequidades. Algunos autores (Basaure, 2018) hablan de “la tiranía del tiempo”, dando cuenta de un padecimiento, de una experiencia de “carestía” del tiempo asociada a actividades que se sienten impuestas externamente. Byung-Chul Han (2015) nos habla de tiempos fragmentados, y Halmut Rosa (2010) del fenómeno de aceleración del tiempo como una característica de la época contemporánea. Estos autores identifican que el principal foco desde el cual se visualiza el tiempo es el de la productividad y el trabajo. Las intensas jornadas laborales hacen que el tiempo se transforme en un bien escaso, altamente valioso y respecto del cual las personas sienten que tienen poca autonomía.

De aquí el supuesto que se suele tener —lo tuvimos también en nuestra investigación— de que, a mayores recursos económicos, mayor autonomía respecto del tiempo y, por lo tanto, se podría derivar mayor bienestar.

HALLAZGOS

Sin embargo, en nuestro estudio observamos tensiones al respecto, incluso datos contradictorios. En primer lugar, confirmamos la tesis del tiempo generizado. Las mujeres, traslapando actividades domésticas con las remuneradas, no perciben que pueden manejar o definir su tiempo, sino que se estructuran en torno a la realización de todas las tareas tanto domésticas como laborales: la consigna es que “alcance el tiempo” para todo lo que hay que hacer. La autonomía no es la tónica, sino el cansancio.

Los hombres tienen una experiencia más lineal respecto al uso del tiempo cotidiano y lo perciben más como un desafío de equilibrio entre las actividades en el ámbito privado, especialmente el cuidado de los hijos/as, y el desempeño laboral. El logro del equilibrio, a través de la optimización del tiempo, se asocia a una sensación de libertad. Los límites no se viven con culpa, sino externalizando las causas: la ciudad, el trabajo, el sistema. Aun así, para muchos, la estrategia de optimizar el tiempo también genera bastante estrés; es “el acoso del tiempo”, dicen.

Hay algunos matices en la experiencia de falta de tiempo que son interesantes de considerar para aportar al conocimiento de las transformaciones en la configuración de la experiencia cotidiana.

Cruzando la variable de género con la de estrato social, vemos que es en los hombres de sectores más altos donde se expresa con mayor fuerza la sensación de libertad respecto del tiempo. Organizarse para poder dedicar tiempo a los hijos/as es vivido como un logro importante, y enfatizan que esto no es en desmedro del trabajo, sino que se debe a poder optimizar el tiempo. Cuando no logran hacerlo, no sienten culpa, sino que lamentan perderse períodos importantes del desarrollo de los hijos/as. De alguna manera, se puede decir que están atrapados en los logros: hay que trabajar mucho para sostener lo que se tiene, parece ser su eslogan. No hay queja, sino que se externalizan y naturalizan las causas: momentos críticos del trabajo, edad de los hijos/as que tienen horarios y necesidades particulares, etc. En este grupo, la tesis de que, a mayores recursos económicos, mayor autonomía respecto del tiempo, encuentra un fundamento.

En el grupo de hombres de menores recursos, hay una sensación de falta de libertad, especialmente respecto al tiempo de descanso. La mayor parte del tiempo necesitan trabajar por necesidad económica, y agregan que tampoco sabrían bien qué hacer con el tiempo libre.

Algunos han intentado obtener mayor libertad a través del trabajo independiente, pensando así en mejorar su vida cotidiana. Sin embargo, esto está supeditado a conseguir trabajos y a que estos sean bien remunerados. Este es el único grupo de hombres en que aparece la queja, la crítica. Atribuyen lo

difícil de esta opción a la lógica de la vida urbana, que define los ritmos y los tiempos de todos. Se resisten a entrar en la estrategia de la optimización del tiempo, pero saben que siempre es una posibilidad por la necesidad económica. A pesar de hablar de la “sociedad de la decepción”, transmiten su sensación de logro de resistirse a las rutinas impuestas socialmente: “hay que resistir, comer fruta en vez de postre; andar en micro en vez de auto”.

En el grupo de mujeres de grupos más altos, se encuentra una sensación de menor autonomía, desmintiendo la tesis de que esta es proporcional a los recursos. El trabajo no remunerado es vivido como pérdida de tiempo, como actividades que carecen de reconocimiento. Se quejan de la ausencia de sus parejas: “Mi marido cree que yo debiera ser como la Telepizza: estar en todos lados. Se le queda algo en casa y siempre me pide que esté ahí para resolver. Los hombres en Chile creen que las mujeres somos como sus ayudantes”. La insatisfacción se hace evidente, pero no con el afuera, como en el caso de los hombres, sino consigo mismas. Es la sensación de insuficiencia la que predomina, de no estar a la altura de las exigencias de la época.

Distinto es el caso del grupo de mujeres con menores ingresos. Ellas sugieren mayor sensación de autonomía a raíz de ser capaces de “aprovechar bien el tiempo”, es decir, organizarse para poder asumir todas las tareas ligadas tanto al trabajo remunerado como al doméstico. “Yo hago todo a mi pinta”, “la cuestión es no quedarse sentada perdiendo el tiempo”, “la cosa es no hacerse problema”, “quiero que todo sea *light*”. Aparece una satisfacción con su cotidianeidad, una suerte de estrategia de pacificación que contrasta con la sensación de insuficiencia que acecha a las mujeres de sectores más altos. Las mujeres populares no tematizan mayormente el tiempo, solo expresan que se estructuran en torno a la vida de familia. Hay disfrute y orgullo en hacer las cosas de la casa y ganar dinero. Al estar superpuestos trabajo y vida doméstica, no tienen tensión de tiempos. El desenvolverse en espacios reducidos —principalmente, el hogar— no se vive como una limitación, sino como un “ahorro de problemas”.

Transversalmente, el tiempo cotidiano se reduce al trabajo y al espacio familiar. Casi nadie menciona la participación social en organizaciones ni amigos, tampoco aparece el espacio público. El día entero sucede dentro del hogar o en los espacios laborales.

ENTRE LA INSUFICIENCIA Y LA PACIFICACIÓN: ESTRATEGIAS INDIVIDUALES PARA PROBLEMAS COLECTIVOS

Respecto a nuestra hipótesis de género, podemos reafirmar que la experiencia del tiempo cotidiano efectivamente está generizada. Una vivencia de actividades traslapadas o superpuestas en las mujeres, y una más lineal en los hombres,

marcan una diferencia significativa. En las mujeres prima la culpa y en los hombres el agobio de la exigencia cuando no es posible alcanzar el ideal hegemónico de optimización del tiempo. Los roles tradicionales son un refugio frente a las ansiedades que esto provoca, finalmente, el reconocimiento social tiende a asegurarse, aunque sea en su forma mínima, en la asignación más tradicional: a ellas, el ámbito de lo privado; a ellos, el mundo de lo público como lugar por excelencia.

Respecto a nuestra hipótesis sobre el conflicto social que implica la vivencia de falta de tiempo, el supuesto de que, a mayores recursos, mayor autonomía respecto al tiempo, se pone en cuestión. Encontramos una suerte de estrategias de afrontamiento individuales que parecen proporcionar una ilusión de autonomía, aunque sea a costa del agobio o de la valoración de sí mismo.

El conflicto social se internaliza experimentando el tiempo como un asunto principalmente individual, casi sin considerar su dimensión colectiva. Un buen ejemplo es el mecanismo que desarrollan mujeres de sectores populares que hemos denominado “pacificación de la experiencia”, que permite hacer frente al conflicto que emerge del sometimiento al tiempo normativo. Dada la dificultad de articular trabajo remunerado y doméstico, estos se superponen; se logra ser dueña de casa y recibir ingresos a la vez, se ocupa hasta el último minuto de tiempo, se siente orgullo de lograrlo y el problema de la falta de valor económico y social del trabajo doméstico queda difuminado. No hay espacio ni tiempo para visibilizarlo.

Asimismo, aquellas mujeres que sí tienen un trabajo fuera del hogar, experimentan lo agobiante y escaso del tiempo para que alcance para las tareas domésticas como una falta personal. La insuficiencia es un mecanismo que, a costa de sentirse muy cuestionada en las capacidades propias, da la ilusión de que con mayor esfuerzo o habilidad sí se logrará alcanzar la expectativa idealizada de ser una mujer que puede hacerlo todo y bien.

Es este mecanismo de la insuficiencia el más transversal. La cotidianidad de los chilenos en las últimas décadas ha alcanzado un nivel de exigencia impensado. La sensación de que el tiempo nunca alcanza se ha experimentado, distorsionadamente, como un problema principalmente personal asociado a una autopercepción de ser insuficiente. Esto es parte del despliegue inconsciente de “tácticas y estrategias” que nos dan una ilusión de protección frente a las amenazas subjetivas asociadas a esta experiencia.

Pareciera que los modelos actuales de desarrollo económico contribuyen a la construcción de una subjetividad que parece estar más fundada en la experiencia de *falta* que en la de *conflicto*. Esto implicaría que malestares actuales como, por ejemplo, la vivencia de falta de tiempo personal, fueran experimentados subjetivamente como fruto de una insuficiencia y fracaso personal más que como un conflicto de orden social y colectivo. Este foco en la falta individual se relaciona con las normas y mandatos que regulan la vida

social; mandatos que establecen una serie de ideales sin entregar suficiente andamiaje para la elaboración de los conflictos.

Para dar contexto a este análisis, no podemos dejar de mencionar que el mecanismo de evitación de los conflictos tiene antecedentes en la historia política reciente de Chile, marcada por discursos sociales asociados al temor y rechazo al conflicto (COES, 2014; PNUD, 2015), y que asocian a un sentido curativo o sanador el olvido de lo traumático (Kovalskys, 2006), lo que se sustentaría en una concepción —parte del imaginario social— de los conflictos como provocadores de rupturas irreversibles (Kovalskys & Lira, 1996).

El estallido social de 2019 en Chile, puede también mirarse desde la perspectiva de la evitación del conflicto que ha primado en nuestra sociedad, lo que ha implicado una acumulación del malestar que viene a estallar con una fuerza tal que abordar y sostener la tensión de la que da cuenta se hace muy difícil.

Finalmente, en el contexto social de la primacía de los proyectos individuales, es un desafío importante el integrar la dimensión subjetiva en la comprensión de las transformaciones sociales. En este caso, la experiencia personal del tiempo cotidiano constituye un prisma a través del cual mirar y aportar a esta comprensión.

REFERENCIAS

- Araujo, K. & Martuccelli, D. (2012). *Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos*. Tomo I. Santiago de Chile: Lom.
- Basaure, M., Sánchez, S., & Vera, C. (2018). Desigualdad como tiranía del tiempo. Una indagación teórica y empírica del caso chileno. Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) n° 32, 1-49.
- Basaure, M., Güell, P., Larenas, E., Zilveti, M., Yopo, M., Vera, C. & Díaz, A. (2021). Midiendo el tiempo, valorando la temporalidad. Análisis conceptual y metodológico de encuestas sobre tiempo y temporalidad en Chile. *MAD*, 45, 1-23.
- Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) (2014). Encuesta ¿Crisis en la confianza política? Santiago de Chile.
- Han, B. (2015) *El aroma del tiempo*. Barcelona: Herder.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) (2015). Santiago de Chile. https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-trabajo-enut.pdf?sfvrsn=7bcc61b0_6
- Kovalskys, J. (2006). Trauma social, modernidad e identidades sustraídas: nuevas formas de acción social. *Psykhé*, 15(2), 13-24. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282006000200002>

- Kovalskys, J. & Lira, E. (1996). Trauma social y reparación. En Lira, E. (Ed.). *Reparación, derechos humanos y salud mental*. Santiago: Ediciones Chile-América CESOC.
- PNUD 2009. Informe sobre desarrollo humano. Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos. Santiago de Chile.
- PNUD 2012. Informe sobre desarrollo humano. Bienestar Subjetivo. Santiago de Chile.
- PNUD 2015. Informe sobre desarrollo humano. Trabajo al servicio del desarrollo humano. Santiago de Chile.
- Rosa, H. (2010). *Alienation as acceleration. Towards a critical theory of late-modern temporality*. Nueva York: NSU Press.
- Sharim, D. & Silva, U. (1998). *Familia y reparto de responsabilidades. Un estudio de tiempo*. Documento n° 58. Santiago: Sernam.

CAPÍTULO 3

CONFRONTANDO EL SEXISMO: ¿QUÉ SABEMOS Y QUÉ PODEMOS HACER?

Michelle Bernardino

CHILE TUVO un despertar colectivo de conciencia de género en 2018. Las protestas feministas tomaron espacios colectivos y tensionaron conversaciones del ámbito personal. Entre sus objetivos, buscaron evidenciar el carácter estructural del sexismo, con demandas por cambios institucionales que pudieran dar cuenta de las históricas desventajas vividas por las mujeres. Además, fue un momento de reflexionar a partir del punto de vista de la mujer: cómo prácticas sociales, conductas y creencias relacionadas al género afectan a la experiencia de vida de la mujer en la sociedad. Conductas antes aceptadas socialmente —como las conocidas por el término paraguas de micromachismos— dejaron de ser toleradas, generando demandas por cambios. Tales demandas desafían a la cultura y a los valores morales compartidos socialmente, y este encuentro entre diferentes discursos, grupos y valores morales puede generar conflictos bastante tensos para la armonía social e interpersonal. En este sentido, ¿qué hacer frente al conflicto de género? En este capítulo buscaremos reconocer la función, mecanismos y consecuencias del conflicto, utilizando la literatura acerca de la confrontación de la discriminación, para, finalmente, entregar algunas recomendaciones de cómo lidiar con ella con base en evidencias encontradas en la literatura científica.

Muchos de los estudios sobre los efectos de la confrontación son hechos en Estados Unidos, enfocándose en el tema del racismo, siendo los enfocados en las relaciones de género más escasos. Aunque los procesos psicológicos gatillados por la confrontación puedan ser semejantes, independiente del tipo de grupo (hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros), el contexto de género tiene sus peculiaridades, pues involucra un alto nivel de contacto entre los grupos (ej. entre hombres y mujeres), afectos muchas veces romántico/sexuales, estereotipos divergentes y asimetrías de poder (Becker, Zawadzki & Shields, 2014). Guardando sus diferencias y semejanzas, evaluaremos hallazgos sobre confrontación y conflicto en diversos contextos grupales con la finalidad de comprender posibles efectos de confrontar a la discriminación.

Aunque los hombres también son afectados por el trato desigual entregado a hombres y mujeres, estas últimas son desproporcionadamente afectadas en sus niveles de autonomía, poder y recursos. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestran que, en Chile, por ejemplo, las mujeres suman entre tiempo trabajado dentro y fuera de la casa 12 horas semanales más que los hombres. Esta diferencia, desde luego, no implica un mayor logro económico, pues reciben sueldos 20 puntos porcentuales abajo de los hombres. Las mujeres también tienen menos probabilidades de ascender a puestos directivos y a una educación que lleve a campos más lucrativos, como los de tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, históricamente, las mujeres han ocupado menos puestos de poder político, lo que puede haber favorecido la mantención de leyes que perpetúan el actual orden estructural, como la brecha salarial, la carga laboral excesiva y la autonomía del cuerpo, entre otros.

La desigualdad no solo se refiere a una dimensión objetiva de la diferencia entre grupos, sino también de la percepción y la legitimidad que se entrega a esta diferencia. Siendo esta la realidad objetiva y siendo ella percibida como injusta, los conflictos pueden emerger espontáneamente, es decir, en situaciones cotidianas, sin plan previo. A pesar de la importancia de un proyecto que valore la armonía social, es poco probable que los cambios de género se produzcan sin conflicto dada la legitimidad de los valores patriarcales y la coexistencia entre individuos que divergen con respecto a ellos, desde personas que apoyan la jerarquía social hasta igualitarios, desde conservadores hasta liberales.

A pesar de sentirse como más cómodo, evitar el conflicto puede no ser el mejor camino si uno busca apoyar el cambio social. Se ha encontrado que la armonía tiene un efecto irónico en el contexto de las relaciones entre personas de distintos grupos (Dixon, Tropp, Durrheim & Tredoux, 2010). Por no discutir la diferencia material y cultural existente entre ellos, la percepción de armonía preserva sus similitudes y disminuye la atención a sus desigualdades, distorsionando las expectativas de alcanzar mayor igualdad en personas de grupos desfavorecidos (Saguy, Tausch, Dovidio & Pratto, 2009). Las relaciones armoniosas también se asocian a una orientación a la movilidad individual en lugar de llevar a invertir en acciones colectivas que busquen cambios para las demás personas del propio grupo (Tausch, Saguy & Bryson, 2015). Con una percepción reducida de la brecha entre los grupos, miembros del grupo desfavorecido atribuyen la desigualdad de estatus a un mérito individual (Sengupta & Sibley, 2013), legitimando la desigualdad de causa estructural en un mayor grado (Saguy & Chernyak-Hai, 2012). Además, relaciones armoniosas entre grupos raciales desiguales conducen a una menor identificación con el grupo de pertenencia, así como aumentan las actitudes positivas hacia los grupos aventajados, reduciendo la ira por la desigualdad, un impulso importante

para actitudes colectivas hacia el cambio social (Hercus, 1999; Van Zomeren, Spears, Fischer & Leach, 2004).

El conflicto, por otro lado, es capaz de tener un rol positivo en la lucha por la igualdad. A pesar de que la confrontación puede ser un medio menos armonioso para alcanzar determinado cambio, el conflicto tiene el potencial de hacer cuestionar y movilizar, tanto a nivel personal como social. Su fuerza desafía la forma de organización tradicionalmente establecida en determinada sociedad, como sus normas y valores morales.

Un episodio de confrontación del sexismo, por ejemplo, puede ser incómodo, pero es capaz de generar un proceso de reflexión de la propia actitud o sus creencias asociadas. La confrontación es un “proceso volitivo que tiene por objetivo expresar la propia insatisfacción con el trato discriminatorio hacia una persona o grupo de personas que son responsables de participar en un evento discriminatorio” (Kaiser & Miller, 2004, p. 168). Pero, ¿por qué la confrontación moviliza tanto al confrontado?

El poder de la confrontación ha sido relacionado con la preocupación por la mantención de una imagen positiva de sí mismo. Ser confrontado (p. ej., ser considerado sexista), puede evidenciar una disonancia entre el autoconcepto (p. ej., querer ser una persona que trata a todos por igual) y el comportamiento (p. ej., tener una conducta sexista), creando una insatisfacción en el yo que gatilla mecanismos de autorregulación que vigilan y cambian la conducta (Monteith, 1993). Entre sus efectos reportados, la confrontación reduciría las respuestas sesgadas (Czopp, Monteith & Mark, 2006; Mallett & Wagner, 2011) por, al menos, siete días después de ser confrontado (Chaney & Sanchez, 2018), y aumentaría la preocupación por expresar sesgos futuramente (Parker, Monteith, MossRacusin y Van Camp, 2018). En resumen, confrontar el sexismo puede reducir su expresión como resultado de un proceso reflexivo, sorpresivo o por un cambio en las normas sociales.

Aunque tiene potencial de generar cambios positivos, la confrontación también tiene costos negativos. Uno de los efectos más reportados en los estudios de confrontación es el de generar una imagen de quejosa y grosera en la persona que confronta, empeorando su evaluación social (Czopp & Monteith, 2003). Además, también puede hacer que el individuo confrontado adopte un modo defensivo como estrategia para proteger la propia identidad de una amenaza a su imagen moral, lo que reduciría las intenciones de adoptar un comportamiento igualitario (Howell, Gaither & Ratliff, 2015; Howell et al., 2017). Asimismo, dada la disparidad de poder entre hombres y mujeres, el grupo en mejor posición jerárquica puede castigar a las «confrontadoras» despidiéndolas de sus trabajos, las leyes son capaces de proteger a los acosadores y se puede incluso usar la fuerza bruta para silenciarlas o acosarlas.

La literatura ha encontrado que las mujeres confrontan poco, manteniéndose en silencio cuando sufren algún tipo de trato discriminatorio en base al

género. Ellas experimentan miedo en la confrontación (Woodzicka & LaFrance, 2001), eligiendo el silencio por percibirlo como una opción menos riesgosa, así como la respuesta más educada (Swim & Hyers, 1999). Un estudio reciente con participantes chilenos encontró que, a pesar de que el público general evalúa positivamente a las mujeres que confrontan, personas con altos niveles de sexismo las evalúan negativamente, mostrando que la discriminación de la mujer es un factor clave en la percepción de mujeres que confrontan (Jiménez-Moya, Manzi & Castillo, 2022). Por lo tanto, el silencio no refleja la armonía ni ausencia de problemas entre hombres y mujeres; puede, en realidad, estar ocultando miedo y sumisión.

En mi investigación doctoral estudié cómo y cuándo la confrontación puede resultar en un cambio moral en el confrontado. Para ello, realicé un experimento controlado en donde algunos participantes serían confrontados (grupo experimental) y otros no confrontados por sesgos sexistas (grupo control), y una encuesta con un componente experimental donde los participantes deberían responder a preguntas sobre sus intenciones igualitarias tras haber recordado un conflicto, en el grupo experimental, o una situación armónica con una mujer, en el grupo control. Los resultados demuestran que el cambio moral hacia una mayor disposición por la igualdad tras el conflicto depende de los rasgos psicológicos del individuo confrontado. A continuación, se detallan estos factores psicológicos que inciden en el cambio producido por la confrontación, tanto basadas en mi propia investigación como en la revisión de experiencias internacionales.

El poder de la confrontación puede ser más o menos efectivo dependiendo de ciertos factores psicológicos que son relevantes para las relaciones intergrupales y el yo. Personas que tienen mayores niveles de determinados rasgos psicológicos (mencionados abajo) pueden reaccionar de manera distinta de personas que tienen menores niveles de estos. A continuación, revisaremos algunas características psicológicas que influyen en la reacción frente a la confrontación:

Autoimagen: la confrontación (p. ej., ser llamado sexista) puede evidenciar una disonancia entre el autoconcepto (p. ej., como persona igualitaria) y el comportamiento, creando una insatisfacción con el yo que conduciría al cambio por mecanismos de autorregulación (Monteith, 1993). Debido a que nos importa cómo somos percibidos, estamos dispuestos a modificar nuestro comportamiento (Tacikowski, Freiburghaus & Ehrsson, 2016).

Normas y valores: las normas igualitarias son importantes para crear disonancia. Las personas con bajos prejuicios se ven afectadas por la confrontación porque viola sus estándares personales; mientras que las personas con altos niveles de prejuicio, se alejan de las respuestas sesgadas para evitar la desaprobación pública (Czopp, Monteith & Mark, 2006). Otra investigación también encontró que los participantes

están menos dispuestos a apoyar la discriminación cuando otros participantes condenan la discriminación explícitamente, creando un ambiente cuya norma es de baja tolerancia a la discriminación (Blanchard, Crandall, Brigham & Vaughn, 1994; Monteith, Deneen & Tooman, 1996).

Orientación a la dominancia social: consiste en una tendencia a preferir las jerarquías grupales donde algunos grupos mantienen más poder que otros. Un mayor nivel de dominancia social puede evitar que las personas cambien tras la confrontación, precisamente por querer mantener la jerarquía. Se ha mostrado que los niveles de preferencia por la jerarquía varían en función del nivel educativo, la ideología política, la diferencia de poder entre grupos, etc. Sin embargo, los hombres presentan niveles más altos o iguales en comparación con las mujeres, independientemente de los factores contextuales (Sidanius, Pratto & Bobo, 1994).

Finalmente, habiendo conflicto de género, es importante seguir ciertas orientaciones basadas en hallazgos de la literatura para aprovechar su potencial transformador. En primer lugar, hay que tener claros los valores que orientan a la organización o el individuo confrontado. Los efectos de la confrontación dependen del conflicto experimentado entre los valores igualitarios que puede tener una persona y la conducta que muestra en una determinada situación (Monteith, 1993). Además, las normas de baja tolerancia a la desigualdad pueden detener la expresión discriminatoria.

Investigaciones también han encontrado que el acoso sexual en el ambiente de trabajo ocurre por haber una percepción de permisividad o de apoyo a normas híper masculinas. Siendo así, es importante identificar esta cultura institucional, así como remover barreras que impidan denuncias (Buchanan et al., 2014). Intervenciones que han utilizado videos de 20 horas de entrenamiento de género, informando acerca de la construcción social del género, ideologías y obligaciones sociales que afectan mujeres y hombres de manera diferente, también han mostrado reducción de creencias sexistas (de Lemus et al., 2014). Otras intervenciones que buscan educar de un modo no amenazante sobre formas sutiles de discriminación también se han mostrado efectivas para reducir sesgos de género (Cundiff et al., 2018).

Condenar la discriminación explícita y públicamente también es fundamental, en especial si esta condena es hecha por hombres confrontando a otros hombres (Rasinski & Czopp, 2010; Gulker, Mark & Monteith, 2013). Investigaciones han encontrado que la confrontación es más efectiva para detener la conducta sesgada cuando es hecha por una persona del mismo grupo que el confrontado, comparado a personas de grupos distintos (Blanchard, Crandall, Brigham & Vaughn, 1994; Monteith, Deneen & Tooman, 1996).

Frente a una acusación de sesgo discriminatorio hacia las mujeres, es importante tener en cuenta que estas últimas probablemente tendrán una percepción más precisa de la transgresión discriminatoria que personas del grupo

aventajado (Nelson, Adams & Salter, 2013), puesto que las evidencias indican que los puntos ciegos en la moralidad, así como los estereotipos, impedirían la percepción de las transgresiones morales por constituirse como un daño a la imagen del yo deseado (Sezer, Gino & Bazerman, 2015). Además, ciertas normas sociales aprendidas naturalizan tratos desiguales entre hombres y mujeres, y refuerzan estereotipos dañinos a ellas. Con todo esto, uno puede estar siendo injusto sin intención de hacerlo.

Por último, es importante escapar de los mecanismos de defensa que cierran el diálogo en busca de proteger una imagen positiva de sí mismos (Howell, Redford, Pogge & Ratliff, 2017). Al ser confrontado por un sesgo, es interesante buscar enganchar, más bien, con valores morales que orientan y motivan a acomodar una conducta en donde la discriminación no vuelva a ocurrir con base en el género.

Una sociedad más armónica debe estar basada en la justicia y no en la desigualdad. Es importante que, colectivamente, hagamos un compromiso con valores morales que orienten a un trato igualitario entre personas, incentivando el intercambio de individuos de grupos distintos, dando un paso más allá de los estereotipos y generalizaciones. Quizá los conflictos pueden resultar de la denuncia al trato desigual, pero un objetivo común puede llevar a una transformación social que acomode a personas de diferentes grupos de manera más igualitaria.

REFERENCIAS

- Becker, J. C., Zawadzki, M. J., & Shields, S. A. (2014). Confronting and reducing sexism: a call for research on intervention. *Journal of Social Issues*, 70(4), 603-614.
- Blanchard, F. A., Crandall, C. S., Brigham, J. C., & Vaughn, L. A. (1994). Condemning and condoning racism: a social context approach to interracial settings. *Journal of Applied Psychology*, 79(6), 993-997. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.79.6.993>
- Buchanan, N. T., Settles, I. H., Hall, A. T., & O'Connor, R. C. (2014). A review of organizational strategies for reducing sexual harassment: insights from the U.S. military. *Journal of Social Issues*, 70(4), 687-702.
- Chaney, K. E., & Sánchez, D. T. (2018). The endurance of interpersonal confrontations as a prejudice reduction strategy. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 44(3), 418-429. <https://doi.org/10.1177/0146167217741344>
- Cundiff, J. L., Danube, C. L., Zawadzki, M. J., & Shields, S. A. (2018). Testing an intervention for recognizing and reporting subtle gender bias in promotion and tenure decisions. *The Journal of Higher Education*, 89(5), 611-636. <https://doi.org/10.1080/00221546.2018.1437665>

- Czopp, A. M., & Monteith, M. J. (2003). Confronting prejudice (literally): reactions to confrontations of racial and gender bias. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 29(4), 532-544. <https://doi.org/10.1177/0146167202250923>
- Czopp, A. M., Monteith, M. J., & Mark, A. Y. (2006). Standing up for a change: reducing bias through interpersonal confrontation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 784-803. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.784>
- De Lemus, S., Navarro, L., Megías, J. L., Velásquez, M., & Ryan, E. (2014). From sex to gender: a university intervention to reduce sexism in Argentina, Spain, and El Salvador. *Journal of Social Issues*, 70, 741-762.
- Dixon, J., Tropp, L. R., Durrheim, K., & Tredoux, C. (2010). "Let them eat harmony": prejudice-reduction strategies and attitudes of historically disadvantaged groups. *Current Directions in Psychological Science*, 19(2), 76-80. <https://doi.org/10.1177/0963721410363366>
- Gulker, J. E., Mark, A. Y., & Monteith, M. J. (2013). Confronting prejudice: the who, what, and why of confrontation effectiveness. *Social Influence*, 8(4), 280-293. <https://doi.org/10.1080/15534510.2012.736879>
- Hercus, C. (1999). Identity, emotion, and feminist collective action. *Gender & Society*, 13(1), 34-55. <https://doi.org/10.1177/089124399013001003>
- Howell, J. L., Gaither, S. E., & Ratliff, K. A. (2015). Caught in the middle: defensive responses to IAT feedback among whites, blacks, and biracial black/whites. *Social Psychological and Personality Science*, 6(4), 373-381. <https://doi.org/10.1177/1948550614561127>
- Howell, J., Redford, L., Pogge, G., & Ratliff, K. (2017). Defensive responding to IAT feedback. *Social Cognition*, 35, 520-562. <https://doi.org/10.1521/soco.2017.35.5.520>
- Jiménez-Moya, G., Manzi, J. & Castillo, F. (2022) Confronting or avoiding confrontation? The role of sexism in evaluating women who avoid confronting discrimination. *International Journal of Social Psychology*, 37(1), 93-118. <https://doi.org/10.1080/02134748.2021.2001274>
- Kaiser, C. R., & Miller, C. T. (2004). A stress and coping perspective on confronting sexism. *Psychology of Women Quarterly*, 28(2), 168-178. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2004.00133.x>
- Mallett, R. K., & Wagner, D. E. (2011). The unexpectedly positive consequences of confronting sexism. *Journal of Experimental Social Psychology*, 47(1), 215-220. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.10.001>
- Monteith, M. J. (1993). Self-regulation of prejudiced responses: implications for progress in prejudice-reduction efforts. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(3), 469-485.
- Monteith, M. J., Deneen, N. E., & Tooman, G. D. (1996). The effect of social norm activation on the expression of opinions concerning gay men and blacks. *Basic and Applied Social Psychology*, 18(3), 267-288. https://doi.org/10.1207/s15324834basps1803_2

- Nelson, J. C., Adams, G., & Salter, P. S. (2013). The Marley hypothesis: racism denial reflects ignorance of history. *Psychological Science*, 24(2), 213-218. <https://doi.org/10.1177/0956797612451466>
- OECD (2021). *Igualdad de género en Chile: hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado*. París: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/c7105c4d-es>.
- Parker, L. R., Monteith, M. J., Moss-Racusin, C. A., & Van Camp, A. R. (2018). Promoting concern about gender bias with evidence-based confrontation. *Journal of Experimental Social Psychology*, 74, 8-23. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.07.009>
- Rasinski, H. M., & Czopp, A. M. (2010). The effect of target status on witnesses' reactions to confrontations of bias. *Basic and Applied Social Psychology*, 32(1), 8-16. <https://doi.org/10.1080/01973530903539754>
- Saguy, T., & Chernyak-Hai, L. (2012). Intergroup contact can undermine disadvantaged group members' attributions to discrimination. *Journal of Experimental Social Psychology*, 48(3), 714-720. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.01.003>
- Saguy, T., Tausch, N., Dovidio, J.F., & Pratto, F. (2009). The irony of harmony: intergroup contact can produce false expectations for equality. *Psychological Science*, 20, 114-21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02261.x>
- Sengupta, N. K., & Sibley, C. G. (2013). Perpetuating one's own disadvantage: intergroup contact enables the ideological legitimization of inequality. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 39(11), 1391-1403.
- Sezer, O., Gino, F., & Bazerman, M. H. (2015). Ethical blind spots: explaining unintentional unethical behavior. *Current Opinion in Psychology*, 6, 77-81. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.03.030>
- Sidanius, J., Pratto, F., & Bobo, L. (1994). Social dominance orientation and the political psychology of gender: a case of invariance? *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(6), 998-1011. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.6.998>
- Tacikowski, P., Freiburghaus, T., & Ehrsson, H. H. (2016). Goal-directed processing of self-relevant information is associated with less cognitive interference than the processing of information about other people. *Journal of Experimental Social Psychology*, 68, 93-100. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.05.007>
- Tausch, N., Saguy, T., & Bryson, J. (2015). How does intergroup contact affect social change?: examining collective action and individual mobility intentions among members of a disadvantaged groups. *Journal of Social Issue*, 71, 536-553. <https://doi.org/10.1111/josi.12127>
- Van Zomeren, M., Spears, R., Fischer, A. H., & Leach, C. W. (2004). Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy. *Journal of Personality and Social Psychology*, 87(5), 649-664. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.5.649>

SECCIÓN 2 EDUCACIÓN

Editora: Gloria Jiménez-Moya

CAPÍTULO 4

SEXISMO EN LAS AULAS: NORMAS SOCIALES Y MECANISMOS QUE REPRODUCEN LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO¹

Gloria Jiménez-Moya, Sarah Paz, Marais del Río y Camila Contreras

LA DESIGUALDAD de género hace referencia a la asimetría de poder que existe entre hombres y mujeres en diversas esferas sociales. Esta diferencia ha generado históricamente consecuencias negativas para las mujeres en numerosos ámbitos, como el médico, el legal, el político, el laboral, y también en el contexto educativo (p. ej., Criado, 2020; Reyes-Housholder, 2023). Estas consecuencias limitan el desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres, y generan sociedades desiguales y discriminatorias. A pesar del cambio cultural que se está viviendo alrededor del mundo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, el prejuicio hacia estas últimas sigue actualmente muy presente. Este capítulo repasa algunos mecanismos que contribuyen a mantener la desigualdad en un contexto aparentemente igualitario como el actual. En concreto, este trabajo se centra en el contexto escolar, tan relevante para el desarrollo de niños y niñas, y en cómo diversos procesos siguen perpetuando la desigualdad en las aulas.

La desigualdad de género no puede entenderse sin comprender el sistema sexo-género (ver Miyares, 2021). El sexo constituye el conjunto de características físicas, anatómicas y fisiológicas con las que las personas nacen, y que definen a los seres humanos como hembras o varones (ver Lehtonen & Parker, 2014). Según la biología, el sexo es un aspecto biológico cuya funcionalidad consiste en conocer el rol de cada persona en la reproducción, en el caso de que decida reproducirse. Durante siglos, esta diferencia sexual se utilizó para establecer y legitimar diferencias sociales entre hombres y mujeres. Sin embargo, la evidencia empírica actual muestra que las diferencias entre ambos no tienen orígenes biológicos, sino sociales (p. ej., Fine, 2017; Rippon, 2020). El género es una construcción social que hace referencia a las creencias, actitudes, roles, representaciones, valores, gustos, prácticas, etc., que se asignan a las personas en función de su sexo. Por lo tanto, el género puede ser entendido como la construcción social e histórica que se realiza

¹ Este trabajo fue apoyado por el proyecto ANID/FONDECYT/11191148 y por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

sobre la base de la diferenciación sexual, y que limita el libre desarrollo de las personas (ver Ferrer, 2017). Se espera que las niñas vestan de rosa y sean delicadas, mientras que los niños vestan de azul y sean aventureros. En este sentido, en palabras de Simone de Beauvoir (1987), “no se nace mujer: se llega a serlo” a través de la interiorización de este rol femenino que la sociedad crea e impone. A pesar de que en los últimos años el movimiento feminista y otros aspectos político-sociales han contribuido a frenar las imposiciones del género, estos procesos nos han acompañado durante siglos, son interiorizados desde la primera infancia (p. ej., Bian et al., 2017), y son automáticos y muy resistentes al cambio (Greenwald & Banaji, 1995). Por ello, paradójicamente, a pesar de que estamos ante un momento de cambio social global, las creencias tradicionales siguen siendo sostenidas y apoyadas por muchas personas (Jiménez-Moya et al., 2022).

En este contexto en el que la desigualdad histórica convive con el cambio social, la escuela emerge como un lugar privilegiado para comenzar a erradicar las creencias sexistas y prejuiciosas interiorizadas desde la primera infancia. La escuela es un espacio de protección ante determinadas influencias negativas (ver Varela et al., 2020), donde se construye la identidad moral de niños y niñas (Echavarría, 2003) y se forjan posturas frente a diversos problemas sociales (ver Cumsille & Martínez, 2015). Por ello, es necesario detectar, comprender y analizar los mecanismos que mantienen la desigualdad en el contexto escolar, con el fin de generar intervenciones que trabajen dichos procesos para construir nuevas normas sociales que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres dentro de las aulas.

LAS NORMAS SOCIALES: LO QUE ESTÁ BIEN, LO QUE ESTÁ MAL

Las normas sociales describen las creencias, actitudes y comportamientos que son aprobados y aceptados en un contexto específico por un determinado grupo social (ver Miller & Prentice, 1996). Así, las normas entregan información sobre cómo es adecuado comportarse en numerosas situaciones sociales (p. ej., Gerber et al., 2021; Schultz et al., 2007). Por ejemplo, en distintos lugares del mundo, antes de la pandemia de Covid-19, era aceptado y común saludarse con dos besos. Sin embargo, tras la pandemia se instaló la norma de saludar utilizando otros códigos y conductas. Las normas tienen un gran impacto en las personas (p. ej., Prentice & Paluck, 2020), quienes están altamente motivadas para seguir aquello que dicta el grupo (p. ej., Asch, 1952) ya que, si no lo hacen, pueden ser castigadas socialmente por los demás miembros (Marques & Páez, 1994; Kutlaca et al., 2020).

Al igual que existen normas sobre múltiples aspectos sociales, existen unas sobre género. Estas establecen qué es lo deseable y correcto en las relaciones

entre hombres y mujeres, cómo deben comportarse unos y otras, y cuál es el rol que desempeñan en la sociedad, entre otros aspectos. Estas normas son, a menudo, implícitas y automáticas, es decir, las personas no son conscientes de ellas de forma explícita, sino que las interiorizan y aplican de forma mecánica e irreflexiva (Greenwald & Banaji, 1995).

Las normas sociales de género afectan las actitudes de los y las adolescentes. Cuando reportan que sus pares muestran normas de género igualitarias, los y las adolescentes presentan unos niveles más bajos de sexismo y una menor justificación de la violencia machista (Jiménez-Moya et al., 2022), es decir, el percibir que los pares son igualitarios se asocia a unas creencias también más igualitarias por parte de los y las adolescentes. Así, la norma social que observan en su grupo se relaciona con los propios niveles de prejuicio. Además, el no cumplir las normas de género en el contexto educativo tiene consecuencias negativas para los y las adolescentes. En colegios chilenos en los que se muestran altos índices de participación en actividades deportivas —actividad percibida como típicamente masculina—, tanto las niñas que practican deporte como los niños que no lo hacen, son más victimizados que sus pares que sí cumplen la norma de género, esto es, aquellos niños que sí practican deporte y las niñas que no lo hacen (Berger et al., 2022). De esta forma, quienes rompen la norma son castigados socialmente a través de la victimización que sufren por parte de sus pares.

Al margen de las normas del grupo de pares, las normas de otros grupos sociales pueden ser relevantes, como las de la familia, la escuela o las de la sociedad en general.

Las normas de género se hacen concretas en lo cotidiano a través de múltiples mecanismos. Así, en el contexto escolar, se expresan a través de los estereotipos de género, del sexismo, de las creencias biologicistas y de procesos psico-sociales como la amenaza del estereotipo o la profecía autocumplida.

ELLAS CUIDAN Y ELLOS LUCHAN:

LAS CONSECUENCIAS DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Los estereotipos son las creencias compartidas acerca de los atributos que poseen los miembros de un grupo, por lo que pueden entenderse como normas sociales que definen aquello que es válido y esperable. Los estereotipos de género, por lo tanto, hacen referencia a las características que se asignan a hombres y mujeres. Se atribuyen rasgos como la competencia, la seguridad y el liderazgo a los hombres; mientras que se define a las mujeres como cálidas, buenas cuidadoras y agradables (Ellemers, 2018). Los estereotipos guían lo que esperamos de hombres y mujeres (ver Guerra et al., 2021) y, a pesar de parecer ideas anticuadas, la sociedad chilena sigue presentando estas ideas;

incluso aquellas personas que son más igualitarias muestran altos niveles de estereotipos de género tradicionales (Jiménez-Moya et al., 2022).

Los estereotipos se extienden a las habilidades académicas —por ejemplo, “las niñas son mejores en lenguaje y los niños en ciencias”—, por lo que tienen consecuencias en el desarrollo académico e intelectual de niños y niñas. Los propios estereotipos de los y las estudiantes afectan sus elecciones académicas. Así, las niñas de muy corta edad que sostienen la creencia de que los hombres son más inteligentes que las mujeres, evitan realizar actividades dirigidas a personas muy inteligentes (Bian et al., 2017). Del mismo modo, el concebir las habilidades para la lectura como algo típicamente femenino, puede afectar al autoconcepto que los estudiantes tienen sobre sí mismos en este ámbito (ver Espinoza & Strasser, 2020). En resumen, las aspiraciones académicas de los y las jóvenes se ven impactadas por sus propios estereotipos de género (Cvencek et al., 2011).

Por otro lado, el apoyo a los estereotipos de género a nivel macroestructural también influye en los resultados académicos de los y las jóvenes. En las culturas en las que se cree en mayor medida que la ciencia es un área masculina, el logro académico de las mujeres en ciencias y matemáticas es menor que el de sus compañeros hombres (Nosek et al., 2009). Estos resultados muestran que las creencias estereotípicas presentes en la sociedad afectan las capacidades académicas de las mujeres. Por lo tanto, los estereotipos impactan el rendimiento y afectan los intereses de los y las estudiantes. Esto es especialmente pernicioso para las mujeres, quienes tienden a enfocarse en carreras y ámbitos académicos que están menos valorados socialmente (p. ej., Makarova et al., 2019; Ministerio de Educación de Chile, 2017).

SOMOS DIFERENTES Y HACEMOS COSAS DIFERENTES: EL EFECTO DEL SEXISMO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

Otra de las normas sociales de género que mantiene la desigualdad en el contexto educativo es el sexismo. El prejuicio consiste en juzgar y reaccionar ante una persona en función del grupo social al que pertenece, sin tener en cuenta sus características individuales. El sexismo es un tipo de prejuicio que juzga y evalúa a las personas en función de su sexo, asignando distintos roles sociales a hombres y a mujeres, sin tener en cuenta sus características individuales. De esa definición se entiende que el sexismo puede dirigirse a ambos sexos, hombres y mujeres. No obstante, dado su anclaje en las relaciones de poder, se ha ejercido fundamentalmente contra las mujeres (Becker & Sibley, 2016) como grupo desaventajado en comparación con los hombres en todas las sociedades del mundo (Foro Económico Mundial, 2021).

El sexismo implica una actitud negativa fundamentalmente hacia las mujeres que desafían los roles tradicionales de género, ya que estas son percibidas

por las personas sexistas como manipuladoras e inferiores al hombre (Glick & Fiske, 1996). Sin embargo, en ocasiones, el sexismo se expresa de forma tan encubierta y sutil que puede parecer que muestra una actitud positiva hacia las mujeres que sí cumplen con los roles tradicionales. Este es el llamado sexismo benévolo, que describe a las mujeres como personas frágiles y puras, que deben ser protegidas por los hombres (Glick & Fiske, 1996). Este tipo de sexismo puede pasar más desapercibido, precisamente, porque se esconde tras un tono afectivo positivo, pero limita y estereotipa los roles de las mujeres (y los hombres) en la sociedad, y castiga a las que no los cumplen. Así, las personas que presentan altos niveles de sexismo benévolo perciben a las mujeres que se adaptan al molde tradicional de forma positiva, y asumen que tienen que ser cuidadas y respetadas.

En el contexto educativo, el sexismo tiene efectos perniciosos en múltiples dimensiones a lo largo del desarrollo académico. Así, cuando los estudiantes universitarios piensan que otros estudiantes tienen creencias sexistas sobre la violación —que la justifican, trivializan o niegan—, reportan en mayor medida creencias que apoyan estos mitos sobre la violación (Bohner et al., 2006). Estos resultados muestran la influencia que llega a tener el sexismo transmitido en el contexto educativo, ya que el nivel de prejuicio de los compañeros afecta a las creencias propias, lo que indica que el sexismo se establece como una norma social en el ámbito universitario.

El sexismo por parte de los y las docentes también está presente en el contexto educativo chileno, por ejemplo, en la educación parvularia existe una naturalización de las prácticas pedagógicas que reproducen el sexismo (Azúa et al., 2019). En el contexto universitario, los y las docentes que presentan estereotipos de género en mayor medida son quienes muestran más prácticas pedagógicas sexistas, como no promover la participación igualitaria de estudiantes hombres y mujeres, o requerir a estudiantes mujeres para labores administrativas y a hombres para tareas relacionadas con el pensamiento crítico, entre otros aspectos. Por otro lado, los hombres docentes presentan más prácticas sexistas que las docentes mujeres (Espinoza & Albornoz, 2022).

En resumen, el sexismo está presente en el contexto educativo y contribuye a ampliar las brechas entre hombres y mujeres.

CREENCIAS BIOLOGICISTAS: CEREBROS ROSAS Y AZULES

Durante décadas, se estableció y defendió la idea de que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres explicaban las diferencias sociales entre ambos sexos. Se comenzó buscando distinciones en el tamaño de ciertas áreas cerebrales, para después pasar a estudiar el efecto de las hormonas masculinas y femeninas en el cerebro y, en consecuencia, en las aptitudes de hombres y

mujeres. Sin embargo, desde la neurociencia se ha mostrado que los estudios en este ámbito no presentan datos concluyentes, y se ha desechado la idea de que exista un cerebro de hombre y de mujer que permita a cada grupo desarrollar diversas habilidades (Rippon, 2020). Estas ideas obsoletas asumían que las estructuras y las funciones del cerebro eran innatas y fijas, por lo que se esperaba que no se modificaran en el curso de la vida. Pero el cerebro es plástico, es decir, se moldea y cambia en función de las experiencias que cada persona experimenta (p. ej., Lindenberger & Lövdén, 2019). Si niños y niñas son expuestos a distintas tareas y desafíos, entrenarán y, en consecuencia, desarrollarán aptitudes distintas, las necesarias para superar estas tareas y desafíos. Por lo tanto, las diferencias no surgen de forma innata, sino porque sus cerebros se adaptan, responden y aprenden de las demandas del contexto (ver Fine, 2017).

A pesar de lo señalado, las ideas biologicistas todavía siguen instauradas en la sociedad en general, y en el contexto educativo en particular, estableciendo que hombres y mujeres presentan distintas aptitudes académicas, aunque la evidencia indique que niños y niñas presentan las mismas habilidades (p. ej., Hyde & Linn, 2006). Así, diversos estudios muestran que los y las docentes chilenas creen que el aprendizaje científico y el rendimiento académico son aspectos innatos que dependen del sexo del estudiante (Camacho, 2017). Estas creencias basadas en el determinismo genético predicen las recomendaciones que los y las docentes hacen a sus estudiantes: a los hombres les aconsejan que estudien ciencias y matemáticas, y a las mujeres, que estudien aspectos relacionados con el lenguaje (Nürnberg et al., 2015). Esto se traduce en que los niños, por un lado, desarrollan mayores habilidades, motivación y elección hacia áreas matemáticas, científicas y deportivas, mientras que las niñas lo hacen hacia áreas lectoras o sociales (Meece et al., 2006; Nürnberg et al., 2015), lo que limita las posibilidades de desarrollo del estudiantado y reproduce los estereotipos de género. Desde edades muy tempranas, las niñas piensan que los hombres —y no ellas— son “brillantes” y, en consonancia con esto, las universitarias reportan que su esfuerzo es más relevante para conseguir logros académicos, en comparación a los universitarios (Espinoza & Albornoz, 2022).

En síntesis, aunque desde la ciencia se cuestionan las concepciones biologicistas sobre las habilidades y aptitudes de niños y niñas, estas creencias siguen siendo una norma social de género que perpetúa la desigualdad y genera efectos negativos para los y las estudiantes.

EL IMPACTO DE LAS CREENCIAS DOCENTES: LA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

Los investigadores Rosenthal y Jacobson (1968) descubrieron que las expectativas que los y las docentes tenían sobre cuán inteligentes eran sus estudiantes, predecían sus niveles de cociente intelectual a final del curso. En este estudio, el profesorado fue informado de las capacidades intelectuales de sus estudiantes a partir de los resultados obtenidos en un presunto test de inteligencia que les fue administrado. Pero este test realmente no medía los niveles de inteligencia, y los niños y niñas que, supuestamente, eran más inteligentes, fueron seleccionados al azar. Estos estudiantes que los docentes creían más inteligentes terminaron por desarrollar más sus capacidades intelectuales. Los y las profesoras se comportaron, sin ser conscientes de ello, de forma distinta con estos estudiantes —por ejemplo, aumentaron sus exigencias—, lo que provocó que dichos estudiantes, que no eran diferentes a los demás, desarrollaran en mayor medida su cociente intelectual y acabaran siendo más inteligentes. Este efecto se conoce como la profecía autocumplida, la cual establece que las expectativas que se tienen sobre una persona pueden acabar convirtiéndose en realidad. Lo que los demás esperan de alguien, influye en la forma en la que se comportan con esa persona, y esto hace que dicha persona acabe comportándose de manera coherente con las expectativas que se tienen hacia ella.

En Chile, los y las docentes de matemáticas de educación básica tienen unas menores expectativas del logro académico de sus estudiantes mujeres en comparación a los estudiantes hombres (Mizala et al., 2015). Estas creencias pueden influir en cómo interactúan con sus estudiantes en clase, en el tipo de preguntas que les hacen a niños y niñas, en las exigencias que les plantean, etc. Es decir, sus expectativas impactan en cómo actúan, a través de procesos sutiles y automáticos que son difíciles de detectar. En un estudio implementado en Chile, se mostró que tanto los profesores como las profesoras de matemáticas entregan una mayor retroalimentación a estudiantes hombres y les hacen más preguntas que implican procesos cognitivos complejos para ser respondidas (Espinoza & Taut, 2016). Es decir, en base a sus creencias estereotípicas sobre el hecho de que los hombres tienen más habilidades para las matemáticas que las mujeres, los y las docentes desafían, exigen y retroalimentan en mayor medida a sus estudiantes hombres. Estas conductas, sin duda, impactan en el desarrollo de los y las estudiantes, de forma que aquellos de los que se espera que tengan mayores capacidades matemáticas, las acaban teniendo, a pesar de que estas diferencias no estuvieran presentes previamente (Comunidad Mujer, 2016; MacPhee et al., 2013).

Lo que esperan los y las docentes de las habilidades académicas de niños y niñas no es lo único que afecta a su desarrollo. Las expectativas de padres

y madres, o de la sociedad en general, también tienen un efecto en los más pequeños. Este impacto se da a través de comentarios sutiles y conductas que pueden pasar desapercibidas y no ser malintencionadas, pero que mantienen la desigualdad de género en el contexto educativo. Así, lo que se espera de cada estudiante en función de su sexo constituye una norma social que describe aquello que es lógico y válido esperar tanto de una niña como de un niño.

LA BARRERA DE LA AMENAZA DEL ESTEREOTIPO

Los grupos sociales, en general, pueden conocer el estereotipo que se tiene sobre ellos: las características que las demás personas les atribuyen, cómo son vistos por el resto de la sociedad. Así, los grupos desaventajados o discriminados también suelen estar al tanto de cómo la sociedad los define y de lo que se espera de ellos. La amenaza del estereotipo es un fenómeno que se da cuando una persona es consciente del estereotipo negativo que se atribuye a su grupo, y quiere intentar contrarrestarlo llevando a cabo una buena ejecución, pero no sabe si podrá conseguirlo. En esta situación, se busca demostrar a los demás que el propio grupo no es tan negativo como cree los demás, lo que puede generar cierta presión, ansiedad y malestar que, paradójicamente, contribuyen a que la persona lleve a cabo una mala ejecución que acabe confirmando el estereotipo negativo de su grupo. Esta mala actuación no indica que la persona no tuviera la capacidad para hacerlo bien, sino que es causada por la ansiedad que provoca el querer demostrar que el propio grupo también posee características positivas, pero no estar seguro de ser capaz de hacerlo.

Numerosos estudios muestran cómo el bajo rendimiento académico y la mala ejecución de las niñas en tareas típicamente masculinas se debe, precisamente, a la amenaza del estereotipo que experimentan. Así, cuando se activa el estereotipo femenino —por ejemplo, cuando se les pide a las niñas que piensen o lean sobre mujeres estereotípicas, se les hace saliente su identidad como mujer o, incluso, cuando son expuestas a rostros de hombres— las mujeres, adolescentes y niñas disminuyen su desempeño en matemáticas. En estas circunstancias, las mujeres reportan pensamientos más negativos sobre su desempeño —en comparación con las que no experimentan amenaza del estereotipo (Cadinu et al., 2005)—, aumenta su activación fisiológica (Croizet et al., 2004) y se activan áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento de aspectos socioemocionales (Krendl et al., 2008); es decir, cuando se hace saliente la identidad femenina de alguna forma, se activa el estereotipo negativo, y cuando las mujeres intentan demostrar que dicho estereotipo no es cierto, experimentan pensamientos y sentimientos negativos, lo que les hace disminuir su desempeño y confirmar el estereotipo que querían erradicar.

Dada la facilidad para activar la categoría grupal “mujer”, la amenaza del estereotipo es un fenómeno que puede surgir de forma común en el contexto educativo y en otros ámbitos, aun cuando no se hace referencia a las diferencias en rendimiento académicos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el visualizar comerciales televisivos estereotípicos —donde una mujer se muestra alegre por utilizar un producto de belleza— provoca que, posteriormente, las mujeres eviten responder a preguntas sobre matemáticas y que muestren menos interés en áreas educativas tradicionalmente masculinas (Davies et al., 2002). Dado que en las sociedades actuales las niñas aún siguen expuestas a mensajes estereotípicos, esto puede estar contribuyendo a la brecha entre niños y niñas en diversos ámbitos, como las matemáticas y las ciencias.

Algunos factores pueden contrarrestar el efecto negativo de la amenaza del estereotipo. Por ejemplo, cuando las mujeres presentan una alta capacidad de autocontrol, estos efectos desaparecen al realizar una tarea de matemáticas, (Bertrams et al., 2022). Además, las niñas cuyas madres —pero no padres— rechazan los estereotipos de género sobre las matemáticas, no ven afectado su desempeño en esta área debido a la amenaza del estereotipo (Tomasetto et al., 2011).

En resumen, el estereotipo femenino como norma social no solo perjudica de forma directa el rendimiento de las mujeres, sino también de forma indirecta cuando estas intentan contrarrestar dicho estereotipo negativo. Curiosamente, literatura reciente muestra que los hombres no reducen su desempeño en tareas típicamente femeninas —por ejemplo, tareas verbales— cuando se activa el estereotipo masculino (Chaffee et al., 2020). Es decir, parece ser que la amenaza del estereotipo no afecta de forma negativa a los hombres, aunque sería necesaria más investigación para elaborar conclusiones.

RECOMENDACIONES

Para generar igualdad entre hombres y mujeres en el contexto educativo y en otros ámbitos, es imprescindible construir normas sociales de género que la validen y apoyen. Las normas sociales que vienen de “arriba-abajo”, es decir, las normas legales o las leyes, son necesarias, pero la evidencia muestra que no son suficientes para cambiar la estructura social. Por ejemplo, aunque en Chile es posible legalmente que los padres gocen del periodo postnatal tras tener un hijo/a, solo el 0.2% de ellos lo hace (Superintendencia de Seguridad Social, 2016). De esa manera, a pesar de existir una norma formal que permite que los hombres puedan cuidar de los y las hijas, el rol social y las expectativas que se tienen sobre lo que un hombre debe o no hacer, siguen anclados en los estereotipos tradicionales de género. Entonces, es fundamental generar nuevas normas sociales de género de “abajo-arriba” en el contexto cotidiano, en

las relaciones que se establecen día a día entre hombres y mujeres, así como también erradicar las formas en las que las normas sexistas se expresan en el ámbito educativo, como los estereotipos, el sexismo y las creencias biologicistas, entre otros aspectos.

Para cambiar lo que significa e implica ser hombre o mujer, es elemental, en primer lugar, ser conscientes y conocer los propios sesgos y normas sexistas que cada persona presenta. Estas creencias están sumamente interiorizadas y son automáticas, por lo que es difícil reconocerlas. Por ello, es importante una formación con perspectiva de género dentro de las instituciones educativas (Fundación Niñas Valientes, 2023) que contribuya a aumentar la conciencia sobre los sesgos sexistas automáticos que surgen en ese escenario y sobre las consecuencias negativas que tienen para el desarrollo de las niñas y adolescentes, y también de los niños. Este es el primer paso para poder generar nuevas normas sociales y estándares sobre cómo tienen que ser las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Paralelamente, son necesarios programas de intervención que visibilicen las normas sociales sexistas entre los y las estudiantes. Las normas que fomentan la desigualdad de género están presentes entre los y las jóvenes, en ocasiones de forma sutil y simbólica. Es vital poder formarlos en detectarlas, en entender cómo se perpetúan, y en construir nuevas normas que validen y aprueben entre los y las adolescentes que el ser mujer u hombre no se asocia a determinados rasgos, características, gustos o inclinaciones, sino que cada persona debería ser libre para elegir cómo quiere ser y cuáles son sus intereses y motivaciones académicas.

REFERENCIAS

- Asch, S. E. (1952). *Social psychology*. Nueva York: Prentice-Hall. <https://doi.org/10.1037/10025-000>
- Azúa, X., Lillo, D., & Saavedra, P. (2019). El desafío de una educación no sexista en la formación inicial: prácticas docentes de educadoras de párvulo en escuelas públicas chilenas. *Revista Calidad en la Educación*, (50), 40-82. <https://dx.doi.org/10.31619/caledu.n50.721>
- Becker, J. C., & Sibley, C. G. (2016). Sexism. En T. D. Nelson (Ed.). *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination* (p. 315-336). Nueva York: Psychology Press.
- Berger, C., Brotfeld, C., & Espelage, D. L. (2022). Extracurricular activities and peer relational victimization: role of gender and school social norms. *Journal of School Violence*, 20(1), 611-626. <https://doi.org/10.1080/15388220.2022.2026226>
- Bertrams, A., Lindner, C., Muntoni, F., & Retelsdorf, J. (2022). Self-control capacity moderates the effect of stereotype threat on female university

- students' worry during a math performance situation. *Frontiers in Psychology*, 13:794896. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.794896>
- Bian, L., Leslie, S. J., & Cimpian, A. (2017). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests. *Science*, 355(6323), 389-391. <https://doi.org/10.1126/science.aah6524>
- Bohner, G., Siebler, F., & Schmelcher, J. (2006). Social norms and the likelihood of raping: perceived rape myth acceptance of others affects men's rape proclivity. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32, 286-297. <https://doi.org/pucdechile.idm.oclc.org/10.1177/0146167205280912>
- Cadinu, M., Maass, A., Rosabianca, A., & Kiesner, J. (2005). Why do women underperform under stereotype threat? Evidence for the role of negative thinking. *Psychological Science*, 16(7), 572-578. <https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.01577.x>
- Camacho, J. (2017). Identificación y caracterización de las creencias de docentes hombres y mujeres acerca de la relación ciencia-género en la educación científica. *Estudios Pedagógicos*, 43(3), 63-81. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000300004>
- Chaffee, K. E., Lou, N. M., & Noels, K. A. (2020). Does stereotype threat affect men in language domains? *Frontiers in Psychology*, 11, article 1302. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01302>
- ComunidadMujer (2016). Informe GET. Género, educación y trabajo: la brecha persistente. Primer estudio sobre la desigualdad de género en el ciclo de vida. Una revisión de los últimos 25 años. Santiago de Chile.
- Criado Pérez, C. (2020). *La mujer invisible*. Madrid: Planeta.
- Croizet, J. C., Despres, G., Gauzins, M., Huguet, P., Leyens, J., & Moet, A. (2004). Stereotype threat undermines intellectual performance by triggering a disruptive mental load. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 30, 721-731. <https://doi.org/10.1177/0146167204263961>
- Cumsille, P., & Martínez, M. L. (2015). La escuela como contexto de socialización política: influencias colectivas e individuales. En Cox, C. & Castillo, J. C. (Eds.). *Aprendizaje de la ciudadanía: contextos, experiencias y resultados* (p. 431-457). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica.
- Cvencek, D., Meltzoff, A. N., & Greenwald, A. G. (2011). Math-gender stereotypes in elementary school children. *Child Development*, 82(3), 766-779. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01529.x>
- Davies, P. G., Spencer, S. J., Quinn, D. M., & Gerhardstein, R. (2002). Consuming images: how television commercials that elicit stereotype threat can restrain women academically and professionally. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(12), 1615-1628. <https://doi.org/10.1177/014616702237644>
- De Beauvoir, S. (1987). *El segundo sexo*. Buenos Aires: Siglo XX.
- Echavarría Grajales, C. V. (2003). La escuela: un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 1(2), 15-43.

- Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. *Annual Review of Psychology*, 69(1), 275-298. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719>
- Espinoza, A. M., & Alborno, N. (2022). Sexismo en educación superior: ¿cómo se reproduce la inequidad de género en el contexto universitario? *Psyke*. <https://doi.org/10.7764/psykhe.2021.35613>
- Espinoza, A. M., & Strasser, K. (2020). Is reading a feminine domain? The role of gender identity and stereotypes in reading motivation in Chile. *Social Psychology of Education* 23, 861-890. <https://doi.org/10.1007/s11218-020-09571-1>
- Espinoza, A. M., & Taut, S. (2016). El rol del género en las interacciones pedagógicas de aulas de matemática chilenas. *Psyke*, 25(2), 1-18. <https://dx.doi.org/10.7764/psykhe.25.2.858>
- Ferrer, V. (2017). *Feminismo y psicología social*. Madrid: Grupo5.
- Fine, C. (2017). *Testosterone rex: unmaking the myths of our gendered minds*. Londres: Icon Books.
- Foro Económico Mundial (2021) *Global Gender Gap Report 2021*.
- Fundación Niñas Valientes (2023). Educación No Sexista (ENS): una propuesta de transformación para las escuelas. En *Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Gerber, M. M., Cuadrado, C., Figueiredo, A., Crispi, F., Jiménez-Moya, G. & Andrade, V. (2021). Taking care of each other: how can we increase compliance with personal protective measures during the Covid-19 pandemic in Chile? *Political Psychology*, 42, 863-880. <https://doi.org/10.1111/pops.12770>
- Glick, P. & Fiske, S.T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: differentiating hostile and benevolent sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3), 491-512. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491>
- Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. *Psychological Review*, 102(1), 4-27. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.102.1.4>
- Guerra, E., Bernotat, J., Carvacho, H., & Böhner, G. (2021). Ladies first: gender stereotypes drive anticipatory eye-movements during incremental sentence interpretation. *Frontiers in Psychology*, 12, 589429. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.589429>
- Hyde, J. S., & Linn, M. C. (2006). Gender similarities in mathematics and science. *Science*, 314(5799), 599-600. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1132154>
- Jiménez-Moya, G., Carvacho, H., Álvarez, B., Contreras, C., & González, R. (2022). Is support for feminism enough for change? How sexism and gender stereotypes might hinder gender justice. *Frontiers in Psychology*, 13:912941. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912941>
- Jiménez-Moya, G., Contreras, C., del Río, M., & Paz, S. (2022). ¿Seguir al colegio o a los pares?: el efecto de las normas sociales en las actitudes hacia

- la desigualdad de género. *Revista Calidad en la Educación*, 57, 44-56. <http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n57.1223>
- Krendl, A. C., Richeson, J. A., Kelley, W. M., & Heatherton, T. F. (2008). The negative consequences of threat: a functional magnetic resonance imaging investigation of the neural mechanisms underlying women's underperformance in math. *Psychological Science*, 19(2), 168-175. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02063.x>
- Kutlaca, M., Becker, J., & Radke, H. (2020). A hero for the outgroup, a black sheep for the ingroup: societal perceptions of those who confront discrimination. *Journal of Experimental Social Psychology*, 88, 103832. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103832>
- Lehtonen, J., & Parker, G. A. (2014). Gamete competition, gamete limitation, and the evolution of the two sexes. *Molecular Human Reproduction*, 20(12), 1161-1168. <https://doi.org/10.1093/molehr/gau068>
- Lindenberger, U., & Lövdén, M. (2019). Brain plasticity in human lifespan development: the Exploration-Selection-Refinement Model. *Annual Review of Developmental Psychology*, 1, 197-222. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121318-085229>
- MacPhee, D., Farro, S., & Canetto, S. S. (2013). Academic self-efficacy and performance of underrepresented STEM majors: gender, ethnic, and social class patterns. *Analyses of Social Issues and Public Policies*, 13, 347-369. <https://doi.org/10.1111/asap.12033>
- Makarova, E., Aeschlimann, B., & Herzog, W. (2019). The gender gap in STEM fields: the impact of the gender stereotype of math and science on secondary students' career aspirations. *Frontiers in Education*, 4:60. <https://doi.org/10.3389/educ.2019.00060>
- Marques, J. M., & Páez, D. (1994) The "black sheep effect": social categorization, rejection of ingroup deviates, and perception of group variability. *European Review of Social Psychology*, 5, 37-68. <https://doi.org/10.1080/14792779543000011>
- Meece, J. L., Glienke, B. B., & Burg, S. (2006). Gender and motivation. *Journal of School Psychology*, 44(5), 351-373. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.04.004>
- Miller, D. T., & Prentice, D. A. (1996). The construction of social norms and standards. En Higgins, E. T. & Kruglanski, A. W. (Eds.). *Social psychology. Handbook of basic principles* (p. 799-829). Nueva York: The Guilford Press.
- Miyares Fernández, A. (2021). *Distopías patriarcales. Análisis feminista del "generismo queer"*. Madrid: Cátedra.
- Mizala, A., Martínez, F., & Martínez, S. (2015). Pre-service elementary school teachers' expectations about student performance: how their beliefs are affected by their mathematics anxiety and student's gender. *Teaching and Teacher Education*, 50, 70-78. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.04.006>
- Nosek, B. A., Smyth, F. L., Sriram, N., Lindner, N. M., Devos, T., Ayala, A., ... & Kesebir, S. (2009). National differences in gender-science stereotypes predict

- national sex differences in science and math achievement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10593-10597. <https://doi.org/10.1073/pnas.0809921106>
- Nürnberg, M., Nerb, J., Schmitz, F., Keller, J., & Sütterlin, S. (2015). Implicit gender stereotypes and essentialist beliefs predict preservice teachers' tracking recommendations. *The Journal of Experimental Education*, 84(1), 152-174. <https://doi.org/10.1080/00220973.2015.1027807>
- Prentice, D., & Paluck, E. L. (2020). Engineering social change using social norms: lessons from the study of collective action. *Current Opinion in Psychology*, 35, 138-142. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.012>
- Reyes-Housholder, C. (2023). Democracia y género en Chile. En *Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Rippon, G. (2020). *El género y nuestros cerebros: la nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. *Urban Review*, 3, 16-20. <https://doi.org/10.1007/BF02322211>
- Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. *Psychological Science*, 18(5), 429-434. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01917.x>
- Sepúlveda, M. J., & Manquepillán, M. (2017). Brechas de género en el Sistema Único de Admisión a la educación superior. Centro de Estudios Mineduc. Recuperado en septiembre de 2022 de: <https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/DctoTrabajo2-Genero.pdf>
- Superintendencia de Seguridad Social (2016). Protección a la maternidad en Chile: evolución del permiso postnatal parental a cinco años de su implementación. Recuperado en septiembre de 2022 de: https://www.suseso.cl/607/articles-19844_archivo_01.pdf
- Tomasetto, C., Alparone, F. R., & Cadinu, M. (2011). Girls' math performance under stereotype threat: the moderating role of mothers' gender stereotypes. *Developmental Psychology*, 47(4), 943-949. <https://doi.org/10.1037/a0024047>
- Varela, J. J., Torres-Vallejos, J., González, C., & García, O. (2020). La percepción de apego con la escuela como un factor protector para conductas antisociales en escolares chilenos. *Psykhé*, 29(2), 1-12. <https://doi.org/10.7764/psykhe.29.2.1416>

CAPÍTULO 5

SESGOS DE GÉNERO EN LA AUTOEFICACIA Y PARTICIPACIÓN CÍVICA ESCOLAR

Javiera Bruna

“Una revolución feminista completa no liberaría solamente a las mujeres: liberaría formas de expresión sexual, y liberaría a la personalidad humana del chaleco de fuerza del género”.

Gayle Rubin, 1986.

QUE EL ORGANISMO a cargo de la redacción de la nueva Constitución haya tenido una conformación paritaria fue un hecho que marcó un precedente histórico a nivel mundial, debido a que esto no había sucedido nunca. Al mismo tiempo, el Gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, también ha dado pasos en esta línea, al escoger un gabinete conformado en su mayoría por mujeres. Estos avances en materia de igualdad de género, además de necesarios, se perciben como esperanzadores, ya que las niñas y adolescentes de las futuras generaciones tendrán modelos de mujeres desempeñándose en actividades tradicionalmente masculinas, pues el ejercicio político ha sido, históricamente, desarrollado por hombres.

El hecho de que apenas hayan existido referentes que permitan a las mujeres siquiera imaginarse en el ámbito político, ni un interés concreto por facilitar y propiciar la participación femenina, imposibilita, entre otros aspectos, que un cambio cultural tenga lugar. La falta de participación política femenina constituye un problema estructural que requiere de voluntades de diversas áreas para ser abordado, y que tiene sus raíces en la socialización temprana.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Cabe señalar que la participación política de las mujeres en Chile es bastante reciente, dado que el derecho a voto se hizo efectivo, en una primera etapa, en las elecciones municipales desde 1939, y de manera plena, a partir de las elecciones presidenciales de 1949 (ver Eltit, 1994). Esta conquista se atribuye, principalmente, a la participación política informal, reiterada y consistente que

tuvieron quienes pertenecían a los movimientos feministas y organizaciones de mujeres (Eltit, 1994). La ocupación de las mujeres en cargos públicos ha ido en aumento tras la promulgación de la Ley de Cuotas (2015), sin embargo, sigue lejos de ser una participación paritaria (PNUD, 2018).

La literatura previa a los cambios sociales que ha vivido Chile desde fines de 2019, indicaba que las mujeres adultas presentaban un menor interés que los hombres en participar en la esfera política (ver Figueiredo et al., 2017), hallazgos que se replicaban en la Octava Encuesta Nacional de la Juventud (INJUV, 2019), donde las mujeres jóvenes chilenas manifestaron un menor interés en política que sus pares hombres. Asimismo, en la enseñanza media, a pesar de que son las mujeres quienes más conversan y tienen un mayor interés en temáticas políticas y sociales, como medio ambiente o desigualdad social, no presentan una mayor autoconfianza política en comparación a sus pares hombres (Jara, 2021).

En este contexto, es importante señalar que la baja participación política afecta a las mujeres en términos de desarrollo de habilidades, pues acceder a ciertos cargos públicos permite desplegar las competencias que facilitan el desempeño en esa área. Sin embargo, las mujeres no son elegidas como líderes políticos porque su inexperiencia afecta la popularidad y legitimidad que tienen ante los y las votantes (Tula, 2009). Esta situación también provoca que las mujeres presenten una menor experiencia y conocimiento en política, lo que, a su vez, incide en las creencias que tienen sobre su propia capacidad. Dado que se sienten incapaces, participan menos, y ello va creando circuitos de retroalimentación negativa (Preece, 2016).

SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE GÉNERO

Atribuir la baja participación política de las mujeres a ciertos factores como su desinterés, invisibiliza el problema estructural que la reproduce y que consiste, principalmente, en que la socialización política de las personas está permanentemente permeada por los estereotipos de género.

Los estereotipos de género son entendidos como las creencias que son compartidas socialmente y que definen los roles, actividades, ocupaciones, etc., que se consideran adecuados para mujeres y hombres, determinando las expectativas que se deben tener de las personas según su sexo (D'Adamo et al., 2008; García Beau doux, 2017). Asimismo, los estereotipos de género han constituido ideas rígidas y estables que son resistentes al cambio (D'Adamo et al., 2008).

Los procesos de socialización permiten que las personas interioricen las normas y valores estereotípicos que les son asignados, lo que, si bien puede facilitar la interacción social, promueve la reproducción de la desigualdad, por

lo que, en vez de cuestionar los estereotipos, las personas tienden a reforzarlos con la ayuda de sus familias y la escuela que promueve este aprendizaje (Bourdieu, 2000; D'Adamo et al., 2008; García Beau doux, 2017; Ruiz, 2009). De esta forma, no parece casualidad que transculturalmente sean los hombres quienes ocupen las posiciones de poder y sus labores sean más valoradas, pues han sido quienes han dominado el espacio público, mientras que las mujeres han estado relegadas al espacio doméstico (Bourdieu, 2000). Este ordenamiento ha impedido que las mujeres se desempeñen en áreas que son consideradas masculinas y viceversa (Paredes, 2018).

Así, en términos de participación política, las mujeres tienden a tener una participación mayor en voluntariados que tienen por objetivo “cuidar” de la sociedad, coincidiendo con el estereotipo de la mujer como cuidadora (Albanesi et al., 2012). Además, tienden a participar en organizaciones más pequeñas y, por ende, con menor impacto, en comparación a los hombres (Voicu & Voicu, 2016).

Los estereotipos de género se interiorizan y reproducen desde la niñez (Ruiz, 2009). Un estudio realizado por Bos y colaboradores (2021) sobre socialización política de género en niños y niñas de entre seis y 12 años de Estados Unidos, concluyó que tanto niños como niñas reconocen la política como un área de dominio masculino. Esta asociación se fortalece, en el caso de las niñas, a medida que aumenta la edad y su conocimiento político, pues al momento de escoger líderes políticos, aumenta la probabilidad de que las niñas seleccionen hombres, probabilidad que, en el caso de los niños, se mantiene invariante. Además, cuando deben atribuir características a estos líderes, es menos probable que mencionen rasgos asociados típicamente a las mujeres. También, a medida que crecen, las niñas tienen un menor interés en la política, al mismo tiempo que comienzan a sentirse más atraídas por roles femeninos, haciendo menos probable que consideren la política como un espacio que podrían liderar (Bos et al, 2021). Otro estudio sobre socialización política desarrollado en México (Hernández et al., 2020) en niños y niñas de entre 10 y 13 años, concluyó que cuando se les preguntaba por figuras políticas, los niños tendían a responder correctamente las preguntas que tenía relación con hombres que eran líderes nacionales, mientras que las niñas respondían correctamente los ítems sobre mujeres que eran líderes locales; además, tuvieron una mayor cantidad de respuestas ausentes o “no sé” en comparación a los niños. Asimismo, encontró que ser hombre anticipa un mayor conocimiento político que va aumentando con la edad, a diferencia de las niñas, a quienes la edad no las beneficia. Por su parte, un estudio chileno realizado por Jara y colaboradores (2021) a estudiantes de segundo medio, muestra que un 60% de las adolescentes afirma que no cuenta con ningún referente político. Sin embargo, entre las mujeres que sí escogieron un referente político, la elección de mujeres fue cuatro veces mayor que en el grupo de hombres, advirtiendo

sobre la importancia de que existan referentes femeninos con quienes las jóvenes puedan identificarse.

Por consiguiente, se vuelve prioritario fomentar el interés político de las mujeres a edades tempranas, pues la socialización política de género determina las desigualdades políticas e incide en las percepciones y preferencias de las niñas desde su infancia.

LA ESCUELA COMO ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO Y POLÍTICA

La escuela también contribuye sistemáticamente a reproducir y fomentar los estereotipos de género, a través de prácticas y discursos sexistas mediante los cuales define cómo debería ser el comportamiento de las personas y las relaciones que establecen con el resto de la comunidad educativa (p. ej., Cvencek et al., 2011; Espinoza & Taut, 2016; Jiménez-Moya et al., 2023). En términos concretos, estos discursos y prácticas se materializan en códigos de vestuario, uso del lenguaje, división sexual de las disciplinas y áreas del conocimiento, entre otras, que legitiman la feminidad y masculinidad tradicional (Ríos, 2015).

Un claro reflejo de cómo la escuela fomenta prácticas diferenciadas para niños y niñas se vislumbra al analizar el modelaje que se hace de la participación de los y las estudiantes en la sala de clases. Estudios realizados en Chile, indican que los estudiantes tienen una participación espontánea mayor que las mujeres, y que, independiente del sexo del docente, este interactúa más con los hombres que con las mujeres (Espinoza & Taut, 2016; Sernam, 2009). Asimismo, el material de estudio en el contexto escolar presenta en mayor medida personajes, fotos e ilustraciones de hombres, lo que dificulta la posibilidad de las mujeres de identificarse con el material, y, además, cuando se muestra a mujeres, estas están desempeñando roles considerados femeninos (Sernam, 2009).

La escuela no solo influye en la reproducción de los estereotipos de género, sino que también impacta altamente en la socialización política (p. ej., Mala-faia et al., 2017). La participación política requiere de conocimiento cívico y habilidades de pensamiento crítico para poder seleccionar y comprender la información que permitan resguardar un comportamiento alineado con los valores democráticos (Disi et al., 2021). Dado que estas habilidades y comportamientos no se desarrollan instantáneamente, es necesario intervenir en etapas anteriores a la adultez. En este sentido, la evidencia indica que las posibilidades de desempeñar actividades cívicas durante la adolescencia aumentan la probabilidad de que las personas sean ciudadanas y ciudadanos activos durante su adultez (Keating & Janmaat, 2015).

EL ROL DE LA AUTOEFICACIA CÍVICA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

La escuela es, por lo tanto, un lugar idóneo para desarrollar el interés y las habilidades cívicas para desenvolverse en el ámbito político. Como se ha mencionado, hoy en día, dichas habilidades e intereses tienden a estar menos desarrollados en las mujeres que en los hombres (p. ej., Figueiredo et al., 2017), por lo que es necesario intencionar la formación política de niñas y adolescentes desde la etapa escolar.

La autoeficacia se refiere a la evaluación que hacen las personas sobre la capacidad que tienen para desempeñarse en un dominio específico, determina el nivel de esfuerzo que la persona invertirá en dicha actividad, y cuánto persistirá ante los obstáculos y fracasos (Bandura, 1993). Así, si una persona cree que es capaz de ejecutar una actividad, es altamente probable que la realice, y si lo hace con éxito, aumentarán sus niveles de autoeficacia. La autoeficacia cívica alude a las creencias de las personas sobre su capacidad para realizar actividades relacionadas con la participación ciudadana y política (Schulz et al., 2018). Si bien la evidencia indica que el conocimiento cívico —entendido como el saber más teórico sobre la ciudadanía— es un predictor de la participación política futura, también señala que un predictor más consistente es la autoeficacia cívica, que constituiría el mecanismo psicológico que está a la base de la participación política futura (Luengo Kanacri et al., 2022). Es decir, el practicar la participación ciudadana parece ser más relevante que el poseer conocimientos meramente teóricos sobre el mundo cívico. Por lo tanto, considerar que la práctica y el entrenamiento de la autoeficacia cívica podría tener un mayor impacto que el conocimiento cívico en la participación política futura de los y las estudiantes, implica que en el contexto escolar se debería priorizar lo primero más que el conocimiento teórico (Luengo Kanacri et al., 2017).

No obstante, actualmente la escuela está más enfocada en el desarrollo del conocimiento cívico teórico que en promover la práctica de las habilidades asociadas a la participación cívica estudiantil (Miranda & Carrasco, 2020). Sin embargo, el conocimiento teórico entregado en las escuelas tampoco parece ser el adecuado: el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) que se aplica a estudiantes de octavo básico, concluyó que el conocimiento cívico de las y los estudiantes chilenos está bajo la media internacional (Mineduc, 2018). Al margen de esto, al segregar los datos por sexo, fueron las estudiantes quienes presentaron un mayor conocimiento cívico que sus pares hombres, pero, al mismo tiempo, estaban menos interesadas que ellos en participar políticamente en el futuro (Mineduc, 2018). Estos resultados muestran que, como se ha señalado, el conocimiento cívico no es el predictor más consistente de la participación política, pues, pese a tener un

mayor conocimiento en el área, las mujeres no se imaginan participando en política en el futuro. En general, en el grupo de adolescentes, son los hombres quienes reportan tener mayor capacidad para desempeñarse en actividades cívicas (Metzger et al., 2020), lo que sí incide de forma positiva en su participación política. Por ello, es imperativo que la escuela brinde oportunidades que permitan a las niñas y adolescentes entrenar y desarrollar competencias cívicas, con el objetivo de fortalecer su autoeficacia (Cumsille & Martínez, 2015), lo que contribuirá a aumentar su participación política en el futuro.

Por otro lado, es probable que la forma en cómo se practican las habilidades políticas en el contexto escolar privilegie formatos que coinciden con características asociadas a lo masculino, por lo que las mujeres, al considerar que no poseen dichas características, se priven de participar en instancias políticas (Boss et al., 2021). Así, el aprendizaje cívico de las mujeres se da, en mayor medida, al discutir sobre política en sus entornos familiares, pues ellas requieren de espacios comunitarios donde prime el consenso, a diferencia de los hombres, cuyo aprendizaje se vería mayormente estimulado en entornos donde el conflicto político y la competencia entre partidos prevalezca (Wolak & McDevitt, 2011). Esta diferencia está causada, presumiblemente, por la socialización diferenciada que reciben niños y niñas en función de los estereotipos de género. Mientras los estereotipos tradicionales sigan operando en la sociedad, es importante evitar generar en el aula un ambiente de participación política que esté conectado únicamente con valores típicamente masculinos. Además, ciertas variables socio-estructurales pueden afectar más la autoeficacia cívica de las adolescentes, en comparación a la de sus pares hombres. En concreto, un estudio reciente muestra que, a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las estudiantes mujeres, aumenta también su autoeficacia cívica, relación que no existe en el caso de los hombres (Bruna, 2021). Esto puede estar señalando que las mujeres, a diferencia de los hombres, requieren de otros factores protectores para sentirse capaces de desempeñar actividades cívicas (en este caso, un alto nivel socioeconómico). Estos factores “de protección”, podrían estar disminuyendo en ciertos grupos de estudiantes mujeres la internalización de los estereotipos de género que definen la participación política como una actividad masculina.

La teoría social cognitiva (Bandura, 1993) establece que una experiencia que permite aumentar la autoeficacia es contar con modelos o referentes que, teniendo características similares a las propias, tengan un desempeño exitoso en la actividad que realizan. Observar a personas parecidas obteniendo buenos resultados permite a otras pensar que también podrían tener éxito al desarrollar dicha actividad (Bandura, 1993). Dado que las mujeres están subrepresentadas en el ámbito político, las niñas y adolescentes carecen de modelos exitosos con los cuales identificarse, por lo que también es necesario visibilizar ante las estudiantes a las mujeres que se desempeñan en el ámbito político.

En resumen, la escuela debe potenciar la autoeficacia cívica de sus estudiantes, pero sobre todo de las mujeres, quienes requieren de mayores estímulos para lograrlo debido a la socialización que reciben. Asimismo, es importante que la escuela se cuestione las maneras en las que está fomentando las habilidades cívicas —pues es probable que el replicar las formas masculinas esté desalentando la participación femenina— y, a su vez, que se tenga en cuenta que diversas variables socioestructurales pueden tener un mayor efecto en la autoeficacia de las estudiantes.

RECOMENDACIONES

En el contexto chileno, el rol de la mujer en la esfera política ha estado tradicionalmente invisibilizado (ver Reyes-Housholder, 2023). Para generar una sociedad más igualitaria en este contexto, es prioritario intervenir en la etapa escolar, debido a que es la etapa del desarrollo que mayormente predice la participación política futura (Keating & Janmaat, 2015) y la escuela constituye el espacio ideal para fomentar el desarrollo de habilidades cívicas (Malafaia et al., 2017).

Dado que las adolescentes mujeres chilenas presentan un mayor conocimiento cívico, ellas muestran una menor intención de participación política futura que los estudiantes hombres (Mineduc, 2018), es fundamental diseñar intervenciones destinadas a aumentar la autoeficacia cívica de las estudiantes, es decir, su creencia de que son capaces y tienen las habilidades necesarias para participar en el mundo político. Este entrenamiento contribuirá a contrarrestar el efecto de los estereotipos tradicionales de género, que conciben la participación en el ámbito político como una actividad propia de los hombres.

Desde una perspectiva sociocognitiva del aprendizaje, las mujeres que ocupan cargos políticos se convierten en modelos para las mujeres más jóvenes, facilitando que las niñas y adolescentes puedan identificarse con estas líderes (Bandura, 1993). De hecho, el aumento y la visibilidad de mujeres en cargos de liderazgo político aumenta la probabilidad de que niños y niñas asocien a las mujeres con la política (Bos et al., 2022), por lo que también es relevante visibilizar estos modelos de mujeres ante las estudiantes.

A modo de recomendaciones, se considera importante que las escuelas se cuestionen aspectos relacionados con cómo se modela la participación política de hombres y mujeres, o la representatividad de niños y niñas en las actividades cívicas del colegio, como los debates políticos o los centros de alumnos.

Además, se recomienda trabajar en ampliar las características que los y las estudiantes atribuyen a las personas que se desempeñan en política, debido a que tienden a asociarles características masculinas que impiden que las mujeres se puedan identificar con esta actividad (Bos, et al., 2022). Al mismo

tiempo, propiciar espacios donde al abordar temáticas sociales relacionadas a lo político se priorice el consenso podría alentar la participación femenina, cuyo aprendizaje cívico se da en menor proporción en los espacios políticos donde se privilegia el conflicto y la competencia (Wolak & McDevitt, 2011).

Estas medidas no constituyen, en ningún caso, un camino único y directo para dismantelar la socialización política diferenciada que reciben niños y niñas. Sin embargo, implementar estas acciones puede contribuir a disminuir las brechas de género en política que aún hoy se dan en el contexto escolar. Para eliminar definitivamente estas brechas, se requieren diversas medidas macroestructurales que, complementándose con las intervenciones en el contexto escolar, permitan los cambios sociales y estructurales necesarios para avanzar en esta materia.

REFERENCIAS

- Agencia de Calidad de la Educación (2018). Informe Nacional ICCS 2016. Santiago de Chile. Recuperado en agosto de 2022 de: https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Documents/ICCS_2016_National_Report_CHL.pdf
- Albanesi, C., Zani, B. & Cicognani, E. (2012). Youth civic and political participation through the lens of gender: the italian case. *Human Affairs*, 22(3), 360-374. <https://doi.org/10.2478/s13374-012-0030-3>
- Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. *Educational Psychologist*, 28(2), 117-148.
- Bos, A. L., Greenlee, J. S., Holman, M. R., Oxley, Z. M., & Lay, J. C. (2022). This one's for the boys: how gendered political socialization limits girls' political ambition and interest. *American Political Science Review*, 116(2), 484-501.
- Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Editorial Popular.
- Braun-Lewensohn, O. (2016). Sense of coherence, values, youth involvement, civic efficacy and hope: adolescents during social protest. *Social Indicators Research*, 128(2), 661-673. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-1049-8>
- Bruna, J. (2021). Diferencias por sexo y nivel socioeconómico en autoeficacia cívica e intención de participación cívica futura en la adolescencia chilena. Tesis de magíster, Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado en agosto de 2022: <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/63594>
- Byars-Winston, A., Diestelmann, J., Savoy, J. N. & Hoyt, W. T. (2017). Unique effects and moderators of effects of sources on self-efficacy: a model-based meta-analysis. *Journal of Counseling Psychology*, 64(6), 645-658. <http://dx.doi.org/10.1037/cou0000219>
- Cumsille, P., & Martínez, M. L. (2015). La escuela como contexto de socialización política: influencias colectivas e individuales. En C. Cox & J. C. Castillo (Eds.). *Aprendizaje de la ciudadanía: contextos, experiencias y aprendizajes* (p. 431-457). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

- Cvencek, D., Meltzoff, A. N., & Greenwald, A. G. (2011). Math-gender stereotypes in elementary school children. *Child Development*, 82(3), 766-779.
- D'Adamo, O., García Beaudoux, V., Ferrari, G. & Slavinsky, G. (2008). Mujeres candidatas: percepción pública del liderazgo femenino. *Revista de Psicología Social*, 23(1), 91-104. <https://doi.org/10.1174/021347408783399534>
- Disi, R., & Mardones, R. (2021). Enseñando con actitud: ¿cuán efectiva ha sido la formación ciudadana en Chile? *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 29(15). <https://doi.org/10.14507/epaa.29.4969>
- Eltit, D. (1994). *Crónica del sufragio femenino en Chile*. Santiago de Chile: Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).
- Espinoza, A. M., & Taut, S. (2016). El rol del género en las interacciones pedagógicas de aulas de matemática chilena. *Psykhé*, 25, 1-18. <https://doi.org/10.7764/psykhe.25.2.858>
- Figueiredo, A., Jiménez-Moya, G., Paredes V. & González, A. (2017). Módulo 5: Brechas y actitudes: la desigualdad entre hombres y mujeres y los roles de género. Estudio Longitudinal Social de Chile, ELSOC (Notas COES de política pública n° 12, octubre). Santiago de Chile. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://coes.cl/publicaciones/no12-elsoc-genero-brechas-y-actitudes/>
- García Beaudoux, V. I. (2017). *¿Quién teme el poder de las mujeres?: bailar hacia atrás con tacones altos*. Madrid: Grupo 5.
- Hernández, M., Saldierna-Salas, A. R., Muñiz, C. & Marañón-Lazcano, F. de J. (2020). Brecha de género en el conocimiento político infantil: influencia de las redes sociales y la socialización política. *Palabra Clave*, 23(4), e2343. <https://doi.org/10.5294/pacla.2020.23.4.3>
- Instituto Nacional de la Juventud (2019). Novena Encuesta Nacional de la Juventud 2018. Santiago, Chile. Recuperado en agosto de 2022 de: https://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/9deg_encuesta_nacional_de_juventud_2018.pdf
- Instituto Nacional de la Juventud (2019). Novena Encuesta Nacional de Juventud. Santiago, Chile.
- Jara Ibarra, C., Sánchez Bachmann, M., Cox, C., & Montecinos, M. (2021). Socialización política y formación ciudadana en el contexto escolar chileno: un análisis desde el enfoque de género. *Revista de Calidad en la Educación*, (54), 73-106. <https://doi.org/10.31619/caledu.n54.932>
- Jiménez-Moya, G., Paz, S., Del Río, M., & Contreras, C. (2023). Sexismo en las aulas: normas sociales y mecanismos que reproducen la desigualdad de género en el contexto educativo. En *Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Juntas en Acción (2020). Mujeres y participación política: avances, desafíos y propuestas. Santiago de Chile: Cofré Avendaño, V., Maturana Kesten, C., González Mahan, J., Hurtado Pinochet, V. & Fríes Monleón, L. Recuperado en agosto de 2022 de: https://juntasenaccion.cl/wp-content/uploads/2020/08/Mujeres_y_participacion_politica_JuntasenAccion.pdf

- Keating, A. & Janmaat, J. G. (2016). Education through citizenship at school: do school activities have a lasting impact on youth political engagement? *Parliamentary Affairs*, 69(2), 409-429. <https://doi.org/10.1093/pa/gsv017>
- Luengo Kanacri, P. & Jiménez-Moya, G. (2017). Good practices on civic engagement in Chile and the role of promoting prosocial behaviors in school settings. En García, B., Sandoval, A., Treviño, E., Diazgranados, S. & Pérez, G. (Eds). *Civics and citizenship: theoretical models and experiences in Latin America* (p. 240-254). Rotterdam: Sense Publishers.
- Luengo Kanacri, P., Jiménez-Moya, G., Miranda, D., & Marinovic, A., (2022). When civic knowledge matters but is not enough: the role of classroom climate and citizenship self-efficacy on different facets of civic engagement. *Citizenship Teaching and Learning*.
- Malafaia, C., Neves, T. & Menezes, I. (2017). In-between fatalism and leverage: the different effects of socioeconomic variables on students' civic and political experiences and literacy. *JSSE-Journal of Social Science Education*, 16(1), 43-55. <https://doi.org/1618-5293>
- Metzger, A., Alvis, L., & Oosterhoff, B. (2020). Adolescent views of civic responsibility and civic efficacy: differences by rurality and socioeconomic status. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 70, 101183. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101183>
- Miranda, D. & Carrasco, D. (2020). ¿Cuánto aportan las escuelas en diversos aspectos de la formación ciudadana?: Evidencias desde ICCS. *Midevidencias*, 21, 1-6. Recuperado en agosto de 2022 de: <https://www.mideuc.cl/wp-content/uploads/2020/01/MIDevidencias-21.pdf>
- Paredes, V. (2018). Género y educación. En Arce, J. (Eds). *El Estado y las mujeres. El complejo camino hacia una necesaria transformación de las instituciones* (p. 211-228). Santiago: Ril Editores.
- Preece, J. R. (2016). Mind the gender gap: an experiment on the influence of self-efficacy on political interest. *Politics & Gender*, 12(1), 198-217. <https://doi.org/10.1017/S1743923X15000628>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2018). *Representación política de mujeres en el poder. Análisis de la aplicación de las cuotas de género en las elecciones parlamentarias de 2017*. Santiago, Chile. Recuperado en diciembre de 2022 de: <https://oig.cepal.org/es/documentos/representacion-politica-mujeres-poder-legislativo-analisis-la-aplicacion-cuotas-genero>
- Reyes-Housholder, C. (2023). Democracia y género en Chile. En *Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Ríos, N. (2015). Institución escolar y orden de género y sexualidad. Material del curso Sexualidades en la escuela, impartido en UAbierta, Universidad de Chile.

- Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo. *Nueva Antropología*, VIII (30), 95-145. . Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15903007>
- Ruiz, E. E. (2009). Estereotipos de género. *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, (326), 17-21.
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., & Friedman, T. (2018). Becoming citizens in a changing world: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73963-2>
- Servicio Nacional de la Mujer (2009). Análisis de género en el aula (Documento de Trabajo n° 117). Santiago de Chile.
- Tula, M. I. (2009). Partidos políticos y equidad de género. Apuntes sobre las condiciones de éxito o fracaso en la aplicación de las leyes de cuotas. Seminario “Ciudadanos vs. partidos en América Latina: tensiones, amenazas y dilemas de la democracia representativa”. Salamanca: Instituto Iberoamérica.
- Voicu, M. & Voicu, B. (2016). Civic participation and gender beliefs: an analysis of 46 countries. *Sociologicky Casopis*, 52(3), 321-345. <http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.3.261>
- Wolak, J. & McDevitt, M. (2011). The roots of the gender gap in political knowledge in adolescence. *Political Behavior*, 33(3), 505-533. <https://doi.org/10.1007/s11109-010-9142-9>

CAPÍTULO 6

EDUCACIÓN NO SEXISTA (ENS): UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN PARA LAS ESCUELAS

Fundación Niñas Valientes

“El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidad. En ese campo de posibilidades, tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, exigirnos y exigir, una apertura de mente y corazón que nos permita enfrentar la realidad cuando imaginamos colectivamente formas de ir más allá de los límites, para transgredir. Esta es la educación como práctica de libertad”.

Bell Hooks, 1994.

DURANTE LOS últimos años, en nuestra sociedad se ha levantado y articulado la demanda por una Educación No Sexista (ENS) en movimientos sociales por la educación, movilizaciones feministas y en diversas comunidades educativas. Con ello, han surgido nuevas investigaciones respecto al rol del género en la educación, junto a la visibilización de la necesidad de avanzar en políticas públicas que incorporen la equidad de género en el ámbito educativo.

El sexismo en la educación en Chile se expresa en prácticas y discursos que se basan y sostienen la asignación de roles o estereotipos de género, las limitaciones y desigualdades en el desarrollo de habilidades según género, la discriminación por género y la reproducción de las normas de género en el currículum, entre otras. Estas prácticas y discursos se (re)producen tanto dentro como fuera de las aulas (Ellemers, 2018), e impactan en las trayectorias educativas, laborales, sociales y personales de los individuos, afectando su evolución plena y libre (Undurraga & López, 2020). En este contexto, como Fundación Niñas Valientes hemos desarrollado una propuesta de un Modelo de Educación No Sexista que incorpora la equidad de género de manera transversal en la educación escolar.

¿Qué entendemos por Educación No Sexista? Consiste en un sistema educativo basado en un modelo que se responsabiliza por cuestionar y eliminar la violencia y la desigualdad de género y sexual dentro de sus comunidades,

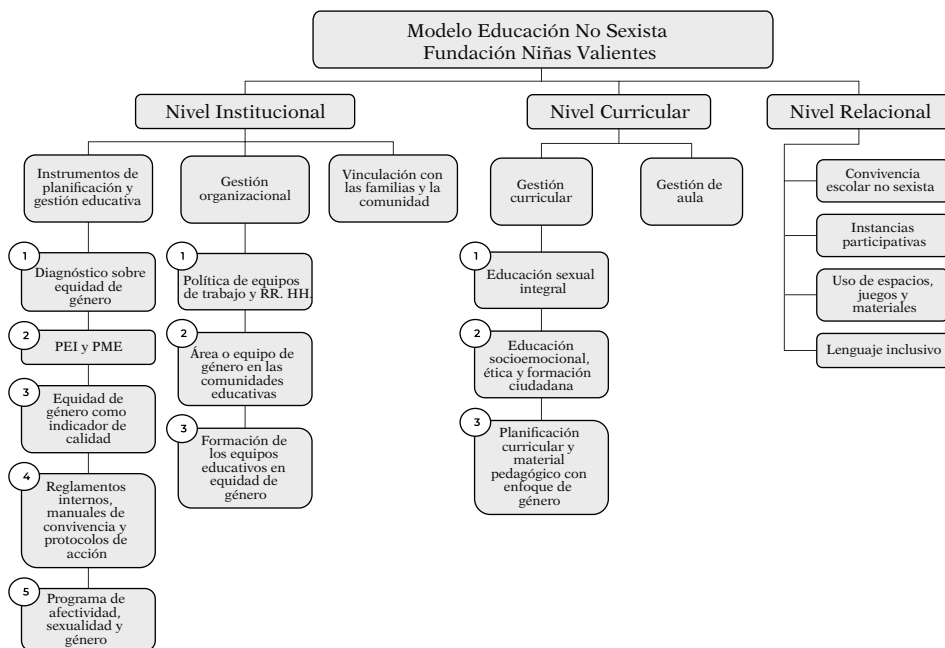
apuntando a una educación transformadora, equitativa, inclusiva, libre de discriminaciones y violencias para lograr el desarrollo pleno de todos los miembros de la comunidad educativa (Nash, 2018). Una ENS debe contemplar un enfoque de derechos y basarse en el principio de no discriminación hacia ninguna persona, pueblo, cultura u origen. A su vez, promueve también el pensamiento crítico, fomentando y creando espacios de discusión en torno a las prácticas de reproducción y legitimación del conocimiento, junto con el abordaje de contenidos, objetivos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que buscan el cambio y justicia social de las y los estudiantes.

Su construcción es un proceso que debe realizarse desde las comunidades educativas a partir de diagnósticos que permitan comprender la realidad de cada escuela de manera colectiva e interseccional. Para ello, es fundamental involucrar al equipo docente, estudiantes y sus familias. De esta forma, las transformaciones podrán ser pertinentes para cada contexto particular, desde lo cotidiano hasta lo institucional.

El Modelo de Educación No Sexista propuesto, es fruto de una exhaustiva revisión bibliográfica y de experiencias en diferentes contextos, considerando el trabajo de la Fundación Niñas Valientes junto a diversas comunidades educativas. Este, se basa en la premisa de que la escuela no solo es un espacio de aprendizaje de contenidos, sino que es además uno de los espacios de socialización más importantes en la vida de las personas (Cumsille & Martínez, 2015). Por ende, si dentro de esta no existe un trabajo consciente y con perspectiva de género, se reproducen los estereotipos, inequidades y violencias de la sociedad actual (Del Río et al., 2016; Jiménez-Moya et al., 2022)

La propuesta aborda y sistematiza el desarrollo de una ENS en base a tres niveles teóricos de acción (figura 1): el nivel institucional, curricular y relacional. En la práctica, estos tres niveles se encuentran imbricados y están en constante interrelación. En el presente capítulo se desarrollarán los tres niveles, considerando sus dimensiones más relevantes y los aspectos críticos que actualmente implican desafíos de transformación para la educación en Chile.

FIGURA 1:



I. NIVEL INSTITUCIONAL

Este nivel consiste en los aspectos estructurales y organizacionales de los contextos educativos en los que se manifiesta y reproduce el sexismo. Las discriminaciones o prácticas sexistas que se dan al interior de los establecimientos educacionales, frecuentemente, se deben a un modelo organizacional que no ha cuestionado sus valores, principios, acciones y toma de decisiones a nivel institucional.

Generar transformaciones a este nivel es fundamental para lograr cambios estructurales hacia la equidad de género en la educación de forma transversal y articulada, en todos los ámbitos del establecimiento. El abordaje del sexismo en este nivel implica que cada escuela pueda revisar y ajustar su proyecto educativo considerando la perspectiva de género y desarrollando una serie de medidas y compromisos que sean garantes de una ENS. Para el desarrollo de esta propuesta, se consideran los lineamientos institucionales presentados por el Ministerio de Educación de nuestro país.

El nivel institucional se divide en tres dimensiones: 1) los instrumentos de planificación y gestión educativa; 2) la gestión organizacional y, por último, 3) la vinculación con la comunidad y las familias.

1. Instrumentos de planificación y gestión educativa:

Estos instrumentos representan los valores, principios y orientaciones de cada comunidad educativa, junto con aquellas estrategias específicas y normativas para la consecución de sus objetivos. A continuación, se aborda cada uno de ellos.

a) Diagnóstico sobre equidad de género

El diagnóstico como responsabilidad institucional implica un primer acercamiento a la situación en que se encuentra la comunidad educativa. Este hace posible entender el contexto y los procesos de la institución, lo que resulta necesario para poder desarrollar recursos y herramientas para la equidad de género que se ajusten a la realidad de dicha comunidad. Permite su autococonocimiento a partir de su propio contexto en materia de equidad de género, fomenta la participación en el proceso de transformación hacia una ENS, posibilita la evaluación de las medidas adoptadas por la escuela y contribuye a la sensibilización de la comunidad educativa respecto a las desigualdades y violencias de género.

b) Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME)

Para avanzar hacia una ENS, la equidad de género debe ser considerada y nombrada de manera explícita en el PEI como principio de acción y horizonte a alcanzar mediante los procesos de formación que se desarrollan en toda escuela. La perspectiva de género debe presentarse en las visiones, valores, uso de recursos, sistemas de relaciones (formación socio-afectiva, ética y convivencia) y de evaluación que se establecen en el PEI, impactando en la toma de decisiones pedagógicas y curriculares. Considerar la equidad de género en los PME permite materializar las acciones específicas para avanzar hacia una ENS (Mineduc, 2017). Esto implica asegurar que objetivos, responsabilidades y destinación de recursos del PME posean una perspectiva de género.

c) Equidad de género como indicador de calidad

Desde el Mineduc (2017) se establece la importancia de aspirar a la equidad de género como atributo de la calidad. Incorporarla como un indicador de

calidad de la gestión escolar significa medirla y evaluarla en conjunto con otros indicadores, considerando los principios, valores y prácticas pedagógicas no sexistas, promoviendo la calidad educativa de forma integral. Este indicador se debe asociar a la incorporación del género de manera transversal en la escuela, considerando sus distintos niveles y enfocándose hacia las posibilidades de mejora continua. Se propone que la perspectiva de género se debe transversalizar en las cuatro dimensiones del modelo de gestión de calidad: liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar y gestión de recursos.

d) Reglamentos internos, manuales de convivencia y protocolos de acción

Resulta fundamental el diseño y desarrollo de reglamentos internos, manuales de convivencia y protocolos de acción que consideren un enfoque de género. Esto significa plantear el respeto y garantías de equidad de género de manera explícita, sustrayendo todo tipo de discriminación de los textos y estableciendo mecanismos de prevención, sanción y reparación en caso de que esto sea incumplido. Considerar el enfoque de género implica, a su vez, sensibilizar respecto a las faltas en esta materia y las diversas formas de violencias de género que pueden presentarse en los contextos educativos. Es crucial que los reglamentos, manuales y protocolos se construyan desde un enfoque formativo, por sobre uno punitivo, y que consideren instancias de formación y reparación en caso de que se cometa alguna falta.

e) Programa de afectividad, sexualidad y género

La implementación de un programa de este tipo implica, según el Mineduc (2013), recibir formación en estas materias, de manera que se garanticen las posibilidades de aprender desde el autocuidado (tanto físico como mental), el respeto mutuo, el desarrollo socioemocional y la consciencia corporal. Los programas de afectividad, sexualidad y género deben considerarse desde la primera etapa escolar y ser abordados de forma transversal en las diversas asignaturas, así como también estimar espacios y tiempos focalizados para su desarrollo en temáticas específicas, tomando en cuenta el contexto y la edad de las y los estudiantes. Este plan debe contemplar objetivos, resultados esperados, indicadores y evaluación.

2. Gestión organizacional

Esta gestión se refiere a todos los procesos y aspectos que involucran la estructura, forma de organización y toma de decisiones dentro de la comunidad educativa. Dentro de ella, se encuentran:

a) *Políticas de equipos de trabajo y recursos humanos*

Los recursos humanos corresponden al conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que ponen en práctica las personas y que le otorgan valor a la institución (Alles, 2006). En un contexto de feminización docente (Mineduc, 2020), se observan grandes desigualdades de género en torno a los roles y funciones de mayor responsabilidad y toma de decisiones, en perjuicio de las mujeres (Centro de Estudios Mineduc, 2021). En esta línea, resulta relevante poder considerar un enfoque de género en los procesos de selección y contratación, en las políticas internas de distribución de roles y cargos, y en las dinámicas de conciliación laboral y familiar, que afectan en mayor medida a las mujeres y perjudican el desarrollo de sus trayectorias laborales.

b) *Área o equipo de género en las comunidades educativas*

Uno de los obstáculos visualizados en las experiencias de trabajo con comunidades educativas, es que las temáticas de equidad y prevención de violencias muchas veces no se asignan a ningún rol en concreto, lo que supone un riesgo para la incorporación de la perspectiva de género. Por ende, es necesario que existan personas o equipos a cargo de la incorporación de este enfoque en la escuela, reconociéndose de manera explícita su responsabilidad y atribuciones.

c) *Formación de los equipos educativos en equidad de género*

Es urgente considerar el enfoque de género en la profundización y especialización de la docencia y los equipos educativos (Azúa, et al., 2019; González & Martín, 2014). Esto significa generar espacios de formación en conocimientos y herramientas que fomenten la equidad tanto dentro como fuera del aula, produciendo una base común de reflexión en los contextos educativos. Para ello, se deben promover actividades que permitan dimensionar la importancia de la equidad de género y el impacto de los estereotipos, junto a la explicación de conceptos claves como género, sexismo y perspectiva de género. A partir de ello, será posible facilitar instancias educativas para estudiantes que promuevan la equidad de género.

3. Vinculación con las familias y la comunidad

Implementar estrategias participativas para abordar la ENS con las familias y redes externas resulta fructífero debido a que permite y fomenta la integración de toda la comunidad educativa en este desafío. Es necesario promover la participación de las familias (Romagnoli & Cortese, 2016) y redes externas como

centros de salud, centros de formación y recreación, organizaciones sociales y territoriales, entre otras, en la creación de una educación que promueva la equidad de género.

II. NIVEL CURRICULAR

Este nivel se relaciona con todo aquello que se encuentra contenido en el plan de estudios o currículum, como guía del quehacer pedagógico de un establecimiento educativo. Este plan aborda todas las temáticas, contenidos y habilidades que se buscan fomentar y enseñar. Entendiendo que lo que se enseña no es neutral, sino que entraña sesgos e ideas preconcebidas sobre distintos temas, es fundamental revisar los contenidos para educar desde una perspectiva que considere el enfoque de género y promueva la equidad. A su vez, es indispensable considerar también la forma en la que se generan los procesos de enseñanza-aprendizaje de las temáticas, contenidos y habilidades, incluyendo el rol del cuerpo docente y su relación con las y los estudiantes.

El sexismo y la discriminación de género se manifiesta de diversas maneras en el nivel curricular. En los contenidos curriculares, se da en la ausencia de una perspectiva de género en la educación socioemocional y ética, o en los enfoques moralistas o biologicistas de los planes de educación sexual, que no consideren las diversas dimensiones de una educación sexual integral. A su vez, se exterioriza en la falta de ejemplos y materiales pedagógicos que tengan como referentes a mujeres o personas de las comunidades LGBTQIA+ y en la preponderancia de los estereotipos de género. Por otro lado, en las dinámicas y formas de enseñanza, el sexismo se observa a través de los sesgos de género y el trato diferenciado que se genera entre equipos educativos y estudiantado por razón de sexo o género. Por ejemplo, docentes otorgan más la palabra a estudiantes varones que a mujeres en ramos típicamente asociados a hombres, así como también promueven el desarrollo de capacidades matemáticas o científicas en mayor medida hacia el sexo masculino (Espinoza & Taut, 2016; Servicio Nacional de la Mujer, 2009).

Este nivel considera dos subdimensiones: por un lado, la gestión curricular, que consiste en el currículum o el plan de estudios y, por otro lado, la gestión del aula, es decir, la forma en que docentes enseñan y atienden a sus estudiantes, incluyendo el llamado “currículum oculto” (Torres, 1991), en referencia a las habilidades, conocimientos, actitudes, etc., que no están explicitados en las metas educativas (Araya, 2004).

1. Gestión curricular

En esta dimensión se agrupan las diferentes estrategias curriculares y contenidos que se consideran centrales para el abordaje de una ENS.

a) Educación sexual integral

Una ENS comprende como centralidad la implementación de una educación sexual desde un enfoque integral (Unesco, 2020) en todas las dimensiones de la institucionalidad educativa. En relación con los contenidos curriculares, una educación sexual integral debe avanzar desde los enfoques biologicistas y funcionalistas, hacia uno que comprenda la sexualidad desde una perspectiva de género y de derechos (Unesco, 2014). La integralidad, en términos de educación sexual, asume que niñas, niños y adolescentes son seres sexuados y sexuadas y, por ende, deben tener un rol protagónico en la reflexión y discusión, lo cual promueve que asuman una responsabilidad informada respecto a su comportamiento y vivencia sexual (Mineduc, 2017). Nuestro modelo considera la definición planteada por Unesco (2020) para la comprensión de la educación sexual integral.

b) Educación socioemocional, ética y formación ciudadana

La educación socioemocional y ética se relaciona al desarrollo de competencias que permiten la relación consigo mismo y con otras personas, tales como tomar conciencia de sí mismos, conciencia social, autorregulación, toma responsable de decisiones y manejo de relaciones, por lo que permite a las personas incrementar su bienestar (Marchant & Milicic, 2020). Históricamente, las escuelas se han caracterizado por ser espacios para el desarrollo racional, en desmedro del emocional, y este, a su vez, se ha considerado un aspecto del mundo privado y asociado a lo femenino (Troncoso et al., 2019). Por ello, nuestro modelo sugiere considerar de manera central el desarrollo de una educación socioemocional y ética que se implemente de modo equitativo, advirtiendo el impacto de los estereotipos de género en el reconocimiento, comprensión, expresión y gestión de las emociones.

La perspectiva de género también debe ser considerada en los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la formación ciudadana (Luengo Kanacri & Jiménez-Moya, 2017), entendiendo que, en términos de participación política futura, estudios indican que las y los estudiantes de Chile están bajo el promedio internacional, y que son las mujeres las que tienen una menor expectativa de participar cuando sean adultas (Bruna, 2023; Mineduc, 2018).

c) *Planificación curricular y material pedagógico con enfoque de género*

Para lograr una ENS, es necesaria una revisión y transformación curricular. Para esto, se deben abordar dos elementos que son claves en la reproducción escolar del sexismo: por una parte, la planificación pedagógica, y, por otra, los contenidos curriculares y material pedagógico (Mineduc, 2017). En cuanto al primer elemento, se debe incorporar la perspectiva de género como eje de planificación que conduce a la contextualización de los aprendizajes, y también se sugiere intencionar la planificación de la enseñanza por núcleos problemáticos, lo cual permite articular contenidos y habilidades de las asignaturas a través de preguntas problematizadoras que facilitan el abordaje de las temáticas de género. En cuanto a los contenidos y el material pedagógico, es importante revisar la diferencia en cantidad y calidad de presencia de autores según sexo, los ejemplos y roles de género según estereotipos, el uso del lenguaje, la presencia de mujeres, y las diversidades de género y sexuales en el estudio de las diversas asignaturas.

2. Gestión de aula

Una gestión de aula no sexista implica la necesidad de que los equipos educativos sean conscientes de la importancia de no reproducir estereotipos de género al educar, cuestionando normas y roles tradicionales con el fin de no transmitirlos al estudiantado. Esto requiere visibilizar las diferentes formas en las que se reproducen los estereotipos y tomar acciones específicas para revertir estos efectos y promover activamente la equidad.

Hay distintos ámbitos de abordaje en la gestión del aula:

- Reconocer y visibilizar los sesgos sexistas presentes en los equipos educativos.
- Considerar los ejemplos y referencias, evitando el uso de estereotipos sexistas.
- Promover habilidades e intereses de estudiantes sin diferenciación por género y sexo, promoviendo mayor libertad y equidad en las trayectorias educativas y laborales.
- Atención y exigencias equitativas a las y los estudiantes, considerar las creencias y expectativas de los equipos educativos respecto a ellos, las cuales suelen tener diferencias por género y sexo.
- Frenar, educar y reparar actitudes y comportamientos sexistas.
- Promover la participación en igualdad de condiciones, con un reparto equitativo y rotatorio de roles, responsabilidades y funciones dentro de los grupos y los cursos.

III. NIVEL RELACIONAL

Este nivel considera lo referido a la cultura escolar y la forma en que se relaciona la comunidad educativa, la convivencia escolar, la utilización de espacios y juegos, el uso de uniforme y el tipo de lenguaje. Es indispensable que la institución tenga una cultura democrática, respetuosa, inclusiva y equitativa, y que eso se refleje en la manera en que se gestiona la convivencia y, por ende, se vincula la comunidad.

En este nivel nos encontramos con un sinfín de elementos que reproducen el sexismo en la educación: el uso de los espacios y los tipos de juego según sexo y género, las expectativas académicas y profesionales asociadas a los roles de género, los niveles de participación, la división sexual del trabajo expresada también en el ámbito educativo, las dinámicas comprendidas en la convivencia escolar, las relaciones e interacciones docentes-estudiantes y entre estudiantes, y la falta de una mirada que propicie el buen trato por sobre el maltrato, entre muchas otras.

La importancia de trabajar la perspectiva de género desde el nivel relacional reside en que es en la cultura escolar donde se manifiestan y se arraigan en mayor medida los estereotipos de género (Morgade & Alonso, 2008). Muchos sesgos de género son invisibles y automáticos (p. ej., violencia simbólica), pero actúan como base para el desarrollo de la violencia de género. Para poder dismantelar estos estereotipos es indispensable revisar las prácticas escolares como los rituales, el uso de reglamentos, el tipo de lenguaje e interrelaciones, entre otros, que impactan en la configuración de la convivencia entre los y las integrantes de la comunidad educativa.

a) Convivencia escolar no sexista

Los establecimientos educacionales deben tener planes que contemplen estrategias concretas y transversales a todos los niveles, y que sean multiestamentales para la prevención de violencias de género en el contexto escolar. Esto implica contar con protocolos de acciones formativas que promuevan una cultura escolar y de relaciones equitativas y respetuosas entre pares y con docentes, y también con protocolos de actuación frente a situaciones de acoso y abuso sexual. Para que una comunidad escolar pueda educar en un ideal no sexista, es necesario que se centre en la inclusión, el desarrollo socioemocional y la valoración de la diversidad. La promoción de la colaboración entre las personas, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos que surjan desde la diferencia, son esenciales para la comprensión de la diversidad. Es importante asegurar, con especial atención, la protección y garantías de los derechos, y el

respeto e inclusión de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, contemplándose esto en los manuales de convivencia escolar de los establecimientos y supervisando su cumplimiento desde el Ministerio de Educación.

b) Instancias participativas para problematizar las violencias y desigualdades de género

Para sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las violencias de género, es necesario que se desarrollen proyectos que incluyan actividades orientadas a trabajar en qué significan estas y sus implicancias, con todos los estamentos presentes. Incorporar esta estrategia posibilita que la comunidad educativa aprenda a identificar sus diferentes dimensiones, así como sus diversas expresiones: los micromachismos, el uso de un lenguaje sexista, la invisibilización de las minorías sexuales, etc.

c) Uso de espacios, juegos y materiales

Las personas que se desenvuelven en los espacios educativos, los habitan desde sus corporalidades y expresiones de género, lo que también se ve afectado por las normas sociales de género (Troncoso et al., 2019). De acuerdo con Estrada (2001), en los escenarios escolares se da tempranamente la apropiación de la norma mediante complejos procesos de disciplinamiento corporal de estudiantes. Mientras las niñas aprenden a “mantenerse dentro de los márgenes”, reuniéndose en los pasillos y entornos periféricos (Estrada, 2001), los espacios abiertos, canchas y lugares de juego son usados generalmente por los niños. Además, usualmente los niños utilizan pantalones y pueden desplazarse de manera cómoda y libre, mientras que las niñas deben usar faldas o vestidos que les impiden jugar y realizar determinados movimientos. Esto impacta en el desarrollo de sus experiencias, habilidades e intereses. Se sugiere transitar hacia el uso de uniformes neutros o el cese de estos, para así promover un desarrollo equitativo (Cantó & Ruiz, 2005) y fomentar el uso igualitario de los espacios físicos en la escuela.

d) Lenguaje inclusivo

El uso de un lenguaje inclusivo en una ENS puede ser una herramienta transformadora tanto en la esfera identitaria personal como en el pensamiento y en la historia colectiva, procesos socioculturales, institucionales y políticos (Carreño, 2020). El Mineduc (2017) señala que debemos “modificar lengua-

jes, actitudes y comportamientos para educar desde el respeto y generar una verdadera inclusión educacional, que valore la diversidad y fortalezca el pleno desarrollo de todas las personas” (p. 25). El uso del lenguaje inclusivo posibilita un cambio que es necesario para la integración de niñas, niños y diversidades sexo-genéricas en el espacio escolar. La utilización de este tipo de lenguaje posibilita que se reconozca el valor y el aporte que realizan mujeres y la comunidad LGBTQIA+ a la sociedad y, de esta forma, puede fortalecer el sentido de pertenencia en una comunidad educativa.

CONCLUSIONES

Pensar la equidad de género en la educación es urgente y fundamental, pues tiene un impacto en múltiples dimensiones de la vida de las personas. Incide de manera directa en los procesos de formación en educación sexual integral, el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la valoración de la diversidad, el desenvolvimiento de la autoestima, autoconfianza e identidad, y en las elecciones vocacionales y trayectorias de vida de los y las estudiantes. Las experiencias desiguales de hombres y mujeres en el contexto escolar repercuten también en las proyecciones de vida, como, por ejemplo, en las elecciones de carreras y proyectos. Esto, a su vez, se relaciona con la calidad de vida, la brecha salarial, la asimetría de poder y el prestigio entre hombres y mujeres que se da en el mundo en el que hoy se mueven las nuevas generaciones.

El Modelo Educativo No Sexista desarrollado por Fundación Niñas Valientes busca ser una propuesta de sistematización y orientación respecto a las principales dimensiones a trabajar para avanzar hacia una educación que promueva la equidad de género, considerando diversos niveles y dimensiones de acción y la mirada de todos los estamentos educativos.

La transformación de la educación requiere de esfuerzos y trabajo en red entre múltiples contextos, lo que abre diversos caminos. La propuesta descrita entrega luces para trabajar en el campo de acción de las comunidades educativas, pero, aun así, el desafío va más allá de lo que cada escuela y equipo pueda realizar en sus propios contextos. Es necesario avanzar en políticas públicas educativas que transformen la institucionalidad y estructura del sistema educativo en general, con el fin de que los cambios consideren el contexto país y, a su vez, acompañen en términos estructurales y de recursos a cada institución educativa en su actuar.

Como fundación consideramos que, para materializar estas transformaciones, existen algunas medidas mínimas que deben ser trabajadas e implementadas en el contexto nacional, a saber: la creación de políticas públicas específicas en materia de ENS; una Ley de Educación Sexual Integral que la garantice como un derecho, entregando líneas de acción y recursos para su ejecución;

y generar cambios profundos en la formación docente para incorporar una visión con perspectiva de género desde el inicio de la formación de trabajadores y trabajadoras de la educación.

Son múltiples y complejos los desafíos, pero cada vez recorreremos más caminos y hoy, con mayores posibilidades que nunca, nuestra sociedad está trabajando por avanzar hacia una ENS que promueva el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

REFERENCIAS

- Alles, M. (2016). *Selección por competencias: atracción y reclutamiento en redes sociales. Entrevista y medición de competencias*. Buenos Aires: Ediciones Granica.
- Araya Umaña, S. (2011). Hacia una educación no sexista. *Actualidades Investigativas en Educación*, 4(2). <https://doi.org/10.15517/aie.v4i2.9088>
- Azúa, X., Saavedra, P., & Lillo, D. (2019). Injusticia social naturalizada: evaluación sesgo de género en la escuela a partir de la observación de videos de la evaluación docente. *Perspectiva Educacional*, 58(2), 69-97. <https://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.2-art.916>
- Bruna, J. (2023). Sesgos de género en la autoeficacia y participación cívica escolar. En *Tejiendo rutas: Perspectivas para un Chile con equidad de género*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Cantó, R. & Ruiz, L. M. (2005). Comportamiento motor espontáneo en el patio de recreo escolar: análisis de las diferencias por el género en la ocupación del espacio durante el recreo escolar. *International Journal of Sport Science*, 1(1), 28-45.
- Carreño, S. (2020). ¿Por qué utilizar lenguaje inclusivo? Una perspectiva fenomenológica. *Revista Nomadías*, 29, 237-255.
- Centro de Estudios Mineduc (2020). Apuntes 10: Informe del sistema educacional con análisis de género 2018. <https://hdl.handle.net/20.500.12365/18878>
- Centro de Estudios Mineduc (2021). Apuntes 17: Informe estadístico del sistema educacional con análisis de género 2021. https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2021/12/APUNTES-17_2021_fd02.pdf
- Cumsille, P., & Martínez, M. L. (2015). La escuela como contexto de socialización política: influencias colectivas e individuales. En Cox, C. y Castillo, J. C. (Eds.). *Aprendizaje de la ciudadanía: contextos, experiencias y resultados* (p. 431-457). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica.
- Del Río, M. F., Strasser, K., & Susperreguy, M. I. (2016). ¿Son las habilidades matemáticas un asunto de género? Los estereotipos de género acerca de las matemáticas en niños y niñas de kínder, sus familias y educadoras. *Revista Calidad en la Educación*, 45, 20-53.

- Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. *Annual Review of Psychology*, 69 (1), 275-298. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719>
- Espinoza, A. M., & Taut, S. (2016). El rol del género en las interacciones pedagógicas de aulas de matemática chilenas. *Psykhē*, 25, 1-18. <https://doi.org/10.7764/psykhe.25.2.858>
- Estrada, A. M. (2001). Los fragmentos del calidoscopio. Una propuesta teórico-metodológica para el análisis cualitativo de las relaciones de género en la escuela. *Nómadas*, 14, 10-22.
- González Gil, F., & Martín Pastor, M. E. (2014). Educación para todos: formación docente, género y atención a la diversidad. *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, 9, 11-28.
- Gundersen, E., Ramírez, G., Levine, S., & Beilock, S. (2011). The role of parents and teachers in the development of gender-related math attitudes. *Sex Roles*, 3-4(66), 153-166. <http://doi.org/10.1007/s11199-011-9996-2>
- Jiménez-Moya, G., Contreras, C., Del Río, M., & Paz, S. (2022). ¿Seguir al colegio o a los pares? El efecto de las normas sociales en las actitudes hacia la desigualdad de género. *Revista Calidad de la Educación*, 57, 44-66.
- Luengo Kanacri, P. B., & Jiménez-Moya, G. (2017). Good practices on civic engagement in Chile and the role of promoting prosocial behaviors in school settings. En García-Cabrero, B., Sandoval-Hernández, A., Treviño, E., Diazgranados-Ferrand, S., & Pérez, G. (Eds.). *Civics and citizenship. Theoretical models and experiences in Latin America* (p. 241-254). Rotterdam: Sense Publishers.
- Marchant, T., & Milicic, N. (2020). Educación Emocional en el sistema escolar chileno: un desafío pendiente. En Corvera, M. T. & Muñoz, G. (Eds.). *Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo chileno* (p. 53-76). Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://repsi.cl/wp-content/uploads/2020/04/Educacion-emocional-en-el-sistema-escolar-2.pdf>
- Ministerio de Educación (2013). Formación en sexualidad, afectividad y género. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Formación-en-Sexualidad-Afectividad-y-Género.pdf>
- Ministerio de Educación (2017). Orientación para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/439>
- Ministerio de Educación (2017). Documento de apoyo para la elaboración y revisión de la etapa de planificación anual del plan de mejoramiento educativo. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/07/Documento-de-Apoyo-PME-etapa-Planificacion-Anual-2017-1.pdf>
- Morgade, G., & Alonso, G. (2008). *Cuerpos y sexualidades en la escuela: de la "normalidad" a la disidencia*. Buenos Aires: Paidós.

- Nash, C. (2018). Educación no sexista y disidencias. Una mirada desde los derechos humanos. *Revista Nomadías*, 25, 123-134.
- Romagnoli, C. & Cortese, I. (2015). ¿Cómo la familia influye en el aprendizaje y rendimiento escolar? Ficha Valoras actualizada de la 1ª edición “Factores de la familia que afectan los rendimientos académicos” (2007). Recuperado en noviembre de 2022 de: <http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/familias/ApoyoAlAprendizajeEnLaComunidad/Fichas/Como-la-familia-influye-en-el-aprendizaje-y-rendimiento.pdf>
- Servicio Nacional de la Mujer y Centro de Medición MIDE UC (2009). Análisis de género en el aula (Documento de trabajo n° 117). Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/14939/analisis%20generoaula.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Torres Santomé, J. (1994). *El currículum oculto*. Madrid: Morata.
- Troncoso Pérez, L. E., Follegati, L., & Stutzin, V. (2019). Más allá de una educación no sexista: aportes de pedagogías feministas interseccionales. *Pensamiento Educativo: Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 56(1), 15. <https://doi.org/10.7764/pel.56.1.2019.1>
- Undurraga, R., & López Hornickel, N. (2020). Trayectorias laborales de mujeres y violencia en el trabajo: una cuestión de género. *Psykhé*, 29, 1-14. <http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.29.2.1494>.
- Unesco (2014). Educación integral de la sexualidad: conceptos, enfoques y competencias. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232800>
- Unesco (2020). Por qué es importante la educación integral en sexualidad. Recuperado en noviembre de 2022 de <https://es.unesco.org/news/que-es-importante-educacion-integral-sexualidad>

SECCIÓN 3

TRABAJO

Editora: Bárbara Flores

CAPÍTULO 7

¿CÓMO AFECTA LA LLEGADA DEL PRIMER HIJO/A LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE PADRES Y MADRES? UN ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL USANDO EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO¹

Juan Pedro Eberhard

EN EL ÚLTIMO tiempo, gran parte de la atención acerca de las brechas de género en el mundo laboral se ha centrado en las diferencias salariales. Es común ver noticias en la prensa acerca de las diferencias en el “salario promedio” entre hombres y mujeres. Sin embargo, la simple comparación de los salarios promedio no permite entender cabalmente todas las distinciones que existen entre hombres y mujeres a la hora de relacionarse con el mercado laboral y, al mismo tiempo, puede ser una mala manera de comparar dos grupos de trabajadores.

Partamos discutiendo este último punto para poder entender lo complejo que son las decisiones que debe tomar un trabajador a la hora de relacionarse con el mercado laboral. Para ejemplificar el problema de la comparación de promedios, supongamos que solo hay dos trabajos en una economía imaginaria: parvularios y operadores de retroexcavadoras. Por razones de mercado (por ejemplo, alta demanda de retroexcavadoras para la construcción), el salario de un operador de retroexcavadora es mayor que el de un parvulario (independiente del género del trabajador). Por razones culturales o de preferencia, en esta economía imaginaria, la gran mayoría de las mujeres decide trabajar como educadora de párvulos, y los hombres tienen una fuerte preferencia por ser operadores de retroexcavadora. Luego, al comparar los sueldos promedio, se obtiene que las mujeres tienen uno menor al de los hombres. Pero este resultado no se debe a discriminación por género, sino que a una selección de profesión distinta entre hombres y mujeres, y ambas profesiones u ocupaciones tienen salarios dispares.

Esto no quiere decir que todas las diferencias de salario entre hombres y mujeres se deba a diferencias en la selección de ocupaciones, sino que el ejemplo quiere ilustrar que, al comparar promedios, podemos estar confundiendo

¹ Este capítulo contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile a través de su proyecto Fondecyt de Iniciación ANID/Fondecyt 11180694, y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

la potencial discriminación que sufren las mujeres con otros mecanismos presentes en el mercado laboral que también afectan los salarios. Son estas múltiples decisiones en las que queremos centrarnos para estudiar cómo estas difieren por género.

Cuando un individuo decide participar en el mundo laboral, se verá enfrentado a una serie de decisiones que afectarán no solo su salario actual, si no que potencialmente toda su trayectoria laboral, es decir, el conjunto de condiciones laborales durante su permanencia en el mercado laboral (un aspecto de la trayectoria laboral es también cuánto tiempo se permanece trabajando y los períodos de desempleo o inactividad). Un individuo que entra al mercado laboral debe decidir en qué sector quiere trabajar, con qué tipo de contrato, cuántas horas y en qué tipo de empresa, entre otras características tanto de la empresa, de la ocupación y del sector.

Diversos estudios muestran que, por ejemplo, las trayectorias de quienes trabajan tiempo completo son distintas de quienes trabajan *part-time* (Blank, 1989). Por otro lado, los trabajadores con contrato indefinido también muestran diferencias con quienes tienen contratos temporales o a plazo fijo (Berg, 2017). Ciertos sectores presentan mayores salarios. Por ejemplo, en Chile, el sector minero tiene salarios promedios por sobre el promedio nacional, mientras que otros sectores que emplean un número importante de trabajadores tienen un salario menor al promedio nacional, como es el sector de manufactura y construcción (Villanueva, 2014). Luego, existen varias características de los empleos que generan cambios en el salario presente y, potencialmente, en el salario futuro, o más generalmente, en las trayectorias laborales.

Por consiguiente, para poder entender de mejor manera las brechas de género presentes en el mercado laboral, debemos prestar atención no solo a los salarios, sino que también a este conjunto de decisiones. En otras palabras, las diferencias entre los salarios observados entre hombres y mujeres pueden estar relacionadas con diferencias por género en decisiones como en qué sector trabajar, con qué tipo de contrato, cuántas horas, en qué tipo de empresa, etc.

La llegada del primer hijo/a implica un aumento en las necesidades de cuidado dentro del hogar y, por lo tanto, requiere de una reestructuración de las responsabilidades y tiempos dedicados al trabajo dentro de este. Por diversas razones, es común observar que las madres son las que ajustan significativamente sus horarios de manera de cubrir la mayoría de los requerimientos de cuidado del recién nacido. Este reordenamiento de las labores dentro del hogar lleva a que la llegada del primer hijo/a cambie la forma en que las madres (y potencialmente los padres) se relacionan con el mercado laboral, afectándola en varias dimensiones (Behrman, 1997).

Para el caso de Chile, el trabajo de Jáuregui y Hermann (2019) presenta diferencias de género importantes en las distintas características de los empleos. Por ejemplo, los autores muestran que el 65% de los hombres trabaja

en ocupaciones del tipo asalariado privado, mientras que solo el 41% de las mujeres lo hace. Pero el 11.9% de las mujeres trabaja como asalariada en el sector público, contra un 8.5% de los hombres. Este tipo de diferencias han sido encontradas en otras partes del mundo (Kleven, 2019a) y pueden estar relacionadas a la decisión de las madres de buscar trabajos que faciliten las labores de cuidado. Jáuregui y Hermann también advierten que las mujeres dedican 6,07 horas diariamente al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo destinan 2,74 horas. Esto también indica que las mujeres, y posiblemente las madres, buscan trabajos que les permitan dedicar más horas a actividades no remuneradas asociadas al hogar. Los mismos autores encuentran que, por ejemplo, 30.2% de los hombres trabajan en el sector industria (y solo 8.5% de las mujeres), mientras que el 85.9% de las mujeres trabaja en el sector servicios (y un 57% de los hombres).

EFFECTOS DE LA LLEGADA DEL PRIMER HIJO/A EN EL MERCADO LABORAL

Investigar el efecto que tiene la maternidad o paternidad en la relación con el mercado laboral tiene una dificultad estructural. La forma ideal de estudiar cómo el nacimiento de un hijo/a afecta nuestras decisiones, es comparándolas con y sin el hijo/a. Es decir, idealmente deberíamos comparar dos realidades que nunca coexisten: una donde no existe el primer/a hijo/a, y otra donde existe el primer hijo/a, pero todo el resto (hasta ese punto) se mantiene exactamente igual. En otras palabras, la forma ideal de estudiar el efecto de la maternidad y paternidad consiste en comparar la realidad factual (la que observamos) con una realidad contrafactual.

Obviamente, no es posible observar ambas realidades, por lo que se han desarrollado métodos para aproximar este análisis ideal usando los datos que observamos en la realidad. Uno de estos métodos consiste en comparar las trayectorias laborales, es decir, un conjunto de variables que describen las características de nuestro trabajo en el tiempo. Por ejemplo, comparamos los salarios, horas trabajadas, empleabilidad de mujeres y hombres con y sin hijos/as. Lo natural sería esperar que no se observasen muchos patrones: podríamos distinguir hombres que tienen trayectorias salariales ascendentes, pero otros descendentes o planas, mujeres que tienen trayectorias ascendentes y otras no tanto, etc. Esto es, en parte, porque estamos comparando sin una lógica definida, por lo que es difícil que los datos nos muestren un patrón.

Una forma de obtener una mejor comparación consiste en ordenar las trayectorias de manera que haya algún punto de referencia sobre el cual estas tengan un sentido más temporal. Por ejemplo, podemos designar el momento en que se obtiene el título de enseñanza superior como el momento "0". Es decir, el salario recibido un año antes de la titulación diremos que es el salario "-1",

y el recibido un año después de la titulación será el “1”. Luego, independientemente de si una persona se graduó a los 22 y otra a los 25 años, ordenamos temporalmente sus trayectorias poniendo el momento “0” en la titulación. En este caso, no nos estamos concentrando en comparar el salario para una edad determinada (que es preguntarse cuánto ganabas a los 24 años, por ejemplo), sino que estamos intentando estudiar si ese evento (la titulación), más allá de la edad del individuo, afecta la trayectoria (lo que equivale a preguntarse cuánto ganabas en tu primer año como titulado). Este tipo de análisis se llama estudio de evento (*event study* en inglés), y es una de las herramientas más usadas para estudiar el efecto en trayectorias de eventos bien definidos.

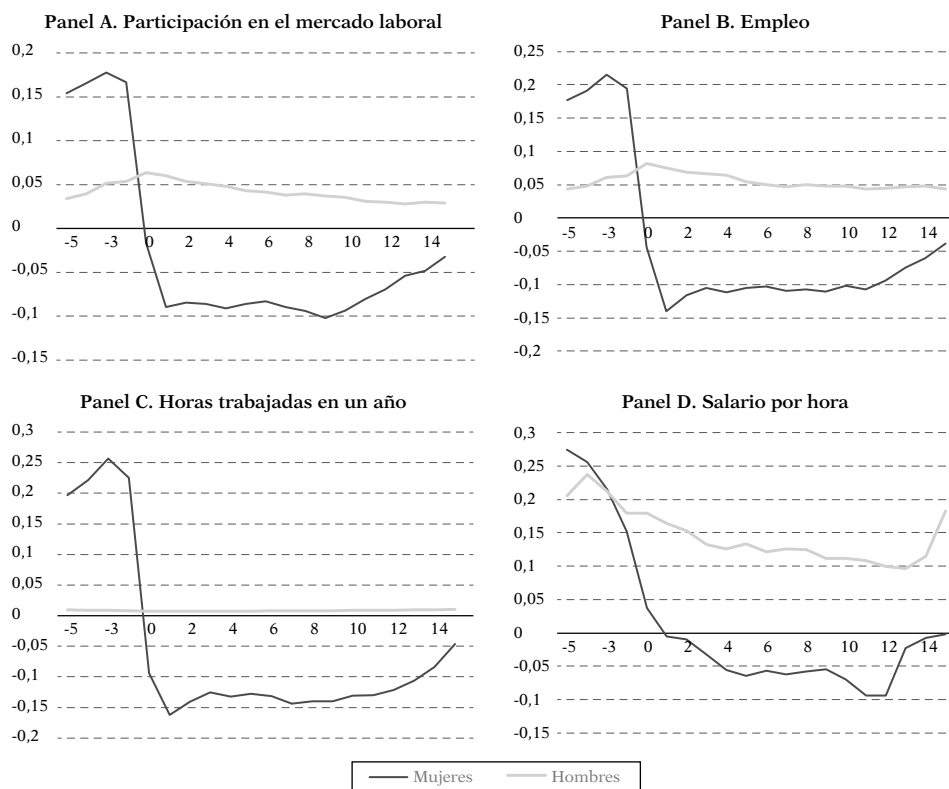
Volviendo al caso del efecto de la maternidad y paternidad, centramos las trayectorias en el momento del nacimiento. Estudiar este tema usando un estudio de evento ha sido realizado en varios países, en particular, Kleven et al. (2019a) lo hicieron para Dinamarca, encontrando que el nacimiento del primer hijo/a afecta la participación laboral, las horas trabajadas y el ingreso. Usando un metaanálisis, Cukrowska-Torzewska y Matysiak (2020) muestran que el cambio en las trayectorias laborales de las madres se debe principalmente al cambio en la acumulación de capital humano asociado a las ausencias en el mercado laboral, pero también a su elección del tipo de trabajo y condiciones de empleo. Kleven (2019b) revela efectos de la maternidad en las trayectorias laborales para Dinamarca, Suecia, Alemania, Austria, Estados Unidos y el Reino Unido; Eberhard et al. (2022) muestran los resultados de un estudio de evento para Chile.

La figura 1 indica el efecto en la trayectoria de la participación laboral², en la tasa de empleo, en el número de horas trabajadas y en el salario por hora. Es fácil observar que el nacimiento de un hijo/a tiene efectos en las trayectorias laborales. Sin embargo, este es marcadamente superior para las mujeres. Por ejemplo, en los paneles A y B se observa que, para los hombres, la participación laboral iba en aumento y, después del primer hijo/a, en el momento “0”, la tendencia pasa a ser levemente a la baja. Este cambio en tendencia es prácticamente insignificante al observar la enorme caída de participación laboral y empleo que se observa para las mujeres en los mismos paneles.

Los paneles A y B nos muestran que, al comparar las trayectorias de las mujeres justo antes de tener el primer hijo/a y justo después de tenerlo, se verifica una caída en la participación laboral de un 25%. Es decir, al comparar mujeres con y sin hijos/as, se observa que las mujeres con hijos/as participan un 25% menos en el mercado laboral, y esta diferencia se produce exactamente al momento del nacimiento del primer hijo/a. Similarmente, al comparar las trayectorias de empleo, el nacimiento del primer hijo/a disminuye la empleabilidad en un 32%.

² Un individuo que participa en el mercado laboral se define como alguien que está trabajando o busca empleo activamente.

FIGURA 1.



El panel C es muy interesante, porque nos muestra claramente que los hombres tienden a no reasignar horas de su trabajo al cuidado infantil. Vemos que, en términos de horas trabajadas, no se observa variación para los hombres, pero sí hay una variación enorme para el caso de las mujeres. De este modo, son las madres las que deben hacer ajustes en su relación con el mercado laboral para poder proveer de los cuidados que los hijos/as necesitan. Así, las mujeres ven reducidas sus horas laborales en un 38%. Una forma de interpretar este resultado es que un porcentaje significativo de las madres escoge trabajos con horarios más flexibles o *part-time* de manera de poder complementar las labores de cuidado de los hijos/as con el mercado laboral.

Finalmente, el panel D nos muestra la evolución en el tiempo del salario por hora. Cabe hacer notar que lo mostrado en este panel nos indica que usar el salario total no tiene mucho sentido al comparar hombres con mujeres, ya

que, al disminuir la cantidad de horas trabajadas, es natural que el salario promedio de las madres sea menor que el de hombres (que no cambian su carga horaria) y mujeres sin hijos/as. Luego, al comparar las trayectorias del salario por hora, se observa una caída adicional en este para las madres. Es importante notar que los hombres también sufren una caída, pero esta es 10 veces más grande para las mujeres.

Resumiendo, los siguientes efectos le pueden pasar a una madre al tener un hijo/a: ver una caída en su salario por hora 10 veces más grande que la que observa un padre, disminuir en un 38% el número de horas que se trabaja, y descender la probabilidad tanto de estar empleada como de participar siquiera del mercado laboral.

Lamentablemente, la metodología del estudio de evento no permite determinar si estos efectos suceden simultáneamente, o algunos les ocurren a algunas madres y otros a otras madres, si lo correcto es considerar que una madre sufre solo uno de estos efectos negativos, o más bien es la suma de algunos de ellos, etc. Sin embargo, tanto esta metodología como otras³, coinciden en que los efectos de tener hijos/as se observan principalmente en las mujeres y son multidimensionales. Es decir, el efecto no se circunscribe solo a los salarios, sino que también afecta la empleabilidad, la participación laboral, las horas trabajadas, el tipo de firma en la que se trabaja, el tipo de contrato, etc.

Estos resultados invitan a pensar que un modo más apropiado para realmente entender el efecto que tiene la maternidad y paternidad en la relación con el mercado laboral, es utilizando índices o formas de agregar el efecto multidimensional que la llegada del primer hijo/a tiene para madres y padres. De esta manera, podemos encapsular en el mismo indicador o índice los efectos que tiene para una madre que solo ve afectado el número de horas que trabaja, con los efectos que tiene para otra madre que ve afectada su empleabilidad, sus horas trabajadas y su salario.

Recientemente, Sehnbruch et al. (2020) desarrollaron un índice de calidad del empleo. Este índice considera tres dimensiones principales de la relación del individuo con el mercado laboral: salario, estabilidad laboral y condiciones del empleo. Las últimas dos dimensiones están, a su vez, construidas en base a dos subdimensiones cada una: permanencia y estatus laboral, y exceso de horas trabajadas y aporte al sistema de pensiones, respectivamente. El índice toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el trabajador está privado de esa dimensión, y 0 significa que no lo está. Cada dimensión es ponderada por 1/3, por lo que cada subdimensión lo es por 1/6. Es decir, si un individuo solo tiene exceso de horas trabajadas, su índice es 1/6. Si además el trabajador no

³ Eberhard et al. (2022) muestra resultados con otra forma de comparar trayectorias que se basa en un proceso de emparejamiento de individuos similares. Esta metodología es llamada *propensity score matching*.

tiene contrato (es decir, está privado de estatus laboral permanente), su índice aumenta a $1/3$, ya que tendría un valor de $1/6$ por estar privado de estatus permanente y otro $1/6$ por exceso de horas trabajadas.

La literatura que estudia la calidad del empleo se ha centrado, principalmente, en investigar las diferencias entre sus condiciones pecuniarias y no pecuniarias. Recientemente, la literatura ha empezado a usar índices para describir la calidad del empleo, dada la multidimensionalidad de lo que se entiende por este concepto. Así, se ha centrado en comparar la calidad de empleo entre grupos, como inmigrantes o mujeres (p. ej., Fabry et al., 2022), pero, en particular, el efecto de la maternidad o paternidad no ha sido estudiado a través del uso de índices⁴.

Usando datos de la Encuesta de Protección Social (EPS) de Chile, se construyó un panel desbalanceado de 2.020 mujeres y 1.923 hombres que fueron encuestados en al menos dos de los años que la EPS fue realizada. Usando estos datos, es posible calcular para cada individuo en la muestra su índice de calidad del empleo en dos períodos y, de esta forma, estudiar si el índice cambia después del nacimiento del primer hijo/a.

Los resultados para mujeres se presentan en la tabla 1 y los de hombres en la tabla 2. Además de separar la muestra entre hombres y mujeres, también se considera la educación de los individuos y los clasificamos en dos grupos educacionales⁵.

La tabla 1 nos muestra que tener un hijo/a produce un aumento en la privación de la calidad del empleo de un 30%. Sin embargo, este aumento está concentrado en las mujeres de menor educación, ya que para ellas la cifra alcanza un 33%. Esto es equivalente a pensar que una de las dimensiones del índice pasa de estar en estado normal a privado. Por ejemplo, tener un hijo/a para madres con menor educación es equivalente a dejar de trabajar con un contrato indefinido y pasar a empleos a contrata o informales, y, al mismo tiempo, dejar de aportar para el sistema de pensiones. En el caso de un hogar donde solo vive la madre y es de menor educación, tener un hijo/a implica una caída en el salario que lleva al hogar a estar por debajo de la línea de la pobreza.

Los efectos descritos no se observan en mujeres de mayor educación, donde no se verifica un cambio estadísticamente significativo en el índice de calidad del empleo. Esto no quiere decir que no haya cambios en sus trayectorias, sino que el cambio no es lo suficientemente grande como para que una dimensión o subdimensión se considere disminuida de tal manera que pase a encontrarse despojada de esa calidad en el empleo.

⁴Eberhard et al. (2022), que es el manuscrito sobre el cual este capítulo está basado, utiliza índice para estudiar el efecto de maternidad y paternidad en trayectorias laborales.

⁵“Mayor educación” son los individuos con 12 años de educación o más. Los individuos que tienen menos de 12 años de educación son clasificados como “menor educación”.

TABLA 1: *Probabilidad de incrementar la privación de la calidad del empleo, muestra de mujeres, efectos marginales*

<i>Variables</i>	(1) <i>Todas las mujeres</i>	(2) <i>Mujeres con mayor educación</i>	(3) <i>Mujeres con menor educación</i>
Tiene hijo/a	0.309*** (0.114)	-0.453 (0.362)	0.334*** (0.122)
Observaciones	1,758	216	1,542
Inverse Mills Ratio	0.388	-0.719	0.427
Wald Stat	90.93	39.79	86.19
Errores estándar en paréntesis. La regresión incluye controles para profesión, industria, edad del hijo/a menor, tener pareja, estatus contractual, horas trabajadas, edad y si el trabajo es permanente. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

No es sorprendente, a la luz de la discusión, que tampoco se observaran efectos estadísticamente significativos para los hombres, como lo muestra la tabla 2. Es interesante que la no existencia de efectos en la calidad del empleo después de tener un hijo/a para los hombres se observa tanto para los de mayor educación como para los de menor educación. Esto indica que la caída en la calidad del empleo está más relacionada al género de las personas que a su nivel educacional.

TABLA 2: *Probabilidad de incrementar la privación de la calidad del empleo, muestra de hombres, efectos marginales*

<i>Variables</i>	(1) <i>Todos los hombres</i>	(2) <i>Hombres con mayor educación</i>	(3) <i>Hombres con menor educación</i>
Tiene un hijo/a	0.107 (0.103)	0.161 (0.227)	0.115 (0.110)
Observaciones	1,152	141	1,011
Inverse Mills Ratio	0.206	0.474	0.207
Wald Stat	132.2	40.44	123.1
Errores estándar en paréntesis. La regresión incluye controles para profesión, industria, edad del hijo/a menor, tener pareja, estatus contractual, horas trabajadas, edad y si el trabajo es permanente. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

CONCLUSIONES

Las brechas de género en el mercado laboral no solo se refieren a las diferencias en el salario promedio, sino que también en otras múltiples dimensiones asociadas a la relación con el mercado laboral: horas trabajadas, participación laboral, tipo y tamaño de empresas, tipo de contratos, entre otras variables. Una potencial causa de estas diferencias puede ser el impacto que tiene en la organización interna del hogar la llegada del primer hijo/a. En muchos casos, son las mujeres las que deben acomodar sus horarios para poder entregarle cuidado. Se realiza un estudio de evento usando datos chilenos para ilustrar las diferencias en las trayectorias de algunas variables asociadas al mercado laboral de hombres y mujeres antes y después de tener el primer hijo/a. Estas comparaciones de trayectorias permiten mostrar el enorme cambio que produce la llegada de un hijo/a para las madres, pero no así para los padres. Las madres ven disminuir su participación en el mercado laboral un 35%, reducen su empleabilidad en un 32%, y las horas trabajadas caen en un 48%.

Sin embargo, estos resultados son efectos parciales asociados al nacimiento del primer hijo/a. Este tipo de estudios no permite saber si estos efectos son simultáneos, o las madres sufren solo uno de ellos y no todos al mismo tiempo. Para poder mostrar de mejor manera el efecto agregado, multidimensional, de la llegada del primer hijo/a, se utiliza un índice de calidad del empleo para estudiar el efecto simultáneo de la llegada del primer hijo/a en varias dimensiones.

Este estudio se hace para hombres y mujeres por separado, pero también consideramos el nivel educacional para analizar si hay diferencias en el efecto asociadas a esta característica individual. Se muestra que hombres y mujeres de mayor educación no presentan cambios significativos en el índice de calidad del empleo, pero las madres de menor educación sufren una caída substancial en ella. El uso del índice nos permite advertir que la suma de los efectos multidimensionales asociados a la llegada del primer hijo/a, es equivalente a pasar de tener contrato indefinido a trabajar a contrata o informalmente y, al mismo tiempo, dejar de aportar al sistema de pensiones o seguridad social. Para hogares donde solo vive la madre con su hijo/a, su nacimiento genera efectos de calidad en el índice equivalentes a una pérdida de salario de tal magnitud, que pondría a la familia bajo la línea de la pobreza.

REFERENCIAS

- Behrman, J. R. (1997). Intrahousehold distribution and the family. *Handbook of Population and Family Economics*, 1, 125-187.
- Berg, J. (2017). Contractual status, worker well-being and economic development. *The Indian Journal of Labour Economics*, 60(2), 121-136.
- Blank, R. M. (1989). The role of part-time work in women's labor market choices over time. *The American Economic Review*, 79(2), 295-299.
- Cukrowska-Torzewska, E., & Matysiak, A. (2020). The motherhood wage penalty: a meta-analysis. *Social Science Research*, 88:102416.
- Eberhard, J., Fernandez, J. & Lauer, C. (2022). Effects of maternity on labour outcomes and employment quality for women in Chile. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://ssrn.com/abstract=4156427>
- Jáuregui, A. & Hermann, J. (2019) Boletín mercado laboral y brecha salarial en Chile. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo.
- Kleven, H., Landais C., & Søgaaard J. E. (2019a). Children and gender inequality: evidence from Denmark. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4), 181-209.
- Kleven, H., Landais, C., Posch, J., Steinhauer, A., & Zweimüller, J. (2019b). Child penalties across countries: evidence and explanations. *AEA Papers and Proceedings*, 109, 122–126. <https://doi.org/10.1257/pandp.20191078>
- Sehnbruch, K., González, P., Apablaza, M., Méndez, R. & Arriagada V. (2020). The Quality of Employment (QoE) in nine Latin American countries: a multidimensional perspective. *World Development*, 127, 104738. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104738>
- Villanueva, L. (2014). Wage inequality and trade globalization in Chile and Mexico. [Paper presentation]. 23rd IIOA conference, Ciudad de México, México.

CAPÍTULO 8

CUIDADOS Y PARTICIPACIÓN LABORAL: UN ANÁLISIS DIFERENCIADO POR GÉNERO⁶

Bárbara Flores y Francisca Ortiz

“Cuida mejor la casa la mujer que es modesta
y no tiene una vida mental imaginada.
Si del hombre que adora se comprende engañada
recibe lo que sobra, y a su lado se acuesta”.

Alfonsina Storni, Antología poética.

LA PARTICIPACIÓN laboral de las personas en edad de trabajar se puede ver limitada por factores culturales y contextuales. No solo eso, sino que también las normas sociales de género podrían entregar o quitar oportunidades a quienes quieren ser parte del mercado laboral. Este fenómeno ha sido previamente estudiado, por lo que en este texto nos centraremos en revisarlo desde la óptica de la ética de los cuidados. Así, revisaremos los aspectos que influyen en la probabilidad de participar en el mercado laboral, estableciendo el foco en mujeres y hombres que cuidan de otros en su hogar. En particular, nos focalizaremos en factores explicativos asociados a las características de las personas, distinguiendo a aquellas que son cuidadoras, su hogar, su red personal y la cantidad de horas semanales que dedica a los cuidados.

PARTICIPACIÓN LABORAL DE MUJERES Y HOMBRES QUE CUIDAN

En la sociedad actual, los cuidados de todo tipo juegan un papel esencial en la vida de cualquier persona. Conceptualizaremos al cuidado como “toda actividad —directa o indirecta— que posibilita el bienestar multidimensional de las personas, facilitando el desarrollo y mantenimiento de la vida cotidiana” (González, 2018), teniendo en cuenta que este bienestar es para las personas receptoras, y considerando a los cuidados como una forma transversal a

⁶ Esta investigación fue apoyada por el Programa Iniciativa Científica Milenio de la ANID (ICS2019_024), y por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009. Antonia Martín Fuenzalida realizó un excelente trabajo como ayudante de investigación.

todos los individuos existentes en una sociedad. Este tipo de actividades se encuentran envueltas en un contexto social en el que existen desigualdades a nivel estructural, tales como por el género o el nivel socioeconómico de quien da/recibe cuidados (Ortiz & Belotti, 2021). Si vemos los cuidados a un nivel macro, entonces estamos hablando de la organización social del cuidado, la cual corresponde a “interrelaciones entre políticas económicas y sociales del cuidado. Se trata de la forma de distribuir, comprender y gestionar la necesidad de cuidados que sustenta el funcionamiento del sistema económico y la política social” (Arriagada, 2010). Si la organización de estos cuidados a nivel social se encuentra en desequilibrio, entonces eso repercute en la vida de las personas en distintos niveles. En particular, en este estudio se evaluarán diferentes variables acerca del tiempo dedicado al cuidado de otros y cómo estas se encuentran asociadas a la probabilidad de participar en el mercado del trabajo, diferenciando por género.

En la literatura sobre cuidados, se suele partir del hecho de que el aumento de la participación laboral femenina fue uno de los factores asociados al tensionamiento de los modelos tradicionales del cuidado familiar y la protección social (Arriagada, 2005). La mayor expansión de la participación de la mujer en el mercado del trabajo se produjo hacia los años sesenta debido a los avances tecnológicos, los que permitieron sustituir las labores que tradicionalmente realizaban ellas en el hogar. La reducción en el precio de electrodomésticos ha permitido su proliferación y el ingreso en masa de las mujeres al mercado laboral (Cavalcanti & Tavares, 2008). Asimismo, la masificación del uso de métodos anticonceptivos orales permitió a las mujeres posponer decisiones de matrimonio, aumentar su escolaridad y mejorar su inserción al mercado del trabajo (Goldin & Katz, 2002). Aun así, este aumento en la participación laboral no ha significado que el género de la persona no siga siendo un factor relevante a considerar al momento de medirla. De hecho, su consideración en los análisis ha provenido no solo de la economía clásica (Killingsworth & Heckman 1986; Blundell, Ham & Meghir 1987; Goldin, 2006), sino que también de corrientes feministas, especialmente en los años noventa (Esping-Andersen, 1990; Lewis, 1992; De Beauvoir, 1998; Martin, 2008). Pero, a pesar de esos esfuerzos para evidenciar las brechas, continuamos teniendo desigualdades de género a nivel estructural en la sociedad.

El hecho de tener la responsabilidad de cuidar de otras personas conlleva tiempo, recursos, habilidades, información y dinero. Además de ello, los cuidados muchas veces involucran una implicación emocional, que puede representar, a su vez, una tensión en esas relaciones (Glenn, 2012; Ortiz & Belotti, 2021). Todas estas actividades, suponen que la persona que cuida debe conciliarlas con su participación en el mercado laboral, el cual no necesariamente cuenta con la flexibilidad necesaria para compatibilizar trabajo y cuidados. Esto, asimismo, puede tener ciertas consecuencias con respecto a

distintas condiciones laborales, como, por ejemplo, el tipo de contrato, si la persona está empleada o si tiene contrato permanente. La división de tareas, responsabilidades y funciones según el género de la persona en la sociedad sigue presente (Logarreta, 2008); entre otras cosas, esto ha implicado la domesticidad como sinónimo de femineidad, y la mantención de lo “privado” en el hogar y al lado de las mujeres. Toda esta conceptualización errada ha tenido consecuencias para las mujeres, no solo en torno a la participación en el mercado laboral, sino que también en sus salarios, acceso y condiciones de permanencia en él (Scott, 1993). De este modo, evaluaremos de qué forma la participación laboral es influenciada por las características de la persona, su hogar y red personal, con especial foco en las horas dedicadas al cuidado, y cómo esa influencia es diferente según el género de quien cuida.

Respecto a las características de la persona, evaluaremos si la edad, escolaridad, tener pareja y presencia de un/a menor de seis años tiene alguna influencia en la participación laboral. En particular, nos enfocaremos en analizar si, fijando los factores demográficos, contar con niños/as pequeños/as en el hogar afecta la participación laboral según el género y controlando por horas de cuidado. La tenencia de un/a menor de seis años implica un cuidado y atención constante, lo que se ha encontrado en la literatura ser perjudicial para las trayectorias laborales de las mujeres, con el fenómeno llamado *child penalty* o castigo por maternidad sobre participación y salarios. Esta penalización por tener hijos/as y, sobre todo, menores, ha sido encontrada en varios casos estudiados como un aspecto que afecta principalmente a las mujeres de manera negativa, mientras que para los hombres su efecto es contrario: tener hijos/as pequeños/as los beneficiaría en su participación laboral (Kleven et al., 2019).

Si consideramos una división dicotómica de las labores, tal y como ha sido rectificado por la bibliografía (Scott, 1993; Arriagada, 2008; González, 2018), la moralidad del tiempo que se debe destinar al hogar y lo que allí sucede a cargo de las mujeres de la familia sigue presente en la sociedad. Debido a esto, es que en esta investigación se evaluarán tres características del hogar, ya que es el contexto más inmediato de las personas. En primer lugar, quién es el principal sostenedor del hogar y, por lo tanto, su responsable en términos de recursos económicos. En segundo lugar, la escolaridad del sostenedor nos permitirá saber un poco más sobre el nivel de calificaciones de ese rol y se considera un *proxy* del nivel socioeconómico del hogar. Así, se esperaría que las mujeres que no son el principal sostenedor del hogar disminuyan su probabilidad de integrarse al mercado del trabajo a medida que este aumente su escolaridad, debido a un efecto ingreso. Por último, la presencia de otra mujer adulta podría, eventualmente, significar un apoyo y redistribución de las labores domésticas y, en consecuencia, el cargo de cuidados no estaría sobre los hombros de solo una mujer en el hogar, liberando tiempo para ser dedicado al mercado del trabajo (Arriagada, 2010).

En cuanto a la red personal, se ha planteado en la actualidad que “la distribución de recursos, poder y tiempo influyen en la participación diferencial de las mujeres en el mercado laboral, en la esfera política y, en general, en la esfera pública” (Martin, 2008). En este contexto, el barrio próximo y las personas conocidas son un acceso directo a otros contactos, por lo tanto, esas redes personales se pueden traducir en ayuda concreta, recursos e información (Mc Carty et al., 2019), y pueden contribuir de manera positiva al acceso al mercado laboral por parte de las mujeres (Flores, 2021a), especialmente de aquellas que cuidan de otros. En la encuesta utilizada en esta investigación se pregunta si se tiene confianza con los vecinos y el número de conocidos aproximados, lo que consideramos como un *proxy* de la red personal, y analizaremos su relación con la probabilidad de participar en el mercado del trabajo.

Además de los factores anteriores, nuestro análisis se centra en la cantidad de horas semanales dedicadas al cuidado de personas mayores, que presentan alguna enfermedad o discapacidad en el hogar y su relación diferenciada por género sobre la participación laboral.⁷ Tal y como se ha mencionado, las labores de estos cuidados exigen tiempo de la persona que realiza este trabajo no remunerado. Las encuestas sobre el uso del tiempo han sido fundamentales para medir este tipo de actividades y, por lo tanto, dar visibilidad a la desigualdad de género en estas labores. Han sido utilizadas ya en varios países en donde, por ejemplo, se han encontrado diferencias de mujeres que dedican hasta el doble de horas semanales a labores de cuidado en comparación a los hombres (Batthyany, 2010; Masanet & La Parra, 2009; ONU Mujeres, 2020). Estas diferencias por género son incluso más intensas cuando se tiene un hijo/a menor de seis años (Batthyany, 2010), o cuando se vive en situación de pobreza (ONU Mujeres, 2020). En Chile, a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas, se ha constatado que las mujeres que participan en el mercado laboral tienen tres jornadas de trabajo: trabajo remunerado, trabajo doméstico y actividades de cuidado (Flores, 2021b).

⁷ ELSOC no contiene preguntas sobre horas dedicadas a cuidado infantil. La pregunta específica que se utiliza es: En una semana normal, ¿cuántas horas dedica usted al cuidado de miembros de su familia que sean ancianos o que tengan alguna enfermedad o discapacidad?

ESTIMACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS
A LA PARTICIPACIÓN LABORAL: DATOS Y METODOLOGÍA

Con datos de tres rondas del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, 2021) en los años 2016, 2018 y 2021, se construye un panel de datos balanceado de adultos en zonas urbanas de Chile, esto significa que el análisis se realiza sobre la misma muestra de personas a través del tiempo. La tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables consideradas para el análisis según género y año.

TABLA 1: *Estadísticas descriptivas.*
Media y (desviación estándar) de variables de interés según género y año

Variable	Mujeres			Hombres		
	2016	2018	2021	2016	2018	2021
1: Participa mercado laboral	0.53 (0.5)	0.58 (0.49)	0.58 (0.49)	0.86 (0.35)	0.86 (0.35)	0.84 (0.37)
Edad	46.48 (14.66)	48.45 (14.41)	49.01 (14.15)	44.79 (15.66)	46.56 (15.29)	49.66 (14.73)
Escolaridad (años)	12.07 (3.61)	12.54 (3.43)	12.85 (3.18)	12.85 (3.44)	13.28 (3.26)	13.04 (3.23)
1: Tiene pareja	0.52 (0.5)	0.52 (0.5)	0.49 (0.5)	0.61 (0.49)	0.60 (0.49)	0.62 (0.49)
1: Existe menor de seis años	0.20 (0.4)	0.16 (0.36)	0.07 (0.26)	0.19 (0.39)	0.12 (0.33)	0.06 (0.25)
1: Principal sostenedor	0.39 (0.49)	0.38 (0.49)	0.46 (0.5)	0.73 (0.45)	0.77 (0.42)	0.78 (0.41)
Escolaridad sostenedor (años)	10.62 (4.52)	11.99 (3.68)	12.13 (3.37)	11.72 (3.98)	12.09 (3.6)	12.34 (3.28)
1: R.M. versus otras zonas	0.43 (0.5)	0.44 (0.5)	0.49 (0.5)	0.36 (0.48)	0.41 (0.49)	0.39 (0.49)
1: Existe otra mujer adulta	0.53 (0.5)	0.56 (0.5)	0.56 (0.5)	0.84 (0.37)	0.85 (0.36)	0.81 (0.39)
1: Confía en sus vecinos	0.71 (0.45)	0.71 (0.46)	0.70 (0.46)	0.72 (0.45)	0.79 (0.41)	0.70 (0.46)
Número de conocidos	24.28 (25.03)	29.52 (25.66)	37.18 (28.89)	25.51 (24.13)	32.18 (25.32)	37.21 (26.16)
1: No dedica horas de cuidado	0.80 (0.40)	0.74 (0.44)	0.76 (0.43)	0.90 (0.30)	0.87 (0.33)	0.78 (0.42)
1: Cuida hasta 24 horas semanales	0.13 (0.33)	0.17 (0.37)	0.12 (0.33)	0.08 (0.27)	0.11 (0.31)	0.15 (0.36)
1: Cuida más de 24 horas semanales	0.07 (0.25)	0.09 (0.29)	0.12 (0.32)	0.02 (0.15)	0.02 (0.15)	0.07 (0.25)
N	850	850	850	452	452	452

Fuente: Elaboración propia en base a ELSOC, COES (2021).

Destacan las brechas de género en participación laboral, estatus del principal sostenedor, tener pareja, presencia de otra mujer adulta en el hogar y la proporción que declara dedicar horas de cuidado a otros en el hogar. Efectivamente, el porcentaje de mujeres que está inserta en el mercado del trabajo ha aumentado desde un 53% a un 58% entre 2016 y 2021, mientras que los hombres muestran una leve disminución desde un 86% a un 84%. Asimismo, se observa que alrededor del 50% de las mujeres tiene pareja en el hogar, el cual es cerca del 60% en el caso de los hombres. Adicionalmente, se puede apreciar que el 39% de las mujeres en 2016 se declaraba como principal sostenedora del hogar, porcentaje que aumentó en el tiempo, alcanzando el 46% en 2021. En este periodo, este porcentaje se incrementó desde un 73% a un 78% en el caso de los hombres. En el caso del porcentaje de hogares donde existe otra mujer adulta, este es alrededor de un 50% para mujeres y un 80% para hombres.

Cabe resaltar las diferencias observadas en el porcentaje de mujeres y hombres en cada uno de los tramos de cuidado a otros en el hogar. Destaca una disminución en el porcentaje de mujeres que no cuida, de un 80% en 2016 a un 76% en 2021. En el caso de los hombres, varió desde un 90% a un 78% en el mismo periodo. No obstante, condicional a ejercer cuidados, ellas lo hacen de manera más intensiva que los hombres, ya que el 12% de las mujeres cuida por más de 24 horas a la semana, en comparación con el 7% de los hombres. Este aumento en horas de cuidado en ambos sexos se explicaría principalmente por la pandemia por Covid-19 desatada a principios de 2020, la cual dejó al descubierto la crisis de los cuidados. No obstante, si bien el incremento en la proporción de hombres cuidadores es mayor al crecimiento de mujeres cuidadoras, el porcentaje que cuida sigue por debajo de aquel exhibido por ellas.

El resto de las variables analizadas se distribuye de manera similar entre hombres y mujeres; la edad promedio gira en torno a los 49 años y la media de escolaridad es cercana a los 13 años de estudios. El porcentaje de mujeres y hombres con presencia de menores de seis años en el hogar ha disminuido en el tiempo de forma parecida, desde un 20% en 2016, a cerca del 6% en 2021⁸. También se observa que la escolaridad del sostenedor de los hogares de la muestra analizada es de 12 años en promedio para hombres y mujeres en 2021. El porcentaje de personas que confía en sus vecinos no exhibe diferencias según género, y alcanza el 70% en 2021. Tampoco se presentan diferencias entre hombres y mujeres en el tamaño de la red personal, la cual ha aumentado de 24 a 37 conocidos a través del tiempo.

⁸ El diseño de ELSOC no considera preguntas sobre la composición del hogar después de la primera ronda en 2016, por lo que estos cálculos se han realizado asumiendo que la estructura del hogar no ha cambiado y solo se ajusta la edad de los miembros del hogar a través del tiempo, pero no se observan nacimientos.

Con los datos descritos, extendemos el modelo clásico de participación laboral, incluyendo como variables explicativas las horas semanales de cuidado a familiares, presencia de niños/as menores de seis años en el hogar y tamaño de la red personal para estimar su relación con la probabilidad de participar, es decir, estar trabajando o buscando trabajo en el mercado laboral. Para analizar la heterogeneidad de los resultados según género, las estimaciones se realizan para hombres y mujeres por separado. Específicamente, se estima por máxima verosimilitud el siguiente modelo Probit según género:

$$P(x_{it}) = \Phi(\beta'x_{ig} + \gamma Cuida_{it} + \delta'Red_{it} + d_t + \epsilon_{it})$$

Donde y_{it} es una variable binaria que toma el valor 1 si la persona i participa en el mercado laboral en el año t , x_{it} es un vector que contiene las características de la persona i y de su hogar en t , $Cuida_{it}$ es una variable que identifica las horas dedicadas al cuidado en el hogar por la persona i en t . En particular, se incluye una variable categórica de tres tramos (no cuida, cuida entre 1 y 24 horas, cuida más de 24 horas a la semana). Esta variable permite analizar el efecto incremental que pudieran tener las horas de cuidado. El vector Red_{it} incluye las dos variables a utilizar como medida de la red personal de la persona i en t : una variable binaria que toma el valor 1 si la persona confía en sus vecinos y el número de conocidos. Además, se incluye una variable categórica d_t que considera las tres olas de la encuesta, toma el valor 1 en el año 2016, 2 en 2018 y 3 en 2021. Finalmente, se incluye un término de error, ϵ_{it} , que representan todos aquellos factores no observables que influyen en la participación laboral y que varía entre personas y a través del tiempo.

En este modelo, la probabilidad de participar en el mercado laboral es una función no lineal en los parámetros a estimar. Esto es, se utiliza una función de distribución acumulada normal, $\Phi(\cdot)$, la cual asegura predicciones entre 0 y 1, tal como lo requiere la estimación de una probabilidad. Luego de la estimación, se calculan los efectos marginales promedio sobre la probabilidad de participar cuando varía una variable explicativa, manteniendo todo lo demás constante.

La hipótesis principal a evaluar en este artículo, es que las mujeres cuidadoras tienen menor probabilidad de participar en el mercado laboral en comparación con los hombres cuidadores. Para este modelo en que se evalúa la participación laboral femenina, las hipótesis consideradas se presentan en la tabla 2.

TABLA 2: Variables, hipótesis y resultados de la investigación – Modelo de participación laboral

Aspectos influenciadores	Variables independientes	Asociación esperada	Hipótesis	Resultados estimados (en puntos porcentuales, pp.)	
				Mujeres	Hombres
Características de la persona	Edad	Positiva y luego negativa (U invertida)	Al principio (jóvenes) hay mayor probabilidad de participar, pero esta comienza a ser cada vez menor con la edad, hasta convertirse en negativa (tercera edad)	4.7 pp.	3.9 pp.
	Años de escolaridad	Positiva	A más años de escolaridad, mayor probabilidad de participar.	2.2 pp.	No significativa
	Tenencia de pareja	Positiva	Si se tiene pareja, mayor probabilidad de participar.	No significativa	5.0 pp.
	Existencia de menor de seis años	Negativa	Si tiene un/a menor de seis años, menor es la probabilidad de participar.	-8.9 pp.	No significativa
	Ser el principal sostenedor del hogar	Positiva	Si es el principal sostenedor del hogar, mayor probabilidad de participar.	30.8 pp.	10.3 pp.
Características del hogar	Años de escolaridad del sostenedor del hogar	Negativa	A más años de escolaridad del sostenedor del hogar, menor probabilidad de participar (efecto ingreso).	No significativa	No significativa
	Existencia de otra mujer adulta en el hogar	Positiva	Si hay otra mujer adulta en el hogar, mayor probabilidad de participar (contribuye a cuidados).	No significativa	No significativa
	Confianza en vecinos	Positiva	A mayor confianza en vecinos, mayor probabilidad de participar.	No significativa	No significativa
Características de la red personal	Número de conocidos	Positiva	A mayor número de conocidos, mayor probabilidad de participar.	0.2 pp.	0.1 pp.
	Horas semanales de cuidado a personas mayores, enfermos, o en situación de discapacidad en el hogar	Negativa	Si cuida hasta 24 horas semanales, menor probabilidad de participar.	-9.3 pp.	No significativa
	Labores de cuidados		Si cuida más de 24 horas semanales, menor probabilidad de participar	-9.7 pp.	No significativa

La tabla 3 presenta los efectos marginales obtenidos a partir de las estimaciones de un modelo Probit, según género. La primera columna corresponde a la estimación de los factores asociados a la probabilidad de participación laboral para mujeres, y la segunda corresponde a la estimación del modelo para la muestra de hombres. Ambas incluyen como variable de cuidados tres tramos de horas a la semana: no cuida, cuida hasta 24 horas y cuida más de 24 horas.

Los resultados obtenidos indican que la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral estaría relacionada de manera positiva con la edad (un año más aumenta en 4.7 pp. la probabilidad de participar), escolaridad (un año más de estudios aumenta en 2.2 pp. la probabilidad), no tener un miembro menor de seis años en el hogar (un hijo/a menor de seis años se asocia con 8.9 pp. menos de probabilidad de participar), si es el principal sostenedor del hogar (30.8 pp. más de probabilidad que quienes no lo son), y su red personal (un conocido adicional aumenta en 0.2 pp. la probabilidad). Las variables de escolaridad del sostenedor del hogar, si existe otra mujer adulta viviendo en el hogar y confianza en los vecinos, no resultaron significativas en ningún caso, ni para mujeres ni hombres cuidadores. El coeficiente asociado a la tenencia de un/a menor de seis años resultó significativo y negativo solo en el caso de las mujeres, por lo que se condice con la literatura sobre el *child penalty*⁹.

Por otro lado, la probabilidad de que hombres participen en el mercado laboral se incrementa en la medida que aumente su edad (3.9 pp.), si tiene pareja (5 pp.), si es el principal sostenedor del hogar (10.3 pp.) y posee un mayor número de conocidos en su red personal (0.1 pp.). Los coeficientes asociados a las variables sobre la escolaridad del sostenedor de hogar, si existe otra mujer adulta viviendo en el hogar y confianza en los vecinos, no resultaron estadísticamente significativos para mujeres ni hombres. A diferencia de las mujeres, en los hombres resultó ser significativo el coeficiente asociado a tener pareja, lo cual es coherente con lo que dice la literatura, dado que los cuidados son una labor históricamente asumida por las mujeres y, por lo tanto, un hombre con pareja puede delegar los cuidados o el trabajo doméstico y así aumentar sus posibilidades de integrarse al mercado laboral.

⁹Todas estas significancias estadísticas se mantuvieron de forma consistente en otros modelos estimados, obteniendo estabilidad de los parámetros ante cambios en las especificaciones de la variable de cuidado (incluyendo menos o más tramos de horas semanales).

TABLA 3: *Estimación de la probabilidad de participar en el mercado laboral según género. Efectos marginales de un modelo Probit.*

<i>Variable dependiente: 1: Participa en el mercado laboral</i>	<i>Mujeres (1)</i>	<i>Hombres (2)</i>
Edad	0.047*** (0.005)	0.039*** (0.004)
Edad al cuadrado	-0.001*** (0.000)	-0.000*** (0.000)
Escolaridad (años)	0.022*** (0.005)	-0.004 (0.005)
1: Tiene pareja	0.017 (0.028)	0.050** (0.021)
1: Existe menor de seis años	-0.089** (0.035)	0.097 (0.063)
1: Principal sostenedor del hogar	0.308*** (0.026)	0.103*** (0.025)
Escolaridad del sostenedor del hogar	-0.002 (0.004)	0.001 (0.005)
1: Existe otra mujer adulta	-0.005 (0.026)	-0.010 (0.025)
1: Confía en sus vecinos	-0.037 (0.026)	0.023 (0.024)
Número de conocidos	0.002*** (0.001)	0.001* (0.001)
Tramo de cuidado: Cuida [1-24] horas semanales	-0.093*** (0.032)	-0.044 (0.036)
Tramo de cuidado: Cuida más de 24 horas semanales	-0.097** (0.040)	-0.022 (0.035)
Año 2018 (con respecto a 2016)	0.041 (0.027)	-0.006 (0.026)
Año 2021 (con respecto a 2016)	-0.025 (0.032)	-0.004 (0.025)
Observaciones	2,550	1,356
Muestra	850	452
Efectos fijos por año y zona geográfica	SI	SI

Notas: efectos marginales de un modelo Probit en base a datos ELSOC, COES (2021); categoría base de tramo de cuidado corresponde al grupo de no cuidadores. Errores estándar robustos entre paréntesis; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

En cuanto a las variables de cuidado, estas se asocian de manera negativa con la probabilidad de que las mujeres participen del mercado laboral de forma significativa. Los coeficientes estimados sugieren que, en promedio, una mujer que cuida hasta 24 horas a la semana tendría 9.3 pp. menos de probabilidad de participar en el mercado que una mujer que no cuida, manteniendo todas las otras características constantes (a iguales condiciones). Y este coeficiente se hace levemente más negativo (9.7 pp.) para aquellas que cuidan más de 24 horas a la semana. Estos resultados están en coherencia con lo esperado según la literatura revisada: las labores de cuidado son asumidas principalmente por mujeres y esto limita sus actividades en otros ámbitos, como lo es su participación en el mercado laboral. Esto no sucede para el caso de los hombres, para quienes no resulta negativa la asociación entre cuidados y participación laboral.

HACIA UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS

En esta investigación hemos visto la influencia que tienen ciertos factores culturales y contextuales en la participación laboral; más aún, en la participación diferenciada por género. Así, las mujeres se han visto más perjudicadas por estos factores, lo que se condice con la literatura que ha identificado que ellas siguen siendo las proveedoras principales de los cuidados de otras personas. En cuanto a las variables de cuidado, estas se asocian de manera negativa con la probabilidad de que participen del mercado laboral de forma significativa; lo cual no sucede para el caso de los hombres, para quienes no resulta significativa o relevante la asociación entre cuidados y participación laboral. Debemos resaltar que estos análisis no reflejan necesariamente una relación causal, ya que pudiera ser que la relación sea inversa: por no poder participar en el mercado laboral, las mujeres asumen labores de cuidado. Por lo tanto, proponemos una agenda futura de investigación más profunda en este tema.

No obstante, estos resultados nos presentan evidencia que sugiere que, para lograr equidad de género en el acceso al mercado laboral, como sociedad debemos hacernos cargo de los cuidados de otras personas. Las actividades de cuidado no se deberían resolver de manera privada principalmente por mujeres, si no que se debería avanzar hacia una organización social de los cuidados, con ayuda de un Estado promotor de políticas de cuidado pertinentes a diferentes grupos etarios y con distintos niveles de dependencia. Así también es fundamental reafirmar el rol del Estado como garante de derechos de los sujetos de cuidado y de las personas cuidadoras, para que logren ampliar su inclusión y empoderamiento social y económico, o en otras dimensiones de la vida, según sus preferencias.

REFERENCIAS

- Arriagada, I. (2005). *Políticas hacia la familia protección e inclusión sociales*. Santiago de Chile: Cepal, Naciones Unidas.
- Arriagada, I. (2010). *La organización social de los cuidados y vulneración de derechos en Chile*. Santiago de Chile: ONU Mujeres.
- Baththyany, K. (2010). El cuidado infantil en Uruguay y sus implicancias de género: análisis a partir del uso del tiempo. *Revista de Ciencias Sociales*, v. 23, n. 27, 20-32.
- Bettio, F. & Prechal, S. (1998). *Care in Europe*. Bruselas: European Commission.
- Blundell, R., Ham, J., & Meghir, C. (1989). Unemployment and female labour supply. En Muysken, J., & Neubourg, C. (Eds.). *Unemployment in Europe* (p. 9-36). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Cavalcanti, T. V de V., & Tavares, J. (2008). Assessing the “engines of liberation”: home appliances and female labor force participation. *The Review of Economics and Statistics*, 90(1), 81-88. <https://doi.org/10.1162/rest.90.1.81>
- COES (2021). Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC). Olas 2016, 2018 y 2021. [Archivo de datos]. Santiago de Chile: Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Disponible en: www.coes.cl (9 de mayo 2022).
- De Beauvoir, S. (1998). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.
- Esping Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Cambridge: Polity.
- Flores, B. (2021a). La importancia de las interacciones entre vecinos con lazos sociales débiles para incrementar la participación laboral femenina en Chile. *Estudios Públicos*, (163), 7-47.
- Flores, B. (2021b). Brechas de género en el ciclo de vida. Memoria de taller de lectura “Diálogos sobre igualdad y brechas de género” de la Agenda Género de COES. *Serie Documentos de Trabajo COES*, 46, 1-54.
- Glenn, E. (2012). *Forced to care. Coercion and caregiving in America*. Cambridge: Harvard University of Press.
- Goldin, C. (2006). The quiet revolution that transformed women’s employment, education, and family. *American Economic Review*, 96(2), 1-21.
- Goldin, C., & Katz, L. F. (2002). The power of the pill: oral contraceptives and women’s career and marriage decisions. *Journal of Political Economy*, 110(4), 730-770.
- González, H. (2018). Género, cuidados y vejez. Las mujeres “en el medio” del trabajo remunerado y del trabajo de cuidado en Santiago de Chile. *Revista Prisma Social*, 21(2), 194-218.
- Killingsworth, M. R., & Heckman, J. J. (1986). Female labor supply: a survey. *Handbook of Labor Economics*, 1, 103-204.

- Kleven, H., Landais, C., Posch, J., Steinhauer, A., & Zweimuller, J. (2019). Child penalties across countries: evidence and explanations. *AEA Papers and Proceedings*, 109, 122-26.
- Legarreta, M. (2008). El tiempo donado en el ámbito doméstico. Reflexiones para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 26(2), 49-73.
- Lewis, J. (1992). Gender and the development of welfare regimes. *Journal of European Social Policy*, 2(3), 159-173.
- Masanet, E. & La Parra, D. (2009). Los impactos de los cuidados de salud en los ámbitos de vida de las personas cuidadoras. *RES*, 11, 13-31.
- McCarty, C., Lubbers, M., Vacca, R., & Molina, J. L. (2019). *Conducting personal network research. A practical guide*. Nueva York: The Guilford Press.
- ONU Mujeres (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempo de Covid-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Brief v1.1. 19.08.2020.
- Ortiz, F. & Bellotti, E. (2021). The impact of life trajectories on retirement: socioeconomic differences in social support networks. *Social Inclusion*, 9(4), 327-338.
- Scott, J. (1993). La mujer trabajadora en el siglo XIX. En Duby, G. & Perrot, M. (Dir.) *Historia de las mujeres. Tomo IV*. Madrid: Taurus.

CAPÍTULO 9

UNA CAÑERÍA ROTA: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA CARRERA DE MUJERES ECONOMISTAS EN LA ACADEMIA CHILENA¹⁰

Roxana Chiappa

La baja representación de mujeres en el campo de la economía ha sido una constante desde los inicios de la disciplina. En Estados Unidos y varios países de Europa occidental, diversos estudios muestran que la trayectoria de las mujeres en economía se asemeja al fenómeno de una “cañería rota”: su representación es baja en el pregrado, se va achicando a nivel de postgrado, y disminuye aún más en la academia, particularmente, en los cargos con mayor jerarquía (Auriol et al., 2021; Bayer & Rouse, 2016).

En Chile no existen estudios longitudinales que permitan estimar con exactitud la brecha de género en distintos momentos de la carrera académica en economía. No obstante, la información pública disponible, aunque es incompleta, sugiere que la carrera de las mujeres en esta área también transcurre por una cañería rota.

En este capítulo, utilicé los datos existentes y traté de describir esta imagen de cañería rota en un análisis cuantitativo de carácter exploratorio. Luego, realicé una investigación sobre las experiencias de diez mujeres economistas que lograron insertarse en la carrera académica y que están en distintas etapas de su trayectoria profesional. El objetivo final de este estudio fue identificar los códigos y prácticas existentes en la disciplina económica que podrían estar impidiendo la entrada de mujeres economistas en el campo y su promoción en la carrera académica.

En lo que sigue, el capítulo está dividido en cinco secciones: a) una breve discusión de los datos cuantitativos a modo de contexto, b) una revisión de literatura, c) metodología, d) hallazgos, y e) recomendaciones.

¹⁰ Esta investigación recibió el apoyo del proyecto FONDECYT Postdoctoral 3210600, y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

LAS FILTRACIONES DE LA CAÑERÍA ROTA

Economía no existe como una carrera profesional en Chile, sino como una licenciatura de pregrado ofrecida por 11 programas de Ingeniería Comercial entre los 48 programas existentes en Chile (Mineduc, 2021). Según un estudio reciente (Bordon, Canals & Mizala, 2020), la probabilidad de que las mujeres opten por Ingeniería Comercial y otras carreras en el área de negocios es levemente menor que la de sus pares hombres, pero la brecha en el área de negocios es significativamente menor que en otras disciplinas, como en ingeniería, tecnología, salud y educación. De manera similar, los datos de la matrícula de educación superior muestran que las carreras de Ingeniería Comercial con especialidad en Economía han incrementado paulatinamente la presentación de mujeres, con un promedio de participación femenina equivalente al 41% en la última década (www.mifuturo.cl de Mineduc, 2021).

No obstante, los datos de matrícula existentes no incluyen el proceso de selección de la disciplina económica, pero una consulta a diversos departamentos de Economía del país, realizados en el marco de este estudio, sugiere que uno de los grandes orificios de la cañería ocurre en la selección de la especialidad de Economía hacia el final del segundo año de la carrera de Ingeniería Comercial, lo que coincide con la realidad de otros países (Bayer et al., 2020). En los 11 departamentos de Economía del país, la proporción de los estudiantes en Ingeniería Comercial que elige la especialidad de Economía varía entre un 30% a un 10%, lo que es significativamente menor en comparación a la proporción de estudiantes que elige otras, como Administración, Recursos humanos o Marketing. Según lo reportado por estos programas, las mujeres representan alrededor de un tercio de los estudiantes que eligen la especialidad de Economía en los respectivos programas.

En el ámbito de postgrado, la participación femenina pareciera decrecer levemente a nivel de magíster, pero se mantiene a nivel de doctorado. Las mujeres representan el 27% de las personas matriculadas en un magíster de Economía o Economía Aplicada en universidades chilenas en el periodo 2011-2021 (Mineduc, 2021). Entre quienes recibieron una beca financiada por el Estado para hacer un doctorado en Economía para estudiar en Chile o en el extranjero durante el mismo periodo, se estima que el 28% son mujeres (ANID, 2021). Ahora bien, estas cifras existentes se deben interpretar con cautela, pues el universo de personas que podría estudiar programas de postgrado en Economía incluye a sujetos que estudiaron otras carreras, típicamente con fuerte base en matemáticas, en Chile y en el extranjero.

Tal como ocurre en otros países, la representación femenina decrece significativamente en la transición entre el término del postgrado y el inicio de la carrera académica. Entre las y los profesores contratados en la planta regular

de las unidades académicas en Economía¹¹ en Chile al año 2022 N=191, se estima que las mujeres representan el 17% N=33 de todos los profesores; un porcentaje significativamente menor al que se observa en Estados Unidos (26.2%) (CWEP, 2021) y algunos países europeos (31.51%) (Auriol et al., 2020). Entre quienes tienen la mayor jerarquía académica, las mujeres son el 12% de los profesores asociados y titulares en los departamentos de Economía en Chile.

La baja representación de mujeres economistas en la academia chilena es preocupante, pues sugiere que podría haber mecanismos que están impidiendo su entrada y ascenso en la carrera académica que son particulares al caso chileno. En las páginas siguientes, analizo esta hipótesis a la luz de las voces de mujeres economistas que lograron insertarse en la academia chilena, pero antes invito a los lectores a revisar brevemente las principales teorías usadas para explicar la baja representación de mujeres en los campos que tienen un fuerte componente matemático, como es el caso de la economía.

LA IDEA DE CAMPO Y LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Hay dos líneas teóricas que son frecuentemente usadas para explicar la baja representación de mujeres en el área de la economía: la noción de campo y los estereotipos de género. La primera viene del trabajo del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien propone el concepto de campo como un espacio social, organizado jerárquicamente, donde los actores tienen distintas posiciones dependiendo de la acumulación de capitales. Para Bourdieu, los campos se distinguen porque agrupan a personas que comparten un *habitus* —formas de hacer, ser y pensar— distintivo que los diferencian de otros campos.

Desde esta perspectiva, la disciplina económica en el contexto académico puede ser vista como un subcampo cultural y epistémico, la cual está condicionada a las jerarquías organizadoras del género, clase, raza y otras estructuras que explican la desigualdad en la sociedad.

En el caso de esta disciplina, el campo ha estado históricamente dominado por hombres, lo que ha configurado un *habitus* y un cuerpo de saberes teóricos

¹¹ La muestra se realizó en base a una consulta a las páginas web institucionales de todas las unidades académicas que ofrecen la especialidad de pregrado o un postgrado en Economía (11 unidades académicas y un centro de economía) en las universidades chilenas en mayo de 2022. Incluye a todas las y los profesores contratados en posiciones de la planta académica regular, desde profesores instructores hasta titulares. Las y los economistas que trabajan en otros departamentos (ej. escuelas de políticas públicas, departamentos de Ingeniería, etc.) no fueron incluidos en la muestra. Se excluyeron las y los profesores de la planta regular que trabajan en departamentos de Economía sin formación académica en dicha área o una afín (ej. Psicología, Historia, Filosofía). En esta muestra, la mayoría de los profesores tienen doctorados en Economía, pero también incluye a aquellos que solo tienen un magíster en Economía o están en proceso de terminar sus doctorados.

y metodológicos que tienen un sesgo marcadamente masculino (e.j. el trabajo doméstico en las teorías económicas es considerado como ocio). De esta manera, el ingreso al campo de la economía está condicionado a adquirir y participar de estos códigos, y pareciera dejar menos espacio a formas de hacer y ser distintas a este.

Asimismo, la economía como subcampo del dominio cultural está imbuida en una estructura social jerárquica, donde la posición de los actores (personas e instituciones) en la economía depende de la capacidad de acumular capital cultural, social, simbólico y económico. En efecto, el primer paso para entrar al campo de la economía en Chile requiere obtener una vacante en Ingeniería Comercial u otra carrera con alta base matemática, aspecto que en el contexto chileno está directamente asociado con el nivel socioeconómico de los estudiantes (Canales, 2016). Estudios empíricos muestran que algunas carreras de Ingeniería Comercial concentran sobre un 90% de los hijos de la élite económica del país (Villalobos et al., 2020).

Por otra parte, la teoría de estereotipos de género es concordante con el concepto de Pierre Bourdieu, pero se preocupa específicamente de cómo los estereotipos sociales existentes en un espacio social inciden en la socialización y experiencias de las personas. Los estereotipos de género son creencias no cuestionadas respecto a los atributos, roles y características asociadas al ser hombre y mujer. Por ejemplo, el de que “las mujeres son malas para las matemáticas” está presente en distintas culturas (Else-Quest et al., 2010). Esta creencia no solo tiene efectos en la forma en que un/a profesor/a de matemáticas trata a sus estudiantes, sino también en cómo las y los estudiantes se perciben a sí mismos/as en relación con la disciplina.

La teoría acerca de la amenaza del estereotipo, desarrollada por Claude Steele (1997), explica que cuando existe un estereotipo negativo asociado a una población, las personas que la integran realizan un proceso de autoevaluación de sus capacidades frente a la amenaza de cumplir dicho estereotipo. Por ejemplo, el estereotipo “las mujeres son malas para las matemáticas” podría crear una carga emocional y cognitiva que afecta negativamente el desempeño académico de las estudiantes mujeres, y potencialmente explicaría la decisión de por qué las estudiantes de Ingeniería Comercial eligen en menor proporción la especialidad de Economía (ver Bottan et al., 2022; Dynan & Rouse, 1997; Emerson, McGoldrick & Mumford, 2012).

Por otra parte, los estereotipos de género se siguen reproduciendo en las etapas formativas de pre y postgrado, y, luego, en los procesos de reclutamiento y evaluación de la carrera académica (Llorens et al., 2021). Por ejemplo, en Chile, Paredes y colegas (2020) encontraron que la exposición a los ramos de la disciplina económica conduce a visiones más sesgadas de género. En Estados Unidos, Alice Wu (2017) revela la reproducción de estereotipos de género en espacios cotidianos como un foro virtual de economistas. Más recientemente,

Dupas y colegas (2021), también en el contexto estadounidense, descubrieron que las mujeres economistas están expuestas a una mayor cantidad de preguntas e interrupciones en sus presentaciones y seminarios en comparación a sus pares hombres. En un contexto de producción científica, Sarsons (2017) halló que las mujeres se benefician en menor medida que sus pares varones cuando publican con otros hombres.

En suma, estos dos cuerpos teóricos sugieren la hipótesis de que la experiencia de las mujeres economistas en la academia chilena no solo ha tenido que navegar y lidiar con un espacio social que favorece formas de ser y hacer marcadamente masculinas, sino también que ellas han estado expuestas a prácticas discriminatorias que afectan sus posibilidades de legitimación en el campo para ascender a la carrera académica.

METODOLOGÍA

La evidencia para este capítulo proviene de un proyecto sobre élites académicas en el campo de la economía y otras disciplinas, el cual incluye entrevistas semiestructuradas realizadas en el primer semestre de 2022 con personas que eligieron la academia como uno de los campos de desarrollo profesional. Aquí se consideró solo la evidencia concerniente a mujeres economistas que tienen alguna relación contractual con alguna de las universidades chilenas N=10.

Organicé esta evidencia y estructuré un análisis cualitativo sobre las experiencias de mujeres economistas en la academia chilena. Ellas fueron consultadas sobre las razones que motivaron su selección por la disciplina, su relación con sus profesores guías y mentores, y las experiencias que le permitieron ingresar y permanecer en la carrera académica. Cabe precisar que no fueron consultadas sobre si habían experimentado prácticas discriminatorias o haber estado expuestas a condiciones de desventajas en la carrera académica, pues se esperaba que la pregunta sobre las experiencias en la academia daría espacio para expresar vivencias positivas y negativas. Sus nombres fueron cambiados para respetar la confidencialidad de sus testimonios.

La tabla 1 describe los nombres de las economistas y su actual posición académica. Tres de ellas están en las más altas jerarquías de la carrera académica (profesora titular), y otras tres, cerca de alcanzar dicha posición (profesora asociada). De las 10 participantes, seis son chilenas, y casi todas N=5 terminaron sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile o en la Pontificia Universidad Católica. Las cuatro participantes restantes son extranjeras, y todas hicieron su pregrado en universidades de investigación en sus respectivos países de origen.

TABLA 1: *Las participantes del estudio que sortearon la cañería rota*

<i>Nombre</i>	<i>Jerarquía académica</i>
Alicia	profesora titular
Antonia	profesora asistente
Camila	profesora titular
Carmen	profesora instructora
Gabriela	profesora asociada
Julieta	profesora titular
Lorena	profesora asociada
María José	profesora asociada
Sara	profesora asistente
Soledad	profesora jornada

La mayoría de ellas ingresó a la economía trayendo un alto capital social y cultural de sus hogares. Con excepción de una, que estudió en un liceo técnico profesional y que es primera generación universitaria, todas las participantes en esta investigación estudiaron en establecimientos secundarios científicos humanistas en sus respectivos países de origen y provienen de familias con padres que cursaron alguna carrera en la educación superior. Varias de ellas ya hablaban un idioma extranjero antes de ingresar a pregrado, y tenían claridad sobre lo que consistía la disciplina económica.

Esta información coincide con otros estudios recientes en Chile (Villalobos et al., 2020) y en Estados Unidos (Schultz & Stansbury, 2022), que muestran que la economía concentra a un porcentaje importante de personas provenientes de clases medias altas, a diferencia de otros campos en las ciencias sociales, como sociología o educación.

Al momento de las entrevistas, nueve académicas tenían un doctorado en Economía. Carmen, la excepción, está en proceso de postulación mientras ejerce como profesora instructora. En general, todas hablan de un gusto por la disciplina que partió en los primeros años del pregrado, y que creció a medida que continuaron estudiando. Con excepción de una participante (Soledad), todas reportan una relación positiva con sus supervisores de tesis en distintos niveles de formación.

MÚLTIPLES FILTRACIONES:
LA ECONOMÍA ES DIFÍCIL Y ES UN MUNDO PARA HOMBRES

La creencia de que la economía es difícil y es un campo preferentemente de hombres, es uno de los estereotipos predominantes en la disciplina. En el caso de las economistas en este estudio, todas llegaron a ella con una buena base matemática y se destacaron en los ramos de la disciplina, pero aún hay algunas que reportan haber dudado de su capacidad para entrar en el campo.

Es el caso de Sara, profesora asistente en una universidad de Santiago. Ella explica que entró a estudiar Ingeniería Comercial sin tener muy claro cuál sería su especialidad, y durante los primeros años de la carrera se dio cuenta de que la Economía era vista como una especialidad de hombres, y el resto —Marketing, Administración y otras— como un campo donde la mujer podía entrar. “No sé, estaba esta creencia [la economía es difícil y es un campo de hombres], y te juro, con un poco de vergüenza, que yo tampoco me lo cuestionaba mucho. Yo entendía que me iba bien y me atreví a entrar. Bien, voy a entrar a este mundo de hombres, me dije”.

Para María José, académica asociada de una universidad regional, la situación fue distinta. Ella tenía claro que quería seguir estudiando un magíster en Economía, pero fueron algunos de sus profesores quienes pusieron en duda su decisión. “Cuando yo les contaba a algunos profesores o profesoras que quería seguir el magíster, decían: ‘No, es muy complicado, es muy difícil. ¿Pero qué vas a hacer después?’. No decían explícitamente ‘qué hace una mujer ahí’ [estudiando Economía], pero no le veían sentido o, en realidad, [sus comentarios parecían decir] ‘para qué vas a invertir tanto tiempo, si al final vas a formar una familia, te vas a casar’”.

María José egresó hace más de una década de su pregrado, y reflexiona que este mensaje hoy es inadmisibile en el contexto actual. Cuenta que ella no hizo caso de los comentarios, principalmente porque “es porfiada y no le importa lo que la gente diga”. Se ganó una beca para estudiar el magíster de Economía gratis y profesores del magister, en su mayoría hombres, la apoyaron en su decisión desde un primer momento.

Para Carmen, profesora instructora de una universidad de la región Metropolitana, el estereotipo de que la economía es difícil tuvo un tenor algo distinto y fue reproducido por compañeros. Cuando decidió hacer el magíster de Economía, Carmen estaba involucrada en una serie de actividades del movimiento estudiantil en su facultad. Sus compañeros que estaban terminando el magíster, en su mayoría varones, le decían que el programa era “demasiado difícil” y, por lo tanto, tenía que abandonar cualquier otro tipo de actividad extracurricular. Decidida a continuar Economía, optó por realizar el programa en un periodo mayor de tiempo y mantener sus actividades de dirigencia estudiantil. Ella

argumenta que la creencia de que la economía es muy difícil y solo se puede estudiar sin hacer nada más es una barrera simbólica en especial para las mujeres, quienes históricamente han asumido las tareas de cuidado.

Para Sara, María José y Carmen, el proceso de “atreverse” y continuar estudiando un postgrado en Economía tuvo que ver con tres elementos: a) cuán competentes se sentían en los ramos de Economía y su sentido de identificación con la disciplina; b) el apoyo de algunos profesores, en su mayoría hombres, y sus pares; c) una situación familiar (sin compromisos de tareas de cuidado) y material (becas) que les permitió seguir estudiando.

POTENCIALES REPARADORES DE LA FILTRACIÓN: LOS SUPERVISORES DE TESIS

La mayoría de las académicas incluidas en este estudio tuvo muy pocas profesoras mujeres en su etapa formativa, tanto a nivel de pre y postgrado. Sin embargo, casi todas ellas reportan haber tenido supervisores de tesis con alta influencia en el campo y muy comprometidos con la carrera de sus estudiantes.

Es la historia de Camila, profesora titular de una universidad en Santiago, quien dice haber estado en un ambiente muy estimulante intelectualmente, con profesores y mentores de pre y postgrado muy “apoyadores”. En la entrevista, Camila destina varios minutos para describir el rol de su supervisor de tesis de pregrado, quien ha sido una de las personas que más ha celebrado sus logros académicos.

“[Nombre del supervisor en Chile en el pregrado] me decía a mí y a todos los que éramos sus estudiantes que éramos buenos. ‘Por qué te vas a ir a una universidad top 50, no, ándate a las mejores’. Entonces, postulé al doctorado solo en universidades top”. Camila realizó su doctorado en uno de los mejores departamentos de Economía en el mundo, lo que ella atribuye al apoyo y recursos otorgados por su supervisor. “Probablemente, yo igual hubiese postulado a un doctorado, porque toda mi familia es académica, pero no me habría ido a ese doctorado, no habría hecho la trayectoria que he tenido”. El supervisor de Camila es un académico con alta reputación en la disciplina, y es reconocido por otros economistas como un mentor particularmente apoyador de las carreras de sus estudiantes.

De manera parecida, Antonia, profesora titular, cuenta que no ha tenido casi profesoras mujeres, pero todos sus supervisores, desde el pregrado hasta el doctorado, tenían una alta reputación y fueron muy comprometidos con su carrera académica. Señala que su supervisor doctoral no solo se preocupó de su carrera profesional, sino que también de su bienestar emocional. Antonia, quien realizó su doctorado en un país extranjero en el hemisferio sur, conoció a su actual pareja mientras lo cursaba. Su supervisor la motivó a realizar una

estancia doctoral en el extranjero, y se encargó de que su visita ocurriera en la misma ciudad donde iría su actual marido. Años más tarde, cuando postulaba a un cargo de profesora universitaria, él les aconsejó y apoyó para que ella y su pareja encontraran trabajo en la misma ciudad.

Por el contrario, Soledad tuvo una experiencia negativa en la relación con su supervisor doctoral. Ella es la única participante que estudió un doctorado en Economía en Chile, y quien tiene la posición académica con menos estabilidad laboral. Comenta que el doctorado fue muy traumático, pues la confianza en sí misma disminuyó completamente. “Quería un asesor competitivo, y le pedí a [nombre del supervisor] que fuera mi asesor. Y la verdad es que me sentí muy abandonada durante el proceso. Él estaba muy ocupado. Yo no tuve mucha ayuda”. Soledad explica que, durante su formación doctoral, trabajó como asistente de investigación en distintos proyectos, y si bien desarrolló lazos con distintos académicos en su departamento, ella percibe no haber recibido el apoyo que necesitaba.

Tras defender su tesis, Soledad dice que nunca se atrevió a contactar ni pedirle ayuda a su supervisor doctoral, lo que directamente afectó sus posibilidades de encontrar empleo en la academia chilena. Tal como indican otros estudios, las cartas de recomendación de los supervisores indican un tipo de capital social y simbólico (Bourdieu & Wacquant, 1992) que es irremplazable por otros capitales (Madera et al., 2019), pues entregan un veto de confianza y credibilidad en procesos de contratación académica que tienen alto grado de incertidumbre (Musselin, 2009).

El caso de Soledad invita a interrogar las condiciones que subyacen en las relaciones entre supervisor doctoral y doctorante en los pocos doctorados de Economía chilenos, los cuales se caracterizan por tener pocos estudiantes, siendo la mayoría de ellos varones.

OTRA GRAN FILTRACIÓN: LOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDAD DESEABLE EN LA DISCIPLINA AL MOMENTO DE POSTULAR A PUESTOS ACADÉMICOS

Con excepción de Carmen —que aún no comienza su doctorado— y Soledad, todas las integrantes de este estudio encontraron una posición académica en menos de seis meses tras terminar sus doctorados. Dos de ellas no tuvieron que buscar empleo, porque integrantes de su red le avisaron que estaba disponible una plaza académica. Otra postuló directamente a una plaza de trabajo en una universidad chilena, y la mitad participó en el *American job market* —mercado laboral estadounidense en el que participan algunas universidades chilenas— para encontrar su actual empleo académico¹².

¹² El mercado laboral estadounidense es organizado por la American Economic Association (AEA), donde cientos de potenciales empleadores de distintos países difunden sus ofertas laborales

Sara participó recientemente en el *job market* americano, y comenta que sabía que su posibilidad de ingresar a un cargo académico dependía de su *job market paper* (artículo académico de su tesis doctoral), de las cartas de recomendación y de las redes de sus recomendadores. No obstante, cuando se preparaba para presentar su *job market paper* aprendió que, adicionalmente, tenía que calzar con una personalidad de atributos “preferentemente masculinos”. “Me pasó que mis profes me criticaban porque cuando la gente me hacía preguntas, yo les sonreía; [a juicio de ellos] eso mostraba como debilidad e indicaba que yo estaba nerviosa. Y yo [me] decía [para mí] ‘qué tonto, no has entendido nada, la sonrisa es un gesto que indica ‘bienvenida tu pregunta’”.

Tras unos pocos años trabajando como académica y participando en procesos de contratación, Sara nota que hay estereotipos de género basados en la personalidad de los postulantes que se asocian con la calidad académica. “Si viene alguien y pone el pie sobre la mesa, como se dice en buen chileno, mis colegas inmediatamente lo califican como ‘¡qué seco que es!’ [...] Y cuando vienen mujeres y responden de manera pesada, el juicio es ‘la candidata más brígida’”. Sara confiesa que esta situación le perturba significativamente, pues tiene que calzar con una personalidad que no es ella.

“Yo puedo ser muy sensible, pero puedo ser muy pesada también. Muchas veces siento que, para estar aquí, tengo que entrar en un personaje. Y me carga entrar en ese personaje que es serio y que se muestra seguro. Hay muchos juicios de la calidad académica basados en la personalidad de las personas, donde hay personalidades que no pueden entrar”, concluye.

El relato de Sara coincide con el de otras académicas, que reconocen que la economía privilegia un estilo de personalidad “extrovertida y segura” (Julieta) que influye en la forma en que las personas son valoradas en la disciplina, independiente de su capacidad intelectual. En términos de Bourdieu, esta preferencia de personalidad deseable indica un habitus que las académicas deben adquirir o, al menos, demostrar para ser aceptadas y legitimadas en la disciplina.

PRÁCTICAS SEXISTAS

Entre las académicas economistas incluidas en este estudio, todas aluden directa o indirectamente al hecho de que este campo es un terreno adverso para las mujeres. La mitad de las participantes abiertamente menciona episodios sexistas, donde fueron víctimas o testigos de chistes, comentarios y

en un mismo periodo de tiempo. A su vez, quienes buscan empleo pueden postular con casi el mismo set de materiales a docenas de puestos de trabajo simultáneamente, generando una dinámica de oferta y demanda altamente competitiva.

gestos machistas expresados por profesores y estudiantes hombres (Julieta, Carmen, Sara y María José).

Por ejemplo, Julieta, profesora titular en una universidad de Santiago, enumera una serie de episodios sexistas que le chocaron cuando llegó a trabajar a su actual departamento: “Había un profesor viejo, que hoy no está con nosotros, que enviaba bromas de mujeres desnudas a todos los profesores”, “[algunos colegas me trataban] de ‘mi hijita’”; “invitaciones enviadas a mi marido [quien también está relacionado al campo de la economía], cuando yo era la integrante [de la unidad académica]”.

Julieta explica que su departamento académico ha hecho esfuerzos conscientes para contratar más mujeres economistas, lo que afectó positivamente la forma de relacionarse. “Si no estuviera mi colega aquí, muy probablemente estaría contando otra historia [en relación a mi posición en la academia]”.

La otra mitad de académicas no menciona explícitamente haber presenciado o visto ningún episodio negativo de prácticas sexistas. Es probable que sus respuestas tengan que ver con la metodología empleada en este estudio, que no preguntó directamente por prácticas sexistas o discriminatorias, y/o la posibilidad de que sus lugares de estudio y trabajo hayan estado exentos de estas prácticas. También es posible que un grupo de estas académicas haya naturalizado y ya no preste atención a comentarios y gestos sexistas como una de sus estrategias para persistir en la academia.

Se plantea esta última hipótesis a la luz del testimonio de Gabriela, quien es profesora asociada en una universidad de Santiago. Ella comenta que no percibe que “por ser mujer, no hubiese obtenido algo que hubiese obtenido siendo hombre”. Argumenta que “la academia [hoy] está en un nivel donde lo que haces y demuestras, es lo que vales”. Sin embargo, Gabriela inmediatamente clarifica que hay eventos donde se producen situaciones “raras”, aludiendo a dichos sexistas expresados por su jefe cuando ella comentó que iba a ser madre. “Fui donde una autoridad y dije: ‘Estoy embarazada’, y me respondió: ‘Ohh, chuta’. ¡Es raro! En ese momento, a mí me dio igual, pero luego, con el tiempo, me di cuenta de que había algo raro. Por ejemplo, cuando iba a tener mi segundo hijo, fui donde otra autoridad, y dije ‘estoy embarazada’, y él me dijo: ‘Ahh, felicitaciones, qué bueno’. Como que las reacciones cambian, y uno esperaría que la reacción fuera la última. ¿Me afectó en algo negativo [la primera reacción]? No... Y capaz que esa misma autoridad [la primera] se lo hubiese dicho de la misma forma a un profesor varón, pero probablemente no. Porque [si un profesor varón va a ser papá] no tiene ninguna consecuencia; [esta autoridad] no tenía que buscarle un reemplazo”.

La respuesta de Gabriela intenta explicar la reacción de su primer jefe en términos de un agente racional, quien está preocupado por asegurar la continuación de las actividades; respuesta que puede provenir de su propia

socialización disciplinaria o como una estrategia adquirida para permanecer en el campo de la economía.

RECOMENDACIONES

Las 10 mujeres economistas en este estudio constituyen una minoría selectiva en la academia chilena. Con excepción de una de ellas, sus trayectorias representan un fenómeno de reproducción de ventajas sociales y culturales que es sistemáticamente desafiado por la prevalencia de los estereotipos de género y prácticas que favorecen un *habitus* masculino en la disciplina.

Sus experiencias dan cuenta de que es crucial que los departamentos de Economía partan revisando críticamente cómo los espacios formativos de la disciplina producen o reproducen estereotipos y prácticas discriminatorias hacia las estudiantes mujeres. Esta revisión podría incluir un diagnóstico de clima estudiantil y una serie de talleres dirigidos a estudiantes sobre cómo operan los estereotipos de género en la disciplina, tanto a nivel de pre y postgrado. Por otro lado, los departamentos podrían ser intencionales en incrementar la representación de mujeres en los ramos de Economía en los primeros años de la carrera, pues esta acción incrementaría las instancias de modelo de rol para las mujeres, lo que potencialmente contribuiría a desafiar el estereotipo de que es un campo de hombres. En la misma dirección, se recomienda que los departamentos de Economía promuevan marcos normativos que aseguren que la supervisión de tesis de pre y postgrado permita instancias de socialización frecuente entre profesores y estudiantes con cierta periodicidad.

A un nivel más estructural, académicos en posiciones directivas de los departamentos de Economía periódicamente reportan la intención de contratar un número creciente de mujeres economistas. Si bien esta medida va en la dirección correcta, es importante considerar que esto no es suficiente en el largo plazo si es que los departamentos no generan los ambientes adecuados para retener a las académicas contradas y les permitan habitar desde otros códigos. En ese sentido, talleres de formación sobre cómo operan los sesgos de género en los procesos de contratación y promoción académica son cruciales si el objetivo es contrarrestar los mecanismos a través de los cuales se reproducen los estereotipos de género. Incrementar la conciencia sobre las creencias que organizan el poder al interior de una disciplina no terminará con los estereotipos, más mostrará aquellos donde se cultiva y reproduce lo que queremos evitar.

REFERENCIAS

- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. (2021). Base de datos de becarios (sin publicar).
- Andersen, C., & West, R. (2020). Improving mentoring in higher education in undergraduate education and exploring implications for online learning. *Red: Revista de Educación a Distancia*, 20(64). <https://doi.org/10.6018/red.408671>
- Auriol, E., Friebel, G., & Wilhelm, S. (2020). Women in european economics. En Lundberg, S. (Ed.). *Women in economics* (p. 26-31). Londres: CEPR Press.
- Bayer, A., & Rouse, C. E. (2016). Diversity in the economics profession: a new attack on an old problem. *Journal of Economic Perspectives*, 30(4), 221-242. <https://doi.org/10.1257/jep.30.4.221>
- Beneito, P., Bosca, J., Ferri, J., & García, M. (2021). Gender imbalance across subfields in economics: when does it start? *Journal of Human Capital*, 15(3), 469-511. <https://doi.org/10.1086/715581>
- Bordón, P., Canals, C., & Mizala, A. (2020). The gender gap in college major choice in Chile. *Economics of Education Review*, 77, 102011.
- Bottan, D., McKee, D., Orlov, G., & McDougall, A. (2022). Racial and gender achievement gaps in an economics classroom. *International Review of Economics Education*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.iree.2022.100239>
- Bourdieu, P. (1988). *Homo academicus*. Cambridge/Oxford: Polity Press-Basil Blackwell.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An invitation to reflexive sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Chevalier, J. (2021). *The 2021 report of Committee on the Status of Women in the Economics Profession* (p. 1-36). American Economics Association. <https://www.aeaweb.org/content/file?id=16291>
- Dupas, P., Sasser Modestino, A., Niederle, M., Wolfers, J., & Collective, T. S. D. (2021). Gender and the dynamics of economics seminars (NBER Working paper n° 28494). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28494>
- Dynan, K., & Rouse, C. (1997). The underrepresentation of women in economics: a study of undergraduate economics students. *Journal of Economic Education*, 28(4), 350-368.
- Ehrenberg, R. G. (1995). Role models in education: symposium introduction. *ILR Review*, 48(3), 482-485. <https://doi.org/10.1177/001979399504800307>
- Else-Quest, N., Hyde, J., & Linn, M. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics: a meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 136, 103-127. <https://doi.org/10.1037/a0018053>
- Emerson, T., McGoldrick, K., & Mumford, K. (2012). Women and the choice to study economics. *Journal of Economic Education*, 43(4), 349-362. <https://doi.org/10.1080/00220485.2012.714306>

- Ginther, D., & Kahn, S. (2004). Women in economics: moving up or falling off the academic career ladder? *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 193–214. <https://doi.org/10.1257/0895330042162386>
- Llorens, A., Tzovara, A., Bellier, L., Bhaya-Grossman, I., Bidet-Caulet, A., Chang, W. K., Cross, Z. R., Domínguez-Faus, R., Flinker, A., Fonken, Y., Gorenstein, M. A., Holdgraf, C., Hoy, C. W., Ivanova, M. V., Jiménez, R. T., Jun, S., Kam, J. W. Y., Kidd, C., Marcelle, E., ... Dronkers, N. F. (2021). Gender bias in academia: a lifetime problem that needs solutions. *Neuron*, 109(13), 2047–2074. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.06.002>
- Lundberg, S. (Ed.) (2020). *Women in economics*. Londres: CEPR Press.
- Mineduc (2021). Base de datos de matriculados en educación superior. Recuperado en noviembre de 2022 de: https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2021/07/OFICIAL_WEB_PROCESO_MAT_2007_al_2021_29_06_2021.zip
- Neumark, D., & Gardecki, R. (1996). Women helping women? Role-model and mentoring effects on female PhD students in economics (NBER Working paper n° 5733). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5733/w5733.pdf
- Orland, A., & Padubrin, M. (2022). Is there a gender hiring gap in academic economics? Evidence from a network analysis. *Royal Society Open Science*, 9(2). <https://doi.org/10.1098/rsos.210717>
- Paredes, V. A., Paserman, M. D., & Pino, F. (2020). Does economics make you sexist? (NBER Working paper n° 27070). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27070/w27070.pdf
- Picho, K., Rodríguez, A., & Finnie, L. (2013). Exploring the moderating role of context on the mathematics performance of females under stereotype threat: a meta-analysis. *The Journal of Social Psychology*, 153(3), 299–333. <https://doi.org/10.1080/00224545.2012.737380>
- Porter, C., & Serra, D. (2020). Gender differences in the choice of major: the importance of female role models. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(3), 226–254. <https://doi.org/10.1257/app.20180426>
- Richman, L. S., van Dellen, M., & Wood, W. (2011). How women cope: being a numerical minority in a male-dominated profession. *Journal of Social Issues*, 67(3), 492–509. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2011.01711.x>
- Sarsons, H. (2017). Recognition for group work: gender differences in academia. *American Economic Review*, 107(5), 141–145.
- Schultz, R., & Stansbury, A. (2022). Socioeconomic diversity of economics PhDs. Working Paper Series n° 22-4. Peterson Institute for International Economics.
- Undurraga, R. (2019). Who will get the job? Hiring practices and inequalities in the Chilean labour market. *Bulletin of Latin American Research*, 38(5), 575–590. <https://doi.org/10.1111/blar.12888>

- Williams, W. M. & Ceci, S. J. (2015). National hiring experiments reveal 2:1 faculty preference for women on STEM tenure track. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(17), 5360-5365. <https://doi.org/10.1073/pnas.1418878112>
- Wu, A. H. (2018). Gendered language on the economics job market rumors forum. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 175-179. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181101>

CAPÍTULO 10

DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS PARA LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL EN CHILE¹³

Gabriel Cruz, Pablo Egaña y Luis Valenzuela

INTRODUCCIÓN

Las mujeres enfrentan hoy una diversidad de desafíos en el mercado laboral. Por un lado, están los que podríamos clasificar como tradicionales, asociados principalmente a la brecha salarial, la participación en el mercado laboral, discriminación en general y el peso normativo de la doble carga laboral (ComunidadMujer, 2019). Por otro lado, están los desafíos emergentes, relacionados con el futuro —y, en cierto sentido, con el presente— del trabajo. Esto incluye aspectos como el surgimiento de la *gig economy*, el teletrabajo, la automatización y la rápida calibración de la demanda por habilidades compatibles con las nuevas formas de producir, intercambiar y consumir. Naturalmente, ambos tipos de desafíos no son independientes, pudiendo reforzarse o contrapesarse. Además, estos se enmarcan en un contexto global, donde hay desafíos socioeconómicos (alta desigualdad y exclusión), medioambientales (crisis climática) y demográficos (envejecimiento, migración).

A continuación, buscaremos dar respuesta a preguntas tales como en qué medida las nuevas tecnologías y formas de trabajo erosionan las conquistas laborales obtenidas por las mujeres en las últimas décadas, o qué políticas pueden ayudar a cerrar la brecha de género cuando se adoptan tecnologías avanzadas. Estudiaremos estas preguntas agrupando los temas en desafíos tradicionales y emergentes.

¹³ Este trabajo ha sido realizado con el auspicio del Núcleo Milenio Evolución del Trabajo (M-NEW, NCS2021_033) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

DESAFÍOS TRADICIONALES

Desde los inicios del siglo pasado, han existido distintos desafíos para que las mujeres sean incorporadas en espacios en los que han sido discriminadas a lo largo de la historia: procesos políticos, económicos y laborales. Por el lado del mercado laboral, si bien las mujeres han aumentado su participación significativamente en las últimas décadas, esta se ha visto estancada en los últimos años. En Chile, la participación femenina aumentó de un 47% a un 53% entre 2010 y 2019 (Cerdeira et al., 2020). Esta se encuentra bajo el promedio de la región, y tiene una brecha de más de 20 puntos porcentuales respecto a la tasa de participación de los hombres. Además, esta incorporación al mercado laboral no ha sido homogénea, es decir, existe una segregación de género por industria. En general, esto ha llevado a que las mujeres sean contratadas en trabajos con peores sueldos en comparación a los hombres (Cruz & Rau, 2022).

Se estima que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 21%. Esta cifra posiciona a Chile en el lugar número 34 de 42 países de la OCDE que reportan la peor brecha salarial de género. Aunque este porcentaje es inferior a la década del sesenta, cuando las mujeres ganaban la mitad del salario promedio que ganaban los hombres, todavía es considerable y significativo.

La literatura económica ha asociado la brecha laboral entre hombres y mujeres con distintas teorías. Por ejemplo, la discriminación laboral que enfrentan las mujeres, los costos asociados a la contratación femenina y las diferencias de acumulación de capital humano entre hombres y mujeres, entre otras hipótesis. Investigaciones muestran que las mujeres tienden a concentrarse en ocupaciones más flexibles, de menor calidad y remuneración, y con menores requerimientos de capital humano que los hombres (Banco Mundial, 2019). Es decir, empresas que tienen mejores salarios tienden a contratar a más hombres, mientras que empresas con menores sueldos emplean mayoritariamente a mujeres.

Por otro lado, en las últimas décadas se han identificado otros factores que pueden también explicar estas brechas de género. La nueva literatura de brecha de género ha puesto en discusión que pueden existir diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres, tales como las preferencias de riesgos, actitudes hacia la competencia y el poder de negociación. Además, se ha identificado que las mujeres toman responsabilidades del trabajo no remunerado que afectan su salario y participación laboral. En esta misma línea, las normas sociales respecto al rol de la mujer también tienen un efecto sobre sus aspiraciones y expectativas, afectando sus trayectorias formativas, lo que puede estar causando parte de las brechas de género.

Todo esto se relaciona directamente con el hecho de que las mujeres se concentran en ocupaciones tradicionalmente consideradas “femeninas” (p.

ej. educación parvularia o básica), es decir, en sectores menos valorados socialmente y, al mismo tiempo, tienen una menor representación en posiciones de liderazgo o en cargos de mayor jerarquía (gerencias o directorios). En esta misma línea, a pesar de que las tasas de inserción en la educación terciaria son similares entre hombres y mujeres, estas últimas tienen una menor representación en carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus iniciales en inglés), las cuales no solo se caracterizan por tener una mayor productividad y mejores remuneraciones, sino también se estima que serán más demandadas en el contexto del futuro del trabajo (Egana-delSol et al., 2022).

Respecto a las brechas de género en el futuro del trabajo, esta es un área menos explorada y conlleva desafíos emergentes. No está claro cuáles serán los posibles efectos de la llamada “cuarta revolución digital”, que se caracteriza por la presencia de un cambio tecnológico acelerado que ha transformado diversos aspectos de nuestras vidas, desde cómo nos relacionamos con otros, los modos de producción, las estructuras productivas y los modelos de negocios. Sin embargo, hay luces que permiten ver qué sectores y áreas pueden ser más afectados y qué consecuencias pueden traer esto para hombres y mujeres.

DESAFÍOS EMERGENTES

La economía digital o *gig economy* se ha masificado en los últimos años, y su estructura y organización impone desafíos emergentes para las mujeres, de los cuales todavía se desconocen sus alcances. En lo que sigue estudiaremos algunos elementos principales de estos desafíos, en particular, el surgimiento de la *gig economy*, el teletrabajo, la automatización y la rápida calibración de la demanda por habilidades compatibles con las nuevas formas de producir, intercambiar y consumir.

Gig economy

Si bien la *gig economy* —o economía por tareas o de plataformas— no tiene una definición establecida en la literatura de forma inequívoca, se puede entender como un mercado laboral caracterizado por el predominio de los contratos de corta duración o el trabajo por cuenta propia, típicamente mediado por plataformas digitales. Según estadísticas experimentales publicadas por el INE, en el trimestre abril-junio de 2022 había 205.740 personas trabajando mediante plataformas digitales o aplicaciones móviles, esto es, un 2.3% de la población total ocupada. Este tipo de empleos tuvo un crecimiento sustancial respecto al valor prepandemia (90.416 para el trimestre enero-marzo de 2020),

y el mayor aumento ha sido el experimentado por las mujeres, pasando del 31.3% a un 47.2% del total en el último trimestre. Se ha argumentado que la flexibilidad que ofrecen las plataformas digitales en torno a dónde, cuándo y cómo trabajar puede resultar atractiva para muchas mujeres que actualmente combinan el trabajo remunerado con el doméstico no remunerado y de cuidado (OECD, 2018). No obstante, la actual brecha de género en el uso de TICs en Chile y América Latina reduce la capacidad de que las mujeres usen efectivamente estas tecnologías, sus oportunidades de participar en plataformas de intermediación y/o de comercio electrónico, que potencialmente podría incrementar sus ingresos (OECD, 2018).

Las y los trabajadores de la *gig economy* están más expuestos y desprotegidos frente a *shocks* económicos negativos. Por un lado, la legislación laboral chilena se construye sobre la idea de personas que trabajan de forma asalariada, con empleo estable y formal. Pero en contraste, las y los trabajadores de la *gig economy* no cotizan leyes sociales (por ejemplo, salud, seguro desempleo, pensiones) y, por lo tanto, no reciben tales beneficios contributivos. Respecto al empleo femenino, esta situación es aún más precaria, dado que no cuentan con protección del embarazo y la maternidad.

Por otro lado, las nuevas tecnologías digitales pueden beneficiar a quienes buscan empleo parcial o requieren de mayores grados de flexibilidad horaria, como estudiantes, personas mayores, mujeres y migrantes (Drahokoupil & Piasna, 2017). Sin embargo, también están asociadas a mayores niveles de precarización laboral, en particular en contextos en que la seguridad social se basa en la figura tradicional del trabajador asalariado. Además, estudios han revelado importantes vulneraciones de derechos laborales en las y los trabajadores de plataformas, como horarios extensos y altos niveles de estrés (Arriagada et al., 2021; Graham et al., 2017).

Respecto a trabajos recientes sobre la *gig economy* en Chile, destacamos el desarrollado por la ONG Fairwork (Arriagada et al., 2021, 2022). En particular, Fairwork Chile evalúa a las plataformas más importantes en el país (Uber, Uber Eats, Cabify, Rappi, Pedidos Ya, DiDi, Justo, Beat y Bicci) de acuerdo a cinco criterios: pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. A continuación, se resumen sus resultados para 2021¹⁴:

- 1) Pago justo: en general, las y los trabajadores de estas plataformas ganan por sobre el salario mínimo. Sin embargo, este sueldo se ve reducido al momento de descontar costos asociados como bencina y

¹⁴ En 2021, siete empresas obtuvieron puntuación 1 o 2, de un máximo de 10. Para el 2022, se agregaron 3 empresas, y solo una logró puntuación (2 puntos, en dimensión 'Pago justo'). En parte, esto se debe a que Fairwork impuso umbrales más altos en diversas dimensiones. Sin embargo, y a pesar de la nueva ley de plataformas, los informes revelan que falta mucho para que las condiciones laborales de trabajadores de plataformas sean dignas.

depreciación del auto, moto o bicicleta, los cuales son asumidos por la o el trabajador.

- 2) Condiciones justas: ninguna de las plataformas muestra políticas consistentes destinadas a proteger a las y los trabajadores.
- 3) Contratos justos: todos los convenios clasifican a las y los trabajadores como contratistas independientes, perdiendo los beneficios de la regulación laboral al estar directamente contratados por una empresa. En la mayoría de las plataformas, las empresas no pueden realizar cambios unilateralmente en sus términos.
- 4) Gestión justa: solo tres de las plataformas tienen canales de comunicación claros con sus trabajadores/as, y ninguna tiene un contacto fluido entre trabajadores/as y ejecutivos.
- 5) Representación justa: ninguna plataforma reconoció tener una organización de trabajadores/as para generar acuerdos y revisar las condiciones laborales existentes.

En un contexto de crisis, donde las nuevas contrataciones se mantienen al mínimo, participar en la *gig economy* significa un mayor riesgo de desempleo, dado que no se cuenta con una relación contractual con un empleador. En efecto, la pandemia ha incrementado estas precariedades y ha expuesto la desprotección de las y los trabajadores de la economía *gig*. La mayoría no contó con condiciones mínimas de seguridad para evitar el contagio, ni tuvo acceso a beneficios laborales, como seguros de cesantía y salud, quedando completamente expuestos a contraer el virus y arriesgándose a reducir sus ganancias o perder sus vidas (Bonhomme et al., 2020; Arriagada et al., 2021; Katta & Ustek-Spilda, 2020).

Teletrabajo

El teletrabajo emergió triunfante en la pandemia y llegó para quedarse. Por un lado, debido a la doble carga laboral que enfrentan las mujeres —trabajo doméstico y económico—, el teletrabajo ofrece más oportunidades de compatibilizar ambos. Por otro lado, en la medida que el teletrabajo sea posible para más miembros del hogar (p. ej. pareja, hijos/as mayores, etc.), podría observarse una redistribución de dicha doble carga laboral a favor de las mujeres, no obstante, existen muchos otros elementos en juego que evitan vislumbrar claramente este reacomodo. Esta visión optimista puede verse reforzada por un proceso de autoselección, en donde las mujeres tiendan a favorecer nuevos trabajos que permitan el teletrabajo. Sin embargo, el teletrabajo tiene riesgos también, en particular el de la difusión de la jornada laboral, lo que puede conllevar a trabajar más de lo adecuado o legal.

Estudios recientes para Chile encontraron que la pandemia no afectó mayoritariamente el empleo de mujeres respecto al de hombres cuando se considera la capacidad de realizar teletrabajo (Egana-delSol, Cruz & Micco, 2022). El mismo estudio sí encontró una relación positiva entre el empleo y la capacidad de trabajar a distancia independiente del género. La encuesta de empleo UC muestra, para comienzos de 2022, que las mujeres todavía están realizando teletrabajo en mayor proporción que los hombres, no obstante, la tendencia para ambos sexos es a la baja. Es probable que se necesite esperar más tiempo para observar ajustes en el mercado laboral femenino debido al teletrabajo.

Automatización y demanda por nuevas habilidades

La actual revolución digital se diferencia de otros procesos tecnológicos anteriores por su velocidad de expansión y adopción, la cual no tiene precedentes históricos. Incluso, como se muestra más adelante, la pandemia ha acelerado estos procesos de transformación en todas las economías del mundo, incluyendo la chilena.

Las tecnologías de automatización crean y destruyen empleos. Por un lado, estimulan su generación al aumentar la productividad y crear nuevas ocupaciones relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin embargo, por otro lado, también aumentan la probabilidad de que ciertas tareas más rutinarias y repetitivas sean reemplazadas por máquinas, *softwares* y algoritmos.

Es importante mencionar que, a nivel mundial, la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial ha sido más lenta de lo que se esperaba (*MIT Technology Review*, 2019; US Census Bureau Report, 2020). Si bien las grandes empresas han podido adoptar tecnologías de manera agresiva, los altos costos de hacerlo han hecho que las pequeñas y medianas empresas tengan menor transformación digital.

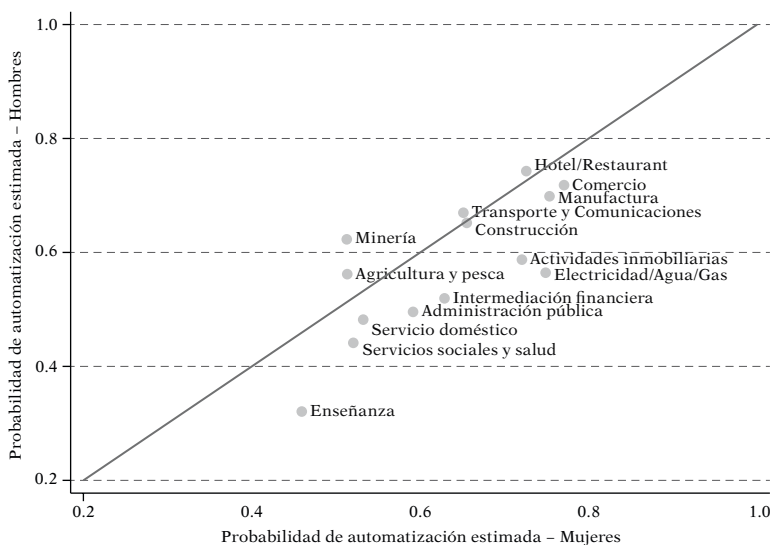
Egana-delSol, Cruz y Micco (2022) utilizan datos de Chile para comparar el nivel de desempleo durante la pandemia entre las ocupaciones laborales con alta probabilidad de automatización con el resto de las ocupaciones, encontrando que las primeras han reducido significativamente su nivel de empleo en comparación con el resto de los trabajos. En el segundo semestre de 2020, las ocupaciones con alta probabilidad de automatización redujeron su empleo en 10 puntos porcentuales aproximadamente. Además, se encuentra una recuperación en el empleo para hombres que no se observa para el caso de las mujeres, lo que refuerza el argumento de que el futuro del trabajo tiene una dimensión de género importante que se tiene que considerar.

Ciertos estudios están dando algunas luces sobre los posibles efectos que podrían causar las nuevas tecnologías en las brechas de género. Egana-delSol (2022) observa que las mujeres corren un mayor riesgo de automatización —por

ejemplo, la probabilidad de que su ocupación pueda ser realizada mediante el uso de tecnología— que hombres en Latinoamérica, lo que es contrario a lo que se observa en algunos países de Europa.

Muchas de las nuevas oportunidades laborales están y estarán relacionadas con la creación y el uso de tecnologías. Dada la segregación de género presente en el mercado del trabajo y en el sistema educativo, es más probable que sean los hombres quienes se beneficien más de estos nuevos empleos (Amaral et al., 2019; PNUD, 2015). Sin embargo, también se espera que aumenten las oportunidades laborales en el sector salud, cuidados y educación, en los cuales las mujeres se encuentran mejor representadas. El crecimiento de estos sectores se relaciona con el envejecimiento de la población y con el aumento que se espera de la matrícula educativa, especialmente en enseñanza preescolar y secundaria. No obstante, aun cuando estos trabajos considerados típicamente femeninos tienen un menor riesgo de automatización por el tipo de habilidades que requieren, también se caracterizan por tener una menor remuneración y calidad que aquellos en donde los hombres se encuentran mejor representados (Egaña-delSol, Bustelo, Ripani, et al., 2022).

FIGURA 1: *Probabilidad de automatización por sector y género*



Las diferencias de probabilidad de automatización que se observan en distintos sectores están relacionadas con el hecho de que mujeres y hombres realizan tareas diversas, o las mismas tareas con intensidades disímiles, utilizando un conjunto de habilidades distintas. Esta distribución desigual de tareas responde a razones históricas y, en ningún caso, a la capacidad de ejecutarlas. Esto es fundamental para entender las posibles consecuencias de la automatización. Trabajadores/as que realizan tareas y usan habilidades complementarias a la tecnología pueden beneficiarse de las nuevas tecnologías, mientras que las personas que usan habilidades que pueden ser sustituidas por estas tendrían mayores probabilidades de perder sus trabajos.

Por último, los cambios tecnológicos redefinen las habilidades necesarias para el trabajo. Se espera que las habilidades cognitivas avanzadas, como los conocimientos STEM, y aquellas no-cognitivas, como la resolución de problemas, adaptabilidad, movilidad y las habilidades sociales, sean más valoradas y demandadas en el mercado laboral. Por el contrario, los conocimientos y habilidades más relacionadas con la ejecución de tareas rutinarias o cognitivas no avanzadas, tendrán menor demanda y remuneraciones relativas. De no adaptarse la actual estructura de formación técnico-profesional a los cambios en los requerimientos de competencias laborales, se puede profundizar el descalce actual que existe en el país entre las competencias existentes y las demandadas.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS DESAFÍOS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL

La complejidad de los desafíos descritos anteriormente requiere de políticas públicas integrales y novedosas. En esta sección se hacen algunas propuestas que nos parecen importantes.

Políticas públicas para enfrentar desafíos tradicionales

i. Brecha salarial

Como vimos anteriormente, la brecha salarial se ha reducido recientemente. Sin embargo, parecieran haber retornos decrecientes, indicando un agotamiento del enfoque actual. Para seguir avanzando en esta materia, se requieren medidas más innovadoras. Destacamos tres.

Primero: la necesidad de medir y publicar cifras a nivel de empresas, con perspectiva de género. En el Reino Unido, por ejemplo, desde 2017 es obligatorio para empresas de más de 250 empleados publicar un informe anual

sobre brechas de género, que incluye una distribución de salarios por género, además de promedios y medianas de sueldo para distintas definiciones de este. Dicha información está disponible públicamente en una base de datos centralizada¹⁵. La Unión Europea está en proceso de implementar una medida similar. Los beneficios de esta política son directos: por un lado, se otorga *accountability* para los consumidores y, por otro, da a las mujeres información precisa. En Chile, el Gobierno, en conjunto con la Fundación ChileMujeres, realiza anualmente desde 2020 un Reporte de Indicadores de Género en las Empresas, reporte que solo cubre empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero. El proyecto podría ser más ambicioso, por ejemplo, con un análisis que sea contribuido desde las mismas empresas hacia un repositorio automatizado y comparable, tal como existe para el Reino Unido.

Segundo: introducir escalas transparentes de sueldos en el sector privado, las que ya existen en el sector público y otros organismos (p. ej. universidades). Se podría exigir por ley que empresas privadas de cierto tamaño tengan también criterios transparentes respecto a sus sueldos; escalas que, por un lado, otorguen flexibilidad en cuanto a definir incentivos salariales, pero que también ayuden a disminuir ese espacio de arbitrariedad que produce discriminación y brechas salariales injustificadas por los méritos de la persona.

Tercero: introducir cuotas obligatorias de mujeres en directorios (y, por qué no, en gerencias), lo que ya es una realidad en muchos países, incluyendo Alemania, España, Francia, India, Italia y Noruega. Estas naciones garantizan que entre el 30% y 40% de los cargos de directorios de empresa sean ocupados por mujeres. En Chile, el 47% de las empresas con directorio no tienen una mujer en esas instancias (DF, 2022). Estudios preliminares sugieren que dichas cuotas reportan diversos beneficios a las empresas (Kirsch, 2021). En efecto, Chile va en la dirección correcta, ya que en noviembre de 2022 el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley (llamado “Más mujeres en directorios”), que busca que, en un período de 6 años, todo directorio tenga al menos un 40% de cargos directivos ocupados por mujeres.¹⁶

ii. Participación

A pesar de los efectos de la pandemia, la participación laboral femenina en Chile ha mejorado en el tiempo, en parte por políticas activas para mejorar la conciliación de trabajos y cuidados (salas cunas en empresas, postnatal compartido, etc.). Sin embargo, en dicha mayor participación también se observan rendimientos decrecientes que requieren medidas más radicales

¹⁵ <https://gender-pay-gap.service.gov.uk/>

¹⁶ A fines de 2022, solo una empresa privada en Chile cuenta con un directorio compuesto con al menos 40% de integrantes mujeres (Compañía de Aceros del Pacífico, CAP).

que ataquen las causas principales que limitan el acceso, como, por ejemplo, el cuidado de niños y niñas. La evidencia disponible tiende a mostrar que el acceso a sala cuna y educación preescolar favorece la participación laboral de las mujeres (Mateo-Berganza & Rodríguez 2013; Morrissey, 2017; Ilin, Shampine & Terry 2022). En ese sentido, es urgente promover un sistema universal de sala cuna gratuito y de calidad. En Chile, el proyecto de ley al respecto todavía está en discusión parlamentaria, y si bien representa un avance en la dirección correcta, tiene diversas falencias al no asegurar gratuidad ni calidad.

Una iniciativa complementaria ya existente es la certificación mediante el Sello Iguala-Conciliación (norma NCh3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida laboral, familiar y personal), entregado por el SernamEG, que compromete a las empresas identificar y desarrollar acciones que eliminen brechas de género y promuevan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Dicho mecanismo puede extenderse muy fácilmente, por ejemplo, requiriendo su obligatoriedad para empresas proveedoras del Estado - o quizás más ambiciosamente, para todas las empresas del país.

Finalmente, también hay que promover y ampliar iniciativas sectoriales, ya sean privadas, públicas o combinadas, que buscan promover el empleo femenino en sectores dominados tradicionalmente por hombres. Tres ejemplos para Chile son la Mesa Nacional Mujer y Minería, que busca aumentar la participación femenina en el sector minero a un 30% y de mujeres en altos cargos a un 25%, para el año 2050; el Plan Público Privado “Energía +Mujer”, orientado al sector energético; y la organización RedMaestra, que promueve la inclusión femenina en el sector Construcción, que tiene una de las menores tasas de participación en el país (9% de mujeres versus 91% de hombres).

Políticas públicas para enfrentar desafíos emergentes

i. Gig economy

Las nuevas formas de intermediación laboral y consumo asociadas con la *gig economy* son reconocidas por su actual precariedad. Si bien la mayoría de los trabajadores en ella son hombres, las mujeres podrían beneficiarse de la flexibilidad de estos trabajos cuando están a cargo de las labores de cuidado. Desde este punto de vista, la *gig economy* podría contribuir a la participación femenina en el mercado del trabajo, sin embargo, esto conlleva el riesgo de que se acreciente la ya dominante precariedad laboral femenina. Parte de la solución es una regulación de estas actividades económicas. Chile ha sido pionero en la región al introducir cambios al respecto en el Código del Trabajo (ley 21.431); en particular, se reconoce a estos trabajadores como tales, teniendo la relación contractual que especificar condiciones como tarifas de

pago, horario y protección de datos, entre otros. A pesar de esto, la protección asegurada por esta nueva ley es aún precaria, especialmente en lo que concierne a la seguridad personal en el trabajo o derechos colectivos. Algunos expertos dicen, incluso, que esta ley fue una oportunidad perdida, pues no abordó los temas de fondo (Leyton & Azócar 2022).

Además de necesitar una mejor legislación, es de vital importancia medir propiamente este tipo de trabajos, para poder así identificar mejor sus características y problemáticas. La Encuesta Nacional de Empleo recientemente incorporó algunas preguntas al respecto, publicando en julio de 2022 y por primera vez cifras experimentales sobre el trabajo mediado por plataformas. Si bien esto es un gran avance, hay espacio para mucho más, por ejemplo, mediante encuestas dirigidas específicamente a estos grupos. Hasta el momento, iniciativas orientadas especialmente a estudiar este sector en Chile han venido de organismos internacionales (p. ej. OIT, 2021), organizaciones civiles (p. ej. Fairwork, 2021) o estudios académicos (p. ej. Asenjo & Coddou, 2021). Es rol del Estado al menos medir el *gig economy*, de forma de diseñar e implementar políticas públicas efectivas.

ii. Teletrabajo

Como se mencionó anteriormente, la pandemia validó el teletrabajo como método de trabajo. Paralelamente, en Chile se introdujo regulación respecto a su duración y el derecho a la desconexión digital. El desafío es implementarla, sobre todo para proteger el bienestar de las mujeres. En ese sentido, el rol fiscalizador del Estado es clave. Se debieran fortalecer las capacidades de fiscalización de la Dirección del Trabajo, por ejemplo, exigiendo a las empresas acogidas al teletrabajo a registrar e informar respecto a tiempos de conexión de sus empleados; y también se debe evaluar que se cumpla el pago de los costos del teletrabajo (equipos, internet, etc.) establecidos en la ley.

iii. Automatización y demanda por nuevas habilidades

La creciente demanda por habilidades relacionadas con carreras STEM, beneficiadas por la revolución tecnológica 4.0, pone aun mayor presión para revertir las actuales brechas de género en dichas carreras (en 2022, un 22% de quienes ingresaron a carreras STEM en Chile son mujeres; DF, 2022). Dado que parte del problema está en las normas sociales y estereotipos de género imperantes, es vital una política pública que parta desde la infancia, siguiendo todo el proceso educacional escolar.

Es importante revertir desde temprano los sesgos normativos en el currículum escolar. Herramientas como competencias de ciencias y matemáticas orientadas solamente a mujeres, es un ejemplo de una iniciativa que ayuda

a corregir sesgos preexistentes. Desde 2016 la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Gobierno de Chile realiza un concurso llamado InspiraTEC que justamente busca premiar a niñas, jóvenes y mujeres destacadas en áreas STEM. Adicionalmente, se sugiere impulsar campañas comunicacionales que destaquen las contribuciones de mujeres científicas. Esta idea puede ayudar a generar un modelo de rol (*role model*) que podría inspirar a estudiantes en etapa escolar a seguir carreras científicas. Tal es el objetivo por ejemplo de la iniciativa británica Inspiring Girls, que conecta a niñas y adolescentes con mujeres referentes en diversos campos, incluyendo áreas STEM, y que ya tiene presencia en Chile. Se sugiere también que los instrumentos de becas de postgrado y fondos de investigación incorporen criterios que reconozcan la exclusión estructural que han tenido las mujeres en las ciencias. Algo como esto está siendo considerado en la Política Nacional de Igualdad de Género para la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lanzada por el Ministerio de Ciencia en 2021.

Se debe destacar que hoy la educación es continua. Es menester que los procesos de formación y “reentrenamiento” (*re-skilling* en inglés) se enfoquen en reducir la brecha de habilidades existente en la fuerza laboral activa. En ese sentido, deben fomentarse estrategias intensivas de capacitación y *e-learning* dirigidas a mujeres, con apoyo directo o indirecto del Estado (por ejemplo, a través del SENCE). Hay una amplia experiencia en el mundo de procesos exitosos de formación, algunos con orientación especial a las mujeres. En Chile por ejemplo existe una iniciativa público-privada llamada Talento Digital, que espera haber capacitado en conocimientos avanzados de TI a más de 13 mil personas a fines de 2022, 35% de estas siendo mujeres. Si bien esto es un avance tremendo hacia la reducción de la brecha de género en la industria TI, es importante también fomentar iniciativas dedicadas exclusivamente a mujeres, cuyo diseño ayude a romper con las trabas tradicionales que limitan la participación de mujeres en estos, como estereotipos, responsabilidades familiares, acoso y discriminación (OIT, 2017). Ese es uno de los objetivos de la iniciativa privada Ingeniosas, fundada en 2017 en Chile, y que ya opera en otros países de Latinoamérica. Su foco particular está en fomentar las vocaciones STEM entre las niñas de educación básica y secundaria y ya cuentan con más de 10 mil alumnas participantes. Otras iniciativas parecidas son Tremendas y Laboratorio, organizaciones privadas fundadas en Chile y operando también en otros países. iv. Hacia una mirada amplia, proactiva y de largo plazo

Finalmente, una sugerencia más amplia que no queremos dejar de mencionar y que, en cierto sentido, engloba a todas las anteriores, es la creación de un Consejo para el Futuro del Trabajo. Dicho consejo, de carácter consultivo y permanente, debe incorporar diversos *stakeholders*, como trabajadores/as, empresarios/as, académicos/as, instituciones educacionales, entidades públicas y de la sociedad civil, siendo paritario en su conformación. Este consejo

ayudaría a enfrentar no solo los desafíos acá mencionados, sino también podrá identificar nuevos desafíos y tendencias en el mercado del trabajo, cambios que hoy están sucediendo a velocidades cada vez mayores. Existen experiencias exitosas de este tipo de organismos en Dinamarca, Japón y Noruega¹⁷. Así, entonces, Chile puede, como en otras dimensiones mencionadas antes, tomar la delantera, y proteger y preparar a sus trabajadores y trabajadoras para los desafíos del futuro, con equidad y esperanza.

REFERENCIAS

- Arriagada, A., Bonhomme, M., Leyton, J. & Ibáñez, F. (2021). Fairwork Chile. Puntuaciones 2021: estándares laborales en la economía de plataformas. Equipo Fairwork Chile.
- Arriagada, A., Leyton, J. & Ibáñez, F., Browne, S., Lopez, T., Graham, M. (2022). Fairwork Chile. Puntuaciones 2022: estándares laborales en la economía de plataformas. Equipo Fairwork Chile.
- Asenjo, A. & Coddou, A. (2021). Economía de plataformas y transformaciones en el mundo del trabajo: el caso de los repartidores en Santiago de Chile. OIT Cono Sur-Informes Técnicos, n° 17. Santiago: Organización Internacional del Trabajo.
- Bonhomme M., Arriagada, A. & Ibáñez, F. (2020). La otra primera línea: Covid-19 y trabajadores de plataformas digitales. CIPER Chile. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://ciperchile.cl/2020/04/02/la-otra-primer-a-linea-covid-19-y-trabajadores-de-plataformas-digitales/>
- Cerda, R., Domínguez, C., Lafortune, J., Muñoz, N. & Reyes, J. (2020). Empleo femenino y Covid-19: diagnóstico y propuestas. *Temas de la Agenda Pública*, 15(130), 1-20.
- Cruz, G., & Rau, T. (2022). The effects of equal pay laws on firm pay premiums: evidence from Chile. *Labour Economics*, 75, 102135.
- Diario Financiero (2022). Mujer, empresa e industria. Igualdad de género para un futuro sostenible. Suplemento, 21 de octubre de 2022. Disponible en https://www.df.cl/noticias/site/docs/20221020/20221020181234/suplemento_20221021.pdf
- Egaña-delSol, P., Bustelo, M., Ripani, L., Soler, N. & Viollaz, M. (2022). Automation in Latin America: are women at higher risk of losing their jobs? *Technological Forecasting and Social Change*, 175.

¹⁷ Las iniciativas se denominan “Danish Disruption Council” (Dinamarca), “Future of Work 2035: For Everyone to Shine” (Japón), y “Sharing Economy Committee” (Noruega).

- Egaña-delSol, P., Cruz, G., & Micco, A. (2022). Covid-19 and automation in a developing economy: evidence from Chile. *Technological Forecasting and Social Change*, 176.
- Ilin, E., Shampine, S. & Terry, E. (2022). Does access to free pre-kindergarten increase maternal labor supply? Working paper 2022-3. Federal Reserve Bank of Kansas City. <https://doi.org/10.29338/wp2022-03>
- Katta, S. & Ustek-Spilda, F. (2020). Fairwork releases report on platform responses to Covid-19. Oxford: Fairwork Foundation. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://fair.work/fairwork-releases-report-on-platform-responses-to-covid-19/>
- Kirsch, A. (2021). Women on boards policies in Member States and the effects on corporate governance. PE 700.556, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament.
- Leyton, J., & Azócar, R. (2022). Análisis crítico de la regulación del trabajo en plataformas en Chile, introducida al Código del Trabajo por la Ley n° 21.431. *Revista Jurídica Del Trabajo*, 3(7), 162-195.
- Mateo-Berganza, M. M. & Rodríguez, L. (2013). Childcare and women's labor participation: evidence for Latin America and the Caribbean. Technical Note n° IDB-TN-586, Inter-American Development Bank.
- Morrissey, T. W. (2017). Child care and parent labor force participation: a review of the research literature. *Review of Economics of the Household*, 15(1), 1-24.
- OECD (2017). *The pursuit of gender equality: an uphill battle*. París: OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en>
- OIT (2017). ILO toolkit for quality apprenticeships - Vol. 1: Guide for policy makers. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- OIT (2021). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2021: el papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

SECCIÓN 4
POLÍTICA

Editora: Catherine Reyes-Housholder

CAPÍTULO 11

DEMOCRACIA Y GÉNERO EN CHILE¹

Catherine Reyes-Housholder

¿CÓMO EVALUAR la democracia chilena? Este capítulo argumentará que no se puede contabilizar su existencia, calidad y funcionamiento sin tomar en consideración temas de género. La expresión “temas de género”, en este trabajo, se referirá a las desigualdades históricas y actuales de poder político entre los hombres y las mujeres². El argumento se basa en la premisa —consensuada en los estudios sobre mediciones democráticas (Coppedge et al., 2020)— de que como la democracia es un concepto complejo, se requiere examinar múltiples facetas de esta. Voy a sostener mi argumento detallando cómo un par de dimensiones de las democracias modernas —la participación ciudadana y la representación— requieren consideraciones de género.

El capítulo se divide en tres partes. Primero, consideraré la centralidad de temas de género en examinar la existencia y calidad de la participación ciudadana. Aquí se explorará la participación electoral a través del voto, haciendo referencia a teorías minimalistas de la democracia. También se examinará la discusión política por parte de las y los ciudadanos, aludiendo a teorías de la democracia deliberativa. La segunda parte introducirá el concepto de representación política, especialmente sus dimensiones descriptiva y sustantiva. La conclusión, tomando en cuenta todas estas facetas generizadas de participación y representación, ofrecerá algunas observaciones para un análisis preliminar de la democracia chilena contemporánea. Este ensayo, por ende, se interesa principalmente en los criterios y consideraciones generizadas, que son necesarios para lograr una evaluación sistemática y completa de la democracia en Chile. Para ello, se apela a tres conceptualizaciones de democracia: una electoral, otra deliberativa y, finalmente, una representativa. Se concluye que la democracia en Chile y otros países del mundo, requiere al menos de dos

¹ Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

² El presente capítulo no considera desigualdades entre mayorías y minorías sexuales, pero estas también corresponden a un análisis de temas de género y la calidad de la democracia (Corrales & Pecheny, 2010).

condiciones: una participación igualitaria entre ciudadanas y ciudadanos, y una representación descriptiva y sustantiva de las mujeres. El análisis respalda el dicho famoso de la feminista chilena Julieta Kirkwood (1986) de “no hay democracia sin feminismo”.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
EL SUFRAGIO FEMENINO Y LA DISCUSIÓN POLÍTICA

No existe democracia —la gobernanza por las personas— sin participación ciudadana. En el campo de la ciencia política, se suelen usar definiciones minimalistas de la democracia: estas suponen que un país es democrático en la medida de que exista sufragio universal con elecciones limpias (Collier & Levitsky, 1997). A veces “sufragio universal” se refiere al sufragio de hombres, pero no necesariamente al de mujeres. Sin embargo, la idea de democracias electorales en una ausencia de voto femenino es más y más debatida en la ciencia política (Paxton, 2000): no hay democracia sin el sufragio de mujeres. Si aceptamos esta idea, llegamos a la conclusión de que la historia de la extensión del voto femenino en Chile, como en otros países del mundo, es una de democratización gradual (Teele, 2018; Castillo, 2022). Los hombres chilenos alfabetos lograron el voto en 1874 (Maza Valenzuela, 1995), pero no se puede entender el proceso de nacimiento de la democracia chilena sin considerar cómo las mujeres se organizaron desde fines del siglo XIX en la lucha por el voto.

En ese momento, eran mujeres de élite las que lideraron este movimiento, muchas de las cuales después se incorporaron al Partido Conservador, contribuyendo a que este pudiese adquirir un nuevo bloque de votos femeninos (Maza Valenzuela, 1995; Sanhueza, 2022). Las chilenas empezaron a votar en elecciones municipales en 1935, lograron el voto a nivel nacional en 1949, y participaron por primera vez en elecciones presidenciales en 1952³. Todos estos hitos del movimiento de sufragio femenino marcaron pasos fundamentales hacia la democratización en Chile.

Hoy en día, los chilenos y las chilenas tienden a participar en igual medida en las elecciones. El hecho de que como grupos hayan tenido tendencias de votar por ideologías diferentes (Lewis, 2004; Morgan, 2015), subraya la importancia del voto femenino en cuanto a canalizar las preferencias distintas de las mujeres. Se suele decir, por ejemplo, que las votantes mujeres ayudaron a asegurar la primera elección de la primera presidenta de Chile, Michelle Bachelet (Reyes-Housholder, 2019; Ríos Tobar, 2008).

³ Los hombres en el poder en ese momento dieron a las chilenas el voto de manera relativamente tarde en comparación con otros países en el mundo y en la región (Castillo forthcoming).

Sin embargo, la participación ciudadana a través del voto no basta como criterio para evaluar la democracia. Aun cuando la participación electoral es y siempre será relevante, teorías de democracia deliberativa sugieren que también importa cómo y cuánto las y los ciudadanos influyen en la política a través de la discusión pública. Teorías en esta línea argumentan que no se puede simplemente agregar preferencias, como se hace a través de las elecciones, sino que las y los ciudadanos tienen que discutir los temas políticos para lograr entendimientos compartidos y consensos (Mansbridge, 1998). Las conversaciones cotidianas entre ciudadanos/as y los debates transmitidos en los medios de comunicación sirven para permitir que las ideas políticas de la ciudadanía sigan influyendo en la toma de decisiones políticas en esferas formales, como el Congreso.

El hecho de que Chile actualmente está viviendo un proceso constituyente, subraya aún más la relevancia de la deliberación pública y la igualdad de poder deliberativo entre hombres y mujeres. Lo ideal sería observar a los chilenos y chilenas discutiendo sobre los contenidos eventuales de una nueva Constitución e intentando incidir directamente en el proceso. La buena deliberación produce, además de soluciones beneficiosas, los recursos emocionales e intelectuales para aceptar decisiones difíciles (Mansbridge, 1998), lo que falta en el Chile de hoy.

La democracia deliberativa y el feminismo podrían presentar afinidades especiales. En un capítulo del libro editado por Anne Phillips, *Feminism and politics*, Jane Mansbridge (1998) señala que, entre otras corrientes de teorías feministas, el pensamiento feminista maternalista podría enriquecer debates sobre qué es y cómo debería ser la democracia deliberativa. Voy a exponer brevemente algunos de sus argumentos, los que permiten sugerir ciertas aplicaciones para entender las fortalezas y deficiencias de la democracia chilena actual en cuanto a la participación ciudadana.

Primero, los teóricos sobre democracia deliberativa han establecido condiciones necesarias para la alta calidad de deliberación, tal como la igualdad entre las y los ciudadanos que están discutiendo. Las teorías feministas de dominación masculina en esferas políticas permiten alertarnos sobre la posibilidad de que, por ejemplo, los hombres podrían interrumpir a las mujeres de forma desproporcionada, disminuyendo la igualdad de actores en la deliberación. También los hombres pueden usar su autoridad masculina explícita o implícitamente como herramientas para silenciar a las voces femeninas. A su vez, ciertas reglas del juego de deliberación pueden favorecer o desfavorecer la igualdad de género (Mendelberg, Karpowitz, & Oliphant, 2014). Por ende, las teorías feministas pueden iluminar estas posibilidades, mostrando además maneras de igualar la cancha deliberativa no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre personalidades estereotípicamente masculinas y femeninas.

Además, el feminismo maternalista, sin caer en la trampa del esencialismo⁴, puede enriquecer nuestros entendimientos sobre el buen funcionamiento de la democracia deliberativa. Este corriente de pensamiento feminista celebra desproporcionalmente las cualidades cariñosas de las personas autoidentificadas como mujeres, las que vienen de sus propias experiencias de cuidar a niños y ancianos. Las teorías de democracia deliberativa no se enfocan en registrar las preferencias de los individuos, sino que buscan motivar o inspirar a las y los ciudadanos a pensar en sus intereses de manera diferente. Además, se transforman los intereses de “yo” a los de “nosotros” a través de la discusión. Según esta perspectiva, la socialización de las mujeres, junto con las experiencias adquiridas a través del cuidado cotidiano de niños y ancianos, entre otras causas, las hacen especialmente atentas e incentivadas para transformar los intereses individuales en colectivos. Se terminan encontrando soluciones a conflictos, y estas soluciones pueden acomodar deseos diversos⁵. El feminismo maternalista podría permitir imaginar una política sin dominación, alejándose de una política de suma cero y acercándose a una basada en ideales de empoderamiento. Mansbridge concluye que esta corriente de feminismo sirve para mejorar teorías de democracia deliberativa.

¿Cuánto y cómo se podría aplicar a la democracia chilena durante el proceso constituyente? Se habla de manera recurrente en la política chilena de hoy de una polarización de actitudes, al menos entre élites. Priorizando las cualidades maternalistas —que pueden ser encarnadas por mujeres y hombres—, un enfoque en la transformación de intereses de “yo” hacia los intereses de “nosotros”, eventualmente podría ayudar a la población a encontrar mayores puntos de consenso. Se puede criticar estos argumentos diciendo que suelen ser demasiado idealistas y poco realistas. ¿Cómo podría ser posible que primaran las cualidades maternalistas, cuando el mundo político chileno parece basarse en una lucha conflictiva, suma cero por el poder?

Hay algunas razones para pensar en la posibilidad de que el feminismo maternalista sí ha influido de manera positiva en la política chilena. Por ejemplo, el feminismo y los temas del cuidado han sido especialmente importantes durante los debates constituyentes chilenos. Organizaciones feministas y de mujeres, tales como el Centro de Estudios de la Mujer, Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, impulsaron desde el inicio del proceso un “reglamento feminista” que buscaba transversalizar la paridad en las

⁴ El esencialismo supone erróneamente que las mujeres y los hombres por su naturaleza o esencia poseen características distintas. Por ejemplo, este pensamiento diría que los hombres son naturalmente mejores líderes que las mujeres, y que las mujeres son naturalmente más sensibles que los hombres. El feminismo maternalista, para evitar esta idea, puede poner énfasis en cómo la socialización puede fomentar o disuadir ciertas cualidades.

⁵ Mansbridge también aborda cómo el feminismo maternalista nos puede ofrecer nuevas definiciones de poder político basadas en las experiencias de cuidado.

comisiones, y también permitir a los y las constituyentes deliberar sobre las propuestas de manera más equitativa (Centro de Estudios de la Mujer, Corporación Humanas & Observatorio de Género y Equidad, 2021). En la propuesta de nueva Constitución, se mencionó en varios puntos las responsabilidades maternalistas que tradicionalmente han asumido las chilenas. Específicamente, se establece el derecho de las mujeres privadas de libertad a la lactancia y vínculo directo con sus hijo/as. Además, reconocía el trabajo doméstico y de cuidado como trabajos formales que requieren acceso a la seguridad social. Estas innovaciones podrían estar implícitamente inspiradas en —o al menos relacionadas con— teorías de feminismo maternalista.

Fuera de los tiempos constituyentes, importa la participación ciudadana en la política a través de las discusiones cotidianas. Las y los ciudadanos que se interesan en esta, tendrán mayores probabilidades de buscar incidir en ella, mientras que las y los ciudadanos desinteresados quedan fuera. Las personas interesadas en la política además suelen estar más informadas, consumiendo más noticias sobre el tema. También tienden a buscar persuadir a los demás de estar de acuerdo con ellos/ellas sobre sus perspectivas políticas. Entonces, se puede analizar la igualdad entre hombres y mujeres mirando, por ejemplo, brechas eventuales de género en la tendencia a interesarse en la política, consumir noticias sobre el tema o intentar políticamente persuadir a las personas.

Los autores Isabel Castillo, Rodolfo Disi y Felipe Sánchez, en este libro analizan datos de las encuestas ELSOC de COES, mostrando que las chilenas se interesan ligeramente menos en la política que los hombres. Sin embargo, muchas de estas diferencias en los últimos años no son estadísticamente significativas. Esto quiere decir que no sabemos con mucha certeza si estas brechas de género realmente existen o no. Si son verdaderas, se presenta evidencia de una deficiencia en la calidad de la democracia⁶.

La democracia chilena será más completa en la medida que las ciudadanas participen de manera similar que los ciudadanos. Sin embargo, la democracia no requiere solamente participación ciudadana directa —mediante el voto y las discusiones políticas—, sino también a través de la representación. La próxima sección tomará otro entendimiento de las democracias modernas —la democracia representativa— para revelar la importancia de los temas de género, especialmente en las evaluaciones de la representación descriptiva y sustantiva.

⁶ Muestra además que los niveles de interés en la política en Chile, en general, son muy bajos, hallazgo que sugiere una fragilidad en la democracia.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA:
LAS DIMENSIONES DESCRIPTIVAS Y SUSTANTIVAS

Teorías de la democracia representativa asumen que se requieren representantes para canalizar los intereses de las y los ciudadanos, promoviéndolos en órganos políticos como el Congreso. Siguiendo a Hannah Pitkin (1967), un análisis completo de la representación política requiere tomar en cuenta las dimensiones formales, simbólicas, descriptivas y sustantivas. El trabajo de Pitkin no adopta un enfoque de género, pero muchos investigadores han usado su marco teórico de representación para entender la calidad de la democracia en términos de género (Schwindt-Bayer, 2018). Esta sección tocará solamente las dimensiones de la representación descriptiva y sustantiva, las más tratadas y, eventualmente, las más relevantes para una evaluación generizada de la representación en democracias modernas⁷.

La representación descriptiva, aplicada a temas de género, alude a la presencia de personas autoidentificadas como mujeres en posiciones políticas. Pitkin se refería a esta representación principalmente en cuerpos legislativos, pero hoy se ha aplicado el término en casi todas las esferas de tomas de decisiones, inclusive en el poder ejecutivo. Se suele mencionar la metáfora del espejo para entender la representación descriptiva: las y los representantes, como un espejo, deben reflejar cómo son sus electorados. Se supone que las y los representantes que logran parecerse a sus electorados van a pensar, opinar, sentirse, argumentar y comportarse como sus electorados. Se puede evaluar esta dimensión de representación a través de la pregunta: ¿hasta qué punto las y los representantes se parecen a las y los ciudadanos? Aplicando esta idea al área de género, se supone que la representación descriptiva de las mujeres no se logra con monopolios de hombres en el poder. El principio de paridad apunta a la idea de que, como las mujeres constituyen la mitad de la población, la mitad de los representantes también deben ser mujeres.

Los principios paritarios han ganado relevancia en nuestro país durante los últimos años, especialmente durante el proceso constituyente, en donde Chile se posicionó como el primer país del mundo en elegir una convención paritaria (ver Hafemann & Yanes-Rojas, capítulo 13). Más allá de la composición de los

⁷ La representación formal se refiere al diseño de reglas electorales —las “reglas del juego”— que incide en la distribución de poder entre grupos. Una pregunta para evaluar la representación formal es: “¿Los representantes lograron llegar al poder a través de un proceso legítimo?”. Los sistemas proporcionales suelen ser vistos como mejores para aumentar la representación femenina en las legislaturas, especialmente cuando interactúan con sistemas con cuotas de género (Reyes-Housholder, 2017). La representación simbólica se refiere a cuánto las y los ciudadanos se sienten representados por sus representantes. Se puede contabilizar esta dimensión con un enfoque de género con una examinación de cómo las chilenas, en comparación con los chilenos, se sienten frente a la democracia.

propios constituyentes, la propuesta de nueva Constitución puso énfasis especial en la representación descriptiva de las mujeres, estableciendo la paridad como principio del Estado chileno. El artículo 6 profundizaba en esta idea, específicamente el punto 6.2: “Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres⁸”. En otras palabras, la paridad no solamente caracterizó a la composición de la Convención Constituyente, sino también sus contenidos.

¿Qué tan importante es la presencia de las mujeres? La enorme heterogeneidad de las chilenas —sus diferencias de clase, religión, raza u origen geográfico— suele poner en duda la idea de que cualquiera puede representar a la categoría general de mujeres⁹. ¿Pueden las chilenas de clase alta representar mejor a las de clase baja? ¿Son capaces de hacerlo mejor que los hombres de clase baja? Pitkin señalaba que, aun si la representación descriptiva consistió en una dimensión fundamental del concepto de la representación, se puede criticarla diciendo que era “pasiva”: simplemente con parecerse al electorado bastaría para cumplir con este criterio. Uno podría argumentar que hay hombres representantes que han luchado por los intereses de las mujeres, por ejemplo, en el área de los derechos reproductivos. ¿Por qué importa tanto la presencia de mujeres representantes? ¿Podría la representación descriptiva ejercer efectos en otros aspectos de la representación?

La respuesta corta es: sí. Pero requiere de mayor explicación. Primero, Pitkin suele considerar la representación sustantiva como la más importante de las cuatro dimensiones. Esta se refiere a cuánto las y los representantes buscan promover políticas públicas que favorecen los intereses de sus electorados. La dimensión sustantiva aparece como más “activa” que la descriptiva. Se evalúa la representación sustantiva en términos de resultados. ¿Cuánto ha hecho este/a representante para su electorado? ¿Las políticas públicas empujadas por las/los representantes, favorecen los intereses de sus votantes¹⁰?

⁸ <https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf>

⁹ Jane Mansbridge argumenta que la representación descriptiva es especialmente relevante bajo ciertas circunstancias; por ejemplo, cuando las y los ciudadanos no están seguros de sus propios intereses (intereses no “cristalizados”), o cuando hay desconfianza expresada por grupos históricamente marginalizados (Mansbridge, 1999).

¹⁰ Se podría argumentar que las mujeres son tan diversas, que no existen los “intereses de las mujeres”. Sin embargo, experiencias compartidas entre muchas personas autoidentificadas como mujeres —la posibilidad de quedar embarazada, las responsabilidades de cuidado y la amenaza de violencia generizada— sugiere que las mujeres pueden tener intereses en base a su identidad de género. Para una discusión profunda sobre esto, ver Schwindt-Bayer, L. A. & Taylor-Robinson, M. M. (2011). The meaning and measurement of women’s interests: introduction. *Politics & Gender*, 7(3), 417-418.

Dada la relevancia de las dimensiones descriptivas y sustantivas de la representación, ¿podría existir alguna relación entre estas? Yo sostengo que sí, pero la relación no es determinista, sino probabilista. En otros trabajos, he presentado una teoría de electorados (*constituency theory*) que explica por qué y cómo las mujeres en el poder tienden, en general y a largo plazo, a promover más políticas pro mujer que los hombres situados también en el poder¹¹ (Reyes-Housholder, 2019). La teoría originalmente se desarrolló para explicar la variación en el uso de poder presidencial para promover políticas pro mujer¹², pero se puede aplicar para entender por qué algunas mujeres elegidas democráticamente usan sus poderes legislativos o constituyentes para promover políticas o artículos constitucionales pro mujer y otras no.

La teoría supone que las y los representantes compiten en elecciones para lograr sus puestos de poder, y se basa en dos variantes de electorados. La primera se refiere a los electorados de base (*core constituencies*), que son las y los votantes a los cuales las y los representantes deben ser más responsivos, porque forman su base de apoyo electoral. Cuando una candidatura busca movilizar a las y los votantes a través de promesas pro mujer, ese o esa representante, una vez elegido/a, tendría motivaciones especiales para cumplir con estos compromisos que favorecen los intereses de las mujeres (incentivos).

La segunda variante se refiere a electorados personales (*personal constituencies*). Estos tienden a ser miembros de élite, eventualmente militantes de partidos políticos y cercanos a la red de contactos del candidato/a. Estos individuos pueden proveer el conocimiento político y técnico que las y los representantes necesitan para diseñar y proponer reformas (capacidades). Cuando los electorados personales incluyen a feministas, pueden dar asesoría al/la representante que permitiría usar el poder para promover políticas pro mujer.

La teoría argumenta que las candidatas tienen mayores chances que los candidatos para (1) buscar movilizar un electorado en base a reformas pro mujer (electorado de base), y (2) tener lazos personales con feministas y grupos de mujeres (electorados personales). Por ende, las representantes, una vez elegidas, tendrían en general y a largo plazo, mayores incentivos y capacidades para promover políticas o reformas pro mujer que los hombres. Pero

¹¹ Podemos fácilmente identificar a un hombre o a un grupo de hombres en particular, quienes en un momento en especial promovieron más políticas pro mujer que una mujer representante en específico. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric es hombre, pero debido a la naturaleza de su electorado y lazos con feministas, uno podría argumentar que tiene mayor propensión a promover políticas pro mujer que otras presidentas en la región, como la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Como la teoría es probabilista y no determinista, ejemplos como estos no la falsifican.

¹² El trabajo mostró sistemáticamente que Michelle Bachelet, en su primer mandato, usó sus poderes presidenciales de manera más frecuente que su predecesor, el presidente Ricardo Lagos, para promover políticas pro mujer.

no todas las candidatas prometen reformas pro mujer durante sus campañas ni tienen lazos con feministas. Las representantes que durante la campaña movilizan a sus votantes en base a promesas pro mujer y mantienen relaciones con grupos de mujeres y feministas, tienden a tener mayores posibilidades de usar su poder para avanzar en los intereses de las mujeres, profundizando la representación sustantiva.

En resumen, cualquier evaluación de la calidad de la democracia en Chile requiere considerar las dimensiones descriptivas y sustantivas de la representación. Estas pueden interactuar: a mayor presencia de chilenas en puestos de poder en todos los niveles del Estado (representación descriptiva), mayores posibilidades de lograr políticas públicas o reformas políticas que favorezcan sus intereses (representación sustantiva). Todo esto significa que democracias de alta calidad tienen paridad en la presencia de mujeres como representantes políticos, y similares niveles de representación sustantiva entre hombres y mujeres.

CONCLUSIONES:

CONSIDERACIONES DE LA DEMOCRACIA CHILENA CONTEMPORÁNEA

He argumentado que examinar temas de género es esencial para cualquier evaluación general de la democracia. Dada su relevancia, existen varias razones relacionadas al género para estar, a la vez, optimista y pesimista en cuanto a la democracia chilena hoy. Por un lado, se podría hacer una evaluación especialmente positiva de esta en cuanto a la igualdad política entre hombres y mujeres. Varios hitos recientes han llamado la atención internacional, sugiriendo que la democracia chilena ha estado avanzando en esta área en particular.

Para empezar, se observan mejorías en la representación descriptiva y sustantiva de las chilenas durante los últimos años, partiendo con la elección de la primera presidenta Michelle Bachelet y su gabinete paritario de marzo de 2006. Una de las mayores desigualdades de poder entre hombres y mujeres se refiere a la dominación de los primeros en las presidencias. La mayoría de países en el mundo, inclusive Estados presidencialistas, no ha elegido a una presidenta (O'Brien & Reyes-Housholder, 2020). Los dos gobiernos de Bachelet fueron reconocidos como impulsores de la paridad en gabinetes presidenciales, además de políticas públicas pro mujer significativas, especialmente en comparación con sus predecesores hombres y otras presidentas en la región (Reyes-Housholder, 2019¹³). En diciembre de 2021, se eligió al primer presidente hombre que promovió una campaña explícitamente feminista, Gabriel Boric.

¹³ Otro hito reciente, relacionado a la participación ciudadana, se refiere al resurgimiento del movimiento feminista en Chile, específicamente en mayo de 2018 (Schuster Ubilla et al., 2019).

Por otro lado, se pueden fácilmente observar señales preocupantes en cuanto a temas de género en la democracia chilena contemporánea. En comparación con otros países latinoamericanos, Chile llegó especialmente tarde a otorgar derechos reproductivos a las chilenas (Sepúlveda-Zelaya, 2016) y a implementar cuotas de género (Reyes-Housholder, 2017).

Más recientemente, la candidatura presidencial de José Antonio Kast, del Partido Republicano, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2021, preocupó a muchas feministas en el país debido a sus propuestas enmarcadas dentro de una agenda valórica vista como antifeminista (Espinoza, 2021). Su campaña propuso eliminar el Ministerio de la Mujer, propuesta que él bajó antes de la segunda vuelta. Kast y su partido siguen manteniendo niveles relevantes de apoyo en la población chilena. Finalmente, el rechazo a la propuesta de nueva Constitución podría verse como una derrota eventual para el feminismo en Chile, en el sentido de poner en peligro la paridad (Suárez-Cao, 2022; Suárez-Cao & Castillo en prensa). Chile ha logrado avances notables, pero también retrocesos, y la democracia y los progresos hacia la igualdad de género nunca están completamente asegurados.

REFERENCIAS

- Castillo, I. (2022). Motivation alignment, historical cleavages, and women's suffrage in Latin America. *Perspectives on Politics*, 1-16. <https://doi.org/10.1017/S1537592722000147>.
- . Forthcoming. Gender, ethnicity, class, and the breadth of suffrage in Chile and Peru: perspectives among suffragists. *Historia y Política*.
- Centro de Estudios de la Mujer, Corporación Humanas & Observatorio de Género y Equidad (2021). Por un reglamento feminista. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2019/08/2-Reglamento-Feminista.pdf>
- Collier, D., & Levitsky, S. (1997). Democracy with adjectives: conceptual innovation in comparative research. *World Politics*, 49(3), 430-51.
- Coppedge, M., Gerring, J., Glynn, A., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Pemstein, D., Seim, B., Skaaning, S., & Teorell, J. (2020). *Varieties of democracy: measuring two centuries of political change*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108347860>.
- Corrales, J., & Pecheny, M. (Eds.) (2010). *The politics of sexuality in Latin America: a reader on lesbian, gay, bisexual, and transgender rights*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Espinoza, N. (2021). La preocupante desaparición de las mujeres como sujetas de derechos en el programa presidencial de José Antonio Kast. *El Mostrador*. 29 de octubre de 2021. <https://www.elmostrador.cl/braga/2021/10/29/>

- la-preocupante-desaparicion-de-las-mujeres-como-sujetas-de-derechos-en-el-programa-presidencial-de-jose-antonio-kast/.
- Kirkwood, J. (1986). *Ser política en Chile: las feministas y los partidos*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Lewis, P. H. (2004). The “gender gap” in Chile. *Journal of Latin American Studies* 36(4), 719-42.
- Mansbridge, J. (1998). Feminism and democracy. En Phillips, A. (Ed.). *Feminism and politics* (p. 142-61). Oxford: Oxford University Press.
- _____. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent “yes”. *The Journal of Politics* 61(03), 628-57.
- Maza Valenzuela, E. (1995). Catolicismo, anticlericalismo y la extensión del sufragio a la mujer en Chile. *Estudios Públicos*, 58, 137-197. Recuperado en noviembre de 2022 de: https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303183746/rev58_maza.pdf
- Mendelberg, T., Karpowitz, C F., & Oliphant, J. B. (2014). Gender inequality in deliberation: unpacking the black box of interaction. *Perspectives on Politics*, 12(1), 18–44. <https://doi.org/10.1017/S1537592713003691>.
- Morgan, J. (2015). Gender and the latin american voter: pursuing representation and accountability in challenging contexts. En Carlin, R. E., Singer, M., & Zechmeister, E. J. (Eds.). *The latin american voter* (p. 143-68). Ann Arbor: University of Michigan Press.
- O’Brien, D. Z., & Reyes-Housholder, C. 2020. Women and executive politics. En Andeweg, R. B., Elgie, R., Helms, L., Kaarbo, J., and Müller-Rommel, F. (Eds.). *Oxford handbook of political executives* (p. 251-72). Oxford: Oxford University Press.
- Paxton, P. (2000). Women’s suffrage in the measurement of democracy: problems of operationalization. *Studies in Comparative International Development* 35(3), 92-111. <https://doi.org/10.1007/BF02699767>.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. Berkeley: University of California Press.
- Reyes, C. (2021). Kast reconoce “error” tras proponer eliminación del Ministerio de la Mujer y afirma que lo mantendrá: “Lo hicimos mal, nos equivocamos (...) le pido perdón a todas las mujeres”. *La Tercera*. 3 de diciembre de 2021. <https://www.latercera.com/politica/noticia/kast-reconoce-error-tras-proponer-eliminacion-del-ministerio-de-la-mujer-y-afirma-que-lo-mantendra-lo-hicimos-mal-nos-equivocamos-le-pido-perdon-a-todas-las-mujeres/WWQDPVLZGRGB7M4KH4G4EWBRAY/>.
- Reyes-Housholder, C. (2017). Representación política y la ley de cuotas. *La Segunda*. 27 de diciembre de 2017, sec. Opinión.
- _____. (2019). A constituency theory for the conditional impact of female presidents. *Comparative Politics* 51(3), 429-47.

- Ríos Tobar, M. (2008). Seizing a window of opportunity: the election of president Bachelet in Chile. *Politics & Gender* 4(3), 509-19. <https://doi.org/10.1017/S1743923X0800041X>.
- Sanhueza, C. (2022). *De “apolíticas” a militantes: la incorporación de mujeres al Partido Conservador chileno (1934-1952)*. Santiago de Chile: UAH Ediciones.
- Schuster Ubilla, S., Santos Pérez, A., Miranda Leibe, L., Roque López, B., Arce-Riffo, J., & Medel Vera, E. (2019). Una mirada al movimiento feminista en Chile del año 2018: hitos, agenda y desafíos. *Iberoamericana* XIX(79), 223-45. <https://doi.org/10.18441/ibam.19.2019.72>. 223-245.
- Schwindt-Bayer, L. A. (2018). *Gender and representation in Latin America*. Nueva York: Oxford University Press.
- Sepúlveda-Zelaya, C. (2016). Formal and informal institutional challenges to women's reproductive rights: emergency contraception and the constitutional tribunal in Chile. En Waylen, G. (Ed.). *Gender, institutions and change in Bachelet's Chile* (p. 171-196). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Suárez-Cao, J. (2022). ¿Qué pasa con la paridad si se rechaza la propuesta de nueva Constitución? *The Clinic* (blog). 22 de julio de 2022. <https://www.theclinic.cl/2022/07/22/paridad-constitucion-columna-julieta-suarez-cao/>.
- Suárez-Cao, J., & Castillo, I. (2022). La primera convención paritaria: cómo llegamos y hacia dónde vamos. *Revista Crisálida*, 2, 18-25.
- Teele, D. L. (2018). *Forging the franchise*. Princeton: Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/titles/13156.html>.

CAPÍTULO 12

BRECHAS DE GÉNERO EN INTERÉS POLÍTICO¹⁴

Isabel Castillo, Rodolfo Disi y Felipe Sánchez

Las brechas de género en participación, interés y ambición política son temas persistentes en el estudio de género y política. Las brechas de participación tienen consecuencias para la democracia, porque se traducen en diferencias de poder político e influencia en la toma de decisiones. Tradicionalmente, las mujeres han votado menos que los hombres, tenido menor conocimiento e interés en la política y también presentado menos ambición de ocupar cargos (Dassonneville & Kostelka, 2021; Dassonneville & McAllister, 2018; Fox & Lawless, 2014; Franklin et al., 2004). Los estereotipos de género, disponibilidad de tiempo por la división sexual del trabajo, formas de socialización, trabas institucionales y baja presencia de mujeres en política, se encuentran entre las razones de esta brecha de género, la cual se observa tanto en países desarrollados como en América Latina (Bos et al., 2022; Fraile & Gomez, 2017; Hernández et al., 2020; Hinojosa & Kittilson, 2020).

En este capítulo, partiremos discutiendo sobre la relevancia de las brechas de género en interés político para la democracia. Luego, utilizando datos de la encuesta ELSOC, exploraremos las diferencias de género en interés en política y cómo estas han variado en los años 2016-2021. No buscamos explicar el porqué de estas diferencias, sino más bien caracterizar los cambios producidos entre 2016-2021, poniendo particular atención a factores del contexto político que pudiesen influir en fluctuaciones del interés en la política. En general, existen brechas de género que son persistentes, aunque de pequeña magnitud y, en la mayoría de los casos, no son estadísticamente significativas. Indagaremos en cómo la brecha de género varía según nivel educativo, edad y los cambios en el tiempo, dando cuenta de que el estallido social parece haber tenido un importante efecto en crear mayor interés en la política, particularmente, entre mujeres educadas y jóvenes.

¹⁴ Este capítulo ha contado con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile a través de sus proyectos Fondecyt Postdoctoral ANID/Fondecyt/210817, Iniciación ANID/Fondecyt/11190233, y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

En Chile, las brechas de género en la participación e interés político han sido poco estudiadas (Altman, 2004; Lewis, 2004). Históricamente, las mujeres votaban en menor proporción que los hombres, relación que se revirtió a partir del retorno a la democracia. La brecha en participación a favor de las mujeres se mantuvo con el cambio de voto obligatorio a voluntario en 2012, se ha ido incrementando en el tiempo y existe en todos los grupos etarios. De hecho, en el plebiscito constitucional de octubre de 2020, un 53% de quienes votaron fueron mujeres, a pesar de representar un 51.3% del padrón electoral¹⁵. Sin embargo, y casi paradójicamente, este aumento en la participación electoral femenina contrasta con un nivel más bajo de interés en la política. Por otra parte, tanto la participación como el interés son bajos en términos generales (en hombres y mujeres), dando cuenta de que amplios sectores de la población se mantienen alejados del proceso político en Chile —incluso tras el estallido social— y del debate constituyente en el que ha estado inmerso el país. En ese sentido, las alarmas para la democracia chilena se mantienen (Luna, 2016).

INTERÉS EN POLÍTICA Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Ya en su clásico libro *Poliarquía*, el cientista político Robert Dahl (1971) argumentaba que formular preferencias y darlas a conocer son elementos centrales de la democracia y, por lo tanto, todo régimen democrático debe asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de estas oportunidades. Aunque esas condiciones —libertad de expresión, de asociación, prensa libre, entre otras— estén presentes, si sectores importantes de la población no están incluidos, la naturaleza democrática del régimen puede ser cuestionada.

En esta línea, el interés en política es un indicador de compromiso ciudadano, porque da cuenta de la preocupación por las decisiones públicas que afectan a la población y cómo es que estas son adoptadas. El interés está relacionado con comportamientos políticos relevantes para la democracia, tales como conversar de política o acceder a información, todos los cuales apuntan a la formación de una ciudadanía capaz de participar y deliberar.

Siguiendo estas consideraciones, si sectores de la población como, por ejemplo, las mujeres, muestran sistemáticamente menos interés en política, sus visiones y preferencias tendrán menor presencia en el debate público (Hinojosa & Kittilson, 2020). Se podría argumentar que, dado que en Chile las mujeres votan en promedio más que los hombres, sus niveles más bajos de interés en política son inconsecuentes para la democracia. Sin embargo, el voto es solo una forma de participación, y la inclusión pasa también por estas otras formas de compromiso político y por la capacidad de expresar posturas

¹⁵ Datos de participación disponibles en <https://www.servel.cl/estadisticas-de-participacion/>

en momentos no electorales. Igualmente, una brecha importante de género en interés político podría llevar a una brecha en la información con la que se cuenta al momento de ejercer el voto, ya que interés y conocimiento político están altamente correlacionados (Hinojosa & Kittilson, 2020).

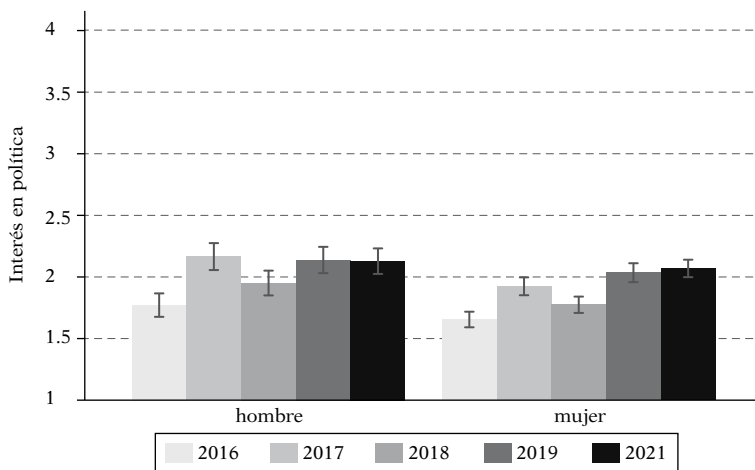
Estudios previos en América Latina han identificado una persistente brecha de género, tanto en interés como en conocimiento político. Estos trabajos han encontrado que la brecha es menor entre grupos con mayor educación. Sin embargo, hay algunos cambios institucionales y sociales que han ayudado a cerrar estas brechas de género en política. La literatura ha identificado mecanismos, como las cuotas de género en las elecciones, que han aumentado la cantidad de mujeres candidatas y electas, a la vez que modifican las percepciones de hombres y mujeres respecto al rol de estas últimas en la política (Barnes & Holman, 2020; Jones et al., 2012). A su vez, la llegada de más mujeres a la política ha cambiado las actitudes y comportamientos de otras mujeres, tanto a nivel de políticas como de ciudadanas (Dassonneville & McAllister, 2018; Wahman et al., 2021). Finalmente, las movilizaciones feministas también han impactado en las actitudes de género de las personas en general y, en particular, de las mujeres (Castle et al., 2020; Jenkins et al., 2021).

En momentos en que el país está inmerso en profundos cambios políticos e institucionales, explorar cómo el interés político responde al contexto en este ámbito, puede dar pistas importantes para entender el potencial para una deliberación y participación de mejor calidad.

BRECHAS DE GÉNERO EN INTERÉS POLÍTICO EN CHILE

Para el siguiente análisis, utilizamos las cinco olas de la Encuesta Longitudinal Social de Chile (ELSOC 2016-2021) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, centrándonos en la pregunta por interés en la política. Las respuestas utilizan una escala Likert donde 1 es “nada interesado”, 2 es “poco interesado”, 3 es “algo interesado”, 4 “bastante interesado”, y 5 “muy interesado”.

En la figura 1 presentamos la media del interés en política por género, con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Cuando estos intervalos se superponen, las diferencias no son estadísticamente significativas, es decir, se encuentran dentro del margen de error. Se puede observar que, en general, existe un bajo interés en la política, ya que, en promedio, apenas se supera la categoría 2 (“poco interesado”). Esto da cuenta de un problema persistente de la democracia chilena, en la que buena parte de la población se siente al margen de las cuestiones políticas. Asimismo, en línea con la experiencia de otros lugares, se observa que las mujeres muestran un interés levemente menor que los hombres, aunque la brecha ha disminuido en el tiempo, y en los datos correspondientes a 2021 se observa la menor diferencia entre hombres y mujeres.

FIGURA 1: *Interés en política por género entre 2016 y 2021*

Fuente: ELSOC 2016-2021.

Es interesante notar que se observa una sutil alza en el interés en política en dos momentos. El primero es en 2017, año de la elección presidencial donde fue electo Sebastián Piñera. Otros estudios ya han encontrado un aumento en el interés en política en años electorales (Prior, 2018; Butler & De La O, 2011). Considerando que la recolección de datos de la encuesta se realizó entre julio y noviembre, es decir, en pleno período de campaña, se puede suponer la existencia de múltiples estímulos políticos asociados a este evento y que se relacionan con un aumento del interés. Finalmente, este aumento es más significativo en los hombres que en las mujeres, por lo que en 2017 la brecha de género creció. De hecho, este es el único año en que esta es estadísticamente significativa.

El segundo momento en el que crece el interés en política es 2019, año del estallido social, un evento político altamente contencioso y conflictivo (Somma et al., 2021). Hasta ahora, hay pocos estudios que asocien la emergencia de un evento contencioso con el aumento en el interés en política. En una excepción para el caso chileno, se ha encontrado de todas formas que la cercanía geográfica y temporal a protestas estudiantiles está asociada a diferencias actitudinales en la población, entre ellas, un mayor nivel de interés político (Disi Pavlic, 2021). Por lo tanto, es difícil no hacer la asociación, considerando la magnitud de las protestas, así como su alcance político, social e, incluso, cultural, que ha tenido este evento. Esta movilización, de hecho, tuvo alcance internacional, por ejemplo, a través de la *performance* de Las Tesis, que se replicó en diversos países.

Durante 2019 se repite que en los hombres el interés es más alto que en las mujeres, pero si comparamos el cambio entre el año 2018 a 2019, el aumento es ligeramente mayor en las mujeres; en otras palabras, hay una reducción de la brecha. Asimismo, mientras que el impacto de las elecciones de 2017 en el aumento del interés en política fue de corta duración, en el caso del estallido social, este parece persistir incluso dos años después. De todas maneras, se debe tener presente que entre el estallido y el año 2021 se sucedieron un plebiscito para comenzar un proceso constituyente, elecciones de convencionales constitucionales para redactar una propuesta de nueva Constitución y una elección presidencial. En otras palabras, a partir de octubre de 2019, los estímulos políticos han sido persistentes y vinculados con temas críticos para el futuro político del país. De ahí que no parezca raro que el interés en política perdure, aun cuando sigue siendo bajo en términos generales.

Finalmente, cabe destacar que no se observa un aumento del interés durante 2018, año del llamado “mayo feminista”, cuando estallaron una serie de tomas de establecimientos educacionales y movilizaciones feministas (Reyes-Housholder & Roque, 2019). Estas surgieron inicialmente como crítica a los déficits de las instituciones de educación superior para abordar casos de abuso sexual y acoso, pero se tornaron en un movimiento mucho más amplio que impugnaba las desigualdades estructurales de género. Considerando la masividad y cobertura que alcanzó, podría pensarse que aumentaría el interés político, particularmente entre mujeres. No obstante, también hay que tomar en cuenta que el periodo más álgido de estas movilizaciones ocurrió entre abril y julio de 2018, mientras que el trabajo de campo de la encuesta en esta ola se realizó en el extenso periodo de agosto a diciembre, por lo que es posible que el interés en política haya disminuido a medida que la distancia temporal con los eventos iba aumentando¹⁶.

Ahora bien, es posible que el impacto de todos los eventos mencionados en el interés en la política sea distinto entre hombres y mujeres de acuerdo con otras características, como el nivel educacional o la edad. Respecto de la educación, el modelo de recursos de la participación política (Verba et al., 2003) sostiene que la educación formal provee de ciertas habilidades cognitivas para desempeñarse mejor en los asuntos públicos. Asimismo, estas habilidades que provee la educación formal pueden facilitar la formación del interés político en la medida que infunden un sentido de eficacia, es decir, la creencia de que las opiniones y preferencias políticas personales son tomadas en cuenta.

¹⁶ En concreto, el trabajo en terreno de la primera ola de la encuesta se realizó entre el 8 de agosto y el 19 de diciembre de 2016; la segunda ola fue aplicada entre 24 de julio y el 9 de octubre de 2017; para la tercera ola el trabajo de campo fue entre el 27 de agosto y el 10 de diciembre. En la cuarta ola, el trabajo comenzaría el 19 de octubre de 2019, pero el estallido social atrasó su inicio al 21 de noviembre y duró hasta el 9 de marzo de 2020; y, finalmente, la quinta medición se aplicó entre el 30 de enero de 2021 hasta mediados de junio.

La figura 2 muestra la media de interés político por género entre quienes completaron su educación superior, comparado con quienes tienen educación universitaria incompleta o menos. Lo que se observa es una evidente diferencia entre ambos grupos. Tener un grado universitario, independiente del sexo, aumenta significativamente el grado de interés en política. De hecho, quienes no tienen estudios universitarios completos poseen valores similares a los observados en la figura 1. Independientemente del nivel educativo, se mantiene la brecha de género y las mujeres muestran menos interés que los hombres, aunque las brechas no son estadísticamente significativas.

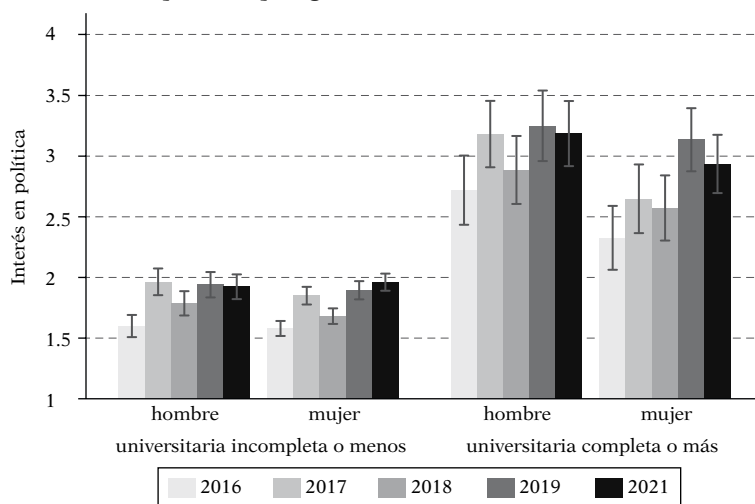
Al igual que en la figura anterior, los años 2017 y 2019 muestran importantes aumentos en el interés en política en todos los grupos, aunque de manera más pronunciada entre personas más educadas. Es interesante notar que, en grupos con educación universitaria, el año de la elección presidencial impacta mucho más en los hombres que en las mujeres. Por otra parte, en las mujeres más educadas el cambio en el interés en política entre el año 2018 y 2019, año del estallido social, es mucho mayor que en los hombres y la brecha se reduce. Aunque estos son solo datos descriptivos, podrían sugerir que las mujeres educadas se ven más influenciadas por los eventos políticos “extrainstitucionales” que por la política convencional. Esto no debería sorprender si consideramos que la participación de las mujeres en cargos políticos ha sido históricamente marginal (Miranda Leibe & Suárez-Cao, 2018) y, al mismo tiempo, la movilización feminista ha ido tomando mucho protagonismo. Desde la calle, las mujeres han ido empujando importantes reformas tendientes, entre otros ámbitos, a su incorporación en diferentes espacios de poder. Sin ir más lejos, una consecuencia de esta creciente movilización feminista fue la formación de una Convención Constitucional con plena paridad de género, algo inédito en el mundo (Figueroa Rubio, 2021).

Por otra parte, a partir de esta figura también es posible discutir algunos elementos en términos de desigualdad política. Como es evidente, la diferencia en el interés político de acuerdo con el nivel educativo es muy significativa. A su vez, las personas más interesadas son más activas políticamente y, consecuentemente, sus demandas son más escuchadas por las autoridades. Esto es problemático en un contexto de alta desigualdad social como en Chile, pues implica que las agendas que predominan son aquellas que impulsan los grupos más educados y con mayores recursos, mientras que la voz de aquellos menos educados —quienes, en general, provienen de sectores desaventajados¹⁷— es menos considerada en el proceso político. En términos de la brecha de género, esto puede significar que el acceso a la voz política de mujeres sin educación

¹⁷ Estudios sobre transmisión de la desigualdad en Chile han encontrado una alta correlación entre nivel de educación y estatus socioeconómico (ver Correa et al., 2019; Mizala & Torche, 2012).

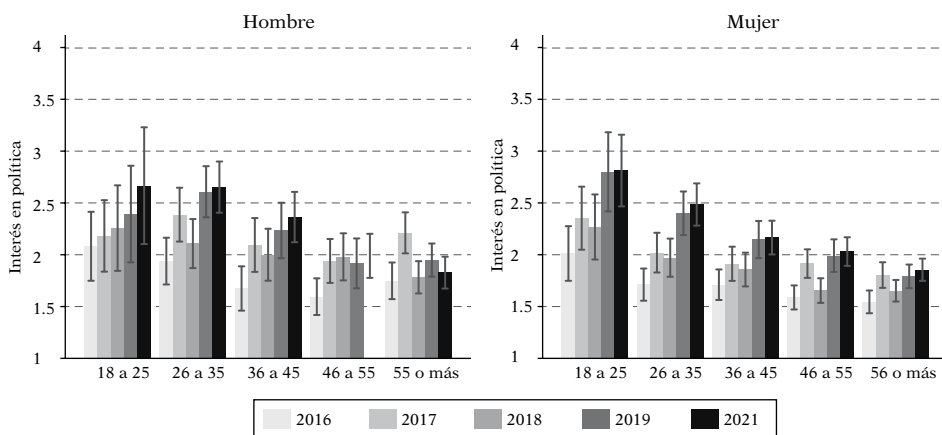
universitaria sea aún más obstaculizada, no solo por ser mujeres, sino porque además carecen de los recursos necesarios para participar efectivamente de la política democrática.

FIGURA 2: *Interés político por género de acuerdo con el nivel educacional*



Fuente: ELSOC 2016-2021.

Respecto de la edad, los estudios muestran que, en general, las personas mayores presentan un interés superior en política, mientras que con los jóvenes ocurre lo opuesto (Prior, 2018). Sin embargo, lo que observamos en la figura 3 es que el interés en política decrece con la edad tanto en hombres como en mujeres, a pesar de que en cada grupo etario se observa un aumento en este a medida que pasa el tiempo. Esta figura, aunque meramente descriptiva, puede parecer contraintuitiva a la luz de otras investigaciones que muestran de modo consistente que en Chile la participación electoral aumenta a medida que se envejece (Bargsted, Somma & Muñoz, 2019). Esto indicaría que la mayor propensión a votar en los grupos etarios mayores no estaría necesariamente correlacionada con un aumento del interés en política, sino más bien a un “hábito” político. Por el contrario, los jóvenes interesados en política optarían por mecanismos alternativos de participación, como la protesta (Dalton, 2007; Norris, 2002). Al mismo tiempo, la disminución en el nivel de interés resuena con el hallazgo de que una mayor edad está correlacionada negativamente con la identificación partidaria en el país (Bargsted & Maldonado, 2018).

FIGURA 3: *Interés en política por género y edad*

Fuente: ELSOC 2016-2021.

Ahora bien, siguiendo los datos que presentamos acá, se verifican algunas variaciones interesantes en los últimos años. Entre los hombres, el mayor interés se observa en los grupos que tienen entre 18 y 25 años, y 26 a 35. Sin embargo, mientras en el último de estos dos grupos el aumento más importante se produjo en 2019, el año del estallido, entre los más jóvenes es solo en 2021 que se alcanzan niveles similares¹⁸. Las mujeres de 18 a 25, por su parte, experimentan un aumento en el interés político particularmente abrupto el año 2019, siendo quienes tienen el mayor interés en política, en promedio, de todos los grupos etarios para todos los años medidos. Este resultado parece consistente con la hipótesis de “los años impresionables”, esto es, que el impacto de ciertos eventos políticos sobre las actitudes y el comportamiento político es mayor y más persistente durante la adolescencia y la adultez temprana (Sears & Levy, 2003). En este caso, parece claro que el estallido social operó como un evento político mayor que gatilló un evidente aumento en el interés en política en las mujeres jóvenes, y cuyo efecto parece persistir dos años después.

¿Por qué no se observa el mismo patrón en los hombres de este grupo etario? Es difícil aventurar alguna hipótesis. Sin embargo, ya hemos destacado la visibilidad e influencia que progresivamente ha ido tomado la movilización feminista, cuyos miembros más activos en la calle han sido mujeres jóvenes y, no en menor medida, universitarias. Un ejemplo de lo anterior fue la ola de

¹⁸ Es importante considerar que el tamaño de estos subgrupos es más pequeño que el resto. De ahí que sus intervalos de confianza sean más amplios.

movilizaciones de 2018, la que se mantuvo activa durante el estallido social y, posteriormente, en torno a eventos como la discusión de la paridad para la conformación de la Convención Constitucional.

De este modo, tiene sentido pensar que en el contexto actual global de movilización feminista, las mujeres jóvenes son mucho más receptivas a estos estímulos del ambiente político, especialmente si ofrecen una oportunidad única para avanzar en sus demandas. Asimismo, los datos sugieren que, a diferencia de lo que ocurrió con la elección de 2017, la asociación entre el estallido social y el aumento en el interés en política en este grupo demográfico parece persistir dos años después. Un reflejo de ello fue la elección presidencial de 2021, donde las mujeres menores de 30 años fueron las que más aumentaron su participación entre primera y segunda vuelta, y las que apoyaron a Gabriel Boric en mayor proporción, en una elección que estuvo marcada, en parte, por los temas de género (Rivas, 2021).

CONCLUSIONES

Observamos la brecha de género en el interés en política y su relación con algunas variables sociodemográficas, como la educación y la edad. De acuerdo con los datos presentados, la sociedad chilena en su conjunto se muestra poco interesada en la política. Esto es preocupante, pues si este interés es uno de los predictores más importantes del comportamiento político que hace que la democracia funcione de modo correcto (Prior, 2018), entonces la apatía e indiferencia por los asuntos públicos puede traer graves problemas de legitimidad al sistema político, como los que actualmente sufre Chile.

En términos de la brecha de género, se observa que las mujeres presentan un menor interés en política que los hombres, aunque es una diferencia leve y, en general, no estadísticamente significativa. Si bien factores como la educación universitaria pueden revertir esta indiferencia frente a la política, en un país desigual como Chile, esto también puede implicar que aquellos que no han asistido a la educación superior vean la política como algo aún más lejano y sobre lo cual no poseen ninguna injerencia. De este modo, las mujeres menos educadas, que suelen venir de los estratos sociales más bajos, con sus necesidades y preferencias pueden quedar incluso más excluidas del proceso político.

Por otro lado, a partir de estos datos también es posible sugerir que ciertos estímulos provenientes del ambiente político pueden actuar como catalizadores del aumento en el interés en política. Al respecto, la elección presidencial de 2017 puede considerarse como uno de dichos eventos. Sin embargo, esta elección parece haber estimulado el interés político de manera más significativa en los hombres que en las mujeres, y con un impacto de corta duración. Por

otro lado, el estallido social también se presenta como un estímulo mayor del ambiente político. Esto no debería sorprender si consideramos que se trató de un evento altamente contencioso y con un alcance nacional. A diferencia de la elección de 2017, este acontecimiento parece haber impactado positivamente en el interés en política más en las mujeres que en los hombres, en particular en aquellas más jóvenes, y de forma más duradera.

¿Fue el estallido social lo que provocó un incremento en el interés en política en este grupo demográfico o, por el contrario, este fue más bien la consecuencia de una generación más políticamente interesada? Aunque no es posible responder con los análisis aquí presentados, sí es importante considerar la progresiva influencia que ha tomado el movimiento social —y, sobre todo, el activismo feminista— en el último tiempo, y el rol que han jugado las generaciones más jóvenes en aumentar el interés en la política en el país. Igualmente, en línea con la literatura, es posible pensar que el incremento de la presencia de mujeres —y, en particular, de mujeres jóvenes— en política¹⁹, tanto en el Congreso como en la Convención Constitucional, podría también tener un efecto particular en este grupo.

REFERENCIAS

- Altman, D. (2004). Redibujando el mapa electoral chileno: incidencia de factores socioeconómicos y género en las urnas. *Revista de Ciencia Política*, 24, 49-66.
- Bargsted, M. A., & Maldonado, L. (2018). Party identification in an encapsulated party system: the case of postauthoritarian Chile. *Journal of Politics in Latin America*, 10(1), 29-68. <https://doi.org/10.1177/1866802X1801000102>
- Bargsted, M., Somma, N. M., & Muñoz, B. (2019). Electoral turnout in Chile: an age-period-cohort approach. *Revista de Ciencia Política* 39(1), 75-98. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000100075>.
- Barnes, T. D., & Holman, M. R. (2020). Gender quotas, women's representation, and legislative diversity. *The Journal of Politics*, 82(4), 1271-1286. <https://doi.org/10.1086/708336>
- Bos, A. L., Greenlee, J. S., Holman, M. R., Oxley, Z. M., & Lay, J. C. (2022). This one's for the boys: how gendered political socialization limits girls' political ambition and interest. *American Political Science Review*, 116(2), 484-501. <https://doi.org/10.1017/S0003055421001027>
- Butler, D. M., & De La O, A. L. (2011). The causal effect of media-driven political interest on political attitudes and behavior. *Quarterly Journal of Political Science*, 5(4), 321-37. <https://doi.org/10.1561/100.00010041>.

¹⁹ En la Cámara de Diputados, el porcentaje de mujeres ha aumentado de 16% en 2013, a 23.5% en 2017 y 35.5% en 2021.

- Castle, J. J., Jenkins, S., Ortals, C. D., Poloni-Staudinger, L., & Strachan, J. C. (2020). The effect of the #MeToo movement on political engagement and ambition in 2018. *Political Research Quarterly*, 73(4), 926-941. <https://doi.org/10.1177/1065912920924824>
- Correa, J. A., Gutiérrez, P., Lorca, M., Morales, R., & Parro, F. (2019). The persistent effect of socioeconomic status on education and labor market outcomes: evidence from Chile's administrative records. *Applied Economic Analysis*, 27(79), 62-90. <https://doi.org/10.1108/AEA-06-2019-0007>.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: participation and opposition*. Londres: Yale University Press.
- Dalton, R. (2017). *The participation gap. Social status and political inequality*. Nueva York: Oxford University Press.
- Dassonneville, R., & Kostelka, F. (2021). The cultural sources of the gender gap in voter turnout. *British Journal of Political Science*, 51(3), 1040-1061. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000644>
- Dassonneville, R., & McAllister, I. (2018). Gender, political knowledge, and descriptive representation: the impact of long-term socialization: gender, political knowledge, and descriptive representation. *American Journal of Political Science*, 62(2), 249-265. <https://doi.org/10.1111/ajps.12353>
- Disi Pavlic, R. (2021). The nearness of youth: spatial and temporal effects of protests on political attitudes in Chile. *Latin American Politics and Society*, 63(1), 72-94. <https://doi.org/10.1017/lap.2020.33>
- Figueroa Rubio, P. (2021). "Históricas: nada sin nosotras". Paridad y nueva Constitución: El caso de Chile. *Revista Culturas Jurídicas*, 8(20), 1-26.
- Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2014). Uncovering the origins of the gender gap in political ambition. *American Political Science Review*, 108(3), 499-519. <https://doi.org/10.1017/S0003055414000227>
- Fraile, M., & Gómez, R. (2017). Why does Alejandro know more about politics than Catalina? Explaining the latin american gender gap in political knowledge. *British Journal of Political Science*, 47(1), 91-112. <https://doi.org/10.1017/S0007123414000532>
- Franklin, M. N., Lyons, P., & Marsh, M. (2004). Generational basis of turnout decline in established democracies. *Acta Politica*, 39(2), 115-151. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500060>
- Hernández, M., Saldierna-Salas, A. R., Muñoz, C., Marañón-Lazcano, F. de J. (2020). Brecha de género en el conocimiento político infantil: influencia de las redes sociales y la socialización política. *Palabra Clave*, 23(4), e2343. <https://doi.org/10.5294/pacla.2020.23.4.3>
- Hinojosa, M., & Kittilson, M. C. (2020). *Seeing women, strengthening democracy: how women in politics foster connected citizens*. Oxford: Oxford University Press.
- Jenkins, S., Poloni-Staudinger, L. M., & Strachan, J. C. (2021). Linked fate, #MeToo, and political participation. *Politics, Groups, and Identities*, 0(0), 1-19. <https://doi.org/10.1080/21565503.2021.1908371>

- Jones, M. P., Alles, S., & Tchintian, C. (2012). Cuotas de género, leyes electorales y elección de legisladoras en América Latina. *Revista de Ciencia Política*, 32, 331-357.
- Lewis, P. H. (2004). The “gender gap” in Chile. *Journal of Latin American Studies*, 36(4), 719-742. JSTOR.
- Luna, J. P. (2016). Delegative democracy revisited: Chile’s crisis of representation. *Journal of Democracy*, 27(3), 129-138. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0046>
- Miranda Leibe, L., & Suárez-Cao, J. (Eds.). (2018). *La política siempre ha sido cosa de mujeres: elecciones y protagonistas en perspectiva comparada*. Santiago de Chile: Flacso-Chile.
- Mizala, A., & Torche, F. (2012). Bringing the schools back in: the stratification of educational achievement in the chilean voucher system. *International Journal of Educational Development* 32(1), 132-44. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.09.004>.
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix. Reinventing political activism*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Prior, M. (2018). *Hooked. How politics captures people’s interest*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Reyes-Housholder, C., & Roque, B. (2019). Chile 2018: desafíos al poder de género desde la calle hasta La Moneda. *Revista de Ciencia Política*, 39(2), 191-216. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200191>
- Rivas, S. (2021) Mujeres menores de 50 años, el motor del triunfo de Boric: cómo fue la participación y preferencias por edad y sexo. *La Tercera*. 20 de diciembre de 2021. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mujeres-menores-de-50-anos-el-motor-del-triunfo-de-boric-como-fue-la-participacion-y-preferencias-por-edad-y-sexo/7EIMTWYA2VB7NFVOBVRQCG52XU/>
- Sears, David O., & Sheri Levy. (2003). Childhood and adult political development. En Sears, D. O., Huddy, L., & Jarvis, R. (Eds.). *Oxford handbook of political psychology* (p. 60-109). Nueva York: Oxford University Press.
- Somma, N. M., Bargsted, M., Disi Pavlic, R., & Medel, R. M. (2021). No water in the oasis: the chilean spring of 2019-2020. *Social Movement Studies*, 20(4), 495-502. <https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1727737>
- Wahman, M., Frantzeskakis, N., & Yildirim, T. M. (2021). From thin to thick representation: how a female president shapes female parliamentary behavior. *American Political Science Review*, 115(2), 360-378. <https://doi.org/10.1017/S000305542100006X>

CAPÍTULO 13

PARIDAD: ¿UNA CONSTITUCIÓN POR Y PARA MUJERES?

Anabel Yanes-Rojas y Michelle Hafemann Berbelagua

CHILE SE convirtió en 2020 en el primer país del mundo con una Asamblea Constituyente paritaria, sin ser vanguardia en la adopción de mecanismos de acción afirmativa y en la presencia de mujeres en la estructura de poder²⁰. La equivalencia de mujeres y hombres entre los convencionales es una innovación del proceso chileno, y no ha sido posible conocer cómo se pueden representar los intereses de un grupo tan heterogéneo como las mujeres. Por lo tanto, nuestro interés es explicar en este capítulo cuáles fueron los antecedentes de la introducción de la paridad en el órgano constituyente, y por qué fue posible avanzar en una perspectiva pro mujer²¹ en la propuesta de la nueva Constitución. En este sentido, sostenemos que, si bien una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión se ha relacionado con mayores posibilidades para la inclusión de su agenda, también fue fundamental el rol de otros actores con capacidad de influencia en un contexto que abrió una ventana de oportunidad para impulsar cambios en la representación de las mujeres en política.

Las Constituciones son la base del ordenamiento jurídico de los países; sus mandatos para la equidad entre hombres y mujeres, así como para la representación descriptiva y sustantiva, marcan la dinámica futura de los sistemas políticos (Dobrowosky & Hart, 2003). Conscientes de esta jerarquía, y guiadas por la transversalización de sus demandas para el fortalecimiento democrático en el contexto de cambio que levantó al país, la voz de las mujeres resonó directa o indirectamente en el proceso constituyente para velar por su participación y por sus garantías. Si con anterioridad los partidos se adaptaban a los diseños institucionales, jugaban con la ubicación de las mujeres en las listas y solo ampliaban su participación guiados por incentivos de género, la

²⁰ Chile fue uno de los últimos países en establecer cuotas de género para el legislativo. Además, las políticas nacionales no sobrepasan el 24% en las alcaldías y el 35% en la Cámara Baja en el segundo proceso electoral bajo la ley.

²¹ Entendida aquí como la inclusión de diversas demandas a favor de los derechos de la mujer para revertir la desigualdad de género, que no siempre son compartidas de manera homogénea por las convencionales, los grupos de interés y las mujeres chilenas en general.

composición plural del órgano constituyente impulsó cambios en las reglas del juego y favoreció la representación en Chile.

En este capítulo explicamos, en un primer momento, cómo la introducción de la propuesta de paridad es parte de una trayectoria de reformas orientadas a aumentar la representación de mujeres en política. También es el resultado de la coordinación y la capacidad de movilización de determinados actores, en un contexto donde la aceptación del cambio constitucional figuró como una salida de escape ante una presión desde abajo, como fue el estallido social de octubre de 2019. De la misma forma, discutimos cómo el resultado de este proceso, es decir, la incorporación de los temas que afectan a las mujeres en la propuesta del texto constitucional, depende de la resonancia y penetración de las demandas en los debates constituyentes a través de la coordinación y movilización de actores clave que canalizan y visibilizan la perspectiva de género.

DE LAS CUOTAS A LA PARIDAD

La paridad en la Convención Constitucional fue interpretada como un triunfo feminista por los medios de comunicación, así como por representantes del mismo movimiento y amplios sectores de la sociedad chilena (McGowan, 2021; Figueroa, Miranda & Meza, 2021). Esto, no solo debido a la significancia que tenía que el órgano elegido para redactar el borrador de la nueva Constitución estuviera compuesto por el 50% de mujeres, sino también porque la equidad de género en la representación política ha sido una demanda transversalizada por el movimiento feminista. Desde 2018, con el “mayo feminista”, el cuestionamiento al tradicional poder de género se consolidó como un imperativo del fortalecimiento democrático en el país (Reyes-Housholder & Roque, 2019; Aguilera et al., 2021).

La paridad en el órgano constituyente es consecuencia de cuatro factores. En primer lugar, la trayectoria del movimiento feminista chileno tras el retorno a la democracia, cuando se produce una institucionalización de la agenda pro mujer a partir de la creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1991. Esto coincide con la desmovilización de los movimientos sociales, incluido el feminista, dado el aumento de la fuerza de los partidos ante la reapertura de la política formal (Horton, 2015; Ríos et al., 2004). En este período, las demandas de mayor representación de mujeres en cargos electos resonaron en el Congreso a través de diversos proyectos de ley con medidas afirmativas a nivel subnacional y nacional. Hasta la aprobación de la Ley de Cuotas en 2015, se presentaron seis proyectos que no lograron avanzar en su tramitación.

Los años que precedieron al estallido social fueron de rearticulación de los movimientos sociales. La frecuencia de las movilizaciones en el espacio público creció a partir del 2000, duplicando la cantidad de manifestaciones

realizadas en la década anterior (Cox et al., 2021). En particular, se hicieron recurrentes desde el inicio de las protestas de los estudiantes universitarios en 2006 (Heiss, 2021). El movimiento feminista, por su parte, alcanzó convocatorias históricas en las marchas pro aborto y de conmemoración del Día Internacional de la Mujer (El Mostrador, 2020).

En segundo lugar, la paridad se explica en los decepcionantes resultados que para los actores claves feministas había tenido la aplicación de la Ley de Cuotas, aplicada por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017. Si bien estableció un mínimo de mujeres en la composición de las listas de candidatos, la ley no logró modificar una cultura profundamente generizada en los partidos políticos, que siguieron privilegiando la selección de candidatos hombres por sobre las mujeres.

En tercer lugar, la equivalencia en el número de mujeres y hombres en el órgano constituyente fue impulsada por la crisis de representación que se arrastraba durante la última década y que explica el estallido social de octubre de 2019. No es nuevo que, ante una crisis de representación, los actores institucionales recurran a un cambio en las reglas del juego electoral para aumentar la participación de sectores marginados de la política y, de esta forma, aumentar el respaldo de los votantes (Norris, 2004; Negretto, 2013). Esto explica que, en el año 2015, y luego de la reforma del sistema binominal en 2014, se haya aprobado en Chile la Ley de Cuotas.

Se trataba de una disconformidad con la experiencia práctica de ser representado (Joignant et al., 2017), sumada al estado crítico de los partidos políticos, cada vez más desvinculados de las bases sociales e incapaces de cumplir con el rol de agregación de intereses (Luna & Altman, 2011). En este ciclo de protesta, el movimiento feminista tuvo un rol protagónico que le permitió transversalizar sus demandas, en particular, respecto de la equidad de la participación de mujeres en política. Con su activismo posicionó la representación descriptiva a la vista de los actores institucionales como un valor positivo (Reyes-Housholder & Roque, 2019).

El 15 de noviembre de 2019, a cuatro semanas del inicio del estallido social, representantes de los partidos políticos con escaños en el Congreso, con la única excepción del Partido Comunista, firmaron el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”. Junto con abrir la puerta a un cambio constitucional, este acuerdo fue la ventana de oportunidad para la promoción de la paridad de género en la Convención Constitucional, proyecto que ingresó al Congreso en diciembre de 2019 y fue promulgado el 4 de marzo de 2020. En menos de tres meses de tramitación, se impulsó la reforma constitucional que establecía la presencia de, al menos, un 50% de mujeres en el órgano redactor de la nueva Constitución. Un resultado inédito en un país que llegó tarde a la aprobación del voto femenino, en 1951, y a la Ley de Cuotas para el legislativo, en 2015. Sin embargo, el terreno fértil para las demandas feministas respecto de la

representación de mujeres en política permitió este avance histórico hacia la paridad (Suárez-Cao, 2021).

Y, en cuarto lugar, cabe destacar el rol de actores claves en el impulso de esta reforma. En el contexto de cambio institucional, estos actores aprovecharon la coyuntura crítica para promover el cambio generizado hacia una mayor inclusión de mujeres en la política. Se trata de actores no institucionalizados, especialmente mujeres de dentro y fuera del movimiento feminista, que raramente tenían suficiente poder o capacidad de influencia para lograr reemplazar normas antiguas por nuevas. La ventana de oportunidad presentada por el estallido social facilitó el espacio y la agencia para promover el cambio institucional equitativo en materia de género, esfuerzo que se vio alineado con las razones instrumentales por las que los actores políticos institucionalizados apoyaran este cambio generizado (Waylen, 2009, 2013). Durante los procesos constituyentes, los actores claves feministas aprovechan la oportunidad política que ofrecen estas “ventanas de reformas” para moldearlos y reivindicar la participación y representación de las mujeres (Dobrowosky & Hart, 2003).

En el caso particular de la paridad en la Convención Constitucional, es fundamental el rol de las integrantes de la Red de Politólogas, cuyas expertas diseñaron una norma pensada para maximizar las condiciones que favorecieran la elección de mujeres (Reyes-Housholder & Castillo, 2022). Inspiradas en la evidencia de que la presencia de mujeres en órganos de toma de decisiones tiene un efecto directo en la confianza y legitimidad de los mismos, junto a las organizaciones feministas las politólogas impulsaron la paridad tanto en las candidaturas como en los resultados (Suárez-Cao, 2021). La reforma estableció al menos un 50% de mujeres a nivel distrital y listas “cebra”, que eran encabezadas por candidatas y completadas de manera alternada con hombres y mujeres.

¿ES SUFICIENTE LA PARIDAD PARA LA REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA DE LAS MUJERES?

En la nueva propuesta constitucional de 2022 se respaldaba la participación en condiciones de igualdad sustantiva y se disponía que, en todos sus niveles políticos y administrativos, al menos el 50% de los integrantes fuesen mujeres. Esto se ha relacionado con la paridad en la composición del órgano convencional y, si bien las mujeres son más propensas a representar a las mujeres, la inclusión de mandatos y disposiciones a su favor requiere de la movilización exitosa de las y los ciudadanos y de la articulación con feministas de élite (Reyes-Housholder, 2019). La paridad limitó la actuación estratégica de los partidos políticos chilenos, pero ello no puede traducirse de manera automática e inmediata en una Constitución pro mujer. La representación sustantiva,

entendida como la incorporación de la perspectiva de género y la traducción de las demandas femeninas en normas constitucionales a partir del compromiso del representante electo con estos intereses, requiere de estructura, procedimientos y participación para alcanzar y fortalecer la articulación cuando se ha consolidado la representación descriptiva de las mujeres.

Hasta la presidencia del órgano constituyente llegaron Elisa Loncón (julio 2021-enero 2022) y María Elisa Quinteros (enero 2022 - julio 2022), dos mujeres que defienden sus derechos, pero desde perspectivas y trayectorias diferentes. Desde la filosofía mapuche y el feminismo, respectivamente, representaron la culminación de la representación descriptiva de las mujeres en el órgano constituyente. Además, reflejaron el cambio y el ascenso de las mujeres excluidas, pero sin generar desequilibrios. De acuerdo con Loncón, uno de los mayores desafíos de la Convención era “fijar normas para garantizar el derecho de participación de todos los convencionales en igualdad de condiciones, bajo los términos de paridad, plurinacionalidad, diversidad sexual, diversidad política” (ONU Mujeres, 2021).

Si en un inicio existieron tensiones entre quienes defendieron una comisión de equidad de género (Observatorio Nueva Constitución) y quienes exitosamente respaldaron la transversalidad, para no focalizar sus demandas un solo grupo de trabajo o departamento (Abofem y Coordinadora Feminista 8M), la equivalencia entre los convencionales y la agenda pro mujer caló la estructura del órgano (Tenemos que Hablar de Chile, 2021). Todas las comisiones contaron con presencia femenina. Aunque solo dos de las 10 comisiones estuvieron coordinadas por mujeres, el resto presentó una coordinación mixta (Convención Constitucional, 2022a). Así, las mujeres, tradicionalmente excluidas o relegadas a minorías, multiplicaron sus voces y fueron mayoría entre los convencionales en el 50% de las comisiones vigentes, pero no en todas donde se avanzó en la inclusión de la perspectiva de género; por ejemplo, en la Comisión Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

Por lo tanto, la responsabilidad de inclusión de la agenda femenina no recayó únicamente sobre las convencionales, aun cuando su representación descriptiva se ha relacionado con una mayor legitimidad del proceso y de las decisiones resultantes (Dobrowolsky & Hart, 2003), e incluso cuando su coordinación interna en la iniciativa Colectiva Feminista favoreció los procesos de toma de decisión. Otros actores incidieron en la redacción de la Constitución y en su vinculación con una perspectiva de género. De la organización del debate, de la articulación de la sociedad civil, de la composición y capacidad de influencia del sector académico, de las propias preferencias de los constituyentes y de la pluralidad del órgano depende no solo la forma, sino también las cuestiones de fondo del texto que se debatió y finalmente no se aprobó en Chile.

Con anterioridad, la inclusión de las demandas femeninas se ha relacionado con la dinámica de trabajo, la agenda previa de los constituyentes, la

reglamentación sobre el uso de la palabra, los horarios de trabajo y el acceso a la información (Elkins, Ginsburg & Melton, 2009). En el proceso constitucional chileno, la perspectiva pro mujer puede explicarse por la regulación del tiempo sin distinciones entre las y los convencionales para el trabajo en comisiones, lo cual facilitó la exposición y actuación de las representantes en nombre de las ciudadanas. Las mujeres intervinieron más que los hombres en las sesiones de la convención (Telar, 2021). Participaron en audiencias con actores de la sociedad civil que abogan por la representación sustantiva y se coordinaron internamente a través de grupos de WhatsApp para favorecer los procesos de toma de decisión.

Cuestiones más afines con la dinámica del movimiento feminista del país también expandieron o limitaron la inclusión de la perspectiva de género. Los procesos constituyentes en América Latina evidencian que los movimientos y agrupaciones de mujeres tuvieron particular influencia en la inclusión de sus demandas en las nuevas Constituciones (Montaño & Aranda, 2006). Si bien en Chile se está ante un movimiento heterogéneo, debido a que el género también se cruza con intereses e ideales en disputa (Lamadrid & Benitt, 2019), uno de sus principales logros constitucionales fue la revisión y aprobación de garantías para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque ganó el rechazo de la propuesta constitucional, la inclusión de estos temas deja en evidencia que las demandas que han calado la protesta social en Chile favorecen la articulación y coordinación entre los convencionales. Gracias a la iniciativa popular no 5938 y al voto de mujeres y hombres, representantes de izquierda y una minoría de derecha, el texto incluía una de las principales banderas del movimiento feminista del país.

En coherencia con el carácter interseccional de este movimiento, en las audiencias también participaron múltiples actores²², y aunque en el segundo año no todos continuaron en este mecanismo, otros se incorporaron²³. De manera general, los temas de estas audiencias figuraban en el articulado de

²² En las audiencias participaron las siguientes organizaciones: Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Arriba Mamás Chile, Corporación Humanas, Observatorio Género y Equidad, Centro de Estudios de la Mujer, Fundación Instituto de la Mujer, Asociación Yo Cuido, Comunidad Mujer, Observatorio para la Niñez y Adolescencia, Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Colegio de Matronas de Chile, Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial y Asociación Chilena de Protección a la Familia.

²³ Los actores y grupos de interés que participaron en 2022 en las audiencias fueron: Corporación Humanas, Observatorio Género y Equidad, Centro de Estudios de la Mujer, Women's Declaration International, Redefomen, Movimiento por los Primeros mil Días, Disidencias Unidas Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas, Movimiento de Mujeres Reivindica, Feminismo Comunitario de Abya Yala Tejido Chile, Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Corporación Miles, organizaciones de universidades estatales de Chile, Fundación ChileMujeres, Fundación Iguales y Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial.

la propuesta constitucional y se relacionaban con los derechos humanos de las mujeres, la participación política, la igualdad de género, el rechazo a la violencia de género, la perspectiva de género en la reforma judicial y con normas de protección a la familia, la maternidad y la infancia.

El texto constitucional también reflejaba la composición paritaria del órgano, pero sin obviar la interacción entre el proceso y el contexto. La desconfianza en los partidos y la consecuente crisis de representación, forzó la apertura a las candidaturas y pactos de independientes y, con ello, se potenció la representación plural y la canalización de las demandas de las minorías sexuales y los intereses femeninos que habían sido tradicionalmente desatendidos (Elster, 1995; Negretto, 2021; Heiss, 2021). De las audiencias realizadas en 2021 y 2022 sobre temas afines con la equidad de género, más del 60% fueron entre estos convencionales y organizaciones feministas y/o activistas sociales. Por lo tanto, los independientes desempeñaron un rol clave en la atención a la participación ciudadana sobre la perspectiva de género y en su inclusión ante un escenario nacional donde la agenda de las mujeres ha calado con mayor profundidad y son mayoría en el Gobierno.

Quizás este contexto también explica la relación entre el número de audiencias y el género de los constituyentes. Aunque más de la mitad de los encuentros fueron con constituyentes mujeres, los actores sociales se reunieron con representantes hombres más del 40% de las veces. Mientras las convencionales mantuvieron el protagonismo en la representación de los intereses de las mujeres, los convencionales presentaron incentivos de género y dialogaron con diversos grupos de interés y lobistas a favor de la agenda femenina. Así se amplió no solo el rol de los actores sociales en los procesos constituyentes, sino también la agenda de los representantes independientes a favor de mandatos pro mujer.

La participación ciudadana se ha relacionado con el aumento de los derechos constitucionales y con la inclusión de instituciones participativas (Elkins et al., 2009). En el proceso chileno para la redacción de la primera propuesta constitucional, se aceptaron 77 iniciativas populares, de las cuales 10 se relacionaban con la agenda femenina. Actores individuales y colectivos, es decir, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, presentaron propuestas sobre derechos fundamentales y principios constitucionales de las mujeres. Específicamente, las iniciativas estuvieron relacionadas con los temas de las audiencias y se enfocaron en los derechos de las mujeres, la violencia de género, el reconocimiento de las labores de cuidado, el trabajo doméstico y la perspectiva de género en la educación, la salud y la justicia.

La confluencia de diversos actores y un proceso de negociación interna, con las mujeres como protagonistas, propició avanzar en la representación sustantiva en el texto propuesto. Al disponerse la paridad como un principio del sistema político, electoral o judicial del país, las mujeres no serían una

excepción en todos los cargos de representación popular, en los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, en los espacios de dirección de las organizaciones políticas y de toma de decisión de las Fuerzas Armadas. Una mayor presencia de las mujeres en el ámbito político y estatal podría contribuir a la formulación de políticas públicas a su favor.

La democracia paritaria y la garantía de la igualdad sustantiva de género figuraban entre los mayores logros del texto constitucional, pero también entre uno de los posibles motivos para su rechazo. Tradicionalmente, la democracia chilena ha sido masculina y sus concepciones imperaron en el acceso al sufragio y siguen imperando en la participación política, en el ordenamiento jurídico del país, en los procesos electorales y en la composición de los Gobiernos. Con la propuesta de nueva Constitución se buscaba fomentar y visibilizar la perspectiva de género y la presencia de las mujeres en todos los espacios del poder. Sin embargo, el pasado y reciente proceso por un nuevo arreglo constitucional muestra los desafíos y las interacciones que requiere la inclusión de las demandas femeninas. La participación ciudadana y la composición plural del órgano son importantes para ampliar las perspectivas de los debates e incluir agendas diversas, pero la paridad debe ser la base de cualquier nueva Constitución que busque erradicar las asimetrías de género, porque las mujeres están presentes en el poder y velan por la garantía y cautela de sus derechos (Suárez-Cao, 2022).

En un mundo donde continúa el predominio de la cultura machista, la equivalencia entre hombres y mujeres no puede quedar en anhelos o como una experiencia archivada. Los procesos electorales y constitucionales más recientes del país muestran cómo se excluyen a las mujeres y exacerbando las brechas de género en política cuando los partidos ejercen una función de “*Gatekeepers*” -o porteros, en español (Hinojosa, 2012). Estos y otros actores relegan el derecho de las mujeres de participar, representar y decidir la inclusión de sus demandas en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la redacción de las constituciones debe desarrollarse en contextos paritarios y marcados por la participación popular.

CONCLUSIONES

Chile escribió y presentó la primera propuesta constitucional luego de un proceso marcado por innovaciones. A diferencia de los procesos constituyentes más recientes en América Latina y en el mundo, la paridad identificó al órgano constituyente y hubo espacio en el contenido de la propuesta para las demandas de las mujeres. Del movimiento feminista, de los grupos de interés, de las iniciativas populares, de la inclusión de representantes independientes y de un contexto donde los desafíos al poder de género han permeado la

sociedad civil y los movimientos sociales, emergió la influencia que articuló su representación sustantiva en la propuesta constitucional.

El camino que queda por recorrer sigue siendo largo. La inclusión de la democracia paritaria quiebra la tradición constitucional mundial y se erige como un caso que descriptivamente supera todo umbral de presencia femenina. Sin embargo, desmontar la institucionalidad vigente y sentar las bases de un nuevo orden institucional en Chile requiere de mayores esfuerzos. El texto constitucional escrito por un órgano paritario fue rechazado en 2022 y, ante el posible inicio de un nuevo proceso constituyente, la paridad vuelve a estar en la mesa de negociaciones. El movimiento feminista, las organizaciones sociales, las y los académicos, ciudadanos/as y representantes políticos a favor de la equidad de género no pueden dar la tarea por terminada.

En Chile se afinan los detalles para retomar el cambio constitucional y se ha valorado de manera positiva el hecho de que las fuerzas políticas coincidan en que la paridad de género deber ser un principio del nuevo proceso. A la luz de la experiencia de la Ley de Cuotas de 2017 y del aprendizaje que se reflejó en la configuración de la norma paritaria para la elección de la Convención Constitucional, el foco de los actores claves debe estar, nuevamente, en el diseño de la norma, porque la realidad observada muestra que en las reglas electorales está una de las claves.

REFERENCIAS

- Aguilera, S.; Navarrete, B., & Bravo, D. (2021). Que todo el territorio se vuelva feminista. Las protagonistas de las tomas universitarias de 2018. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Batlle, M., & Roque, B. (2018). Mujeres, carreras y cuotas en el Congreso chileno: las trayectorias políticas de las diputadas (1989-2017). En Miranda, L., & Suárez-Cao, J. (Eds.). La política siempre ha sido cosa de mujeres: elecciones y protagonistas en Chile y la región (p. 59-76). Santiago de Chile: Flacso Chile.
- Biblioteca del Congreso Nacional (2019). Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Recuperado en noviembre de 2022 de: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf
- ____ (2022). Boletín Legislativo Mujeres y Género, 32. Recuperado en noviembre de 2022 de: https://www.bcn.cl/boletines/boletin.html?id_boletin=12&nro_boletin=32
- Caminotti, M., & Freidenberg, F. (2016). Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LXI(228), 121-144.

- Convención Constitucional (2022a). Comisiones Convención Constitucional. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.cconstituyente.cl/comisiones/>
- Convención Constitucional (2022b). Iniciativa popular de norma. Recuperado en noviembre de 2022 de: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/aprobadas
- Dobrowolsky, A., & Hart, V. (Eds.). (2003). *Women making Constitutions*. Londres: Palgrave Macmillan.
- El Mostrador (2020). Movimiento feminista sigue haciendo historia: dos millones de mujeres marcharon en Santiago y regiones en el 8M. 8 de marzo de 2020. <https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/03/08/movimiento-feminista-sigue-haciendo-historia-dos-millones-de-mujeres-marcharon-en-santiago-y-regiones-en-el-8m/>
- Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). *The endurance of national Constitutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elster, J. (1995). Forces and mechanisms in Constitution-making. *Duke Law Rev*, (45), 364-396.
- Figueroa, P., Miranda, L., & Meza, C. (2021). ¿Convención paritaria = convención feminista? Ciper. 24 de mayo de 2021. <https://www.ciperchile.cl/2021/05/24/convencion-paritaria-convencion-feminista/>
- Gazmuri, J.; Le Foulon, C., & Suárez-Cao, J. (2022). Paridad y financiamiento electoral. Estudio presentado en Seminario CEP. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.cepchile.cl/cep/noticias/notas-de-prensa/seminario-paridad-y-financiamiento-electoral>
- Heiss, C. (2021). Revuelta social y proceso constituyente en Chile. *Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos*, (2), 69-78. <https://doi.org/10.14198/ambos.20981>
- Hinojosa, M. (2012). *Selecting women, electing women: political representation and candidate selection in Latin America*. Filadelfia: Temple University Press.
- Horton, L. (2015). Women's movements in Latin America. En Almeida, P., & Cordero, A. (Eds.). *Handbook of social movements across Latin America* (p. 79-87). Nueva York: Springer.
- Houlihan, E. (2021). Género y reglamentos en procesos constituyentes. Un análisis comparado en apoyo de la Convención Constitucional de Chile. Seminario virtual IDEA Internacional.
- Joignant, A.; Morales, M., & Fuentes, C. (2017). *Malaise in representation in Latin American countries. Chile, Argentina and Uruguay*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Kirkwood, J. (1986). *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*. Santiago de Chile: Flacso Chile.
- Lamadrid, S., & Benitt, A. (2019). Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016. *Revista Estudios Feministas*, 27(3), e54709. <https://doi:10.1590/1806-9584-2019v27n354709>

- Lovenduski, J. (2002). Feminizing politics. *Women: A Cultural Review*, 13(2), 207-220.
- Luna, J., & Altman, D. (2011). Uprooted but stable: chilean parties and the concept of party system institutionalization. *Latin American Politics and Society*, 53(2), 1-28.
- McGowan, C. (2021). Why Chile's new Constitution is a feminist victory. *Foreign Policy*. 15 de febrero de 2021. <https://foreignpolicy.com/2021/02/15/chile-constitution-gender-parity-feminist-protest/>
- Montaño, S., & Aranda, V. (2006). Reformas constitucionales y equidad de género. Cepal, Informe final seminario internacional Santa Cruz de la Sierra, 21, 22 y 23 de febrero de 2005.
- Negretto, G. (2013). Sistemas electorales. En Barreda, M. (Ed.). *Las instituciones políticas de las democracias latinoamericanas*. La Paz: Huygens-Plural.
- (2021). Deepening democracy? Promises and challenges of Chile's road to a new Constitution. *Hague Journal on the Rule of Law*, (13), 335-358. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-021-00158-2>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering. Voting rules and electoral behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Onu Mujeres (2021). Elisa Loncón: "El futuro debe tener la fuerza de las mujeres indígenas a todo nivel político, cultural, social y económico". 6 de septiembre de 2021. <https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/09/elisa-loncon-el-futuro-debe-tener-la-fuerza-de-las-mujeres-indigenas>
- Pitkin, H. (1967). *The concept of representation*. Berkeley: University of California Press.
- Reyes-Housholder, C. (2019). A constituency theory for the conditional impact of female presidents. *Comparative Politics*, 51(3), 429-447.
- Reyes-Housholder, C. & Roque, B. (2019). Chile 2018: desafíos al poder de género desde la calle hasta La Moneda. *Revista de Ciencia Política*, 39(2), 191-216. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200191>
- Reyes-Housholder, R. & Thomas, G. (2021). Gendered incentives, party support and viable female presidential candidates. *Comparative Politics*, 53(2), 331-355. <https://doi.org/10.5129/001041521X15934682940546>
- Reyes-Housholder, C. & Castillo, I. (2022). *Constituciones, género y paridad*. En Castillo, I., González, J., & Madariaga, A. (Eds.). *Buscando un nuevo contrato social*. Santiago de Chile: Catalonia.
- Ríos, M., Catalán, L., & Guerrero, E. (2004). *¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en Chile post transición*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- Schwindt-Bayer, L. (2009). Making quotas work: the effect of gender quota laws on the election of women. *Legislative Studies*, 34(1), 5-28. <https://doi.org/10.3162/036298009787500330>
- (2010). *Political power and women's representation in Latin America*. Oxford: Oxford University Press.

- Suárez-Cao, J. (2021). Reconstructing legitimacy after crisis: the chilean path to a new Constitution. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(2), 253-264.
- Suárez-Cao, J. (2022). Las Constituciones también pueden ser para mujeres. *The Clinic*. 11 de julio de 2022. <https://www.theclinic.cl/2022/07/11/constituciones-tambien-pueden-ser-para-mujeres/>
- Telar. (2021). Tiempo del uso de la palabra en la convención constitucional. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://plataformatelar.cl/2021/08/16/empo-de-uso-de-la-palabra-en-la-convencioncons-tucional/>
- Tenemos que Hablar de Chile. (2021). Revisión de propuestas presentadas a la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente. Santiago de Chile.
- Waylen, G. (2009). What can historical institutionalism offer feminist institutionalists? *Politics and Gender*, 5(02), 7-9. Doi:10.1017/S1743923X09000191.

SECCIÓN 5
TERRITORIO

Editora: Paola Jirón

CAPÍTULO 14

ZURCIR DESDE LOS CUIDADOS. PRÁCTICAS ESPACIALES QUE RECONOCEN, RESISTEN Y REPARAN VIDAS Y TERRITORIOS¹

Paola Jirón

LAS CRISIS sociales, pandémicas, ambientales, económicas y políticas de los últimos años han puesto de manifiesto territorios que se viven cotidianamente de manera inconexa, interrumpida y segregada. Para los y las habitantes, unir estos territorios no resulta ser una tarea fácil, especialmente, cuando desde las políticas públicas y los modos de comprender dichos territorios, no se logra reconocer las consecuencias de intervenciones fragmentadas en la vida cotidiana. Esto se observa tanto en políticas públicas urbanas, territoriales y espaciales —vivienda, transporte u obras públicas—, como en políticas sociales más amplias, las que no contemplan su impacto e importancia territorial, como salud, educación y desarrollo social, entre otras.

Desde un enfoque de los cuidados, el cual intenta desdibujar la división entre lo reproductivo y lo productivo, y que plantea la imposibilidad de sostener la vida sin reconocer las múltiples formas en que los cuidados la sustentan, se puede observar cómo los cuerpos en movimiento se tornan infraestructuras humanas (Simone, 2004) que zurcen los territorios fragmentados.

Basado en diversas investigaciones realizadas en los últimos años², este capítulo da cuenta de cómo las personas llevan a cabo sus prácticas de cuidados al zurcir los territorios que habitan. Se explican brevemente tres ejemplos que resaltan cómo se especializan los cuidados, cómo las transformaciones en viviendas también forman parte de los cuidados, y cómo trabajadores móviles digitales sostienen prácticas de cuidado desde su movilidad cotidiana.

En estos ejemplos, se detectan tres situaciones. Primero, la importancia de reconocer la forma en que las personas viven en los territorios fragmentados.

¹ Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

² Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (Movyt), Fondo Iniciativa Milenio en Ciencias Sociales ANID NCS17_027; Fondecyt n° 1161437, “Habitar en la ciudad intermedia: prácticas espaciales en Alto Hospicio y Padre Las Casas”; Fondecyt n° 1201362, “An interdependence, social networks, gender approach to understand daily activity-travel and mobility of care in two chilean cities”; Mini-COES, “Trabajador@s móviles digitales: explorando nuevas formas de habitar laboral”.

Segundo, que estas prácticas territoriales no suceden sin resistencia o conflicto por parte de los diversos agentes presentes en los territorios, humanos y no humanos. Y tercero, en contextos donde las políticas públicas no reconocen cómo los territorios fragmentan, estos se pueden reparar por medio de múltiples prácticas corporales que remiendan nuestras vidas cotidianas. Estas prácticas nos permiten acercarnos a nuevas maneras de comprender los territorios desde los cuidados, que permitirán transformar los futuros urbanos. Pensar los territorios desde esta mirada, puede traducirse en posibilidades de mejorar los espacios urbanos y no urbanos, al reconocer la fragmentación, comprender la resistencia y observar cómo los cuerpos recomponen territorios. Esta reparación territorial puede ser extendida a las políticas públicas, las que, en vez de continuar fragmentando vidas, logren subsanar fragmentaciones históricas de los territorios.

TERRITORIOS RELACIONALES Y VIDA COTIDIANA

Comprender los territorios como relacionales (Massey, 2005), implica entenderlos como más que meros contenedores de actividades o espacios vistos desde arriba o partir de indicadores georreferenciados en un mapa, o como espacios que se pueden controlar a la distancia cuando se intenta predecir el comportamiento de la población. En los territorios relacionales se reconoce el impacto mutuo que se produce con nuestras prácticas y nuestros cuerpos, cómo aquello que sucede en un lugar tiene impactos en otro, pese a la distancia o la invisibilidad. También implica entender que la experiencia territorial no es igual para todas las personas, existiendo diversidad socioeconómica, pero también de género, edad, ciclo de vida, raza, etnia, habilidades, etc. Es la superposición de opresiones que, generalmente, son invisibles, lo que se observa a partir de la interseccionalidad (Rodó & Baylina 2018; Hopkins, 2018; Viveros-Vigoya, 2016). Estos territorios relacionales son dinámicos, es decir, no son fijos temporal ni espacialmente, ya que quienes los habitamos —humanos y no humanos— los vivimos en constante movimiento de forma cotidiana.

En tiempos recientes, los estudios urbanos han incorporado el análisis de la vida cotidiana para comprender cómo se producen estos territorios y cómo son impactados, lo que permite poner en el centro a los y las habitantes y sus prácticas del día a día. Observar y analizar las transformaciones en la vida cotidiana desde las prácticas de movilidad es una forma de espacializar dichas prácticas, identificar conflictos y poder, y de develar los cuerpos-territorio (Zaragocín & Careta, 2017) donde se ponen en práctica estrategias individuales y colectivas para lidiar con los efectos de la fragmentación territorial.

Tradicionalmente, la vida cotidiana ha sido considerada como actividad residual, lo que queda fuera de las actividades especializadas y estructuradas.

No obstante, la vida cotidiana se refiere a una totalidad, es una manera de entrelazar lo que el conocimiento especializado y político ha fragmentado en el ejercicio del poder. Según Lefebvre (1991), la vida cotidiana permite recuperar el conjunto de relaciones y actividades que las personas experimentan.

La primera distinción respecto a la vida cotidiana, se refiere a su invisibilidad, es decir, a sus aspectos ocultos, esas partes secretas de nuestra existencia que, frecuentemente son ignoradas o incomprendidas por la investigación y práctica urbana (Jarvis, Pratt et al., 2001). Los sujetos desarrollan múltiples actividades y roles en el día a día, y cada una de estas prácticas se produce en, con y desde el espacio, y es allí donde, de manera nítida y tangible, es posible dar cuenta de más de una vida (Ross, 1992 en Highmore, 2002).

Esto nos lleva a la segunda distinción de la vida cotidiana: el conflicto. Es decir, es precisamente cuando alguien está intentando ser, por ejemplo, simultáneamente madre, esposa y trabajadora, que la experiencia de vida cotidiana da cuenta de las complejidades o facilidades que se viven durante sus días. Según Highmore (2002), la vida cotidiana puede esconder o hacer visibles las diferencias sociales positiva o conflictivamente. Esto requiere cuestionar la transparencia de la vida cotidiana y, en particular, los discursos sobre esta, y exponerla como un terreno problemático y en disputa, donde no resulta fácil rastrear los significados de forma automática y las relaciones de poder se traducen en luchas, negociaciones, transformaciones, resistencias, subversiones (Reguillo, 2000) y experiencias diferenciadas. La diferencia es crucial en el análisis de la vida cotidiana urbana: observar cómo una experiencia puede ser tan distinta a otra, más allá de realizar las mismas prácticas en contextos aparentemente similares. Al observarse desde una sola perspectiva, el análisis urbano oculta los aspectos desconocidos de la vida cotidiana que pueden reconocerse como esenciales en la manera en que las ciudades se producen, reproducen y son vividas.

Otra distinción dice relación con el espacio temporal, el cual no solo nos sitúa como investigadores dentro de la vida cotidiana, es decir, esta vida cotidiana no solo les sucede a otros que están allá afuera, no solo es algo vivido por otros, sino que, al ser todos parte de esta vida, no nos podemos salir de ella. Esto significa que es importante comprenderla como el tejido que sostiene las vidas de todas las personas; por lo tanto, la dimensión espacial o el “dónde” de la vida cotidiana es fundamental: cuáles son los espacios que se toman en cuenta, en los que se enfoca su observación, así como también los tiempos y prácticas observadas. Las prácticas diarias en el espacio urbano pueden servir para mediar entre individuos y colectivos, por un lado, y estructuras e instituciones más amplias de la sociedad, por el otro (Vaiou & Lykogianni, 2006).

Un último aspecto que resulta recurrente al observar la vida cotidiana actual, es la forma en que la sociedad la fragmenta (Highmore, 2002). Particularmente, desde la movilidad es posible observar una fragmentación espacio-temporal,

dada la creciente especialización laboral, la separación entre lo doméstico, el ocio y lo laboral. Esta fragmentación se asocia estrechamente con aspectos urbanísticos, en términos de cómo la localización de espacios en que las personas desarrollan las diferentes actividades implica complejos desplazamientos.

Finalmente, desde una mirada feminista —en especial, desde los estudios territoriales feministas, que intentan poner énfasis en las relaciones de poder y en las desigualdades incrustadas en la experiencia cotidiana (Peake, 2015, 2015b, 2020; Massey, 2005; McDowell, 2000, Valentine, 2007; Hanson & Hanson, 1991; Hanson & Pratt, 1991; Molina, 2013; Soto, 2018)—, se destaca que la vida cotidiana requiere reconocerse como un espacio donde la vida se une a partir de los cuerpos que la habitan en el día a día, para luego transformar las relaciones de poder existentes en la sociedad, en especial aquellas que oprimen a las mujeres y a muchas personas que vivencian su cotidianeidad de manera desigual (Jirón et al., 2020).

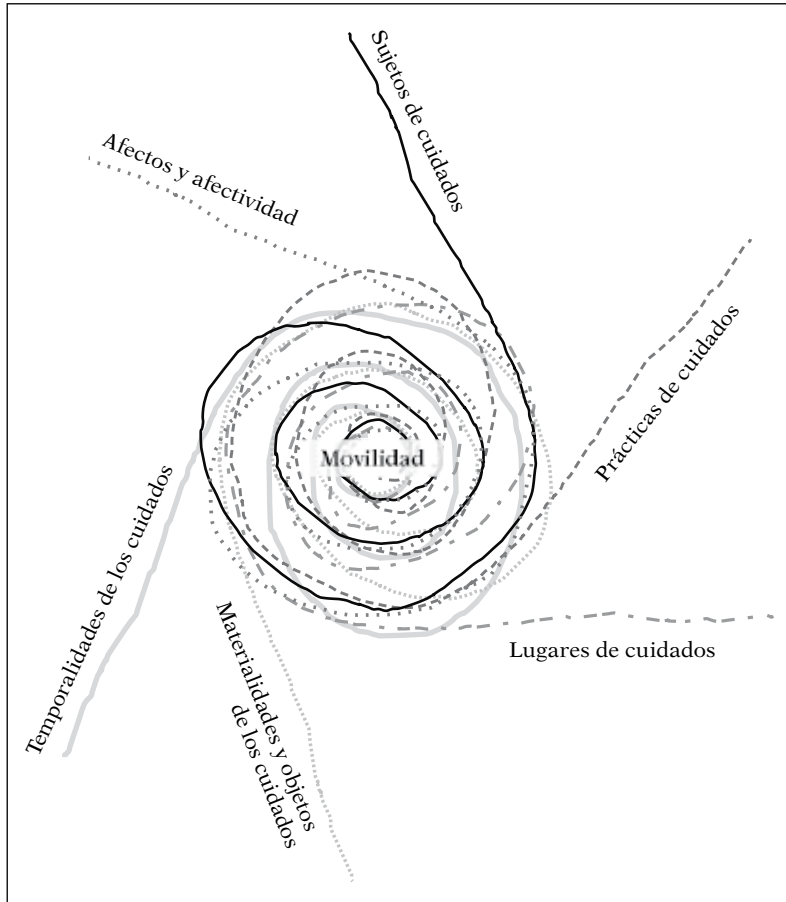
ESPACIALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

De acuerdo con la economía feminista, las tareas de cuidado han sido “realizadas históricamente por mujeres, que han visto cómo dichos trabajos se realizan de manera no remunerada o, en su caso, en condiciones precarias y, siempre, sin ser lo suficientemente reconocidas y valoradas socialmente” (Jubeto et al., 2012). Las feministas plantean una contradicción que el capitalismo tiene con el propio sostén de la vida, al igual que con la sostenibilidad medioambiental del planeta. El ecofeminismo ha sido especialmente crítico con la forma en que se concibe la economía, y propone “una transformación de las prácticas del ciclo económico relacionadas tradicionalmente con la producción, la distribución, la financiación y el consumo. Colocando en definitiva a las personas, al planeta y a su propia sostenibilidad en el centro de la construcción política, social y económica” (Jubeto et al., 2012).

Según Carrasco (2012), la reproducción de la vida se trata de una noción multidimensional que incluye diversas sostenibilidades: ecológica, económica, social y humana y todas las interrelaciones que existen entre ellas, dando lugar a la cadena de sostén de la vida. Esto es algo que el pensamiento económico dominante ha ocultado, mientras que invisibiliza que las condiciones de funcionamiento del sistema socioeconómico actual son insostenibles. “Una economía sostenible que trabaje para la satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, manteniendo la capacidad de reproducción de su mundo común social y natural, debe invertir la relación del ‘iceberg’ y poner la producción y el mercado al servicio de las comunidades y las personas” (Carrasco, 2012). Esto nos lleva a poner en el centro la forma en que se cuida y nos cuidamos en el planeta.

En este contexto, Jirón et al. (2022) plantean que la espacialización de los cuidados se refiere a la compleja y enmarañada relación que tienen los y las habitantes con los espacios en que llevan a cabo los cuidados cotidianamente. A modo particular, se refiere a la forma en que los espacios de los cuidados son producidos a partir de los cuerpos que los habitan y las relaciones que se generan entre estos y otras materialidades, por medio de múltiples movilidades. Basado en el trabajo de diversas agrupaciones feministas en la región, se entienden los cuerpos como territorio (Haesbaert, 2020; Zaragocin & Caretta, 2021), en el sentido que no son neutrales ni universales, sino diversos al ser racializados, al tener sexualidad, género, edad y clase, entre otros. Es a partir de estos cuerpos que suceden las relaciones espaciales que se van produciendo de forma multiescalar (Jirón & Gómez, 2018), sin una jerarquía predefinida o estructurada. En este contexto, la espacialización de los cuidados incluye el diseño del espacio, las infraestructuras de cuidado, el reconocimiento de los propósitos de viaje para cuidar; pero sobre todo se refiere a las prácticas corporales, relacionales y multiescalares de cuidar, sin las cuales sería muy difícil habitar día a día.

La espacialización de los cuidados es relevante tanto para las disciplinas cuyo foco principal es el espacio (arquitectura, geografía, diseño, planificación urbana/territorial y de transporte), como para aquellas relacionadas directamente con proveer cuidados, como las ciencias médicas. En el primer grupo, los cuidados se sitúan como un eje clave en el análisis de las prácticas de habitar el territorio; mientras que, para disciplinas como las ciencias sociales y médicas, resulta relevante considerar la espacialidad de manera más explícita en sus análisis e implementaciones de políticas de salud pública, por ejemplo. Esto se debe a que la simple prestación o existencia de servicios resulta insuficiente para realizar los cuidados si no se considera la forma en que estos circulan por medio de personas que coordinan, se desplazan, negocian y ejercen sus cuidados con relación a espacialidades diversas a partir de las múltiples redes humanas y no humanas que permiten la reproducción de la vida. Las prácticas cotidianas de habitar se caracterizan por la forma interdependiente en que se llevan a cabo (Jirón & Gómez, 2018); desde ahí, es posible identificar las dimensiones que conforman la espacialidad del cuidado, las cuales se relacionan con los sujetos, prácticas, materialidades y objetos, lugares, temporalidades y afectividad de los cuidados (ver figura 1).

FIGURA 1. *Espacialización de los cuidados desde la movilidad*

Fuente: Jirón et al., 2022.

A continuación, se presentan tres formas en que los cuidados se espacializan tanto en la vivienda como en la ciudad.

*Cuidados desde la vivienda*³

Además de otorgar cobijo y protección, identidad y sentido de lugar, la vivienda también se torna en una herramienta fundamental para confrontar las múltiples adversidades de la existencia, volviéndose un elemento básico de la mantención de la vida, en particular, de las relaciones afectivas y de cuidado. En este proceso, la manera en que nos adaptamos y adaptamos la vivienda frente a diversas adversidades y vicisitudes cotidianas, da cuenta de la importancia de las transformaciones que se realizan a las viviendas hoy.

Transformar una vivienda implica hacer cambios en su habitabilidad, incluyendo su materialidad, programa, extensión y ajuste ante necesidades específicas de algún miembro del hogar, incluyendo sillas de ruedas, almacenaje, ciclo de vida, estética y generación de ingreso, entre muchos otros. Las razones para transformar la vivienda son diversas (Lombard, 2009; Araos, 2015; Ortega Alcázar, 2008; Portugal, Harper & Shaikley, 2013; Tipple, 1999). Sin embargo, uno de los aspectos que ha recibido atención limitada es aquello que encontramos en las viviendas de bajos recursos en la ciudad de Alto Hospicio, e involucra la transformación de la vivienda por razones de cuidado. En ausencia de un Estado que otorgue los medios adecuados para el cuidado de niños, adultos mayores, enfermos, mascotas o miembros del hogar, las personas tienden a adaptar sus necesidades de vivienda a la siempre cambiante situación de parentescos.

Esta situación de la vida cotidiana involucra muchos más elementos de lo que la vivienda pueda resolver, pero da cuenta de vidas complejas, cambiantes y, muchas veces, vulnerables. El caso de Marta nos permite comprender mejor cómo sucede esto.

Marta (60) y su marido (62) viven en una vivienda social que ha sido transformada para albergar los cambios familiares a lo largo de los años. Tienen dos hijos: Andrés (38) y Enrique (36), ambos casados y con dos hijos cada uno: Daniel (20) y Constanza (16); y Sofía (20) y César (18), respectivamente. Tanto Andrés como Enrique trabajan en la construcción, y luego de años de circular por el país, ambos decidieron mudarse a Alto Hospicio y vivir con sus padres. Después del terremoto de 2014, que afectó la zona norte de Chile, la casa de Marta sufrió daños severos que requerían arreglos importantes. Usando el pequeño subsidio posterremoto que entregaba el Estado para arreglar los daños, decidieron transformar la angosta vivienda de un piso en un edificio de tres pisos, con tres unidades habitacionales claramente diferenciadas en cada uno de ellos, conectadas por una caja de escaleras. Con la ayuda de un

³ Esta sección se basa en el trabajo de investigación llevado a cabo en el Proyecto Fondecyt n° 1161437.

arquitecto, resolvieron los problemas estructurales del nuevo edificio, pero al ser ellos constructores, realizaron gran parte del trabajo y lograron erigir una unidad habitacional creativa para tres familias distintas en tres pisos.

La vivienda tenía originalmente 45m², distribuidos en dos habitaciones, una sala de estar, cocina y un baño, en un terreno de 80m². Esta fue recepcionada con la capacidad estructural de sostener dos pisos, por lo que el primer hijo construyó el segundo piso adaptando las posibilidades originales con una escalera por el costado. Cuando el segundo hijo decidió mudarse, construyeron el tercero, continuando con la escalera por el costado.

Marta sufre de Alzheimer, y los hijos y nietos no solo encontraron una vivienda propia, sino, por sobre todo, encontraron una forma de cuidar a la Marta de manera colectiva. Los nietos se turnan para estar pendientes de ella, uno de ellos la ayuda una huertita que ha ido conformando durante los últimos años, le consiguen los remedios, la asisten en las compras de supermercado, le comparten la feria y se sientan con ella en la entrada de la puerta viendo la gente pasar. La casa no solo resuelve la necesidad habitacional de los padres y sus hijos, también es una forma de cuidado: de los abuelos a sus hijos, los nietos a los abuelos, los hermanos a los sobrinos, etc. Además del cuidado de todos los días, de la compañía que se hacen, también disfrutan de asados, fiestas y celebraciones, las que se hacen más fáciles y amenas entre ellos.

Cuerpos y redes que unen las infraestructuras precarias de cuidados⁴

Iris vive con su hija Yolanda (19), quien usa una silla de ruedas, pues nació con una enfermedad muscular que hace que se contraigan: necesita ayuda para vestirse, comer, bañarse o rascarse la nariz. Se trasladan, principalmente, en transporte público y caminan; a veces, las llevan en auto. Dicen que, cuando tienen que ir al centro, les sale más barato viajar en colectivo, pagar todos los pasajes e irse cómodas con la silla, aunque no todos están dispuestos a llevar la silla.

Para ellas, moverse por la ciudad en transporte público no resulta tan problemático. Iris conoce bien las rutas, las mejores estaciones, dónde están las calles con hoyos y las evita, domina las entradas y salidas de estaciones, está al tanto de cuáles ascensores funcionan y pide ayuda cuando requiere de asistencia. Las dificultades, cabe decir, suele percibirlas en las personas: el problema de moverse en silla de ruedas no es tanto físico como humano, dice. Por un lado, no todos los choferes ayudan con la rampa del bus; algunos que ella ya conoce siempre paran y ayudan, pero otros no, las ven y no paran.

⁴ Esta sección se basa en el trabajo de investigación llevado a cabo en el Proyecto Fondecyt n° 1201362.

Prefiere que otros pasajeros no la ayuden a subirse al bus, porque no tratan bien la rampa y luego la rompen.

También ha vivido el maltrato en el metro, gente que no cede el asiento cuando su hija necesita sentarse, que no la dejan subirse al ascensor. Cuenta de las veces que ha discutido en el metro con alguien en el ascensor, en los vagones o accesos. En ocasiones, no se avisa cuando un ascensor en el metro no funciona y tiene que subir la silla de ruedas por las escaleras. Ha aprendido a sortear las fallas del sistema caminando por la mitad de la calle cuando las aceras son muy angostas, esperando en paraderos que no están realmente acondicionados y zigzagueando por calles en mal estado. Pero los problemas de espacio se ven exacerbados por las personas que no logran entender que su hija tiene necesidades específicas y que no se ponen en su lugar.

Ellas hacen uso de los servicios e infraestructuras disponibles, buscan ayuda y la organizan, y así cuentan con una red importante de apoyo para desplazarse y acceder a los servicios que necesitan. Esta red, que ambas han ido tejiendo con los años, no está formalizada, funciona de manera descoordinada y va cambiando en el tiempo, pues todo se va complejizando a medida que Yolanda crece y requiere otro tipo de apoyos. Estos incluyen colegios, centros de salud, centros deportivos, áreas de recreación, personas con conocimientos específicos de kinesioterapia, ejercicios, aprendizaje, diversión, ocio y también quienes las ayudan a la venta de objetos que confeccionan. Muchos servicios existen de forma precaria, otros son caros y todos funcionan descoordinadamente, por lo que ellas unen con sus cuerpos servicios e infraestructuras diversas para cuidarse.

Aparte de su familia inmediata (hijos y exmarido), cuentan con anillos de apoyo recíproco que hacen de su vida más amena. Los vecinos del barrio han sido un gran soporte a lo largo de los años, la vecina de al frente tiene llaves de su casa y, en cualquier emergencia, siempre colabora. Así, arman sus vidas con una gran red de cuidados, sin la cual no sería posible acceder a los servicios de cuidado o, quizá, permanecerían gran parte del tiempo encerradas en su casa. Este entretejido de cuidados a veces se ve precario, sin embargo funciona: gracias a este, su esfuerzo, confianza e inteligencia, logran zurcir las profundas deficiencias de un sistema de apoyo descoordinado, frágil, caro y precario. Para Iris y su hija los temas de salud son primordiales, pero igual de significativo en su día a día es la posibilidad de pasarlo bien, educarse, recrearse y contar con una vida social. Su fuerza son los vínculos afectivos que arman con todas las personas que son parte de su red y ayudan a zurcir sus territorios de cuidados.

*Repartidores móviles digitales: una red que se cuida*⁵

Un grupo de jóvenes venezolanos se reúne en torno a una banca en el sector de Suecia con Providencia, frente al Burger King. La mayoría comenzó a trabajar con Rappi desde que perdieron sus trabajos a inicios de la pandemia por Covid-19. “La oficina” es la banca, el punto de encuentro. Ahí pasan el tiempo entre pedido y pedido: comparten sus vidas, conversan, escuchan música, ven videos, comen y se relajan hasta que “cae algo” que consideran bueno. “Uno hace mucha amistad, compramos comida y compartimos”, dice Julio (37), quien llegó hace dos años a Chile y vive con su pareja y los hijos de ella, también venezolanos. Trabajaba en un servicentro hasta que lo despidieron por la pandemia, ahí comenzó a hacer Rappi y llegó a la oficina. En septiembre de 2021 encontró trabajo de conserje, pero sigue siendo Rappi en sus días libres porque le gusta.

“La oficina” también es el nombre del grupo de WhatsApp por el que se comunican. Participan alrededor de 15 personas, todos extranjeros, que llegan recomendados, son amigos de amigos. Se escriben y mandan audios constantemente para informarse de la aplicación y comparten su ubicación en tiempo real para cuidarse entre todos. La bici, el celular y la mochila son los imprescindibles de este trabajo, sin uno de ellos ya no se puede trabajar. Lo extra, pero no menos importante, es la batería externa para cargar el celular, una botella de agua para hidratarse, el casco, el candado y un soporte para fijar el celular a la bici.

Algunos se sientan en la banca —cabén tres cómodos y cuatro apretados— y dejan las mochilas en el piso. Los que no están sentados, siguen arriba de sus bicis con las mochilas puestas, listos para ir a buscar un pedido. Todos tienen el celular en sus manos. Conversan mientras esperan, hacen bromas, los teléfonos suenan y comparan los pedidos que les “caen”. “¿Te cayó promo?”, pregunta alguien, haciendo referencia a los incentivos diarios que ofrece Rappi. Generalmente ofrecen un bono por una cantidad de pedidos dentro de un rango de horario.

Los accidentes, caídas y atropellos, sumados a los robos, son las principales preocupaciones de un trabajo de este tipo. “Es peligroso, hay que saber por dónde andar y andar con cuidado”. Con el tiempo, desarrollan habilidades, un saber viajar maniobrando la bici con una mano y con la otra viendo el celular, sin caerse ni chocar.

⁵ Esta sección se basa en el trabajo de investigación llevado a cabo en el Proyecto Mini-COES “Trabajador@s móviles digitales: explorando nuevas formas de habitar laboral”. Se agradece de manera especial el trabajo de Francisca Basaure en este caso.

Pese a que el trabajo de reparto y la aplicación operan de manera individual, las redes que se forman son una fuente importante de apoyo. Tanto desde la banca como de sus teléfonos celulares, estos repartidores se protegen de las complejidades de andar por la urbe. A veces la ciudad es inhóspita, sin embargo, la red de apoyo que construyen entre repartidores es también una estrategia para trabajar: se prestan apoyo en temas de seguridad, se mantienen monitoreados a través de estas redes, avisan su ubicación y comparten datos. Cuando la red se activa presencialmente, se acompañan, compartiendo tiempo de esperas y comidas. Cabe señalar que esta red no tiene que ver con la aplicación, no es este el elemento que los articula, ya que se generan redes donde participan trabajadores de distintas aplicaciones; el elemento común suele ser el lugar donde trabajan, y la necesidad de cuidarse y apoyarse.

CONCLUSIONES

La manera en que los cuidados se expresan territorialmente es de vital importancia para su ejecución. Esta espacialización sucede, sobre todo, cuando los y las habitantes intentan zurcir los espacios por donde habitan cotidianamente: zurcir implica juntar, a veces, durante toda una vida, otras, por periodos cortos, espacios que se encuentran fragmentados. Los habitantes, por medio de objetos o sus propios cuerpos, unen espacios en una escala pequeña, como puede ser la vivienda, o a una mayor escala, como la ciudad o áreas específicas de ella. A menudo, las personas zurcen territorios altamente fragmentados y deteriorados asumiendo barreras y dificultades. En el ámbito de los cuidados, la ausencia de un Estado que no solo reconozca la importancia de cuidar y reproducir la vida, sino que se haga cargo, implica que los cuidados deben efectuarse con o sin ayuda, y esta responsabilidad, frecuentemente, recae en las familias y en las comunidades, y de manera particular en las mujeres.

Los tres casos presentados dan cuenta de formas específicas en que los cuidados se llevan a cabo espacialmente. Cada uno tiene sus particularidades, sin embargo, todos tienen tres elementos en común: reconocer, resistir y reparar.

Reconocer las tareas de cuidado, incluyendo sus prácticas, los sujetos de cuidado, los lugares, materialidades y afectos con que se cuida es fundamental. Estas actividades se perciben como ocultas en la vida cotidiana o en las labores que las mujeres realizan todos los días. Al observar cómo y dónde se ejecutan, en muchos casos las personas que cuidan se tornan infraestructuras humanas para suplir o complementar la infraestructura deficiente o insuficiente.

En el proceso, vemos que estas tareas no siempre se ejecutan fácilmente, ya que implican negociaciones y complejidades que dan cuenta de cuidados que, a veces, generan resistencias. Se negocia con otros, con materialidades e instituciones para poder llevar a cabo los cuidados necesarios para vivir.

Zurcir no es una actividad cualquiera, implica remendar algo que requiere reparación. Nuestros territorios han sido intervenidos materialmente por múltiples acciones por parte de políticas públicas o en ausencia de ellas. En ocasiones, decisiones que desconocen la dificultad de habitar cotidianamente hacen que sean las personas quienes terminen reparando. Sin embargo, en la actualidad resulta imprescindible que aquellas instituciones que inciden en la forma en que se espacializan los cuidados comiencen a reparar territorios fragmentados. Así, las políticas públicas, programas e intervenciones vinculadas a la vivienda, barrio, transporte e infraestructura resultan fundamentales al momento de reconocer su vinculación con los cuidados. Esto implica la consideración de un diseño adecuado y continuo, pero también de normativas, formas de gestión, implementación y monitoreo de programas públicos que incorporen en su quehacer lo entrelazado que son las actividades de cuidados y personas que cuidan con los territorios que habitan. También aquellas políticas que no siempre se perciben como espaciales, pero que, en la actualidad, centran mucha de la oferta de cuidados, también deben comenzar a reparar territorialmente, incluyendo políticas de salud, educación, desarrollo social, deportes, alimentación y medio ambiente, entre tantos otros.

El aporte que ha hecho el pensamiento feminista en reconocer el rol fundamental que cumplen los cuidados en la sostenibilidad de la vida, hoy se torna urgente de ampliar, a pesar de que este pensamiento no siempre tiene el territorio y la forma en que se espacializan los cuidados como eje. Resulta imprescindible considerar el espacio en el que se ejecutan y se accede a los cuidados como un eje fundamental al momento de pensar en un sistema nacional de cuidados. Eso implica no solo pensar en los servicios que se ofrecen, sino que también en la complejidad de las prácticas, sujetos, temporalidades, lugares, objetos, materialidad y afectos que permiten que estos cuidados se realicen de manera amable y efectiva.

REFERENCIAS

- Araos, C. (2015). El allegamiento o la proximidad invisible. Aportes etnográficos al estudio del espacio doméstico en contexto de pobreza urbana en Chile. En Siles, C. (2016). *Los invisibles. Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad* (p. 195-232). Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad.
- Carrasco, C. (2012). Economía, trabajos y sostenibilidad de la vida. En Jubeto, Y., Larrañaga, M., Carrasco, C., León M., Herrero, Y., Salazar C., De la Cruz, C., Salcedo, L., & Pérez E. (Eds.). *Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la economía solidaria, feminista y ecológica* (p. 27-41). Bilbao: Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea.

- Haesbaert, R. (2020). Del cuerpo-territorio al territorio-cuerpo (de la Tierra): contribuciones decoloniales. *Revista Cultura y Representaciones Sociales*, 15(29), 267-301.
- Hanson, S., & Hanson, P. (1993). Chapter 10. The geography of everyday life. Behavior and environment. Psychological and geographical approaches. *Advances in Psychology*, 96, 249-269. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)60046-1](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)60046-1)
- Hanson, S., & Pratt, G. (1991). Job search and the occupational segregation of women. *Annals of the Association of American Geographers*, 81(2), 229-253.
- Highmore, B. (2002b). *The everyday life reader*. Londres: Routledge.
- Jarvis, H., Pratt, A. C. et al. (2001). *The secret life of cities. The social reproduction of everyday life*. Nueva York: Pearson Education.
- Jirón, P., Solar-Ortega, M. I., Rubio, M. D., Cortés, S. R., Cid, B. E., & Carrasco, J. A. (2022). La espacialización de los cuidados. Entretejiendo relaciones de cuidado a través de la movilidad. *Revista INVI*, 37(104), 199-229. <https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.65647>
- Jirón, P. (2021). Cuidando desde los territorios. Los territorios como ejes para abordar la pandemia y crisis social en Chile. En Soto, P. (Coord.). *Una mirada de género a las prácticas de movilidad cotidiana en la Ciudad de México. Aportes para la construcción de ciudades cuidadoras e inclusivas*. Universidad Autónoma Metropolitana. Disponible en: <https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-una-mirada-de-genero-a-las-practicas-de-movilidad-cotidiana-en-la-ciudad-de-mexico.html>.
- Jirón, P. & Gómez, J. (2018). Interdependencia, cuidado y género desde las estrategias de movilidad en la ciudad de Santiago. *Tempo Social*, 30(2), 55-72.
- Jirón, P., Imilan, W., Figueroa, I., Basaure, F., Brinck, A., Peña, G., Rivera, C., Cuyanao, J., Osterling, E. (2020). Aceptación, adaptación, transformación. Covid-19 y acomodos afectivos de la vida cotidiana en Santiago de Chile. *Revista Ensamblés*, 13, 72-95.
- Jubeto, Y., Larrañaga, M., Carrasco, C., León M., Herrero, Y., Salazar C., De la Cruz, C., Salcedo, L., & Pérez E. (Eds.). *Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la economía solidaria, feminista y ecológica* (p. 27-41). Bilbao: Economía Alternativa y Solidaria.
- Lefebvre, H. (1991). *Critique of everyday life*. Vol. I. Londres: Verso.
- Lombard, M. (2009). Making a place in the city: place-making in urban informal settlements in Mexico. PhD Thesis. Sheffield: University of Sheffield.
- Massey, D. (2005). *For space*. Londres: Sage.
- McDowell, L. (2000) Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid: Ediciones Cátedra Universitat de Valencia-Instituto de la Mujer.
- Molina, I. (2013) Sexismo flexible y malabarismo. Sobre las prácticas cotidianas de la clase obrera en tiempos de la transnacionalidad. En Aguilar, M A.

- & Soto, P. (Coords.). *Cuerpos, espacios y emociones: aproximaciones desde las ciencias sociales* (p. 221-249). México D. F.: Miguel Ángel Porrúa, UAM Iztapalapa.
- Ortega-Alcázar, I. (2008). Brick by brick: an ethnography of self-help housing, family practices and everyday life in a consolidated popular settlement in Mexico City. PhD Thesis. Londres: London School of Economics and Political Science.
- Peake, L. (2015a). The twenty-first-century quest for feminism and the global urban. *International Journal of Urban and Regional Research*, 40(1), 219-227. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12276>
- Peake, L. (2015b). On feminism and feminist allies in knowledge production in urban geography. *Urban Geography*, 37(6), 830-838. doi:10.1080/02723638.2015.1105484
- Peake, L. (2020) Urban geography: gender in the city. En Kobayashi, A. (Ed.). *International encyclopedia of human geography* (Second edition, Vol. 5, 281-291). Londres: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10186-6>
- Portugal, V., Harper, C., & Shaikley, L. (2013). Incremental expansion: examining user-initiated transformations in government housing in Manaus.
- Reguillo, R. (2000). La clandestina centralidad de la vida cotidiana. En Lindón, A. (Coord.). *La vida cotidiana y su espacio temporalidad* (p. 77-94). Barcelona: Anthropos-CRIM-El Colegio Mexiquense.
- Rico, M., & Segovia, O. (2017). *¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad*. Santiago de Chile: Cepal.
- Rodó-de-Zárate, M. & Baylina, M. (2018) Intersectionality in feminist geographies. *Gender, Place & Culture* 25(4), 547-553.
- Simone, A. M. (2004). People as infrastructure: intersecting fragments in Johannesburg. *Public Culture*, 16(3), 407-429
- Soto Villagrán, P. (2018). Hacia la construcción de unas geografías de género de la ciudad. Formas plurales de habitar y significar los espacios urbanos en Latinoamérica. *Perspectiva Geográfica*, 23(2), 13-31. <https://doi.org/10.19053/01233769.7382>
- Vaiou, D., & Lykogianni, R. (2006). Women, neighbourhoods and everyday life. *Urban Studies*, 43(4), 731-743.
- Valentine, G. (2007). Theorizing and researching intersectionality: a challenge for feminist geography. *The Professional Geographer*, 59(1), 10-21.
- Viveros-Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*, 52, 1-17.
- Zaragocín, S., & Caretta, M. A. (2021). Cuerpo-Territorio: a decolonial feminist geographical method for the study of embodiment. *Annals of the American Association of Geographers*, 111(5), 1503-1518. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1812370>

CAPÍTULO 15

HABITAR LA EXCLUSIÓN Y EL RACISMO. MUJERES INMIGRANTES RESIDENTES EN EL NORTE DEL PAÍS DURANTE LA PANDEMIA⁶

Yasna Contreras y Carolina Stefoni

LA PANDEMIA por Covid-19 ha tenido consecuencias en la población mundial, siendo las mujeres inmigrantes uno de los grupos más afectados, por encontrarse, precisamente, en la intersección entre las desigualdades estructurales que las afectan, dada su condición de mujer, color de piel, origen étnico y nacionalidad, entre otros (Cepal, 2020). En un contexto amplio, la pandemia incluyó no sólo la circulación del virus, con graves consecuencias en la salud de las personas, sino que también visibilizó políticas restrictivas a la movilidad de migrantes adoptadas en diferentes partes del mundo (Stefoni et al., 2022). La crisis sanitaria afectó, en mayor medida, a las mujeres migrantes que, al menos en América Latina y el Caribe, representan el 50.4% del total de migrantes (6,3 millones a 2017⁷). Una de las situaciones más críticas observadas en las últimas décadas en la región, se refiere a la salida de más de seis millones de personas desde Venezuela, siendo Colombia, Perú y Chile los principales destinos de este éxodo (R4V, 2020).

Chile reportó el primer caso por Covid-19 el 3 de marzo de 2020, y desde el 18 de marzo del mismo año, se decretó estado de emergencia, condición que implicó el cierre de las fronteras por al menos 90 días. A lo anterior se sumaron diferentes medidas, como toques de queda, cuarentenas, cambios en los sistemas de transporte y en la forma de atención de salud, entre otras restricciones, que limitaron la movilidad de los connacionales y el ingreso a migrantes. Dichas medidas afectaron con mayor fuerza a mujeres migrantes, en tanto sujetas multimóviles que participan del mayor número de empleos informales, ya sea en el sector servicios, trabajos de cuidado y comercio (Stefoni et al., 2022). El cierre de fronteras atribuido a razones sanitarias, así como las mayores restricciones que se habían impuesto durante los últimos años al ingreso a territorio nacional (por ejemplo, solicitud de visa de turismo para

⁶ Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

⁷ <https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/06/la-migracion-en-america-latina-y-el-caribe-tiene-rostro-de-mujer>. Revisado el 20 de septiembre de 2022.

población haitiana y venezolana), se transformaron en impedimentos legales a la movilidad de las personas (Freier & Vera, 2021). Las consecuencias directas de estas medidas, fueron el incremento en el ingreso irregular o por pasos no habilitados, y mayores riesgos y violencias asociadas a los trayectos migratorios. El ingreso de personas sin documentos, como pasaportes o cédulas de identificación, significó la imposibilidad de acceder a prestaciones sociales entregadas por el Estado durante la pandemia, en específico, a bonos o cajas de alimentos. A ello se agrega el cierre de escuelas, la pérdida de trabajo en contextos donde las redes de apoyo familiares no siempre están disponibles y el aumento de violencia al interior del hogar, entre otros múltiples problemas (Stefoni, Cabieses & Blukacz, 2021).

Las mujeres inmigrantes debieron enfrentar este difícil escenario con muy escasos recursos y con redes sociales y/o familiares que, por diversas causas, se debilitaron o fracturaron. Los trabajos de investigación que hemos realizados durante la pandemia, dan cuenta de distintas circunstancias de vulnerabilidad en las que ellas se encuentran, permitiendo visibilizar una heterogeneidad importante dentro de un grupo que ya enfrenta una situación precaria de vida. En este capítulo, abordaremos las consecuencias directas que tuvo la pandemia en mujeres inmigrantes que viven en dos ciudades intermedias del norte chileno, específicamente, Iquique y Alto Hospicio. La discusión se construye de las observaciones de campo de cuatro proyectos de investigación, la aplicación de 16 entrevistas en profundidad a mujeres residentes en las dos ciudades mencionadas, y la realización de cinco entrevistas a actores clave. Las mujeres entrevistadas tienen entre 20 y 65 años, siendo mayoritariamente venezolanas, bolivianas y colombianas. Llevan desde un mes a casi 10 años en el país, y han residido preferentemente en el norte y en la capital de Chile, la ciudad de Santiago.

Los resultados de investigación se enfrentan en tres contextos distintos de habitabilidad, buscando observar las diferentes situaciones por las que atraviesan y cuestionar de qué modo dichas condiciones de habitabilidad particular, que de por sí producen desigualdades (Contreras & Seguel, 2022), exacerbaron los complejos efectos que tuvo la pandemia sobre sus vidas. Observamos, en primer lugar, mujeres de reciente arribo que habitan en torno al borde costero, o bien, en espacios públicos como plazas o calles alrededor de iglesias, especialmente, en la ciudad de Iquique. Se trata de mujeres que no pueden acceder a ningún tipo de vivienda y ven dificultada su trayectoria hacia otros territorios del sur chileno. Son mujeres expuestas a múltiples formas de violencia y racismo, y no recibieron apoyo por parte de las autoridades para ser trasladadas a lugares con un mínimo de condiciones para pasar las noches (Stefoni et al., 2022).

Una segunda escala comprende a mujeres inmigrantes que habitan en espacios centrales/pericentrales hacinados y tugurizados. Desde nuestras investigaciones advertimos (Contreras, Ala-Louko & Labbé, 2015; Contreras,

Neville & González, 2019) el aumento de los espacios de violencia y la vulneración de derechos, anclado no solo en la falta de privacidad y/o restricciones por precio y acceso al alquiler, sino también en las escasas maniobras que se pueden realizar dada la constante observación de sus parejas, o bien, la condición de subalquiler en la que se encuentran, dimensión que complejiza aún más los espacios de denuncia (Tapia, Contreras & Stefoni, 2021).

La tercera escala de observación, corresponde a mujeres que habitan territorios informales periféricos tipo campamentos, comprendidos como asentamientos diversos, ya sea por el origen, los mecanismos de acceso al suelo y la vivienda, la materialidad con la que se construye la vivienda y el sentido que muchas mujeres representantes le asignan al campamento (Contreras & Seguel, 2022). Este grupo, que existe con anterioridad a la pandemia, ha sido analizado por diversas autoras (Contreras et al., 2015; Imilán, Osterling, Mansilla & Jirón, 2020).

ENFRENTAR LA PANDEMIA DESDE TERRITORIOS FRÁGILES E INFORMALES

La pandemia dejó al descubierto que las condiciones de vida de determinados grupos sociales expuestos a la pobreza y exclusión, hicieron una diferencia enorme en cuanto a la profundidad y complejidad de los efectos que tuvo el Covid-19 en sus vidas. Incluso, exacerbó los desafíos estructurantes de la desigualdad. En el caso de la población migrante en Chile (Cepal, 2020) y el trabajo de campo realizado entre los años 2020 y 2021, evidenciamos algunos elementos que explican por qué las mujeres inmigrantes se configuran como los grupos más golpeados durante la pandemia:

- a) La población migrante en América Latina se concentra fuertemente en sectores informales de la economía y, las mujeres fueron las más afectadas por las cuarentenas y las políticas que restringieron la movilidad.
- b) El cierre de las escuelas y jardines infantiles significó que los niños y niñas debieran quedarse en casa, generando una sobrecarga de labores domésticas y de cuidados que recayó, sin demasiadas distinciones de nacionalidades, en las mujeres. Los altos niveles de hacinamiento o viviendas precarias y las débiles redes familiares con las que cuentan las mujeres migrantes, agudizaron la sobreexigencia en las labores de cuidados.
- c) El encierro y las dificultades económicas expusieron a las mujeres, en general, y a las migrantes, en particular, a situaciones de violencia intrafamiliar. En este caso, la ausencia de documentos y la discriminación que experimentan por parte de instituciones policiales, incide en menores denuncias por estos abusos.

- d) La ausencia de documentos para la población migrante, significó que muchos no pudieran acceder a las prestaciones sociales entregadas por el Gobierno. La falta de información o la inadecuada manera de presentarla, limitó el acceso a beneficios, subsidios así como también, muchas entrevistadas desconocen la forma de regularizar su orientación básica para regularizar su situación.
- e) La falta de documentos den muchos casos, excluyó a las mujeres de los servicios de salud, exponiéndolas a situaciones de riesgo y poca o limitada atención médica.
- f) Son las mujeres inmigrantes, especialmente jefas de hogar, quienes han liderado intensos procesos de radicación, erradicación y/o negociación de la permanencia o la vida en un territorio. Se trata de mujeres con múltiples prácticas de cuidado.

En las siguientes páginas, observamos la situación específica de mujeres inmigrantes que, entre los años 2021 y 2022, habitaban las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, región de Tarapacá. Desde el cierre de fronteras y producto de la pandemia, la ciudad de Iquique comenzó a recibir un número creciente de personas que no podían continuar su camino hacia el centro y sur del país, destino de la mayoría de quienes llegan a Chile. Dicho destino se explicaba por la presencia de redes sociales y/o familiares que habían migrado previamente. En este escenario, fueron muchos, especialmente madres y mujeres, quienes debieron buscar en las plazas públicas o en la playa un lugar donde dormir. Pocos casos lograron moverse hacia los lugares que tenían previsto, acceder a una pieza en el centro de Iquique o Alto Hospicio, o bien quedarse en un asentamiento precario informal en Alto Hospicio. Estos patrones de localización, fraguados por la desigualdad de acceso de inmigrantes, llevan a reconstruir tres escalas de observación que revelan las dificultades que ellas enfrentaron en la región durante el Covid-19:

PRIMERA ESCALA TERRITORIAL:
SER MUJER INMIGRANTE QUE HABITA AL MARGEN

La condición de margen la entendemos en función de cómo se establecen las relaciones entre mujeres migrantes, racializadas en contextos complejos y de exclusión. Parte de las construcciones de las mujeres en la región han sido moldeadas por procesos históricos de exclusión socioeconómica, espacial y política. El concepto “al margen” se usa intencionalmente para evidenciar los territorios de mayor exclusión para mujeres inmigrantes. La marginalidad la comprenderemos también como una forma de conexión espacial del resto de la ciudad (Aceska, Heer & Kaiser-Grolimund, 2019) y en relación con otras

comunidades no migrantes. La idea del margen podría explicarse, asimismo, por las trayectorias que experimentan, atravesadas por ascensos y descensos económicos motivados por trabajos precarios y emergencia de situaciones personales y familiares, entre otros debatidos por Imilán et al. (2020) al estudiar un campamento en Alto Hospicio.

La condición socioterritorial del margen comprende a mujeres que durante meses tuvieron que vivir a la orilla del mar en la ciudad intermedia del norte chileno de Iquique, o bien en diferentes plazas, dada su condición de ingreso por pasos no habilitados y, en muchos casos, la carencia de documentos y recursos sociales y materiales que aseguraran su inserción y movilidad. Al margen se comprende en tanto mujeres inmigrantes, discriminadas por su origen, nacionalidad y todos los estigmas a partir de los cuales se construye el relato sobre su condición de género. Parte de este primer momento se perfila con el testimonio de mujeres venezolanas y algunas bolivianas que, pese a tener una movilidad transfronteriza, advierten una serie de vulnerabilidades a las que se expusieron durante la pandemia. Varias de las entrevistadas habitaron al menos ocho meses en Ecuador, Colombia o Perú, advirtiendo cómo, dentro de la región, han sido vulnerados sus derechos antes, durante y mientras persiste la pandemia.

Las cuarentenas y restricciones a la movilidad generaron que las personas migrantes se quedaran varadas en la ciudad, en la inmensa mayoría de los casos, sin recursos económicos, trabajo, comida ni lugar donde habitar. Por ende, las restricciones también relegaron a las mujeres migrantes a una condición de sujetas enmascaradas o más propensas a vulneraciones durante la pandemia. Quienes realizaban la autodenuncia por ingreso irregular, ingresaban a una residencia sanitaria por el plazo indicado por las autoridades y se sometían a las directrices que la institucionalidad imponía. Al cabo de ese período, las personas salían y debían hacerse un PCR para comprar un pasaje y poder subirse a un bus. Sin embargo, la alta demanda por PCR significó extensas demoras en la entrega de los resultados. Ello se tradujo en que las personas debían gastar los recursos destinados a la compra del pasaje a sobrevivir durante los días que demoraba la entrega de los resultados. Al final, se quedaban sin dinero para comprar el pasaje, y mientras juntaban los recursos nuevamente, se les vencía el tiempo de validez del PCR.

Uno de los primeros lugares que comenzó a reunir un conjunto de carpas en la ciudad de Iquique, fue la plaza Brasil. A dichos espacios llegaron mujeres, familias con niños y niñas, parejas y personas que habían escuchado que allí había una suerte de campamento de venezolanos y venezolanas. Algunos se quedaban uno o dos días, otros debían permanecer más tiempo a la espera de algún plan de salida, ya fuera para continuar el viaje al sur o para comenzar una vida en Iquique. Varias entrevistadas debían informar a la autoridad de turno el contacto de un familiar o un conocido que sirviera de aval y que

apoyara el proceso de instalación y/o tramitación de documentos. Nuestras observaciones de campo en torno a plazas, calles y el borde costero develaron que fueron mujeres cuidadoras, quienes rápidamente se organizaron para poder cocinar, atender a los más pequeños y mantener la limpieza (dentro de las condiciones que existían).

Las condiciones de insalubridad en las que se encontraban y la nula presencia de las autoridades para dar una respuesta digna a los cientos de personas que llegaban a este lugar, determinaron que el malestar se transformara en abierto y violento rechazo hacia esta comunidad, al punto de quemarles las escasas pertenencias que habían logrado reunir, tal como lo muestra la imagen 1 que da cuenta del maltrato y racismo que sufrieron diversas familias migrantes venezolanas, las que, posteriormente, fueron trasladadas a la parte centro oriente de la ciudad.

IMAGEN 1. *Quema de pertenencias a familias migrantes venezolanas residentes en Iquique*



Fuente. <https://www.telesur.tv/news/chile-xenofobos-queman-pertenencias-migrantes-iquique-20210926-0003.html>

Las estrategias de cuidado resultaron clave, ya sea para trabajar y tener ingresos para comer o, en otros casos, como medida de resguardo frente a posibles robos de parte de las personas que se encontraban en circunstancias similares. Una de las mujeres que asumió un liderazgo en la organización de este campamento improvisado en torno a la iglesia de Iquique señaló que se distribuía a las personas de acuerdo a la situación en la que se encontraban. Familias con niños y niñas a un lado, hombres solteros al otro. La comunidad de Iquique y algunas organizaciones sociales entregaron apoyos en un

comienzo consistente en comida, mantas, ropa y carpas. Sin embargo, con el paso del tiempo, creció el malestar de la comunidad hacia esta población, tal como se observa en la imagen 1. Una vez que las familias venezolanas fueron expulsadas, las autoridades clausuraron la plaza para impedir que retornaran a este sector. Las personas que seguían sin contar con un lugar para dormir, recurrieron a las playas del borde costero de Iquique y a sus plazas, tal como expone la imagen 2. Allí, nuevamente la policía comenzó a vigilar de manera más permanente para impedir que armaran sus carpas.

La situación sigue siendo crítica. Si bien la posibilidad de circular hacia el sur ha facilitado el desplazamiento, son muchos quienes continúan buscando en los espacios públicos alejados del control policial un lugar donde dormir (Stefoni et al., 2022).

IMAGEN 2. *Ciudad intermedia de Iquique.*
Familias inmigrantes habitando en la playa y en torno a plazas públicas





Fuente: Contreras, Y., Seguel, B., & Stefoni, C. (octubre de 2021).

En las primeras fases de la pandemia, quienes habitaban en plazas, playas y parques eran mujeres solas, mujeres con hijos/as y hombres solos, especialmente, población adulta y joven. La mayoría había migrado desde Venezuela y, posteriormente, permanecieron en Perú, Ecuador y/o Colombia. En dichos países, tuvieron trabajos informales y dificultades para una real inserción social. Parte de su movilidad se explica por las condiciones políticas de Venezuela, pero también como estrategia de reunificación familiar dentro de la región.

Con el tiempo, son hombres jóvenes y algunas familias con hijos/as los que permanecen en la playa, por restricciones de acceso a vivienda, dificultades de tramitación de la condición migratoria, falta de papeles para conseguir trabajo, o bien porque sienten más libertad en la playa que en pleno centro de Iquique o en Alto Hospicio. Algunas familias sí recibieron apoyo de las autoridades, especialmente en alimentos. Todas las entrevistadas coinciden en que faltó apoyo institucional en temas de tramitación de documentos, aceptación de la condición de refugiadas, asesoría habitacional y laboral, y ayuda psicológica y sanitaria.

A partir de las entrevistas en profundidad, abogamos por la tesis de las vulnerabilidades feminizadas. Las mujeres entrevistadas se ven más afectadas o están expuestas a diferentes vulnerabilidades en relación con sus homólogos masculinos, también entrevistados, pero no estudiados para este artículo. Las vulnerabilidades feminizadas las observamos en cómo ellas construyen trayectorias migratorias complejas, su exposición a trata, contrabando, violencia, violación, maltrato, discriminación y racismo. Algunas de las entrevistadas refieren alas dificultades de acceso a centros de salud, la falta de atención médica ginecológica y/o psicológica, en tanto embarazadas y/o violentadas

durante todo el trayecto migratorio o en el período que estuvieron relegadas a un espacio en la playa o en una plaza. Esto último explica por qué las mujeres migrantes requieren de un apoyo específico, dadas las violencias de género y vulnerabilidades a las que se exponen.

SEGUNDA ESCALA TERRITORIAL. COMENZAR A HABITAR ESPACIOS TUGURIZADOS

Manteniendo la tesis de que la marginalidad no le corresponde a una escala específica del territorio ni es exclusiva de quienes habitaron en la playa o en una plaza, este apartado da cuenta de las dificultades que las mujeres migrantes entrevistadas enfrentan al interior de la ciudad, en el espacio normado y, aparentemente, resguardado por la institucionalidad. Esta segunda escala da cuenta de cómo la condición de irregularidad y las dificultades de inserción que han tenido muchas entrevistadas, no tiene relación exclusiva con el tiempo de residencia.

Lo que vuelve comunes a todas las entrevistadas en piezas alquiladas, son las restricciones a las que se ven expuestas dada su condición de mujer, mujer inmigrante, mujer madre, mujer negra, mujer racializada, mujer excluida. Frente a esas vulneraciones, todas ven limitadas sus posibilidades de acceso a trabajos y viviendas. Coinciden en encontrarse en un callejón sin salida, ya que, al no tener documentos, información ni asesoría, no pueden acceder a trabajos formales, con mejores remuneraciones o ingresos que posibiliten el pago de un inmueble acorde a sus necesidades. Ciudades como Iquique tienen costos de alquiler/subalquiler superiores a la media nacional (una pieza de 20 m² puede costar al mes entre USD\$ 64.20 a USD\$ 214, aproximadamente). La mayoría de las mujeres entrevistadas son técnicas y/o profesionales cuyos títulos no han podido ser convalidados, cuestión que limita las posibilidades laborales. Frente a ello, la alternativa residencial para muchas, indistintamente del tiempo que lleven en el norte, las condena a un inmueble hacinado y tugurizado.

Las áreas centrales de Iquique y Alto Hospicio se configuran como sitios altamente demandados por inmigrantes más históricos, como peruanos y bolivianos, así como también por la diversificación de los flujos migratorios desde Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. Los centros de las dos ciudades se vuelven espacios de disputa para diferentes grupos, en especial, porque es ahí donde las entrevistadas intentan articular proximidad a redes sociales, familiares y/o laborales (Contreras & Seguel, 2022). Dicha disputa vuelve más compleja la residencia central, pese a todas las restricciones que impone por precio, condiciones de habitabilidad, hacinamiento y control de acceso, entre otros.

Las entrevistas a inmigrantes que habitan en espacios hacinados e insalubres nos advierten sobre cómo se reproducen nuevas enfermedades sociales, en tanto ellas son asociadas a la delincuencia y al tráfico, pero también sobre las condiciones precarias y vulnerables a las que se exponen otras co-residentes que habitan con estas mujeres, especialmente inmigrantes colombianas y dominicanas negras que, en otras investigaciones, hemos develado cómo son expuestas a maltrato, violencia y violaciones al interior de inmuebles en plena zona central de ciudades como Iquique. Todas las entrevistadas coinciden en vivir experiencias dañinas que producen estrés psicosocial y que causan una mayor susceptibilidad a una mala salud y un mal vivir.

Algunas entrevistadas bolivianas habitan entre piezas alquiladas del centro de Iquique y Alto Hospicio y zonas rurales, espacios donde acceden a labores temporarias vinculadas a la agricultura. En dichos lugares, acceden a trabajos mal remunerados y, en varios casos, el arriendo de un sitio es parte del ingreso mensual. Las entrevistadas que cohabitan entre espacios urbanos y rurales de la región de Tarapacá sostienen ver vulnerados sus derechos, ya sea por invisibilización, por su condición de mujeres transfronterizas o porque la condición de mujeres multiancladas (Tapia, Contreras & Stefoni, 2021), es decir, habitantes de diferentes territorios, las deja al margen de diversas políticas sociales, tanto en Chile como en Bolivia.

Por lo tanto, esta segunda escala evidencia la superposición de otras vulnerabilidades, condición que nos lleva a mantener la tesis de la marginalidad a la que están expuestas. Los relatos desde sus experiencias de movilidad advierten cómo se une la marginalidad espacial (en una zona rural oculta y/o urbana ocultada) con la marginalidad social, es decir, excluidas dada su condición de mujeres, mujeres migrantes, mujeres aymara y mujeres transfronterizas. En el caso que sea, las mujeres migrantes que se mueven en espacios centrales y rurales advierten tres cosas: (a) la vulneración de derechos en espacios urbanos regulados y territorios rurales invisibilizados; (b) la pieza en una zona central o en un predio rural favorece, de un lado, la coexistencia de vivienda y trabajo y, del otro lado, da cuenta de la vulneración de múltiples derechos necesarios de resguardar; y, finalmente, (c) el multianclaje responde a una necesidad y refleja la vulneración de derechos. Las mujeres se mueven entre espacios urbanos y rurales buscando mejores oportunidades y, también, protegiendo su integridad y la de sus hijos e hijas.

TERCERA ESCALA TERRITORIAL. EL RESULTADO DEL MULTIANCLAJE:
EL CAMPAMENTO O EL ASENTAMIENTO PERIFÉRICO COMO TERRITORIO
DE OPORTUNIDAD Y ESPACIO DE SEGURIDAD

Esta tercera escala está concatenada con las anteriores. Muchas de las entrevistadas que hoy habitan en Alto Hospicio, especialmente en asentamientos informales o campamentos, advierten que dichos espacios se configuran como sitios de movilidad, pero, por sobre todo, como espacios de seguridad. Si bien las entrevistadas han sido constantemente desalojadas, dan cuenta de que en el campamento pueden construir y partir las veces que sea necesario, pero con ciertas garantías sicosociales que las hacen sentir más libres respecto a un habitar en un espacio central. Para muchas de ellas, el campamento resultó de una alta movilidad por diferentes habitaciones en el centro de Iquique, Alto Hospicio e, incluso, Santiago. El campamento permite compartir proyectos y sueños, y conectarse con mujeres inmigrantes con experiencias migratorias similares.

Esta modalidad se incrementó notoriamente durante la pandemia. Se trata de autoconstrucciones ubicadas en las periferias de diversas localidades, espacios donde residen familias migrantes y chilenas, destacándose una forma autogestionada y libre de edificar según las necesidades y presupuestos de cada hogar, pese a la carencia de servicios básicos y condiciones materiales óptimas (Contreras, Neville & González, 2019).

Los relatos de las entrevistadas advierten la heterogeneidad de campamentos, al menos en Iquique y Alto Hospicio. Algunos son habitados por determinadas nacionalidades, otros campamentos son construidos como espacios de tránsito por familias de diferentes orígenes, mientras se tramita la permanencia. Ciertos asentamientos informales periféricos responden a estrategias políticas que buscan la radicación o erradicación colectiva. Esto último no niega los problemas socioambientales de estos lugares, en tanto están distantes de la ciudad: al estar fuera del límite urbano no tienen suficiencia de agua potable, alcantarillado, ni recolección de basura, y además están expuestos a múltiples riesgos de desastres que se visibilizan durante la pandemia, especialmente los constantes incendios, dada la materialidad de las viviendas, las restricciones de las calles para el ingreso de bomberos, la falta de agua y las condiciones climáticas, especialmente en Alto Hospicio, entre otros. Las dificultades y falta de conectividad de muchas mujeres las expusieron incluso a riesgos de violencia e inseguridad.

La imagen 3 muestra, por una parte, la típica vivienda del centro de Alto Hospicio adaptada a tres pisos para acoger a múltiples familias que alquilan y subalquilan. Algunas entrevistadas habitan de manera hacinada por proximidad a la fuente laboral, ya que muchas de ellas trabajan en el centro de Iquique y,

desde ahí, pueden acceder al transporte público o colectivos, facilitando su movilidad. Otras mujeres, en cambio —especialmente las que tienen hijos/as, madres o padres adultos mayores— ven la casa en el campamento como una estrategia residencial de larga duración, más allá de los inminentes desalojos. Más que romantizar la idea del campamento como una solución durante la pandemia, vale la pena cuestionarse desde las políticas públicas cómo enfrentar estas respuestas habitacionales en las que habitan familias migrantes de reciente llegada, pero también con alta movilidad residencial, dada las diferentes restricciones a las que están expuestas las mujeres migrantes. Para muchas familias, el campamento se configuró como “una oportunidad de mejorar la precariedad habitacional” (Imilán, Osterling, Mansilla & Jirón, 2020).

IMAGEN 3. *Alto Hospicio. Vivienda tugurizada y vivienda en campamentos*





Fuente: Contreras, Y. (octubre de 2021).

Asumiendo la complejidad de los campamentos, para las entrevistadas estos espacios se configuraron durante la pandemia como territorios de autogestión y organización colectiva, ya sea porque la vida de las mujeres dentro de la región latinoamericana está dominada por la autoconstrucción, o bien porque es una respuesta a una restricción y exclusión. Durante la pandemia, varias mujeres entrevistadas, jefas de hogar, se quedaron sin trabajo y sin posibilidad de seguir pagando alquileres o subalquileres en el centro. Por ende, también esta escala de habitabilidad resultó de una estrategia de sobrevivencia. Para muchas de ellas, se configuró también como un espacio de seguridad, donde pueden dialogar con mujeres con experiencias similares. Ello no evade el hecho de que también el campamento ocultó problemas de salud física, mental y psicológica a la que muchas mujeres se expusieron antes y durante la pandemia. Sin embargo, a diferencia de las otras escalas territoriales, estos espacios representan para ellas sitios de relativa libertad o donde pueden soñar proyectos colectivos.

REFLEXIONES FINALES

El trabajo de campo realizado en Colchane —cruce fronterizo entre Chile y Bolivia— y las trayectorias de las inmigrantes entrevistadas, especialmente mujeres venezolanas que arribaron al norte chileno a inicios de la pandemia

por Covid-19, nos lleva a representarlas como sujetas que, pese a estar en los márgenes, encuentran una y otra vez formas de organización y autocuidado.

La idea de margen la comprendemos en múltiples dimensiones. Primero, desde la escala en la que se habita por relegación y exclusión. Segundo, porque desde el margen se evidencian diferencias culturales donde las mujeres inmigrantes de la región son excluidas por su nacionalidad, color de piel, condición de género y por los estereotipos que pesan sobre ellas. Si antes de la pandemia, la mujer colombiana o una persona de origen colombiano era racializada, hoy se condena a la mujer y al ser humano venezolano por pertenecer a un tipo de migración no deseada. Desde la marginalidad estructural, los relatos advierten la superposición de vulnerabilidades a las que se exponen las mujeres migrantes de reciente llegada: arbitrariedades en la entrega de la condición de refugio, falta de información o de entrega adecuada de información para hacer trámites migratorios, restricciones de acceso a la vivienda (dada la consolidación de un mercado del alquiler/subalquiler desregulado) y a la salud al no tener DNI, entre otras. A lo anterior se suma la marginalidad socioterritorial expresada en las constantes movilizaciones antimigratorias y racistas, como expusiéramos en la imagen 1.

En el presente artículo, quisimos hilvanar más fino al incorporar una dimensión espacial/territorial que nos permitiera observar las complejas situaciones de habitabilidad que enfrentan las mujeres inmigrantes en el norte del país. Se trata de condiciones informales de vivienda, sin contrato ni derechos, con un registro que va desde la calle y los espacios públicos, hasta la autoconstrucción. Las mujeres en cada uno de estos contextos, despliegan estrategias de cuidados hacia sus familias y cercanos; sin embargo, las enormes vulnerabilidades que enfrentan producto de estas formas de habitar, refuerzan la exclusión y las dificultades que encuentran para salir adelante con sus proyectos de vida. Esta situación obliga a pensar en políticas que atiendan las circunstancias específicas de mujeres inmigrantes, de cara al proceso de recuperación económica y social pos Covid-19.

A partir nuestros hallazgos, observamos que las mujeres inmigrantes que habitan en campamentos, tienen una mayor propensión a construir un proyecto político cuyo propósito aspira a la radicación, o bien, al acceso a una vivienda de interés social que reduzca sus riesgos sociales, disminuya la violencia y el racismo al que se han visto expuestas durante toda su vida. Es en estos espacios y, en específico, en algunos campamentos de Alto Hospicio, donde existen personas que llevan años de asentamiento, y otras que recién empiezan a construir un lugar donde vivir (Tapia, Contreras & Stefoni, 2021). Esto último desea escapar de la idea romántica del campamento o asentamiento informal como respuesta a todo, más bien apela a comprender la heterogeneidad que producen las mujeres inmigrantes como respuesta a la exclusión y a la condición del margen que representan, indistintamente de la escala habitada.

Si bien las tres escalas territoriales a partir de las cuales construimos este relato, están lejos de representar la heterogeneidad de situaciones que enfrentaron las mujeres inmigrantes durante el Covid-19, ofrece percepciones relevantes al menos en tres dimensiones:

1. La falta de políticas migratorias con perspectiva de género, a pesar del amplio conocimiento de la feminización de las migraciones en la región.
2. La desarticulación entre la política migratoria, habitacional y de salud, que apela al trabajo mancomunado de diferentes sectores a fin de comprender que las demandas de una mujer inmigrante de reciente llegada versus a la que lleva residiendo más tiempo son diferentes. Asimismo, las demandas de una mujer que habita en el borde costero o en un espacio público no son las mismas de aquella que transitó entre vulnerabilidades y que hoy habita un campamento.
3. La urgencia de políticas que reduzcan los múltiples riesgos a los que se expone la mujer en su condición de mujer y migrante.

Cualquier proyecto socio-habitacional que se construya, debe tener en cuenta el sentido que las familias asignan a sus redes sociales y/o familiares. Las entrevistadas enfrentan depresiones, no tienen acceso a información o no conocen adecuadamente los mecanismos de acceso. Dudan entre pagar internet y comer. Algunas viviendas están construidas sobre territorios con múltiples riesgos de desastres, por tanto las respuestas de políticas públicas deben ser diferenciadas; no es lo mismo vivir sobre un basural, una zona contaminada, que en un espacio tugurizado. Tampoco es lo mismo ser afrodescendiente habitando una pieza. En consecuencia, las entrevistas y nuestras reflexiones apelan a transitar desde la gobernanza migratoria (Freier & Vera, 2021) a la gobernanza territorial migratoria, en tanto tendrá en el centro la heterogeneidad de soluciones y sujetas.

REFERENCIAS

- Aceska, A., Heer, B., & Kaiser-Grolimund, A. (2019). Doing the city from the margins: critical perspectives on urban marginality. *Anthropological Forum*, 29(1), 1-11.
- Cepal (2020). Los efectos del Covid-19: una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible Informes Covid-19. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46353-efectos-covid-19-oportunidad-reafirmar-la-centralidad-derechos-humanos-personas>.

- Contreras, Y., Ala-Louko, V., & Labbé, G. (2015). Acceso exclusionario y racista a la vivienda formal e informal en las áreas centrales de Santiago e Iquique. *Polis. Revista de la Universidad Bolivariana*, 14(42), 1-18.
- Contreras, Y., & Seguel, B. (2022). Territorio informal: una nueva lectura del acceso a la vivienda y al suelo informal en Chile. *Revista de Geografía Norte Grande*, 81, 113-136. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://revistanortegrande.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/40711>
- Contreras, Y., Neville, L., & González, R. (2019). In-formality in access to housing for Latin American migrants: a case study of an intermediate Chilean city. *International Journal of Housing Policy*, 19(3), 411-435. <https://doi.org/10.1080/19491247.2019.1627841>.
- Freier, L. F., & Vera, M. (2021). Covid-19 and immigrants' increased exclusion: the politics of immigrant integration in Chile and Peru. *Front. Hum*, 3, 606971, 1-10. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.606871>.
- Gumà, J., Solé-Auró, A., & Arpino, B. (2019). Examining social determinants of health: the role of education, household. Arrangements and country groups by gender. *BMC Public Health*, 19, 699. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7054-0>.
- Imilán, W., Osterling, E., Mansilla, P., & Jirón, P. (2020). El campamento en relación con la ciudad: informalidad y movilidades residenciales de habitantes de Alto Hospicio. *Revista INVI*, 35(99), 57-80.
- Nhengu, D. (2022). Covid-19 and female migrants: policy challenges and multiple vulnerabilities. *Comparative Migration Studies*, 10(1), 1-16.
- R4V. (2020). Coordination platform for refugees and migrants from Venezuela. Recuperado en septiembre de 2022 de: <https://r4v.info/es/situations/platform>.
- Stefoni, C., Cabieses, B., & Blukacz, A. (2021). Migraciones y Covid-19: cuando el discurso securitista amenaza el derecho a la salud. *Simbiótica*, 8(2), 38-66.
- Stefoni, C., Jaramillo, M., Macaya, G., Palma, J., Bravo, A., & Díaz, C. (2022). Informe estudio necesidades humanitarias personas venezolanas con ingreso reciente a Chile.
- Tapia, M., Contreras, Y., & Stefoni, C. (2021). Movilidad fronteriza, sujetos móviles y multianclados en el acceso de la vivienda. Los casos: Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta. *Anales de Geografía Universidad Complutense*, 41(1), 265-291. <https://doi.org/10.5209/aguc.77004>.

CAPÍTULO 16

ESPACIOS PÚBLICOS MÁS INCLUSIVOS PARA LAS MUJERES: ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE ACCESO Y USO EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA SU MEJORA⁸

Paz Concha

EN ESTE capítulo, analizaré algunas de las discusiones respecto al acceso y uso del espacio público de ciudades que hacen las mujeres⁹. Existe una gran cantidad de literatura y estudios que abordan y continúan confirmando la importante brecha en el acceso a espacios públicos para las mujeres, particularmente, por razones de seguridad y miedo al acoso y abuso sexual (para un resumen de la literatura anglo, ver Navarrete et al., 2021). Esta línea de investigación ha abierto la puerta a comprender de manera más específica las experiencias diferenciadas de las mujeres en el acceso y uso de medios de transporte públicos en relación a la movilidad cotidiana y la utilización de equipamiento urbano, especialmente, parques y áreas verdes.

Por una parte, examinaré aspectos teórico-conceptuales acerca de la relación género y espacio público, para luego tomar algunos temas centrales de la discusión sobre desigualdad en el acceso y uso del espacio público, con una revisión de información secundaria para el caso chileno. Aquí divido los antecedentes entre los factores que explican la ausencia de las mujeres en el espacio público, y menciono algunas oportunidades para pensar en cómo promover la presencia y apropiación de ellas en este como un aporte para el diseño y planificación urbana inclusiva.

LA RELACIÓN GÉNERO Y ESPACIO

Desde los años ochenta que investigadoras feministas en Geografía comenzaron a relevar la diferencia en la experiencia que tienen hombres y mujeres en relación con el espacio, por ejemplo, los análisis en torno a la distribución

⁸ Este capítulo contó con el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ANID/FONDAP/15130009.

⁹ Agradezco a Andrés Señoret por compartirme bases de datos e información valiosa para el análisis; a René Catalán, por el procesamiento de datos de la IV Encuesta ENVIF-VCM, y a Consuelo Banda, por las sugerencias y colaboración.

del mercado del trabajo y trabajo doméstico en distintas regiones (Massey & Bernal, 1998), y a los roles y lugares específicos de género en el diseño de las ciudades europeas en el siglo XX (Boys, 1984; McDowell, 1999). Una de las contribuciones conceptuales que surge en los años noventa, es la idea de “espacios segregados por género” (*gendered spaces* en inglés) en que Spain (1992) explica cómo la desigualdad entre hombres y mujeres crea configuraciones espaciales específicas que refuerzan el dominio patriarcal en las sociedades. Ella examina de manera histórica instituciones como el sistema educativo, el mercado del trabajo, la configuración de las casas y las familias como aquellas locaciones físicas que demuestran la existencia de un sistema social que les da ventaja a los hombres en desmedro de las mujeres. Miranne y Young (2000) denominan a estas configuraciones espaciales como “barreras espaciales visibles e invisibles”. Por ejemplo, barreras físicas como infraestructura pobremente construida o mantenida se mezclan con otras intangibles, como la sensación de inseguridad y el miedo a múltiples tipos de violencias pública (de género, racismo, homofobia, etc.).

Por su parte, McDowell (1999) menciona que los espacios surgen de las relaciones de poder que ponen límites y definen las normas acerca de quiénes están incluidos o excluidos de los lugares. Siguiendo con este argumento, el espacio en la sociedad en general, y el espacio público en específico, es vivido y percibido de manera heterogénea, dependiendo de las distintas identidades y experiencias subjetivas de las personas, dentro de las cuales la identidad de género es una de las más prominentes. Por ejemplo, dice Ortiz (2007) que la utilización de los espacios públicos está marcada por los elementos de estructura social que definen los roles de género (Falú, 2009); por ello, las mujeres lo usan no solo para trasladarse o entretenerse, sino para hacerse cargo de las labores familiares y domésticas, como acompañar a niños, personas mayores o enfermas o hacer las compras del hogar. Sin embargo, la investigación más reciente con perspectiva feminista sobre el espacio, se hace cargo no solo de las expresiones espaciales de las desigualdades estructurales, sino también de este como un agente emancipador (Ortiz, 2007) para las mujeres, en donde las prácticas de apropiación (Banda & Concha, 2022) y empoderamiento en el espacio público son fundamentales para la reflexión y promoción de lugares más inclusivos e igualitarios.

EL USO DIFERENCIADO DEL ESPACIO PÚBLICO

El espacio público está compuesto por una multiplicidad de lugares abiertos para el uso público, desde la calle —la quintaesencia de este espacio—, hasta las veredas, parques, plazas, otras áreas verdes, mercados e, incluso, los sitios transientes o móviles (Jirón & Iturra, 2011), como los paraderos, estaciones de

metro y ciclovías, y también otros privados de acceso público, como cafés o centros comerciales. Todos estos espacios reconocidos como públicos, generan beneficios sociales, emocionales y psicológicos a quienes participan en ellos (Anderson et al., 2017; Cattell et al., 2008; Garcia-Ramon et al., 2004; Giddings et al., 2011; Mehta, 2014). Por ejemplo, su uso contribuye a la generación de sentido de comunidad y facilita encuentros e interacciones, además de promover la salud mental (Andersen et al., 2017; Cattell et al., 2008, Francis et al., 2012). Algunos estudios han ligado este uso y participación en los espacios públicos con menores niveles de exclusión y aislamiento social, y mayor inclusión cultural, social y económica (Sauter & Huettenmoser, 2008). Sin embargo, las brechas de acceso y uso que las mujeres hacen de los espacios públicos implican un desigual goce de estos beneficios. También implican una idea de “pérdida” (Arancibia et al., 2017) como individuos capaces del reconocimiento social y político en el mundo público; es decir, como sujetas de derecho que pueden y realizan su vida más allá del confinamiento al espacio privado y/o doméstico.

Asimismo, desde una perspectiva interseccional, las desigualdades socioeconómicas se conjugan con las prácticas diferenciadas del uso del espacio público dependiendo de características sociodemográficas; por ello, podemos ver que los espacios públicos de baja calidad tienden a aglomerarse en áreas de bajos ingresos; y los grupos más vulnerables —como los hogares con jefatura femenina— sufren la carga de espacios públicos pobremente planificados y equipados. Como resultado, el impacto de los espacios públicos de baja calidad es desproporcionadamente mayor en grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, dada las limitadas posibilidades de elegir dónde se reside, se trabaja y cómo se transporta entre estos lugares (Garcia-Ramon et al., 2004). Por otra parte, la exclusión del espacio público también resulta en una falta de consideraciones de diversidad en la planificación urbana. Chiodi (2016) y Whitzman (2013) comentan que el diseño urbano y planificación de espacios públicos de baja calidad es una forma muy poderosa de exclusión, desincentivando a las personas no solo a acceder a ellos, sino que también circular por estos con dignidad y sin miedo. Sin embargo, aun cuando pueda existir una buena planificación y diseño del espacio público, los beneficios de su uso siguen estando desigualmente distribuidos, especialmente para las mujeres y sus dependientes (niños o personas a su cuidado) (Segovia & Rico, 2017).

Respecto de los estudios chilenos acerca del acceso y uso de los espacios públicos, no existe suficiente información sobre las prácticas que hacen las mujeres de estos con fines de ocio, entretención, actividad física y otros similares. Existen algunos recursos de información que nos entregan evidencia acerca de la evaluación de la calidad de los espacios públicos en los barrios de residencia, y también información referencial y no especializada respecto del uso deportivo y/o recreativo que hacen las mujeres de algunos equipamientos urbanos.

Si revisamos estudios acerca de la calidad de vida urbana y la evaluación que hacen las mujeres de los espacios públicos a los que acceden en sus barrios, se evidencia que tienen una peor percepción respecto de ellos que los hombres (Minvu, 2018), especialmente, al evaluar elementos como tranquilidad y seguridad. Por ejemplo, en el estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo titulado “Informe calidad de vida urbana: diferencias por sexo”, elaborado a partir de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida Urbana (2018), ante la pregunta “pensando en su barrio, qué tan seguro se siente al esperar locomoción en los paraderos de noche”, responden como “seguro” o “muy seguro” solo un 16% de las mujeres, respecto a un 30% de los hombres encuestados. La misma respuesta entrega un 21% de mujeres al ser consultadas por su seguridad “al caminar de noche por las calles y pasajes de su barrio”, en relación a un 35% de los hombres que se sienten “seguros” o “muy seguros”. Un 48% de las mujeres se siente “segura” o “muy segura” “al pasear por plazas y parques” (en relación a un 62% de los hombres encuestados), y un 65% se siente “segura” o “muy segura” “al esperar locomoción en los paraderos de día” (en relación a un 73% de los hombres encuestados). En este mismo estudio también se evidencian diferencias respecto a la frecuencia del uso semanal de establecimientos o servicios comunales como parques y plazas, con un 40% de las mujeres asistiendo semanalmente (versus un 48% de los hombres), y con un 11% para las mujeres y un 16% para los hombres respecto al uso de estadios, gimnasios, piscinas y otros equipamientos deportivos municipales.

La práctica de deporte en el espacio público o en equipamientos de uso público ha sido estudiada anteriormente, con una brecha importante para las mujeres, sobre todo en la edad adulta (Ministerio del Deporte, 2021). Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, Vilanova y Soler (2008), mencionan que “la práctica deportiva en el espacio público es uno de los territorios en los que la presencia femenina destaca por su ausencia”, las mujeres prefieren ejercitarse en espacios interiores, instalaciones cercanas a sus casas y no en parques alejados ni tampoco de noche y, por lo general, acceden a estos en transporte público, habitualmente, acompañados de hijas o hijos. Las autoras también analizan las redes sociales que se generan vinculadas al deporte en los espacios públicos: “En los 31 espacios analizados se han identificado hasta 62 redes sociales, pero ninguna de ellas está formada únicamente por mujeres (...) 29 en que predominan los hombres (con solo una o dos mujeres), y 17 mixtas, en las que, si bien hay una mayor presencia masculina, hay una cantidad importante de mujeres”. En su mayoría, las redes a las que pertenecen las mujeres también están conformadas por integrantes de su familia, es decir, cuando logran formar redes en el espacio público a través del deporte, estas siguen ligadas a su rol familiar.

Este tipo de hallazgos es coherente con los de la última Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes en Chile (2018), la que permite

conocer hábitos de personas desde los cinco años de edad y que contó con representatividad a nivel nacional y regional con un error muestral de 1.26%. En general, se muestra que existe una diferencia de 10 puntos porcentuales en el índice de actividad física por género, donde un 69% de las mujeres son inactivas en comparación con un 59% de los hombres. Ahora, respecto de la actividad física de las y los niños entre cinco y 10 años, “se muestra que el 38.8% de este segmento etario juega o hace deporte (como ir a la plaza, al parque, correr, bailar, andar en bicicleta) con la madre, seguido con un 36.1% que lo realiza con el/la hermano/a, y con una proporción menor está el padre, con un 31.2%” (Ministerio del Deporte, 2021). Esto confirma el rol de cuidado que realizan las mujeres al acompañar a otros dependientes en el uso del espacio público para actividades recreativas.

También se les pregunta a las/los niños y adolescentes por los lugares donde realizan actividad física; en este caso, los adolescentes de 11-17 años contestan que principalmente ocurre en la plaza o parque cercano al barrio u hogar (15 minutos caminando) con un 79%, seguido de la multicancha, con un 63%. Es interesante observar que las mujeres adolescentes consideran la cancha como un espacio apropiado para la realización de actividad física o deporte, y no tanto el parque o la plaza. Es decir, existe un uso diferenciado de los espacios deportivos como espacios especializados, mientras que los parques y plazas no necesariamente permiten usos diversos con seguridad.

Si bien no existe una gran proliferación de estudios sobre acceso y uso del espacio público con fines de ocio, entretenimiento, actividad física y otros similares según género, la breve revisión anterior permite corroborar la existencia de valoraciones y usos diferenciados del espacio público, en que las mujeres suelen sentirse más inseguras y restringir su participación o limitarla como parte de las tareas de cuidado.

EL MIEDO EN EL ESPACIO PÚBLICO

Era marzo de 2022 en Santiago de Chile. Comenzó la vuelta a clases presencial, luego de dos años de confinamiento tras la pandemia del Covid-19, y también muchos lugares de trabajo empezaron a retomar las actividades en persona. Tanto las calles como el transporte público volvían a su nivel normal de usuarios y a las aglomeraciones de las horas punta, pero lo que pareció no ser normal, fue el surgimiento de masivas denuncias de mujeres estudiantes de educación superior del barrio República respecto de las situaciones de acoso y abuso sexual que estaban ocurriendo en las inmediaciones de sus casas de estudio, en los accesos a las estaciones de metro y también dentro de los vagones. Hubo denuncias acerca de asaltos, manoseos, persecuciones, encerronas e, incluso, intentos de secuestro. En un reportaje del diario *La Tercera*, una estudiante

comenta: “Como mujeres ya no podemos salir a la calle, implica un riesgo de no llegar, o llegar golpeada, quemada, sin tus cosas. No poder ir a estudiar tranquila o que te dé miedo ir a estudiar, lo encuentro terrible. Ahora hasta en el metro una se siente insegura. Antes al menos salías a la calle y ahí estaba el miedo. Ahora, está en todas partes” (Leal et al., 2022).

El testimonio de esta estudiante resuena con las múltiples investigaciones acerca de las brechas de acceso y uso que las mujeres hacen del espacio público, dadas las condiciones de inseguridad que sienten en las calles y en el transporte (Falú, 2009; Rodríguez et al., 2012). Uno de los principales factores que influye en la movilidad de las mujeres en los espacios públicos es el miedo a la violencia (McDowell, 1999; Soto, 2012). Cavanagh (1998) explica que la preocupación por la seguridad personal es un determinante de la vida privada y pública de las mujeres: determina el cuándo y dónde moverse, y también la decisión de no moverse (inmovilidad relativa). Estas preocupaciones sobre la seguridad personal no solo se refieren a la percepción acerca de la ocurrencia de hechos delictivos; la percepción de seguridad va más allá de la evaluación sobre los datos estadísticos o la mera “ausencia de crimen”, sino que se refiere a una visión integral y significativa acerca de la libertad y confianza de moverse y acceder a los espacios públicos sin miedo (Shaw et al., 2013).

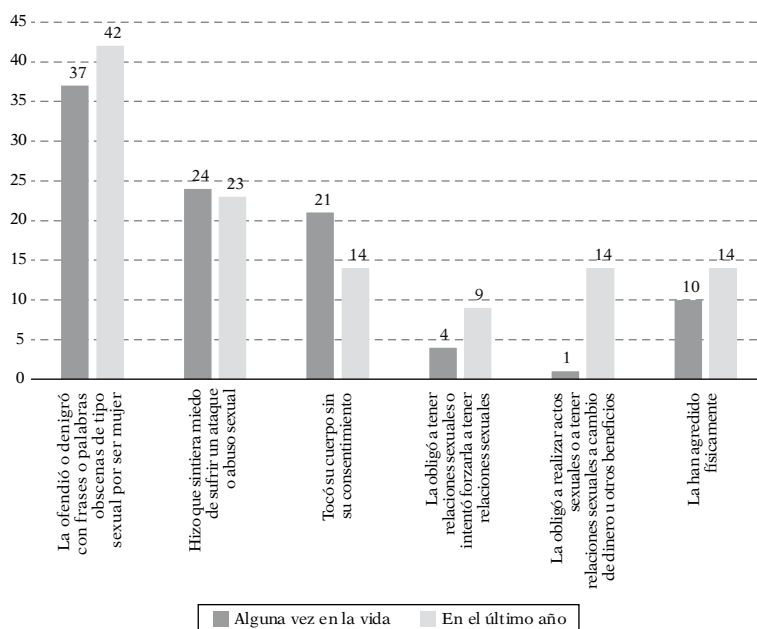
Uno de los tipos de violencia más recurrente en el espacio público es el denominado acoso sexual callejero (ASC), definido como “toda práctica con connotación sexual implícita o explícita que ocurra en el espacio público entre personas desconocidas y sin consentimiento, que tiene el potencial de generar malestar psicosocial” (Observatorio contra el Acoso Callejero, 2020). Este incluye acosos no verbales, verbales, físicos, de registro audiovisual, persecución como “silbidos o ruidos, comentarios sexuales, exhibicionismo, masturbación pública, tocaciones, entre otras” (Arancibia et al., 2017). Este tipo de prácticas se comienzan a tipificar como delito en Chile recién en el año 2019 (ley 21.153) y, de acuerdo con datos estadísticos, al menos desde 2012 es un delito de alta ocurrencia en el caso de las mujeres, con “una prevalencia de 59% para acosos y un 44% para abusos, mientras que en el caso de los hombres, la cifra es de 30 y 20%, respectivamente” (Servicio Nacional de la Mujer, 2012). De acuerdo al estudio del Servicio Nacional de la Mujer en 2012, al menos para el Gran Santiago, los principales tipos de agresiones eran miradas que incomodan (47.8% para las mujeres y 21% para los hombres), agarrones y manoseos (32.3% para las mujeres y 15% para los hombres), y dichos de palabras obscenas (31.6% para las mujeres y 12.6% para los hombres).

En el mismo estudio se evidencia que los tipos de acosos y abusos varían con la edad, siendo las niñas y adolescentes las principales víctimas. Además, respecto del lugar de ocurrencia del acoso o abuso, estos se producen en un 70% en espacios donde hay más gente o aglomeraciones, siendo los sitios de mayor ocurrencia la micro, seguido por la calle (caminando) y el metro. La

hora que concentra estas agresiones es el día, “entre un 30% y 40% entre 18 y 21 horas; entre un 20% y 25% en la mañana, entre las 6 a.m. y las 12 p.m.; entre un 15% y 20% ocurren a media tarde, entre las 15 y las 18 p.m.” (Servicio Nacional de la Mujer, 2012).

En la revisión de los datos de la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM), realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito (2019), se obtiene información sobre 16 regiones del país, con un error muestral absoluto de 1.2%. En este estudio se cuenta con un aumento de la violencia en el espacio público, pasando de un 25% a un 46.9% de prevalencia en la vida, y de un 8.1% a 17.9% en el último año. Respecto a los tipos de violencia sufridos en el espacio público, se puede observar en el gráfico 1 que esta es, en gran medida, verbal.

GRÁFICO 1. *Violencia en espacios públicos (% ocurrencia)*



Fuente: elaboración propia con datos de la IV Encuesta ENVIF-VCM.

De acuerdo con el análisis propio de los datos de la IV Encuesta ENVIF-VCM, el lugar de ocurrencia de la violencia verbal con frases obscenas es principalmente la vía pública (48%), seguido del transporte público (25%), el

barrio (20%) y otros lugares (8%). Respecto a sufrir tocaciones de cuerpo sin consentimiento, estas ocurrieron primordialmente en el transporte público (43%), vía pública (30%), barrio (17%) y otros (11%). En cuanto a la frecuencia de la sensación de miedo de sufrir un ataque o abuso sexual, esta se siente algunas veces al año (41%), solo una vez (26%) y algunas veces al mes (20%), siendo el lugar donde más sensación de miedo se tiene la vía pública (48%), seguido del transporte público (25%), el barrio (23%) y otros (3%).

Con datos de 2020, el Observatorio contra el Acoso Callejero evidencia que un 86.4% de las mujeres ha vivido ASC, siendo el más frecuente el de tipo no verbal (sonidos y gestos) con un 59.2%, seguido por el de tipo físico —más del 50% de las personas consultadas declaró haberlo sufrido— y, finalmente, el de tipo verbal. En comparación, las mujeres sufren el doble de ACS que los hombres para cada uno de los tipos de acoso existentes. Respecto de las edades, el ACS se concentra, principalmente, en mujeres jóvenes de entre 18 y 26 años, grupo en el cual un 86.5% dice que ha sufrido acoso físico en el espacio público.

El miedo en el espacio urbano es un elemento que disciplina el comportamiento colectivo de las mujeres (Soto, 2012) y que tiene como consecuencia la restricción de movimientos o simple automarginación de los espacios públicos, con el efecto que esto puede tener en la pérdida de autonomía, autoestima, relaciones sociales, oportunidades laborales, de estudio o de recreación. Según datos del estudio de 2020 mencionado anteriormente, las mujeres son quienes toman medidas para evitar el acoso sexual callejero (un 83% realiza un cambio), como modificar sus actividades cotidianas prefiriendo otras rutas, pedir compañía para salir al espacio público o, simplemente, no salir, lo que confirma que el miedo a sufrir ASC tiene como consecuencia la restricción de la presencia de las mujeres en los espacios públicos de la ciudad.

En un estudio similar realizado por Arenas y Madrid (2021), que se enfocaba en estudiar las experiencias de violencia sexual en medios de transporte y espacios públicos en Chile, las cifras se mantienen respecto de lo revisado para 2020. Un 83.8% de las y los encuestados declararon haber sido víctima de acoso en el espacio público, con un 95.3% de mujeres y un 4% de hombres. Estos delitos ocurren principalmente en la calle (77.2% de los casos) o en el transporte público o privado (46.7% de los casos). Los tipos de acoso más frecuentes son el no verbal, el verbal y el sexual físico, como “se han apoyado sobre tu cuerpo con intenciones sexuales (ej.: punteos), sin tu consentimiento” (76.2%) y “te han tocado o manoseado el cuerpo o partes de tu cuerpo sin tu consentimiento” (64.9%), que siguen siendo bastante habituales (Arenas & Madrid, 2021, p. 18). Al igual que lo mencionado en el estudio del Observatorio contra el Acoso Callejero (2020), las mujeres tienden a cambiar su comportamiento luego de haber sufrido una experiencia de acoso significativa, como variar el medio de transporte, pedir compañía, modificar la ruta e, incluso, cambiar

la forma de vestir, maquillarse u otro elemento en la apariencia (28.3% de los casos), o asistir a una terapia psicológica o psiquiátrica (7.8% de los casos).

Finalmente, respecto de la sensación de miedo de ser víctima de acoso en la vía pública, las mujeres son quienes concentran más respuestas de “siento bastante miedo”; aquí, las mujeres jóvenes son las que declaran esto con mayor frecuencia, mientras que quienes “no sienten miedo” son principalmente adultos (Arenas & Madrid, 2021). Es posible observar respuestas similares en la Segunda Encuesta de Percepción de Desarrollo Urbano Sustentable, realizada por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Fuentes et al., 2022), en la que un 27% de las mujeres se sienten inseguras en los espacios públicos de Santiago, mientras que solo un 15% de los hombres siente inseguridad. Según este estudio, este temor es transversal y no está relacionado con el nivel socioeconómico ni la zona de residencia en la ciudad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Las cifras mencionadas anteriormente son desalentadoras respecto del acceso y uso del espacio público de las mujeres, así como la prevalencia del acoso, abuso y miedo en ellos. Sin duda, estas, junto con otras múltiples desigualdades que ocurren en el espacio, como las restricciones de movilidad, acceso a servicios o seguridad, no se dan de manera aislada, sino en un continuo sistémico de inequidad social. Sin embargo, es posible reflexionar acerca de algunas soluciones en la planificación de las ciudades para la provisión de servicios e infraestructura pública con perspectiva de género. Este tipo de intervenciones no son las únicas ni tampoco necesariamente las mejores soluciones, pero sí apuntan en la dirección correcta. Por ejemplo, la provisión de baños públicos puede afectar significativamente la movilidad y seguridad de las mujeres en los espacios públicos (Beebejaun, 2017), pues son ellas quienes necesitan utilizarlos con mayor frecuencia para orinar o por razones relativas a la menstruación, embarazo o menopausia, además de estar a cargo del cuidado de otras personas vulnerables, como niños, personas mayores o con discapacidad (Afacan & Gurel, 2015), quienes también requieren de estos servicios con mayor frecuencia. El poco acceso o baja calidad en baños públicos puede restringir las decisiones de salir al espacio público o de elegir ciertas rutas o destinos.

Asimismo, ONU Mujeres (2011) indica que la seguridad de las mujeres puede verse afectada por los muros continuos, que impiden la visibilidad en la calle, especialmente de noche, o los lugares con muestras de vandalismo, como grafitis o mobiliario deteriorado (Austin & Sanders, 2007; Mehta, 2014; Rader et al., 2012). Junto con las intervenciones en el mobiliario del espacio público, existen otras recomendaciones para la construcción de ciudades más inclusivas desde una perspectiva de género, que tienen relación con conocer e

indagar en los usos múltiples del espacio desde la perspectiva de distintos tipos de usuarios y sus intereses; así como también promover la autonomía y una cultura de responsabilidad hacia los espacios públicos que generen mejores condiciones y percepciones de seguridad. En este caso, es necesario dar cabida especialmente a mujeres y niñas para generar sus propias oportunidades de proyectarse en el espacio público para desarrollar su identidad, autoestima y capacidad de reconocerse como sujetas claves en el desarrollo de las ciudades.

CONCLUSIÓN

En este capítulo he discutido acerca de la relación entre género y espacio como telón de fondo de la evidente desigualdad que experimentan las mujeres en el acceso y uso del espacio público. Al revisar la literatura y datos secundarios, se evidencia la prevalencia de violencia y miedo al acoso y abuso sexual, lo que es transversal y sostenido en el tiempo para las mujeres chilenas, al menos en la última década. Si bien la planificación de mejor infraestructura y servicios en el espacio público puede contribuir a aminorar estas brechas, restricciones y violencias, creo importante comenzar a indagar no solo en lo que restringe a las mujeres, es decir, lo que ellas no hacen o dejan de hacer, sino también en qué es lo que sí hacen, cómo y con quiénes en el espacio público. Aquí, Leslie Kern en su libro *Feminist city. Claiming space in a man-made world* (2021), nos recuerda que las maneras de resistencia a este tipo de desigualdades en la relación entre género y espacio tienen menos que ver con la planificación y el diseño urbano y más que ver con formas de organizar de modo más equitativo los cuidados, el trabajo, la provisión de alimentos y, en general, una visión transformadora de los roles de género en la sociedad. Desde este punto de vista, la visibilización de estos problemas y la organización de mujeres en movimientos feministas son necesarios para la construcción de ciudades más igualitarias basadas en la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la vivienda social, el análisis de la gentrificación, la gobernanza local y la forma de organizar la vida pública en las ciudades. De este modo, considero que las transformaciones de diseño del espacio público requieren plantearse sobre un sustento de cambios culturales en la manera de vivir nuestras ciudades y nuestras vidas.

REFERENCIAS

- Arancibia, J., Billi, M. & Guerrero, M. (2017). ¡Tu “piropo” me violenta! Hacia una definición de acoso sexual callejero como forma de violencia de género. *Revista Punto Género*, 7, 112-137. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/view/46270>
- Arenas, D., & Madrid, G. (2021). Estudio sobre experiencias de violencia sexual en medios de transporte y espacios públicos en Chile. Observatorio contra el Acoso Callejero. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://ocac.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Final-Estudio-sobre-Violencia-Sexual-en-medios-de-transportes-y-espacios-p%C3%BAblicos-en-Chile.docx-2.pdf>
- Afacan, Y., & Gurel, M. (2015). Public toilets: an exploratory study on the demands, needs, and expectations in Turkey. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 42(2), 242-262.
- Anderson, J., Ruggeri, K., Steemers, K., et al. (2017). Lively social space, well-being activity, and urban design: findings from a low-cost community-led public space intervention. *Environment and Behavior*, 49(6), 685-716.
- Austin, D., & Sanders, C. (2007). Graffiti and perceptions of safety: a pilot study using photographs and survey data. *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, 14(4), 292-316.
- Banda, C., & Concha, P. (2022). Ocio y apropiación socioespacial desde una perspectiva feminista: el caso del Cerro Cordillera, Valparaíso. *Bitácora Urbano Territorial*, 32(I), 233-246. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n1.96007>
- Beebejaun, Y. (2017). Gender, urban space, and the right to everyday life. *Journal of Urban Affairs*, 39(3), 323-334.
- Boys, J. (1984) Women and public space. En Matrix (Ed.). *Making space. Women and the man-made environment* (p. 37-54). Londres: Pluto Press.
- Cattell, V., Dines, N., Gesler, W., et al. (2008). Mingling, observing, and lingering: everyday public spaces and their implications for well-being and social relations. *Health and Place*, 14(3), 544-561.
- Cavanagh, S. (1998). Women and the urban environment. En Greed, C., & Roberts, M. (Eds.) *Introducing urban design: interventions and responses* (p. 168-177). Nueva York: Routledge.
- Chiodi, S. (2016). Crime prevention through urban design and planning in the smart city era. *Journal of Place Management and Development*, 9(2), 137-152.
- Crime Concern (2004). People's conceptions of personal security and their concerns about crime on public transport: research findings. London: Department of Transport.
- Falú, A. (2009) Violencias y discriminaciones en las ciudades. En Falú, A. (Ed.). *Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos* (p. 15-38). Santiago de Chile: Ediciones SUR.

- Francis, J., Wood, F., Knuiman, M., et al. (2012). Quality or quantity? Exploring the relationship between public open space attributes and mental health in Perth, Western Australia. *Social Science & Medicine*, 74(10), 1570-1577.
- Fuentes, L., Señoret, A., & Rodríguez, S. (2022). Mujeres que viven en barrios pericentrales son las que se sienten más inseguras en las calles de Santiago. Documento de trabajo. Santiago de Chile: Centro de Desarrollo Urbano Sustentable.
- Garcia-Ramon, M., Ortiz, A., & Prats, M. (2004). Urban planning, gender and the use of public space in a peripheral neighbourhood of Barcelona. *Cities*, 21(3), 215-223.
- Giddings, B., Charlton, J., & Horne, M. (2011). Public squares in European city centres. *Urban Design International*, 16(3), 202-212.
- Jirón, P., & Iturra, L. (2011) Momentos móviles. Los lugares móviles y la nueva construcción del espacio público. *Arquitectura del Sur*, 39, 44-57.
- Kern, L. (2021). *Feminist city. Claiming space in a man-made world*. Nueva York: Verso Books.
- Leal, I., Gálvez, R., & Saavedra, M. (2021). Las denuncias de ataques a mujeres que accionaron una política pública en el Barrio Universitario. *La Tercera*. 21 de marzo de 2022. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/las-denuncias-de-ataques-a-mujeres-que-accionaron-una-politica-publica-en-el-barrio-universitario/ZCGPSNZKHZA4VBF4TSTTFJ2XGU/>
- Ley 21.153 de 2019. Modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos. 3 de mayo de 2019.
- Massey, D., & Bernal, G. (1998). Espacio, lugar y género. *Debate Feminista*, 17, 39-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1998.17.428>
- McDowell, L. (1999) *Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Mehta, V. (2014). Evaluating public space. *Journal of Urban Design*, 19(1), 53-88.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2018). Informe calidad de vida urbana: diferencias por sexo. Elaborado a partir de resultados de la Encuesta de Calidad de Vida Urbana 2018.
- Recuperado en noviembre de 2022 de: http://calidaddevida.colabora.minvu.cl/Documentos%20compartidos/Informe%20Calidad%20de%20Vida%20Urbana%20Diferencias%20por%20Sexo_2018.pdf
- Ministerio del Deporte (2021). Aplicación de encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte 2021 para la población de 5 años y más. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3872>
- Miranne, K., & Young, A. (2000). *Gendering the city: women, boundaries and visions of urban life*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Navarrete, P., Vetro, A., & Concha, P. (2021). Building safer public spaces: exploring gender difference in the perception of safety in public space

- through urban design interventions. *Landscape and Urban Planning*, 214, 104180. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104180>
- Observatorio contra el Acoso Callejero. (2020). Radiografía del acoso sexual en Chile: primera encuesta nacional sobre acoso sexual callejero, laboral, en contexto educativo y ciberacoso. Recuperado en noviembre de 2022: <https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-encuesta-OCAC-2020.-Radiograf%C3%ADa-del-acoso-sexual-en-Chile.pdf>
- Ortiz, A. (2007) Hacia una ciudad no sexista. Algunas reflexiones a partir de la geografía humana feminista para la planeación del espacio urbano. *Territorios*, 16-17, 11-28.
- Rader, N., Cossman, J., & Porter, J. (2012). Fear of crime and vulnerability: using a national sample of Americans to examine two competing paradigms. *Journal of Criminal Justice*, 40(2), 134-141.
- Rodríguez, A., Saborido, M., & Segovia, O. (2012). *Violencias en una ciudad neoliberal: Santiago de Chile*. Santiago de Chile: Ediciones SUR. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.sitiosur.cl/detalle-de-la-publicacion/?violencias-en-una-ciudad-neoliberal-santiago-de-chile>
- Sauter, D., & Huettenmoser, M. (2008). Liveable streets and social inclusion. *Urban Design International*, 13(2), 67-79.
- Shaw, M., Andrew, C., Whitzman, C., et al. (2013). Introduction: challenges, opportunities and tools. En Whitzman, C., Legacy, C., Andrew, C., et al. (Eds.). *Building inclusive cities: women's safety and the right to the city* (p. 1-16). Abingdon: Routledge.
- Segovia, O., & Rico, M. (2017) ¿Cómo vivimos la ciudad? Hacia un nuevo paradigma urbano para la igualdad de género. En Rico, M. N. & Segovia, O. (Eds.). *¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad* (p. 41-65). Santiago de Chile: Cepal.
- Servicio Nacional de la Mujer (2012). Estudio Acoso y abuso sexual en lugares públicos y medios de transporte colectivos. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/SERNAM-Estudio-acoso-y-abuso-sexual-en-lugares-publico-y-medios-de-transporte.pdf>
- Soto, P. (2012). El miedo de las mujeres a la violencia en la ciudad de México. Una cuestión de justicia espacial. *Revista INVI*, 27(75), 145-169. Recuperado en noviembre de 2022 de: <https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62415>
- Spain, D. (1992). *Gendered spaces*. Carolina del Norte: University of North Carolina Press.
- Subsecretaría de Prevención del Delito (2020). Presentación de resultados IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM) Resultados País. Recuperado en noviembre de 2022 de: <http://cead.spd.gov.cl/wp-content/uploads/file-manager/Presentaci%C3%B3n%20de%20Resultados%20IV%20ENVIF-VCM.pdf>

- UN-Women (2011). *Building safe and inclusive cities for women. A practical guide*. Nueva Delhi: UN-Women.
- Veleda, S., & Lan, D. (2007). Estudios de geografía del género en América Latina: un estado de la cuestión a partir de los casos de Brasil y Argentina. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 49, 99-118.
- Vilanova, A., & Soler, S. (2008)- Las mujeres, el deporte y los espacios públicos: ausencias y protagonismos. *Apunts Educación Física y Deportes*, 91, 29-34. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2654999>
- Whitzman, C. (2013). Women's safety and everyday mobility. En Whitzman, C., Legacy, C., Andrew, C., et al. (Eds.). *Building inclusive cities: women's safety and the right to the city* (p. 35-52). Abingdon: Routledge.
- Yavuz, N., & Welch, E. (2010). Addressing fear of crime in public space: gender differences in reaction to safety measures in train transit. *Urban Studies*, 47(12), 2491-2515.

BIOGRAFÍAS

INTRODUCCIÓN

Héctor Carvacho – en Sección Interacciones sociales.

Gloria Jiménez-Moya – en Sección Educación.

Bárbara Flores – en Sección Trabajo.

Paola Jirón – en Sección Territorio.

FLORENCIA OLIVARES es científica política y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa un máster en Análisis Político y Asesoría Institucional en la Universitat de Barcelona y se desempeña como coordinadora de proyectos en el COES.

Catherine Reyes-Housholder – en Sección Política.

SECCIÓN INTERACCIONES SOCIALES

HÉCTOR CARVACHO es profesor asistente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del COES y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Doctor en Psicología por la Universidad de Bielefeld y postdoctorado en la Universidad de Harvard. Su investigación trata sobre la formación y mantención de las jerarquías sociales, las relaciones intergrupales y la psicología de la moral.

FRANCISCO PINO es ingeniero civil industrial y eléctrico de la Universidad de Chile, magíster en Economía Política y doctor en Economía de la Universidad de Boston. Actualmente se desempeña como profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile e investigador del COES. Su investigación se enfoca en economía de género, economía política e historia económica.

VALENTINA PAREDES es doctora en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Es profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile e investigadora asociada del COES. Sus áreas de especialización incluyen economía de la educación y econometría aplicada, con trabajos sobre la brecha de género educacional.

MARÍA ANGÉLICA MORA es licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha trabajado como asistente de investigación en múltiples proyectos del Laboratorio de Psicología Social. Sus intereses se relacionan con las desigualdades de género y la psicología de las conductas sustentables. Desde 2020 se desempeña como directora en ComunidadMujer.

DARIELA SHARIM es psicóloga clínica y doctora en Ciencias Psicológicas de la Universidad de Lovaina la Nueva en Bélgica. Es profesora titular en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Sus principales temas de investigación son el género, configuraciones subjetivas y lazo social y los enfoques clínicos en la investigación social.

MICHELLE BERNARDINO es psicóloga, magíster en Salud Pública por la Fundación Oswaldo Cruz (Brasil) y doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus estudios están concentrados en los temas de conflictos entre grupos, especialmente en el ámbito de género. Actualmente desarrolla investigación transdisciplinaria, conectando los campos de la psicología social y la salud pública en la Fundación Oswaldo Cruz.

SECCIÓN EDUCACIÓN

GLORIA JIMÉNEZ-MOYA es doctora en Psicología de la Universidad de Granada, magíster en Psicología de la Intervención Social, profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora asociada del COES. Su investigación, experimental y aplicada, se focaliza en el estudio de las relaciones intergrupales y la desigualdad de género desde la psicología social.

SARAH PAZ MARTÍN es periodista de la Universidad de La Habana, magíster en Comunicación Audiovisual en la Universidad de las Artes (Cuba), investigadora y candidata a doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se centra en los estudios de género y la comunicación científica. Actualmente estudia los mecanismos y condiciones psicológicas que intervienen en la aplicación de los estereotipos de género.

MARAIS DEL RÍO es licenciada en Psicología de la Universidad de La Habana y diplomada en Promoción de Salud Sexual y Prácticas Sexológicas. Actualmente es candidata a doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su principal tema de investigación es la discriminación y las inequidades sociales basadas en el género.

CAMILA CONTRERAS es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como asistente de investigación en diversos proyectos y actualmente es coordinadora del Laboratorio de Psicología Social y del Programa Interculturalidad UC en la misma institución. Sus intereses se relacionan con el estudio de la desigualdad entre hombres y mujeres en contextos migrantes y con las intervenciones dirigidas a erradicarla.

JAVIERA BRUNA es docente del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asesora de Formación Integral en la Vicerrectoría Académica del Inacap y miembro de la Mesa de Género de dicha institución. Psicóloga, magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

NIÑAS VALIENTES es una fundación sin fines de lucro cuyo objetivo es promover la equidad y prevenir las violencias de género a través de la educación. En su trayectoria, ha desarrollado una propuesta de modelo educativo no sexista, y programas y proyectos educativos y participativos para fomentar el pensamiento crítico y las competencias socioemocionales, teniendo como propósito la construcción de identidades libres de estereotipos y violencias de género.

SECCIÓN TRABAJO

JUAN PEDRO EBERHARD es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, investigador del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD), Research Fellow IZA e investigador adjunto del COES. Doctor en Economía por la Universidad de Yale, magíster en Economía e ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile. Sus temas de investigación incluyen inmigración, mercado laboral, brechas de género, capacitación y acumulación de capital.

BÁRBARA FLORES es profesora asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales y la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor. Investigadora joven del Instituto Milenio para la Investigación del

Cuidado (MICARE) e investigadora adjunta del COES. Es doctora en Economía y master of Research in Economics de la University College London, magíster en Economía e ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Su especialización es en microeconometría aplicada, género, mercado laboral e interacciones sociales.

FRANCISCA ORTIZ es investigadora postdoctoral del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), socióloga de la Universidad Alberto Hurtado, máster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología en el Mitchell Center for Social Network Analysis de la Universidad de Manchester. Su investigación se ha centrado en las redes sociales de apoyo y cuidado, gerontología social, métodos mixtos, análisis de redes sociales y desigualdades de género en la ciencia.

ROXANA CHIAPPA es profesora asistente de la Universidad de Tarapacá, investigadora adjunta del COES, investigadora asociada de la Universidad de Rhodes y del Center for Innovation and Research in Graduate Education (CIRGE) de la Universidad de Washington, Seattle. Es periodista de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en Educación Superior de la Universidad de Washington, Seattle. Su agenda de investigación analiza cómo se reproducen las desigualdades en la academia y los sistemas científicos.

GABRIEL CRUZ es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alumni de Fundación Enseña Chile y director de Fundación Genera. Trabajó como investigador asociado senior en J-PAL LAC y es investigador asociado de EMELab UC. Actualmente cursa el doctorado en Economía en la Universidad de Maryland.

PABLO EGAÑA es director del magíster en Negocios Sostenibles, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador principal del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo y coordinador de la mesa de trabajo de expertos sobre futuro del trabajo en el Senado. Ha sido consultor internacional y académico en la Universidad de Columbia, Asia School of Business, Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Chile. Es PhD y máster of Arts en Desarrollo Económico Sustentable de la Universidad de Columbia y economista de la Universidad de Chile.

LUIS VALENZUELA es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile. Es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, magíster en Economía de la Universidad de Oxford y Pontificia Universidad Católica de Chile, e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro asociado del Institute for New Economic Thinking de la Universidad

de Oxford e investigador del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo. Sus áreas de interés son la desigualdad, cambio tecnológico, productividad y mercado laboral.

SECCIÓN POLÍTICA

CATHERINE REYES-HOUSHOLDER es profesora asistente de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora asociada del COES. Es investigadora principal de un Fondecyt de Iniciación “How Women Win the Presidency” y del proyecto “Conflicted Identities for Social Justice? Exploring Female Economic and Political Elites in Chile and the UK” patrocinado por COES y the Atlantic Fellows for Social and Economic Equity Programme del International Inequalities Institute de LSE. Ha publicado en las revistas *Comparative Politics*, *Political Research Quarterly*, *Politics & Gender* y *Electoral Studies*, entre otras.

ISABEL CASTILLO es profesora asistente en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, investigadora adjunta del COES e investigadora responsable del Fondecyt Postdoctoral “Gendered Inclusion in Latin America: Suffrage and Women’s Early Political Participation”. Sus temas de investigación incluyen democratización histórica, género y religión, y ha publicado en las revistas *Perspectives on Politics*, *Politics and Religion*, *Historia y Política* y *Quality & Quantity*.

RODOLFO DISI doctor en Gobierno por la Universidad de Texas, es profesor asociado en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile e investigador adjunto del COES. Fue investigador responsable del proyecto Fondecyt de Iniciación “En actitud de protesta: efectos espaciales y temporales de la protesta sobre la opinión pública en Chile». Sus temas de investigación incluyen el comportamiento político y la política latinoamericana. Ha publicado en revistas como *Latin American Politics and Society*, *Social Movement Studies* y *Latin American Research Review*.

FELIPE SÁNCHEZ es investigador postdoctoral en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador responsable del proyecto Fondecyt Postdoctoral “El impacto de los ciclos de movilización social en las actitudes y el comportamiento político de la ciudadanía en el Chile actual”. Investiga temas relacionados con participación política, movimientos sociales y política contenciosa, y las interacciones entre ciudadanía y sistema político. Ha publicado en *Research in Social Movements*, *Conflicts and Change*, *International Journal of Social Psychology* y *American Behavioral Scientist*, entre otros.

ANABEL YANES es estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en Política Comparada por Flacso-Ecuador. Estudia a la vicepresidencia y a sus actores en América Latina, y entre sus intereses de investigación figuran el poder ejecutivo y la participación política de las mujeres. Ha publicado en *Revista Iberoamericana*.

MICHELLE HAFEMANN es estudiante de doctorado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Investiga temas relacionados con género y política.

SECCIÓN TERRITORIO

PAOLA JIRÓN es profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la misma universidad. PhD en Planificación Urbana y Regional de LSE, fue directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT) y es investigadora asociada del COES y de Contested Territories. Sus áreas de investigación se relacionan con estudios urbanos y territoriales desde la experiencia cotidiana de habitar, incluyendo prácticas de movilidad, interseccionalidad y metodologías de investigación.

CAROLINA STEFONI es académica, directora del doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad de Tarapacá e investigadora asociada del COES. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham y doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en proyectos vinculados con política migratoria, trabajo y educación intercultural en contextos migratorios. Actualmente dirige el proyecto Fondecyt “Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur”.

YASNA CONTRERAS es geógrafa y profesora asociada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Doctora en Geografía por la Université de Poitiers, doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del COES y cofundadora del IG ViviendaMigrante. Ha investigado sobre los cambios sociourbanos y residenciales de áreas centrales chilenas, y sobre las injusticias socioterritoriales y ambientales a las que se exponen familias migrantes e inmigrantes de tugurios y asentamientos precarios. Asimismo, ha liderado varios proyectos sobre migración y trayectoria de mujeres migrantes de la región.

PAZ CONCHA es investigadora de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile e investigadora adjunta del COES. Doctora en Sociología de LSE, máster en Cultura y Sociedad por la misma institución y antropóloga social de la Universidad de Chile. Su trabajo de investigación se desarrolla en las áreas de economía cultural, sociología económica, sociología urbana y estudios urbanos desde una perspectiva etnográfica.

Tejiendo rutas. Perspectivas para un Chile con equidad de género, editado por © Bárbara Flores Arenas, Catherine Reyes-Housholder, Gloria Jiménez-Moya, Héctor Carvacho García y Paola Jirón Martínez, se terminó de imprimir y encuadernar en el mes de abril de 2023, en los talleres Equipo Gráfico SpA, Santiago de Chile.
Se tiraron 500 ejemplares.

